MICHAEL REID

ESPAÑA

«El mejor y más completo libro que he leído nunca sobre la España de hoy»

ANTONIO MUÑOZ MOLINA

ESPASA

Índice

PORTADA
SINOPSIS
PORTADILLA
DEDICATORIA
CITAS
NOTA A LA EDICIÓN ESPAÑOLA
PRÓLOGO. EL ESPEJO ESPAÑOL
1. EL DESMORONAMIENTO
2. UN OTOÑO CATALÁN
3. LA INVENCIÓN DE CATALUÑA
4. POR QUÉ ESPAÑA NO ES FRANCIA
5. HABLEMOS DE FRANCO
6. LA PARADOJA VASCA Y EL GALLEGUISMO
7. EL DESVANECIMIENTO DEL SUEÑO ESPAÑOL
8. ¿UNA ESCANDINAVIA AL SOL?
9. «LA CASTA» Y SUS IMPERFECTOS CRÍTICOS
10. EL NARCISISMO DE LAS PEQUEÑAS DIFERENCIAS
AGRADECIMIENTOS
BIBLIOGRAFÍA
LÁMINAS
NOTAS
CRÉDITOS

Visita Planetadelibros.com y descubre una
nueva forma de disfrutar de la lectura

¡Regístrate y accede a contenidos exclusivos!

Primeros capítulos

Fragmentos de próximas publicaciones

Clubs de lectura con los autores

Concursos, sorteos y promociones

Participa en presentaciones de libros

PlanetadeLibros

Comparte tu opinión en la ficha del libro

y en nuestras redes sociales:

You
Tube

SINOPSIS

Tras la dictadura de Franco, la transición a la democracia fue aclamada como un gran éxito que marcó el inicio de tres décadas de prosperidad. Sin embargo, en los últimos años el consenso político ha sido cuestionado. El estable sistema bipartidista se fragmentó con la entrada de nuevas formaciones que causaron efectos perturbadores.

Michael Reid, que cuestiona la opinión de que España es un país perseguido por su pasado franquista, explica con claridad y rigor algunos de los problemas que acechan el futuro de nuestro país, como el independentismo catalán, y señala que otros muchos son los mismos que padecen nuestros vecinos europeos: el populismo, la creciente polarización o la desigualdad.

MICHAEL REID

ESPAÑA

Para Roxani.
Y a los Jardines del Buen Retiro, fuente de solaz
y supervivientes de mil y una tempestades.

Hombres de España, ni el pasado ha muerto, ni está el mañana —ni el ayer— escrito.

ANTONIO MACHADO, «El Dios ibero»

Estoy más que convencido de que España es el país más fuerte del mundo. Siglo tras siglo tratando de destruirse a sí mismo y todavía no lo ha conseguido.

Frase atribuida a OTTO VON BISMARCK Nada irrita más a los españoles que el ver publicarse libro tras libro sobre ellos y su país escritos por extranjeros.

RICHARD FORD, *Manual para viajeros por España y lectores en casa*

Al analizar el estado de disolución a que ha venido la sociedad española, encontramos algunos síntomas e ingredientes que no son exclusivos de nuestro país, sino tendencias generales hoy en todas las naciones europeas.

JOSÉ ORTEGA Y GASSET, *España invertebrada*

Nota a la edición española

He aprovechado la publicación del libro en español para hacer algunas actualizaciones del texto e incluir los acontecimientos más importantes que se han producido en la política española, ya que el libro original en inglés se publicó en marzo de 2023. He incluido unos párrafos sobre las elecciones generales de julio de 2023 y sus consecuencias en las últimas páginas del capítulo 10. Además, he corregido algunos pequeños errores que había en el original.

Londres, diciembre de 2023

Prólogo

El espejo español

En su punto central, la extensa galería que recorre buena parte del largo de la planta primera del Prado se abre a la espaciosa y hexagonal «Sala 12». Este lugar es el eje sobre el que pivota el gran museo madrileño. Ni siquiera se tocó con motivo de la reordenación de sus colecciones durante la pandemia. A esa altura, en el lado oeste de la luenga galería, está colgado el majestuoso retrato ecuestre del emperador Carlos V en la batalla de Mühlberg pintado por Tiziano. Unos setenta pasos más allá, la pared este de la Sala 12 está ocupada por *Las Meninas,* la imponente pintura de Velázquez que hoy muchos consideran posiblemente la más grande obra individual de la historia del arte europeo. Aunque, a primera vista, es un retrato de grupo, una escena doméstica en la que una infanta suntuosamente vestida es asistida por sus damas de honor acompañada por un enano, un perro y sirvientes de palacio, cuanto más se fija el observador en él, más se le asemeja a un acertijo[1].

Para empezar, la figura más destacada del cuadro, quien mira fijamente a Carlos V desde el otro extremo de la estancia, es Velázquez, el propio pintor, autorretratado de pie ante un caballete de grandes dimensiones mientras trabaja sobre un lienzo oculto a nuestra vista. Pero ¿a quién está observando Velázquez realmente con esa pericial mirada suya, mientras que está parado, con el pincel en una mano y la paleta de rojos y marrones en la otra? Una respuesta nos la da un espejo colgado sobre la pared del fondo, que nos revela las figuras del rey, Felipe IV, y su segunda esposa, Mariana de Austria. Antes se creía que el matrimonio real solo estaba contemplando la escena, que se habían pasado por allí para saludar a su hija. Pero la alineación de las luces del techo nos muestra que el reflejo del espejo no es el de los monarcas en sí, sino, más bien, el de lo que Velázquez estaba pintando en su lienzo: un retrato dual del rey y la reina. (A Velázquez le fascinaban los espejos; era dueño, como mínimo, de doce). *Las Meninas* es, pues, un cuadro sobre un cuadro. Contiene múltiples puntos focales. La mirada de Velázquez aparece remedada a su vez por la del chambelán, que está de pie en el centro del iluminado hueco de una puerta que hay al lado del espejo. Él es tal vez la figura más enigmática del cuadro. ¿Está entrando en la sala o saliendo de ella? Las cosas son mucho más complejas e inciertas de lo que podría parecer.

Velázquez trabajó durante los años finales del Siglo de Oro

español, cuando los monarcas de España, aunque asediados en muchos terrenos, seguían reinando sobre gran parte de Europa y sobre un imperio que se extendía desde los Andes hasta las Filipinas. Enriquecida temporalmente por el oro y la plata de América, España gozaba en aquel entonces de una riqueza cultural mayor aún, ejemplificada por Miguel de Cervantes y su obra maestra, *Don Quijote de la Mancha,* o los dramaturgos Lope de Vega y Calderón de la Barca, o los poetas rivales Quevedo y Góngora, que se detestaban mutuamente, o artistas coetáneos de Velázquez como Zurbarán —con sus evocadores retratos de monjes devotos— o Murillo —gran pintor barroco del éxtasis religioso de la Contrarreforma—.

Pero todo aquel oropel era ya bastante engañoso. Si comparamos, por ejemplo, *Las Meninas,* cuadro pintado en 1656, con el mencionado retrato de Carlos V, pintado poco más de un siglo antes, podremos apreciar con claridad que Velázquez, pintor oficial de la corte de Felipe IV, está representando (de manera un tanto indirecta, eso sí) una imagen de decadencia. Ya había pintado con anterioridad a su monarca en una pose ecuestre similar a la de la imagen con la que Tiziano había retratado al tatarabuelo de aquel. Sin embargo, para su más grande obra, Velázquez decidió que los reyes figuraran fuera de escena. Se les ve por un espejo, oscuramente. Puede que estén de pie justo donde estamos los espectadores… o puede que no. En cualquier caso, visto de ese modo, *Las Meninas* también parecería ser un cuadro sobre nosotros. No es de extrañar que fascinara tanto al escritor argentino Jorge Luis Borges, autor de relatos y acertijos metafísicos, como a Michel Foucault, sumo sacerdote del posmodernismo.

Las Meninas juega con nuestro sentido de la certidumbre sobre lo que vemos cuando miramos. Hace que nos preguntemos si solo vemos lo que queremos ver. Y lo mismo ocurre con España. Es un país que, como el cuadro de Velázquez, ha sido estudiado ampliamente y diseccionado a fondo. De hecho, pocas naciones de la Europa occidental han sido objeto de una tan extensa literatura escrita por autores extranjeros (británicos, sobre todo) y tan dada a los tópicos. España ha servido de espejo —distorsionado, en muchos casos— sobre el que observadores diversos han proyectado sus propias imaginaciones y fantasías.

Los extranjeros han visto —o reflejado— en ese espejo español dos imágenes aparentemente opuestas, pero que, en el fondo, se entrecruzan. José Varela Ortega, historiador de la Universidad Complutense de Madrid, las ha resumido en un libro de mil cien páginas publicado en 2019, en el que habla del contraste entre la visión del «español militante y apasionado», por un lado, y la del

«español indolente, decadente o degenerado», por el otro[2]. El primero de esos estereotipos se corresponde con lo que se conoce comúnmente en España como la «leyenda negra»: la propaganda que la Europa septentrional recién convertida al protestantismo lanzó contra la España de Carlos V y de su hijo, Felipe II, líderes sucesivos de la Contrarreforma emprendida contra la que, para ellos, era una herejía (la batalla se inició, en términos militares, en Mühlberg en 1547, aunque aquella acabaría siendo una victoria pírrica para Carlos). España era caracterizada allí como un lugar cruel, oscuro y oscurantista, a merced del clero y de los instrumentos de tortura de la Inquisición. Como toda campaña propagandística exitosa, esta tenía una parte de verdad y otra de exageración.

En una muestra de irritada inseguridad, tal vez debida a las dificultades que el país ha tenido para asimilar la pérdida del imperio (como las habría tenido cualquier otro que hubiera pasado por su situación), los pensadores conservadores españoles han tendido a presentar toda crítica foránea contra España como un producto de la mencionada leyenda negra. Lejos de remitir, esta línea de análisis ha cobrado nueva fuerza en la pasada década. De hecho, un libro en el que se defiende el historial colonial español frente a las alegaciones de la leyenda negra, escrito por María Elvira Roca Barea, se convirtió en un sorprendente éxito editorial, con más de cien mil ejemplares vendidos desde que su primera edición se publicó en 2016. Según una de las voces críticas con esa obra, el argumento de Roca Barea es puro «populismo nacionalcatólico» (el «nacionalcatolicismo» es el nombre con el que a menudo se describe la ideología atribuida a la dictadura de Francisco Franco)[3]. En un sentido más general, a los españoles se los caracteriza a menudo también como gentes singularmente intransigentes y violentas. «Si un pecado mortal tuviera que definir el carácter nacional español, ese sería la soberbia», puede leerse en una versión reciente de un autor británico, quien, en un portentoso alarde, se atreve a pronosticar que el país está «destinado a seguir» caminos que conducen inexorablemente al «derramamiento de sangre»[4].

Si la leyenda negra fue, en su origen, una respuesta al poder español, la posterior decadencia de España dio pie a una segunda imagen, más romántica. A partir del siglo XVIII, la percepción de los observadores extranjeros comenzó a ser la de un país atrasado, un punto de vista sintetizado por el conocido comentario desdeñoso (atribuido a Alejandro Dumas) de que «África comienza en los Pirineos». Para Voltaire —que, a diferencia de Dumas, jamás visitó España—, los españoles eran una raza «indolente». En el siglo XIX, otros viajeros y escritores foráneos empezaron a regodearse en ese

presunto atraso. Describían España como un lugar exótico y decadente. Le aplicaban un enfoque «orientalista», por emplear el término acuñado por Edward Said[5].

España se convirtió así en el país de la *Carmen* de la novela de Mérimée y la ópera de Bizet, una tierra de mujeres lascivas, gitanos, bandidos, canciones y baile. «La única cosa seria para los españoles es el placer y se dan a él con una franqueza, con una entrega y con un ardor admirable», escribió Theóphile Gautier, un escritor francés que visitó el país[6]. Al mismo tiempo, sin embargo, esa presunta falta de modernidad comenzó a verse como una señal de la autenticidad de la cultura española. Su música popular inspiró a compositores extranjeros, como Rimski-Kórsakov, Debussy o Ravel. Los autores del romanticismo inglés, como Richard Ford en su *Manual para viajeros por España,* de 1845, reflejaron en sus escritos la vitalidad y la dignidad de los españoles, un pueblo noble condenado a ser traicionado una y otra vez por su mal sistema de gobierno y sus malos gobernantes (otra de esas generalizaciones simplificadoras que no dejaban de contener una considerable parte de verdad). Este fue un motivo retomado por dos escritores que fijaron una impresión indeleble de la Guerra Civil española en el imaginario internacional: Ernest Hemingway, en su novela *Por quién doblan las campanas,* y George Orwell, en su *Homenaje a Cataluña*, libro de memorias sobre su lucha como miliciano voluntario contra el ejército de los «nacionales» del general Francisco Franco.

En el atractivo romántico de España incidió también Franz Borkenau, un antiguo marxista austriaco que nos brindó el que tal vez sea el más perspicaz relato contemporáneo de un extranjero sobre la Guerra Civil. En él recordaba que casi todos los observadores foráneos, tanto de izquierdas como de derechas, sentían «una atracción casi mágica» por el país. Y añadió:

> La profunda atracción de España consiste, en mi opinión, no tanto en su importancia [política] como en su carácter nacional. La vida allí no es todavía eficiente; esto quiere decir que aún no ha sido mecanizada; que la belleza sigue siendo para el español más importante que los usos prácticos; el sentimiento, más importante que la acción; el honor, a menudo más importante que el éxito; el amor y la amistad, más importantes que el propio trabajo[7].

Podrían añadirse a esta lista las más básicas características del sol, la calidez, el vino y la dieta mediterránea, factores todos ellos que contribuían a la sensación de contraste y otredad que el país producía en los europeos del norte.

Los románticos, según el autor angloespañol Tom Burns Marañón,

crearon «una serie de estereotipos y estos tópicos forman ya parte no solo de *la mirada del otro*, que es lo de menos, sino del mismo espejo en el que se miran los propios españoles»8. Esos tópicos y estereotipos han vuelto a aflorar en los últimos tiempos, sobre todo en relación con la cobertura informativa que se le ha dispensado al conflicto catalán en el extranjero. Y su interiorización por parte de los propios españoles contribuyó a que se instalara en ellos un pertinaz pesimismo. Como Velázquez en su día, los españoles han mantenido durante siglos una percepción muy punzante del declive relativo de su país con respecto a su pasada grandeza. Exagerado en ocasiones, este decadentismo tiñe la vida política del país desde entonces. Sigue tiñéndola todavía.

*

Según Wade Davis, escritor y antropólogo canadiense, «los viajeros suelen quedar cautivados por el primer país que conquista sus corazones y les da licencia para sentirse libres»9. En mi caso, ese país fue España. Entré en él por primera vez una calurosa tarde de sábado de julio de 1971 junto a dos amigos míos de la universidad. Habíamos venido por carretera desde Londres conduciendo una desvencijada autocaravana Volkswagen azul. Cruzamos la frontera en Irún y proseguimos ruta hasta San Sebastián. Tengo muchas instantáneas en la memoria de ese viaje y de otros posteriores. La primera es de la luz del sol del atardecer proyectándose oblicua sobre las abarrotadas calles de la parte vieja de San Sebastián, mientras íbamos de tasca en tasca probando bocados de calamar y pulpo, exquisiteces casi desconocidas en la todavía muy cerrada Gran Bretaña de la época. El intenso olor acre del alcantarillado flotaba en el calor canicular residual.

España era por aquel entonces un país mucho más pobre que el Reino Unido. Desde Madrid, condujimos hacia el sur, pasando por Toledo y, luego, entre las chozas de techumbre metálica de Puertollano, una ciudad de un calor sofocante dedicada a la minería del carbón. Tras admirar maravillados la inmensa mezquita de Córdoba, nos detuvimos a comprar algo de comida en Fernán Núñez, una población de la Andalucía rural profunda rodeada de olivares. Era una localidad de paredes encaladas, calles de tierra y casas de una sola planta con ventanas pequeñas en las que residían jornaleros agrícolas que pasaban buena parte del año desempleados, y mujeres envejecidas prematuramente que guardaban un riguroso luto de viuda. Una de

ellas estaba sentada a la puerta de su casa triturando tomates para un gazpacho con un mortero de piedra. Fernán Núñez se me grabó en la memoria como el lugar más pobre en el que había estado nunca. Luego, condujimos de vuelta a lo largo de la costa mediterránea española, desde Algeciras hasta Barcelona, siguiendo la N-340, una lenta carretera principal. En Torremolinos y en Benidorm empezaban ya a brotar bosques de torres de apartamentos y hoteles, pero gran parte del litoral permanecía sin urbanizar.

Franco todavía estaba al mando, como lo había estado desde que aplastó al bando de la República en la Guerra Civil. La libertad que sentí era puramente interior, atribuible al hecho de estar fuera de mi propia cultura y en otra diferente, más dada a la extraversión, pero aun así accesible para mí. Me consideraba afortunado por no tener que correr los riesgos que los españoles de mi edad asumían al oponerse a la dictadura. A nosotros solo nos pararon (e interrogaron brevemente) alguna que otra vez parejas de guardias civiles con tricornio y gesto serio que sospechaban de aquellos tres melenudos jóvenes extranjeros. El verano siguiente, recorrí gran parte de España haciendo autoestop: fui de Barcelona a Madrid, y luego a León, Asturias y Galicia. En Santiago de Compostela, me relacioné con un amistoso grupo de estudiantes de la gran universidad local. Como el curso ya se estaba acabando, uno de ellos me invitó a que me quedara con su familia en su casa, en Vigo, el mayor puerto pesquero de España e importante ciudad industrial. Fue él quien me introdujo en el arte español del ir de copas sin disponer apenas de presupuesto: llegábamos a un bar justo cuando servía algún pincho gratis (un tazón de sopa de marisco por aquí, un trozo de tortilla por allá, una bandeja de mejillones en otro sitio…, todos ellos regados con vasos de un vino local peleón que costaban solamente una peseta cada uno).

Mientras estaba en Vigo, en aquel septiembre de 1972, los sindicatos —todavía clandestinos por aquel entonces— convocaron una huelga general. La movilización comenzó con una demanda de los trabajadores de la importante fábrica local de Citroën para limitar la semana de trabajo a un máximo de cuarenta y cuatro horas, y acabó prolongándose durante una quincena entera. Recuerdo haber visto a grupos de trabajadores enfrentándose a la Policía en avenidas desiertas. La prensa nacional, sometida a censura, ni siquiera mencionó lo que era la mayor noticia en aquel momento en España. El periódico local solo se refirió a ella con una pequeña información sobre unos agitadores comunistas.

Las mujeres españolas le resultaban muy seductoras al joven británico reprimido que yo era en aquel entonces. Cuando llegaba a

alguna localidad, me sumaba al «paseo» por la plaza principal del pueblo a la caída de la noche que sigue siendo un pilar de la vida social en la España de provincias. Allí, grupos de chicas jóvenes miraban y se reían, tan coquetas como inalcanzables, acompañadas no muy de lejos por alguna mujer mayor que les hacía de carabina, y siempre bajo la vigilante sombra de su cura local y del confesionario. En las ciudades sí conocí a mujeres jóvenes más independientes; algunas de ellas circulaban como flechas en sus motocicletas yendo de un lado a otro a pleno sol.

Yo me quedé igual de enganchado al país que los viajeros románticos decimonónicos. Hice tres viajes más a España en los años setenta. El hondo prurito transformador que agitaba aquella sociedad se hacía evidente incluso para alguien de fuera y con un español tan limitado como el mío en aquel entonces. Los profesionales de treinta y tantos, miembros de una clase media en rápido crecimiento, me llevaban en sus apretados Seiscientos o en sus cuadriculados Seat 124. Estaban encantados de poder hablar con un extranjero de su frustración por el inmovilismo de la dictadura, y ansiosos por disfrutar de las mismas libertades que sus homólogos del resto de Europa occidental. Solían ser muy amables. El único caso de frialdad que recuerdo fue en una ocasión, en Madrid: un joven sudafricano con quien había compartido un trayecto en coche desde Zaragoza me llevó al piso de un tío suyo en la calle Bravo Murillo en una sofocante tarde de sábado, una hora en la que la aletargada ciudad de funcionarios que era la urbe madrileña estaba bajando las persianas para el fin de semana. El tío, funcionario y franquista, no se mostró particularmente encantado de vernos —algo que, seguramente, cabía esperar—, pero dejó que pasáramos la noche en el piso entre el oscuro y pesado mobiliario. Hacer autoestop podía ser difícil. Tras esperar durante horas en el arcén de alguna carretera, a veces me rendía y cogía el tren. Los más baratos eran los denominados «rápidos» o «exprés». Paraban en casi todas las estaciones y tardaban muchas horas en llegar a cualquier destino. Sin apenas autopistas y sin líneas ferroviarias de alta velocidad, España se le hacía mucho más grande al viajero que hoy en día.

En 1972, Franco era casi una momia. Con motivo de sus vacaciones estivales en Galicia, los periódicos publicaban —obedientes — fotografías del anciano dictador pescando con el rostro oculto tras unas grandes gafas oscuras. En noviembre de 1975, falleció en su lecho de muerte. Daba comienzo, por fin, la transición a la democracia. En mis visitas periódicas a España durante las tres décadas siguientes, pude ver un país en rápida transformación. Se

convirtió, al fin, en una nación europea próspera, «normal»… en apariencia, al menos. Los politólogos dejaron de quejarse del «excepcionalismo» español, de la idea de que *«Spain Is Different»,* tal como rezaba el eslogan turístico oficial lanzado en los años sesenta, cuando Manuel Fraga era ministro de Información y Turismo de Franco (un ministerio cuyo nombre resultaba toda una revelación de la naturaleza del régimen).

En 2008, justo cuando la crisis financiera en Estados Unidos y Europa pinchaba la gran burbuja inmobiliaria española, escribí un reportaje especial de catorce páginas sobre España para *The Economist*. Hallé en aquel momento un país que estaba al borde de caer en una profunda depresión económica ante la que, sin embargo, mantenía principalmente una actitud de negación. Había también señales claras del choque que terminaría produciéndose en Cataluña. Titulé el reportaje «The Party's Over», «se acabó la fiesta». Tocó cierta fibra sensible en España: aquella edición de la revista vendió más de veinte mil ejemplares adicionales en quioscos españoles. En mayo de 2016, me mudé a Madrid, donde viví durante los siguientes siete años.

*

En la actualidad, España es un país donde (a simple vista, al menos) el progreso previo parece haberse frenado. Los últimos quince años han sido duros; comenzaron con el estallido de una burbuja inmobiliaria y con una fuerte depresión que se prolongó de 2008 a 2012. Aunque un periodo de vigorosa recuperación vino después, hubo un deterioro en la «conviviencia» La aparentemente sólida democracia española ha sufrido múltiples sacudidas. Muchas de sus instituciones —desde la monarquía hasta la Justicia, pasando por los partidos políticos— están hoy seriamente cuestionadas. La mayor de esas conmociones se produjo en Cataluña, donde el nacionalismo viró hacia el separatismo. En el otoño de 2017, el Gobierno autónomo catalán, en manos de las fuerzas independentistas, organizó un referéndum inconstitucional y proclamó una declaración unilateral de independencia. El Estado español respondió procesando y encarcelando a una docena de dirigentes independentistas conforme a una línea de actuación incomprensible para muchos observadores externos. Y luego llegó la pandemia de la COVID-19, que golpeó a España y a su economía con más fuerza que a muchos de los países vecinos, y sacó a relucir fallos de gestión pública y de gobierno (como en todas partes en aquel momento, por cierto).

Los sucesos en Cataluña, en particular, propiciaron una reactivación de los estereotipos, especialmente entre comentaristas británicos y estadounidenses. En muchas de las interpretaciones de aquellos acontecimientos —entre ellas, las de los propios protagonistas de la campaña independentista— se retrataba a los líderes catalanistas como representantes de una nación oprimida. Desde tiempos de Orwell, Cataluña ha ocupado un lugar especial en la imaginación romántica. Además, muchos observadores externos están siempre prontos a resucitar el espíritu de Franco como si fuera el espectro que maneja todavía los hilos de la España contemporánea. Ellos y algunos españoles sostienen que el país está pagando ahora el precio de un presunto «pacto de olvido» durante la transición a la democracia. «El fantasma de Franco persigue todavía a Cataluña», rezaba el título de uno de los artículos de la revista *Foreign Policy* en octubre de 2017. «Los fantasmas de la Guerra Civil rondan a una España desquiciada por Cataluña», insistió *The Times* en febrero de 2019.

Tras el otoño catalán de 2017, Antonio Caño, el entonces director de *El País,* me trasladó la siguiente queja: «Siempre hay algún inglés que se empeña en decirnos que España es diferente. España no es diferente». En ciertos (e importantes) sentidos, tenía razón. De hecho, en este libro defiendo la tesis de que el país no está cayendo en las garras de ningún autoritarismo atávico, y de que los males de España durante esta turbulenta década pasada no se deben principalmente a ningún pecado original que acompañase al nacimiento de su democracia, pues son, en esencia, los mismos que han aquejado a otras democracias del resto del mundo durante esta década de 2010 tanto en Europa como en Estados Unidos y América Latina: la soberbia, la austeridad, el populismo, la polarización, los malos liderazgos y los problemas para adaptarse a un mundo que se transforma a gran velocidad, marcado por la globalización y el cambio tecnológico.

En parte como reacción a la austeridad, pero también en parte por las tensiones políticas, España ha sufrido tres versiones sucesivas de populismo: dos corresponden a partidos nuevos (Podemos en la izquierda extrema y Vox en la derecha radical) y la tercera, al independentismo catalán (que aglutina otras voluntades y significados también). En muchos sentidos, la campaña independentista en Cataluña puede agruparse en la misma categoría que el Brexit en Gran Bretaña y la Liga de Matteo Salvini en Italia como uno de los movimientos revolucionarios populistas nacionalistas más potentes de la Europa occidental reciente. Pero el conflicto catalán también puede considerarse simplemente como la más reciente reedición de la batalla

secular (e irresoluta todavía) de España por conciliar su diversidad regional con su unidad nacional.

Los problemas puestos de relieve por las recientes tribulaciones que España ha sufrido no son solo profundos, sino que entrañan también un significado más amplio. ¿Qué es una nación? ¿Toda nación requiere automáticamente de un Estado propio? ¿Debe reconocérseles a las naciones o las regiones de las democracias europeas del siglo XXI el derecho a la autodeterminación? ¿Hay situaciones en las que los referéndums pueden solucionar cuestiones que suscitan grandes divisiones y polarización? España ejemplifica otros problemas contemporáneos también. ¿Cómo pueden (y deben) abordar los países un pasado traumático y divisivo? ¿La «memoria histórica» es un deber democrático o un proyecto político partidista? ¿Por qué se registran en España unas tasas elevadas de desempleo tan persistentes, y cómo puede superar el país el legado de dos profundas depresiones? ¿Todo cambio social rápido aboca necesariamente a una reacción conservadora adversa? ¿Cómo pueden colaborar los políticos democráticos para impulsar una labor de gobierno coherente y reformista cuando el sistema político está fragmentado y polarizado? ¿Y pueden sobrevivir las monarquías parlamentarias a las malas conductas de sus monarcas? Estas son preguntas que abordaré en lo que queda de libro. Para ello, echaré a veces una mirada al pasado, sobre todo en los capítulos 3, 4 y 5. La historia no determina cómo pensamos el presente, pero sí influye. El libro también planteará a veces una mirada más transversal a fin de valorar en qué sentidos se parece España a otras democracias europeas occidentales, pero también en qué otros su historia, su geografía, sus costumbres y sus ideas la han hecho distinta.

Que estas preguntas se hayan planteado ahora con tanta fuerza resulta más turbador, si cabe, porque durante, aproximadamente, el cuarto de siglo siguiente a 1975, España había sido un caso de éxito inapelable. Pese a todo, continúa siéndolo en muchos sentidos, como este libro también tratará de demostrar. En 2017, regresé a Fernán Núñez. Las casas allí eran ya de dos o tres plantas, y había también algunos bloques de pisos. Sus calles estaban flanqueadas de hileras de coches aparcados. Se notaba también cierto bullicio de actividad. Entre las tiendas había un supermercado chino. Era otoño y Juana, una señora de setenta y ocho años, estaba sentada al sol, junto a la puerta de su casa; reconocía que mucho era lo que había cambiado: «Ahora son más los que tienen tierras, y muchos han estudiado», me dijo. Algunos viajan diariamente a puestos de trabajo en Córdoba, que está a unos treinta kilómetros, porque ahora se llega muy rápido por

la autovía que reemplazó a la antigua carretera. Ella tiene tres hijos: la mayor estudió Turismo y trabaja en Mallorca; el mediano es policía local, y el pequeño trabaja de yesero. Pocos lugares hay mejores para vivir que España. Aun así, si el país no puede encontrar un camino de renovación política, la permanencia de sus logros quedará en entredicho.

1

El desmoronamiento

En el verano de 2008, *sir* John H. Elliott, historiador británico y una de las más destacadas autoridades en el tema del apogeo imperial español durante los siglos XVI y XVII, impartió una perspicaz conferencia en uno de los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. En ella, se atrevió a predecir que «el periodo comprendido entre 1975 y 2000 va a ser visto desde un punto de vista retrospectivo como una [segunda] época dorada en la historia de España», pero también añadió que, en el periodo transcurrido desde el año 2000, ya había visto «algunas sombras cernirse sobre lo que, durante un cuarto de siglo, había sido un paisaje cada vez más resplandeciente». Entre las sombras por él mencionadas estaban la polarización y el resurgimiento del dogmatismo y del «nacionalismo y el localismo de mentalidad estrecha»[1]. Pronto se les sumaría también la depresión económica.

Diez años después, cuando el mundo político español celebraba el cuadragésimo aniversario de la Constitución y de la transición a la democracia tras la muerte de Franco, aquellas sombras ya habían tapado el sol casi por completo. Desde 2008, España se ha visto zarandeada por una serie de contratiempos y cambios que se han sucedido a gran velocidad y no han dejado prácticamente ninguna institución intacta. Las celebraciones por el aniversario constitucional, entre las que se incluyó un pleno extraordinario de las Cortes en diciembre de 2018, tuvieron, pues, cierto sabor agridulce, entremezclado en algunos sectores con melancólica nostalgia. Al llegar el nuevo milenio, se tenía aún la percepción muy extendida de que la veloz transición española hacia la democracia parlamentaria desde la larga dictadura franquista, efectuada a través de acuerdos negociados y con poca violencia de por medio, había sido ejemplar. Apenas unos años más tarde, sin embargo, una minoría significativa de la opinión política en España, tanto a izquierda como a derecha, rechazaba el pacto constitucional, aunque por motivos distintos en cada caso. En un artículo que Felipe González, presidente del Gobierno socialista de 1982 a 1996 y el estadista decano del país, escribió para *El País*, el diario de referencia de la clase política de centro-izquierda, con motivo del aniversario, instaba a los políticos a recuperar el espíritu de diálogo y entendimiento por el que se había caracterizado el proceso conocido en España simplemente como «la Transición». «No abramos nuevas trincheras después de haber cerrado aquellas que

tanto sufrimiento costaron», pedía[2].

La Transición que se abrió en España a partir de 1975 rompió con casi dos siglos de declive relativo, inestabilidad política y conflictos fratricidas, moteados, entre medias, por algunos periodos de reforma y resurgimiento. Entre 1812 y 1975, en España hubo seis Constituciones diferentes, siete pronunciamientos militares triunfantes, cuatro abdicaciones reales, dos dictaduras y cuatro guerras civiles. La última y más cruenta de las cuatro —la Guerra Civil por antonomasia— fue la contienda que se declaró en 1936 (y que se prolongó hasta 1939) cuando Francisco Franco y varios generales más organizaron un golpe militar contra el Gobierno de centro-izquierda del Frente Popular, representante de una inestable república parlamentaria; el fracaso inicial de aquel «alzamiento» propiciaría la intervención posterior de Hitler, Mussolini y Stalin en el conflicto.

Mientras Europa occidental disfrutaba de regímenes democráticos pacíficos y prósperos en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en España regía la mano de hierro de Franco y muchos observadores externos se mostraban preocupados por el aparente excepcionalismo retrógrado del país. Era una preocupación de la que participaban también muchos españoles. Dos potentes ideas guiaron la Transición, ampliamente compartidas por gran parte del espectro político. La primera era la imperiosidad de evitar una reedición de la Guerra Civil de 1936-1939, que se cobró un total de entre trescientas mil y trescientas cincuenta mil vidas (sobre una población aproximada de 25 millones de habitantes), a las que cabía sumar otras veinte mil (más o menos) ejecutadas durante la represión que siguió a la contienda[3]. El segundo imperativo era lograr que España se convirtiera en un país europeo occidental normal. La Transición fue el resultado de los pactos entre los modernizadores moderados que había en el propio régimen de Franco, que sabían que la paz social y la integración en Europa pasaban por el tránsito hacia la democracia, y una oposición más pragmática tras décadas de exilio, encarcelamiento o clandestinidad.

El proceso fue impulsado desde arriba por el rey Juan Carlos —a quien Franco había designado como sucesor en la Jefatura del Estado — y, desde mediados de 1976, por Adolfo Suárez, hasta entonces un alto funcionario franquista prácticamente desconocido para el público general, al que el nuevo monarca eligió para el puesto de presidente del Gobierno, cargo desde el que hizo gala de un agudo instinto político[4]. Pero la presión por la libertad vino también de abajo, en forma de huelgas y manifestaciones. Tras la muerte de Franco, fueron cayendo una tras otra numerosas prohibiciones —antes incluso de su

eliminación formal— sin apenas hacer ruido, cual escamas de piel muerta de una costra reseca. Viajando por España en aquellos años, detecté entre mucha gente joven una fuerte confianza en que pronto establecerían sus propias libertades.

No es que no hubiera resistencias. Suárez tuvo que soportar la presión en contra del Ejército cuando decidió legalizar el Partido Comunista —que, desde hacía tiempo, era la principal fuerza de oposición a Franco en el interior del país— justo antes de las elecciones generales de junio de 1977, los primeros comicios democráticos en el país desde 1936. Antes de aquella cita electoral, estuve una semana en el País Vasco. Asistí a un gran mitin socialista en un retumbante pabellón deportivo de Bilbao en el que González, un abogado sevillano que ya por entonces era el joven y atractivo líder del partido, insistió en la idea de que «socialismo es libertad» con el nuevo símbolo socialdemócrata del partido como telón de fondo: una mano empuñando una rosa roja. Hubo más ambiente en una presentación de los candidatos socialistas locales en un abarrotado club de pescadores del litoral vizcaíno. Tras décadas a la sombra, la política izquierdista había salido a la luz en toda su sectaria efervescencia. En los oxidados suburbios industriales de Bilbao, en las márgenes del Nervión, los asistentes a los mítines de Euskadiko Ezkerra ondeaban la ikurriña, la bandera vasca roja, verde y blanca legalizada apenas unos meses antes. Este partido representaba a un sector minoritario dentro de ETA, la organización terrorista vasca, el de aquellos de sus miembros que se mostraron dispuestos a aceptar la democracia. La corriente mayoritaria en el movimiento etarra, sin embargo, optó por seguir poniendo bombas, asesinando y secuestrando sin sentido durante varias décadas más, convirtiéndose en fuente de tragedias y tensiones.

El partido Unión de Centro Democrático (UCD), recién formado por Suárez, se impuso por mayoría relativa en las elecciones de 1977, en las que los socialistas quedaron en un destacado segundo puesto. Para sorpresa de muchos, Alianza Popular (AP), el partido conservador fundado por Manuel Fraga y un grupo de otros exministros franquistas, no obtuvo buenos resultados. Los acontecimientos evolucionaron muy rápidamente a partir de ese momento y, en dos intensos y emocionantes años, la dictadura quedó desmantelada. El nuevo Congreso recibió el encargo de redactar una Constitución democrática. La tarea fue acometida por un grupo de siete ponentes, entre los que había representantes de los comunistas, de AP y de los nacionalistas catalanes, así como de los dos grandes partidos. Todas las anteriores Constituciones españolas, salvo una,

habían sido dictadas por el bando vencedor en los conflictos internos previos y, por lo tanto, rechazadas por los perdedores de turno, lo que las convertía en textos inherentemente efímeros. Esta vez, sin embargo, los constitucionalistas estaban decididos a alcanzar acuerdos amplios y duraderos. Junto a su proclamación de diversas libertades civiles y políticas, y de una serie de derechos socioeconómicos enmarcados en una economía de mercado, la nueva Carta Magna encerraba dos compromisos históricos: la izquierda aceptaba una monarquía parlamentaria en vez de la república por la que había luchado en la Guerra Civil, mientras que la derecha admitía la descentralización territorial frente al régimen unitario y centralizado del franquismo.

Este segundo compromiso se expresó en el Artículo 2 de la Constitución, donde se afirma la «indisoluble unidad de la Nación española», a la vez que se «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran». Esta formulación un tanto enrevesada fue un intento de contentar las reivindicaciones «nacionales» de vascos, catalanes y gallegos sin distanciar a los conservadores. Sobre el papel, había otros dos enfoques —más claros— que se podrían haber adoptado. Uno era el federalismo, opción favorita tanto de los socialistas como de los comunistas, y solución más lógica al dilema español sobre cómo conciliar diversidad con unidad. Pero la caótica y efímera república federal de 1873 había dado mala fama histórica a aquella idea, sobre todo entre la derecha (véase el capítulo 4). El otro enfoque habría consistido en conceder Gobiernos autónomos solamente a Cataluña, el País Vasco y Galicia, a fin de reconocer debidamente su conciencia diferenciada como naciones culturales, es decir, como algo más que regiones de la nación española.

Sin embargo, los dirigentes políticos no tuvieron el control exclusivo de los acontecimientos durante la Transición, y entre los españoles estaba muy extendida la idea de que la democracia debía implicar una descentralización del poder. Suárez había aceptado el restablecimiento provisional del Gobierno autónomo en Cataluña —antes incluso de que se redactara la Constitución— merced a un acuerdo con Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat en el exilio. En octubre de 1977, Tarradellas protagonizó un regreso triunfal a Barcelona tras treinta y ocho años en Francia. Cuando proclamó ante la multitud que lo aclamaba «ja soc aquí», hizo mucho más que enunciar una obviedad. Poco después se llegó también a un acuerdo preliminar para la autonomía vasca. Tarradellas había reconocido la unidad de España y aceptaba el derecho a la autonomía de otras

regiones españolas. En diciembre de 1977, en pleno clima de generalización del sentimiento regionalista, se celebraron manifestaciones en Andalucía, que movilizaron a un millón y medio de personas en total. Y también surgieron movimientos políticos nacionalistas en lugares —las islas Canarias, por ejemplo— donde nunca antes se habían planteado demandas similares.

El Gobierno de Suárez decretó la creación de órganos «preautonómicos» en una docena de regiones cuando la Comisión Constitucional de las Cortes Constituyentes se hallaba aún en plena fase de deliberaciones. Fue una decisión desacertada: vició el debate constituyente e hizo que la opción de circunscribir la autonomía regional únicamente a las tres comunidades históricas resultase inviable[5]. Al final, el Título VIII de la Constitución, el dedicado a la organización territorial del Estado, dibujó un sistema embrollado y no exento de contradicciones. Por un lado, valiéndose de un intrincado subterfugio, trataba de garantizar el «derecho a la autonomía» de las «nacionalidades y regiones», pero sin definirlas ni nombrarlas. También intentaba establecer dos clases diferentes de entidades territoriales autónomas: aquellas cuya autonomía derivase de un estatuto aprobado en referéndum (Artículo 151) y aquellas otras cuya autonomía fuese aprobada por las Cortes (Artículo 144). Se suponía que las primeras gozarían de más competencias propias, que, además, tendrían transferidas por una vía más rápida. Pero, en la práctica, se renunció a establecer esa distinción. Aplicando una fórmula conocida como el «café para todos», España se subdividió en diecisiete «comunidades autónomas», a las que se añadieron los enclaves norteafricanos de Ceuta y Melilla como ciudades autónomas. Cada una se dotó de su propio Parlamento elegido por sufragio popular y de su propio Gobierno elegido por ese Parlamento.

El Estado autonómico, como se dio en conocer el nuevo sistema, fue, en cierto modo, un hábil compromiso: una especie de federalismo que no osaba llamarse a sí mismo por su verdadero nombre. Funcionó bien al principio y, en muchos sentidos, ha transformado España para bien. Los Gobiernos autonómicos gestionan competencias en educación, sanidad y servicios sociales, así como buena parte de la política cultural y de las regulaciones económicas. Cataluña y el País Vasco cuentan con sus propias fuerzas de Policía y administran también sus prisiones. En 2017, las comunidades autónomas se encargaban de un 38 % del gasto público total del país (los Gobiernos locales gestionaban otro 15 %)[6]. Pero el Título VIII acumuló problemas que han terminado por estallar en la pasada década. La descentralización era un proceso abierto. Pretendía ser también

asimétrico, pero, con el tiempo, se demostró insuficiente para satisfacer las aspiraciones de los nacionalistas catalanes y vascos, que llegaron a querer mucho más que una descentralización principalmente administrativa.

Los ponentes de la Constitución se esforzaron por evitar los defectos que contribuyeron en su día a la caída de la República de 1931 y sembraron el germen de la Guerra Civil. Querían crear Gobiernos fuertes y estables. De ahí que compaginaran un sistema electoral basado en la representación proporcional con unas circunscripciones electorales provinciales en las que cada una de las cincuenta tenía asignada una prima de representación en forma de un mínimo de dos escaños, lo que, en la práctica, suponía una sobrerrepresentación de las zonas rurales. Los Gobiernos solo pueden ser derrocados entre elecciones mediante una moción de censura constructiva cuyos proponentes logren el apoyo de una mayoría absoluta del Congreso para su candidato alternativo. Y la reforma constitucional es un proceso arduo y difícil: enmendar las disposiciones principales de la Carta Magna requiere de la aprobación de tres quintas partes de cada una de las cámaras de las Cortes, la convocatoria automática de elecciones, una nueva aprobación por tres quintas partes de las dos cámaras surgidas de esos comicios y, por último, un referéndum favorable. Con el paso del tiempo, esa rigidez también ha sido fuente de nuevos problemas.

La Constitución se aprobó en referéndum en diciembre de 1978. Fue el tercer voto nacional en dos años, pero, aun así, participó un 67 % del electorado, y el 87 % de quienes votaron lo hicieron a favor. La cifra fue más alta aún en Cataluña; únicamente en el País Vasco el nuevo texto constitucional no recibió el apoyo de una mayoría absoluta del electorado: allí solo el 45 % de los inscritos en el censo acudieron a votar; de ellos, un 69 % le dio su voto afirmativo. El Partido Nacionalista Vasco había criticado el texto de la nueva Carta Magna porque en él se hablaba de «actualizar» los fueros de su región, cuando para el PNV estos eran derechos colectivos primordiales.

La Transición se erigió sobre otros dos pilares adicionales. Así, mientras las deliberaciones constituyentes seguían su proceso, otra negociación paralela produjo un acuerdo socioeconómico, los llamados «Pactos de la Moncloa» (así llamados por haberse firmado en la sede de la Presidencia del Gobierno). A cambio del reconocimiento de los derechos sindicales y de un compromiso para aumentar el gasto social, la izquierda aceptaba un sistema de economía mixta y una política de contención salarial (España, que importa casi todo el petróleo que consume, se había visto seriamente golpeada por el

fuerte incremento de los precios del crudo en 1973). El otro pilar fue una ley de amnistía general, aprobada en octubre de 1977. Esta abarcaba «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado», cometidos hasta las elecciones de junio de aquel año. Incluía también, pues, a presos de ETA condenados por asesinato, que de este modo fueron excarcelados. También garantizaba que quienes habían trabajado para el régimen franquista no fuesen investigados ni encausados por «delitos [y faltas] cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas». Se impedía así cualquier purga de las Fuerzas Armadas, la Policía o la Justicia.

Con el tiempo, aquella amnistía se convertiría en el elemento más controvertido de la Transición. Como ya se ha dicho, algunos se han referido a ella como un «pacto del olvido». Pero ese es un nombre muy poco apropiado, pues, desde entonces, la sociedad española ha seguido recordando profusamente la Guerra Civil y la represión franquista en miríadas de libros, películas o conmemoraciones dedicadas a ambos temas (véase el capítulo 5). Lo que sí evitó la amnistía fue la aplicación de la llamada «justicia transicional» y de los castigos a los funcionarios franquistas. De todos modos, la amnistía había sido una reivindicación del Partido Comunista y de la izquierda en general desde 1956, y nadie en España (o en ningún otro lugar del mundo) hablaba de justicia transicional en 1977. Además, el hecho de que no se procediera a purgas en las instituciones del Estado obedeció también al equilibrio de fuerzas existente en aquellos años finales de la década de los setenta.

Del consenso a la crispación

Al amparo de la Constitución y del pacto de la Transición, España parecía haber dado muerte a sus demonios históricos y haber aplacado las causas de agitación e inestabilidad crónica. La urbanización tardía (aunque masiva) de 1950 en adelante había restado urgencia a los conflictos agrarios. La economía había iniciado un largo periodo de crecimiento rápido a finales de los años cincuenta, cuando Franco renunció por fin a la autarquía propugnada por la Falange (la versión española del partido fascista de Mussolini) y puso la gestión económica del país en manos de un grupo de tecnócratas católicos del Opus Dei. Los socialistas, encabezados por González, obtuvieron una victoria aplastante en 1982 y permanecieron en el Gobierno durante los catorce años siguientes. Pusieron la economía al día tras cerrar las obsoletas industrias pesadas de titularidad estatal. Ampliaron y reforzaron el rudimentario Estado del bienestar heredado del

franquismo garantizando la sanidad y la educación primaria y secundaria gratuita universal, y reduciendo la pobreza. La Iglesia católica, superpoderosa durante siglos, perdió influencia a medida que las generaciones más jóvenes comenzaron a alejarse de la misa. Tras una fallida intentona de golpe de Estado en 1981 encabezada por un ridículo teniente coronel de la Guardia Civil, el Ejército terminó aceptando la democracia. El ingreso de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1982, refrendada por un posterior plebiscito organizado por González, representó un paso importante en ese proceso de asimilación por parte de las fuerzas armadas del hecho de que su papel era proteger el país frente a las amenazas externas, en vez de las internas7. Por su parte, la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986 (junto con Portugal) selló su proceso de convergencia con la Europa occidental democrática. «Europa» se convirtió enseguida en un pilar de la nueva identidad española.

El país también se había alejado con rapidez de la gerontocracia franquista: a la muerte de Franco, el rey Juan Carlos tenía treinta y siete años, Suárez, cuarenta y tres, y González, solamente treinta y tres. El país pronto se sacudió de encima la mano muerta de la censura informativa del franquismo, así como el moralismo hipócrita y patriarcal de la Iglesia. La democracia propició también el estallido de un frenesí de creación cultural y la aceptación por parte de muchos españoles de la apertura sexual, las drogas y las libertades individuales sin freno. Si Barcelona había sido durante mucho tiempo el centro de las vanguardias en España, en los ochenta fue la «movida» madrileña, caracterizada, por ejemplo, en la filmografía temprana de Pedro Almodóvar, la que pasó a liderar la nueva contracultura.

En 1996, tras cuatro mandatos de gobierno, los socialistas estaban desgastados políticamente; su historial había quedado manchado por noticias sobre casos de corrupción y sobre abusos en la larga lucha contra el terrorismo de ETA. La oposición conservadora se había reagrupado en el refundado Partido Popular (PP), que reunió a AP y muchos antiguos miembros de la ya difunta UCD. El PP contaba con un nuevo y joven líder, José María Aznar, un inspector de Hacienda en excedencia que había ejercido brevemente el cargo de presidente autonómico de Castilla y León. En 1995, escapó ileso por los pelos de un intento de asesinato de ETA. Bajo su liderazgo, el PP se alejó de sus orígenes franquistas y se aproximó a posturas más análogas a las de la democracia cristiana, algo que el electorado recompensó con una victoria de los *populares* en 1996.

La alternancia pacífica en el poder es una seña característica

fundamental de una democracia consolidada. Con la que se produjo entonces, ya se pudo considerar que, por fin, la Transición se había completado. Durante sus dos mandatos como presidente del Gobierno, Aznar se concentró en las reformas económicas, incluyendo privatizaciones. Al líder popular lo guio sobre todo su determinación para conseguir que España cumpliera con las condiciones para ingresar en la Eurozona, que logró. Pero si González había sido un actor importante en el escenario europeo, Aznar fue un atlantista que creía que la mejor manera de ampliar la influencia internacional de España era estrechar lazos con Estados Unidos. Tuviese o no razón, lo cierto es que no consiguió persuadir de ello a una mayoría de los españoles. España se sumó a la coalición liderada por Estados Unidos en la invasión de Irak de 2003, aunque no llegó a desplegar tropas de combate en aquel país. Pero los sondeos mostraban que un 90 % de los encuestados se oponían a la invasión. La impopularidad personal que aquello le granjeó tal vez estuviera detrás de su decisión de no presentarse a una segunda reelección (un gesto meritorio en un país donde los líderes tienden a aferrarse a sus puestos indefinidamente). Pese a ello, el sucesor designado por el propio Aznar para liderar el PP, Mariano Rajoy, parecía tener asegurada la victoria para las elecciones generales de 2004. Pero en la mañana del 11 de marzo, tres días antes de la fecha de los comicios, diez bombas explotaron casi simultáneamente en varios trenes de cercanías de Madrid y mataron a ciento noventa y una personas, además de herir a más de dos mil en el peor atentado terrorista en la historia del país. Aznar trató de culpar de lo ocurrido a ETA; varios de sus ministros y altos cargos presionaron a los medios de comunicación para que lo hicieran también. Cuando, a las pocas horas, fue haciéndose evidente que los perpetradores eran extremistas islamistas, comenzó a cundir un clima de indignación entre amplios sectores de la sociedad ante el engaño impulsado desde el Gobierno de la nación: esto no hacía más que confirmar, a ojos de muchos españoles, que la aventura de Irak había convertido a España en vulnerable diana del terrorismo internacional. La elevada participación resultante en las elecciones de ese domingo dio a los socialistas —encabezados por su nuevo e inexperto líder, José Luis Rodríguez Zapatero— una inesperada victoria por un estrecho margen[8]. Ese episodio terminó inyectando en el sistema político un veneno de efectos muy duraderos: los dos partidos principales siguieron acusándose mutuamente durante tiempo de jugar sucio contra su rival.

Zapatero representaba a una nueva generación de españoles cuyas vidas políticas no habían estado condicionadas directamente por la

dictadura. Pese a haber estudiado Derecho, Zapatero no conocía otra profesión que la política; había sido diputado del Congreso por primera vez a los veintiséis años y se había alzado inesperadamente con el liderazgo del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) en unas primarias en las que había hecho campaña contra la vieja guardia del partido. Con sus impactantes ojos verdes y sus maneras afables, era sin duda un verdadero animal político. Algunos lo hacían de menos porque lo consideraban una figura de poco peso. Por ello, y por su aspecto físico, Alfonso Guerra —el histórico segundo de González— le puso el cruel apodo de «Bambi»[9]. Pero Zapatero era más astuto e implacable de lo que esas descripciones daban a entender. Al final, sin embargo, defraudó expectativas. Era como si, en no pocos sentidos, hubiese querido ser el primer presidente del Gobierno de Podemos —partido izquierdista que no se fundó hasta 2014— antes que un socialdemócrata moderado de una línea parecida a la de González. Su decisión de retirar los mil trescientos militares que Aznar había enviado a Irak como fuerza de paz tras la invasión estadounidense de aquel país fue muy popular en España y dio cumplimiento a una de sus promesas de campaña. Pero la forma en que llevó a cabo esa retirada —de manera súbita y sin consultas previas— agrió las relaciones de Madrid con Washington durante años[10]. También sacó a relucir una honda vena de antiamericanismo en el nuevo presidente español que se volvería más profunda todavía con el tiempo, tras dejar el cargo.

En la segunda legislatura de Aznar, cuando el PP contaba con mayoría absoluta en el Congreso, y luego durante la presidencia de Zapatero, la vieja actitud de consenso que había subyacido a la Transición comenzó a resquebrajarse (de hecho, ya había empezado a debilitarse durante el último mandato de González). Pasó a ocupar su lugar lo que los españoles llaman la «crispación». Hasta cierto punto, este nuevo clima podía interpretarse como el simple ejercicio de la política de toda la vida y como un síntoma de la creciente confianza de la democracia española en sí misma. Pero tenía también una vertiente destructiva. Los analistas comenzaron a comparar el debate político nacional con aquella pintura de Goya que se expone en el Prado en la que se ve a dos hombres enfrentados a garrotazos entre sí mientras se hunden en arenas movedizas. Zapatero inició una «guerra cultural» en busca de temas que, cual cuñas, pudieran provocar al PP. Algunas de sus reformas significaron una modernización grata de las normas sociales. Entre ellas, estuvieron el matrimonio homosexual, una ley contra la violencia de género y una promesa de destinar dinero público para el cuidado de personas dependientes (ancianas o

discapacitadas). Eran medidas dirigidas a «reforzar la idea de ciudadanía» y a fomentar una «sociedad más creativa y más tolerante», según me dijo el propio Zapatero en una charla de una hora que mantuvimos en el Palacio de la Moncloa en septiembre de 2008. La mayoría de los españoles estaban de acuerdo con él. Pero aquellas medidas movilizaron a los obispos conservadores que encabezaban la Iglesia católica española, que organizaron manifestaciones de protesta contra el Gobierno. Rajoy, dolido aún por sus derrotas electorales, se sumó encantado a ellas. Así es como maniobró Zapatero para retratar al PP como una formación más reaccionaria que el español medio, incluso tal vez más de lo que lo era en realidad.

Las otras dos grandes iniciativas de su presidencia fueron más controvertidas todavía. Una fue la aprobación de un nuevo Estatuto de autonomía para Cataluña (véase el capítulo 3). La otra fue una Ley de la Memoria Histórica, que ofrecía fondos y ayuda públicos para que los familiares de víctimas mortales del régimen franquista, muchas de ellas arrojadas a fosas comunes sin marcar ni identificar, pudieran encontrar y dar dignamente sepultura a sus muertos. Significaba la reparación de un claro agravio. La ley también obligaba a retirar todas las placas de edificios públicos, o todos los nombres de calles, que conmemorasen figuras o hechos destacados del régimen anterior. Pero, en general, la nueva norma inquietó a muchos observadores —y no solo de derechas—, para quienes el Gobierno parecía decidido a apoyar partidariamente una visión particular de la Guerra Civil en lugar de dejar que fuese la sociedad española la que decidiese libremente su criterio al respecto. La oposición también atacó a Zapatero por mantener conversaciones con ETA (que no llegaron a ningún acuerdo), pese a que tanto Aznar como González también lo habían hecho en su día.

El fin de la fiesta

La economía española había seguido creciendo con fuerza. El desempleo había caído de forma sostenida y el nivel de vida del país convergía cada vez más con la media europea. Era la culminación de cuatro décadas extraordinariamente exitosas, de 1960 a 2000, en las que España fue uno de los pocos países del mundo (una docena apenas) que dieron el salto desde el grupo de las economías de renta media hasta el de las de renta alta. El ingreso en la CEE ayudó, pero las piedras angulares de aquel crecimiento se habían colocado durante el periodo final del franquismo, cuando las políticas comenzaron a diseñarse siguiendo criterios tecnocráticos, la economía se volvió cada

vez más abierta y orientada al mercado, y la inversión privada se disparó[11]. En 1986, la renta per cápita española equivalía a solo el 68 % de la media comunitaria europea; en 2007, ese porcentaje había subido hasta el 90 % de la media de los quince países que, para entonces, componían la Unión Europea (UE). El empresariado español fue adquiriendo una confianza cada vez mayor en sí mismo y un alcance crecientemente global. En 2008, en la lista de las quinientas mayores empresas del mundo por valoración de mercado elaborada por el *Financial Times* figuraban catorce españolas (en el año 2000 solo había ocho).

La incorporación al euro en 1999 hizo que, de pronto, España gozara de los bajos tipos de interés de Alemania, pero sin la competitividad germana. El dinero barato alimentó un *boom* de la vivienda. En las afueras de todas las ciudades españolas, grandes y pequeñas (e incluso de algunos pueblos), brotaron largas hileras de casas unifamiliares o de bloques de viviendas. Cuando las primeras señales de la crisis crediticia asaltaron las economías norteamericanas y europeas en 2007, España construía viviendas nuevas a un ritmo de setecientas mil anuales, más que Francia, Alemania e Italia juntas. Pero para cubrir la demanda en aumento de hogares generada por la oleada inmigratoria que había hecho que la población española saltara de los 40 millones de habitantes a los 45 millones entre 2000 y 2008, habría bastado solamente con una pequeña parte de esos pisos y casas de nueva construcción. De hecho, muchos de los recién llegados encontraron trabajo en las propias obras. El Estado, además, subvencionaba la adquisición de vivienda en propiedad. Así que, a medida que los españoles se iban haciendo más ricos, volcaban sus ahorros en inversiones inmobiliarias. Jesús Encinar, emprendedor y fundador de idealista.com, un portal inmobiliario en Internet, me contó en 2008 que España tenía un 50 % más de viviendas que de familias con que ocuparlas. Muchas de estas últimas, de clase media, adquirieron también segundas residencias cerca de la playa, o en el pueblo de sus abuelos, o simplemente como inversión. No había ningún impuesto que gravara los inmuebles vacíos.

Otro factor impulsor de la burbuja de la vivienda fue el poderoso (y presuntamente corrupto en ocasiones) nexo entre los políticos locales, los promotores inmobiliarios y las cajas de ahorros, entidades estas que, en 2008, representaban la mitad del volumen del sistema financiero del país[12]. Las ciudades españolas suelen ser bastante densas y tienden a terminar abruptamente en campo abierto. Para construir en terrenos vacíos se necesita la decisión del Gobierno municipal de turno para ampliar los límites del núcleo urbanizado

recalificando suelo rústico como suelo urbano edificable. El ayuntamiento retiene derechos sobre un 10 % del terreno urbanizable. La venta de esa décima parte al promotor se convirtió en una fuente de ingresos fundamental para muchas haciendas municipales. A veces, algún que otro concejal aceptaba sobornos a cambio de aprobar nuevas promociones13. El tercer lado de este triángulo eran las cajas. Su misión original era actuar como entidades de ahorro y crédito sin ánimo de lucro, y dedicar los beneficios a buenas causas locales. Pero, a raíz de una desregulación previa, las diversas cajas de ahorros pudieron empezar a operar fuera de su región de origen. Sus consejos de administración estuvieron colonizados por políticos locales.

También fueron las cajas las que pusieron buena parte del dinero con el que se sufragó la manada de «elefantes blancos» que pisotearon el paisaje y las finanzas de España durante los años finales del *boom* económico, como consecuencia de las infladas ambiciones de muchos políticos autonómicos y municipales y de la voracidad de los magnates de la construcción. Así se crearon aeropuertos sin vuelos, como el de Ciudad Real o el de Castellón; o autopistas de peaje sin apenas vehículos circulando por ellas, como las radiales de Madrid, que terminaron costando miles de millones de euros de dinero de los contribuyentes; o el mucho más modesto tranvía de Jaén, que jamás entró en funcionamiento pese a haber costado 120 millones de euros. También se abrieron centros culturales sin apenas «cultura» que ofrecer, como un Museo Íbero en (de nuevo) Jaén, o una Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela, un complejo construido sobre la cima de una colina con vistas a la ciudad que recuerda a un trampolín para saltos de esquí diseñado por un borracho. A esto habría que sumar los cientos de miles de pisos sin ocupantes, muchos de ellos construidos en el lado malo de la autopista con respecto a la playa.

El sector de la construcción llegó a representar nada menos que el 12 % del PIB (producto interior bruto) español, cuando en cualquier otro país desarrollado el 5 % es lo normal. Los reguladores no intervinieron cuando debían. Aparentemente, los mandos intermedios en el Banco de España, encargados de supervisar el sistema financiero, estuvieron demasiado cerca de las entidades a las que debían vigilar. Cierto es que el Banco de España ya había advertido en 2003 que los precios de la vivienda estaban sobrevalorados, pero la única respuesta que recibió por ello fue un clamor de protesta en su contra, así que, tras aquello, optó por pecar de exceso de prudencia. El banco central también había insistido —aunque solo moderadamente— en la necesidad de que las entidades bancarias provisionaran fondos para contrarrestar el ciclo alcista. En cierto modo, el país entero fue

cómplice de la burbuja. En palabras de Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España desde 2018, «aquello fue un error nacional. Lo que no sabíamos era que el estallido de la burbuja inmobiliaria iba a coincidir con una crisis financiera internacional»14.

La fiesta se terminó de golpe en 2007, cuando el Banco Central Europeo incrementó su tipo de interés de referencia. La economía se sumió en una recesión y el flujo de crédito se secó. La situación pilló a España completamente desprevenida: con un déficit por cuenta corriente de un 10 % del PIB que ya no podía financiar, y con unas entidades bancarias que ya no encontraban compradores en los mercados financieros para sus paquetes de préstamos hipotecarios. En septiembre de 2008, cuando entrevisté a un buen número de políticos, altos funcionarios y dirigentes empresariales españoles para un reportaje especial de *The Economist,* solo unos pocos dieron muestras de ser conscientes de la gravedad de la situación (uno era Pedro Solbes, el veterano ministro de Economía). Muchos —comenzando por el propio Zapatero— vivían en una especie de estado de negación. Él y yo hablamos a los pocos días de que Lehman Brothers, banco estadounidense de inversión, había quebrado, desatando el caos en los mercados financieros. «En cuanto regrese la calma al sistema internacional, volveremos a crecer sin que la economía española haya sufrido daños estructurales», me dijo el entonces presidente del Gobierno. Confundió un problema estructural con un mero bache cíclico, así que trató de combatir la recesión mediante la aplicación de medidas de estímulo de la demanda, como un incremento de las pensiones o una efímera paga de dos mil quinientos euros para los padres de bebés recién nacidos. Si esto lo hubiera hecho una década más tarde, en un mundo donde los tipos de interés estaban muy bajos y había una mayor tolerancia con los déficits públicos y una mayor aversión a la austeridad, tal vez se habría salido con la suya. Pero esas no eran las condiciones reinantes en la eurozona durante la gran crisis financiera. La España de Zapatero fue, en parte, víctima de la ferviente austeridad con la que las autoridades europeas defendieron celosamente su aún joven moneda única. La economía española entró en recesión cuando todavía mantenía una posición fiscal fuerte gracias a un superávit presupuestario en 2007 y a una deuda pública en mínimos del 36 % del PIB (frente al 104 % de Italia o incluso el 42% del Reino Unido en ese mismo año). Pero a medida que la recesión fue reduciendo los ingresos tributarios, el déficit se disparó (hasta un nivel máximo del 11 % sobre el PIB en 2009). La Comisión Europea y Angela Merkel, la canciller alemana, presionaron a Zapatero para que diera una humillante marcha atrás a su política. Y así, con el apoyo

del PP, las Cortes aprobaron en 2011 una enmienda de la Constitución que obliga a establecer el equilibrio presupuestario en las cuentas del Estado a medio plazo y da prioridad legal a los pagos de la deuda sobre cualesquiera otros compromisos de gasto público.

Unos meses después, Rajoy y el PP conquistaron la mayoría absoluta de ambas cámaras de las Cortes en las elecciones generales celebradas ese año. Tras unos inicios profesionales como registrador de la propiedad en Pontevedra, Rajoy había ido escalando puestos en la jerarquía del Partido Popular. Sus defectos eran patentes: en público, se expresaba con la grisura de un burócrata atenazado por la prudencia. Nadie podía acusarlo de tener algo tan audaz como es un sueño político. Sus cualidades —que las tenía— no eran tan evidentes. En privado, podía ser afable, ingenioso y muy agudo. Se caracterizaba también por una callada implacabilidad, que le permitió permanecer en su puesto de líder del PP pese a dos derrotas electorales consecutivas y superar un intento de derrocamiento impulsado por Aznar en el congreso del partido de 2008. Era terco y determinado; cuando se decidía por un curso de acción, no era fácil apartarlo de él. Si Aznar había dado ciertas muestras tanto de libertarismo como de thatcherismo, Rajoy era un conservador genuino, en la línea de un Edmund Burke: un moderado, más que un ideólogo, para quien el cambio era una inevitable desgracia que había que gestionar lo mejor que se pudiera.

Rajoy asumió el cargo justo cuando más honda era la recesión. La banca española continuaba arrastrando problemas que lastraban la calificación crediticia de la deuda soberana del país. En aquel momento, muchos preveían que España se vería forzada a pedir un rescate financiero integral por parte de la Comisión Europea (y a aceptar la vigilancia férrea de los compromisos adquiridos a cambio por parte de los «hombres de negro», como se conocía por aquel entonces a los funcionarios financieros internacionales). El desempleo alcanzó un nivel récord del 27 % en 2013, con 6,3 millones de españoles en paro. Pero, a partir de ahí, se inició un periodo de sólida recuperación (véase el capítulo 7). Esto se debió en parte a una serie de circunstancias favorables, como fueron la caída de los tipos de interés internacionales, la determinación mostrada por Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, a hacer «lo que haga falta» para salvar el euro y, en un plano más general, la bajada de los precios del petróleo. Pero la reactivación también se debió en buena medida a las reformas de Rajoy. Tres medidas fueron particularmente importantes.

En primer lugar, el Gobierno por fin hizo limpieza en el sistema financiero. Ayudado por la promesa de un préstamo de 100.000

millones de euros de la UE, de los que, finalmente, solo se usaron 40.000 millones, fusionó o cerró muchas de las arruinadas cajas de ahorros. Nacionalizó cuatro bancos insolventes, incluida Bankia, una entidad de gran tamaño. Bankia había sido el resultado de una fusión forzada en 2010; sus principales entidades constituyentes fueron Caja Madrid y la valenciana Bancaja. En 2011, salió a Bolsa en el parqué madrileño, y sus directivos promocionaron aquellas acciones entre sus clientes como si fueran una inversión segura. Sin embargo, en cuestión de meses, Bankia tuvo que volver a ser nacionalizada. El valor de sus acciones había quedado reducido a nada y, con ello, hizo que se evaporaran los ahorros de decenas de miles de personas. El presidente de Bankia, Rodrigo Rato, exministro de Economía con Aznar y, posteriormente, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), terminó siendo condenado —junto con otros muchos altos directivos del banco— por apropiación indebida por haber usado tarjetas de crédito no declaradas y con cargo a la entidad para realizar compras privadas15. El Banco de España había vuelto a fallar en el ejercicio de su función principal tras la creación del euro: garantizar la estabilidad del sistema financiero. «Una de mis misiones principales —admitía Hernández de Cos— es restablecer la reputación del banco [central]». Él se mostró mucho más franco y abierto que sus predecesores en el cargo a la hora de advertir de los riesgos a los que se enfrenta la economía.

En segundo lugar, tras unos inicios más bien titubeantes, Rajoy empezó a tener las finanzas públicas bajo control. Su obstinación al rechazar las peticiones de quienes le exhortaban a aceptar un rescate general de la economía como el que se había producido en Grecia se vería justificada meses después, cuando se demostró que tal rescate era innecesario. Pudo así recortar el déficit progresivamente sin perder el control político sobre el proceso (y eso que su decisión —tan unilateral como realista— de elevar el objetivo de déficit de España para 2012 del 4 % sobre el PIB al 5,8 % generó irritación entre las autoridades de la Comisión Europea). El Estado central pagó los atrasos que las Administraciones autonómicas habían ido acumulando en los pagos a sus proveedores, que equivalían a un 5 % del PIB. Eso salvó a muchos pequeños negocios y empresas de ir a la quiebra, según me contó un ministro de aquel Gobierno. Rajoy también mantuvo el valor nominal de las pensiones (lo que, dado que España llegó a registrar deflación durante esos años, hizo que aquellas se incrementaran ligeramente en términos reales) y amplió el periodo de pago de la prestación por desempleo.

En tercer lugar, el Gobierno impulsó cambios en la rígida

legislación laboral del país. Tras años en los que los costes laborales españoles habían crecido más rápido que la media europea, la reforma autorizó que los empresarios pudieran llevar a cabo negociaciones salariales en sus empresas, si no se llegaba a acuerdos en todo el sector. Aunque esa fuera una opción rara vez invocada, forzó una mayor contención en las posiciones de los sindicatos. Para el caso de los despidos procedentes, las indemnizaciones se redujeron de cuarenta y cinco días de sueldo por año trabajado a unos todavía generosos treinta y tres días, lo que hizo que los reajustes de plantilla fueran más asequibles para muchas compañías. Los sindicatos se opusieron frontalmente a la reforma. Pero esta hizo que, cuando la economía recobró la senda del crecimiento, se crease empleo a mucho mayor ritmo que en ocasiones pretéritas.

«España ha pasado de ser un país al borde de la quiebra a convertirse en un modelo de recuperación que sirve de ejemplo para […] la Unión Europea», proclamó Rajoy en 2015[16]. Tenía razón, pero muchos españoles que sufrían aún los efectos de la recesión no lo veían así. El crac financiero había sacado a la luz otros casos de prácticas ilícitas, además del escándalo de Bankia[17]. A diferencia de Italia, España no es un país sistémicamente corrupto. Sin embargo, un subproducto desafortunado del proceso autonómico fue la creación de feudos unipartidistas en los que algunos políticos terminaron sintiéndose impunes y creyéndose legitimados para perpetuarse en el poder, y en ciertos lugares, la corrupción floreció a nivel local (véase el capítulo 9).

En noviembre de 2012, en lo peor de la recesión, hice un viaje periodístico a Barcelona y a Madrid. La capital de España, en particular, parecía hundida en la depresión, con numerosos comercios vacíos y negocios cerrados definitivamente. Los ánimos entre los españoles estaban muy encendidos. En una jornada de huelga general, muchos trabajadores de la sanidad pública autonómica madrileña desfilaron en manifestación por el Paseo de la Castellana en un día frío y gris para protestar por los recortes anunciados por el Gobierno regional. Se les unió otro numeroso contingente de ahorradores estafados por las entidades financieras. Varios grupos se separaron de la manifestación principal para concentrarse frente a sedes y oficinas bancarias. Los desahucios por ejecuciones hipotecarias también eran focos de protestas ciudadanas. La legislación española amparaba, de forma particularmente injusta, que quienes tenían que entregar las llaves de su propiedad para devolvérsela al banco siguieran debiéndole a este el saldo impagado de la hipoteca que pesaba sobre aquella.

La recesión, la austeridad y la corrupción forman una mezcla políticamente tóxica en cualquier democracia. En España dio origen al movimiento de los *indignados*, las multitudes de personas (fundamentalmente, jóvenes) que ocuparon plazas importantes de ciudades de todo el país en una serie de protestas masivas que comenzaron el 15 de mayo de 2011 y se prolongaron varias semanas. Autoorganizado a través de las redes sociales, aquel nuevo tipo de movimiento de protesta pronto sería imitado en otros países (por ejemplo, por Occupy Wall Street unos meses más tarde). El movimiento propiamente dicho terminó apagándose con el paso de las semanas, pero fue el presagio de un cambio trascendental en la opinión pública que daría pie al nacimiento de dos nuevos partidos. En la izquierda, surgió Podemos, una formación que mezclaba populismo peronista y leninismo, menospreciaba la pretendida calidad de la democracia española y afirmaba que la Transición había supuesto una capitulación ante el franquismo, que, según los «podemitas», continuaba controlando las «cloacas del Estado». En el centro-derecha, Ciudadanos, nacido en Barcelona como Ciutadans a instancias de un grupo de intelectuales desilusionado con la presunta contemporización de los socialistas catalanes ante el nacionalismo, creció hasta convertirse en un partido de ámbito estatal. Combinando el liberalismo (en el sentido británico del término) y un nacionalismo español cada vez más manifiesto, durante un tiempo sus líderes se declararon inspirados por el modelo de Emmanuel Macron en Francia. Fue el beneficiario del enfado de muchos antiguos votantes del PP con la corrupción de varios políticos *populares*.

Es encomiable que aquella indignación ciudadana no desembocara en violencia ni en tensión social desbordada, y que, sin embargo, hallara salida a través de estos canales institucionalizados. Pero, aun así, el extendido enfado tuvo un coste: el sistema político se fragmentó. Desde 2015, España ha tenido un Gobierno en minoría tras otro (y eso cuando han llegado a formarse). Los nacionalistas catalanes se transformaron en independentistas y dejaron de participar en el mercadeo de apoyos con el que habían sostenido a Gobiernos nacionales en el pasado (a cambio de la transferencia de nuevas competencias autonómicas). En las elecciones de noviembre de 2015, el PP perdió sesenta y cuatro escaños del Congreso de los Diputados, aunque siguió quedando por delante de los socialistas, que perdieron veinte. Podemos, con sesenta y cinco diputados, y Ciudadanos, con cuarenta, entraron por vez primera en la Cámara Baja. Tras esos resultados, siguieron meses de parálisis. Pedro Sánchez, el nuevo líder

socialista, alcanzó un acuerdo con Ciudadanos para gobernar con un programa de reformas económicas y políticas. Entre las dos fuerzas, sin embargo, solo sumaban ciento treinta de los trescientos cincuenta escaños del Congreso, y no consiguieron el visto bueno del PP ni de Podemos para formar Gobierno. Tal como Felipe González declaró en una entrevista por aquellas fechas, «hemos pasado a […] un Parlamento a la italiana, pero sin italianos para manejarlo»[18].

Se convocaron entonces nuevos comicios para junio de 2016. Los sondeos previos parecían indicar que Podemos superaría a los socialistas de un modo parecido a como, en Grecia, Syriza, partido que inicialmente era de extrema izquierda, había sustituido al PASOK, el partido socialdemócrata tradicional en aquel país. Una semana antes de las elecciones, en un efervescente mitin de Podemos en Sevilla, Íñigo Errejón, segundo en aquel entonces de la formación, exclamó: «Lo tenemos al alcance, lo estamos rozando con los dedos». No fue así. Aunque Podemos formó coalición con Izquierda Unida (marca que integra al Partido Comunista de España), ambas fuerzas juntas obtuvieron un millón de votos menos que los que habían cosechado por separado el mes de noviembre anterior y no consiguieron aumentar su número de escaños. Los sondeos preelectorales de aquel momento tendieron a subestimar el apoyo a los partidos tradicionales. Y el sorprendente resultado del referéndum del Brexit, celebrado tres días antes que las generales españolas, tal vez contribuyó a disuadir a algunos votantes de apostar por experimentos políticos.

Al final, Rajoy ganó catorce escaños y recibió el apoyo de Ciudadanos para gobernar. Pero seguían faltándole diez diputados para disfrutar de mayoría absoluta. Hubo mucha presión sobre Sánchez para que accediera a que el grupo de los socialistas se abstuviera en la votación de investidura del candidato del PP a fin de que el país tuviera por fin un nuevo Gobierno. Pero él se negó reiteradamente a ello: «No es no», repitió (una frase que parecía sintetizar el clima político de negatividad que terminaría por volvérsele en contra). Aquello movió a los poderosos barones regionales del PSOE a formar un frente común para echar a su joven secretario general en una tumultuosa reunión de la ejecutiva del partido. Rajoy pudo formar Gobierno porque, finalmente, sesenta y ocho de los ochenta y tres diputados socialistas en el Congreso se abstuvieron en su investidura.

Con la economía recuperándose, el Ejecutivo en minoría de Rajoy tuvo que afrontar otro gran desafío —tanto a la Constitución como a la unidad de España— planteado por el independentismo catalán que culminó en un referéndum inconstitucional sobre la independencia

convocado para el 1 de octubre de 2017 por Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat. En respuesta a su declaración unilateral de independencia ese mismo mes de octubre, el Ejecutivo central impuso temporalmente el gobierno directo desde Madrid en Cataluña. Fue un choque entre dos concepciones de la democracia distintas. La de Puigdemont se caracterizaba por el plebiscitarismo, el mayoritarismo (aunque él no contara realmente con una mayoría absoluta en apoyo de sus posiciones) y el populismo (porque se basaba en la movilización popular y en la invocación del «pueblo» frente a un enemigo imaginario). Los políticos constitucionalistas españoles —tanto los del PSOE como los del PP— defendían una democracia representativa anclada en el Estado de derecho y el respeto a los derechos de las minorías. También estaba en juego la cuestión de si, en la Europa del siglo XXI, la nacionalidad debía ser una identidad primordial y un valor superior a los demás que justificase cualquier medio que sirviese a ese fin nacional (véanse los capítulos 2 y 3).

Tras ser desalojado del liderazgo del PSOE, Sánchez renunció a su escaño de diputado. Parecía que su carrera política se había acabado antes de que hubiese podido despegar siquiera. Pero la postura inflexible que había mantenido durante aquellos meses gozaba de popularidad entre las bases del partido. Contra todo pronóstico (y contra los dirigentes del partido), logró recuperar su antiguo puesto tras una ofensiva que lo llevó a la victoria en unas primarias en mayo de 2017 contra Susana Díaz, la presidenta autonómica socialista de Andalucía y una de las pocas líderes de origen obrero que quedaban en el partido, pero también una política de vieja escuela, dada a la oratoria demagógica y muy ligada al aparato. Sánchez, por su parte, era un economista madrileño de clase media y con buen don de palabra que había trabajado como miembro del gabinete del diplomático español Carlos Westendorp —alto representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Bosnia y Herzegovina— durante la guerra de Kosovo. Alto y apuesto, se decía que a Sánchez le disgustaba que se le conociera como «el Guapo», porque era como si su aspecto externo importara más que su calibre intelectual. Él ha sido el primer presidente del Gobierno español de las últimas décadas en tener un dominio fluido del inglés, y ha sabido moverse con comodidad en los encuentros cara a cara con otros líderes europeos. Era audaz además que resiliente. Su momento llegaría en mayo de 2018. Rajoy estaba celebrando que por fin se hubieran aprobado los presupuestos generales del Estado para su Gobierno en minoría cuando, al día siguiente, cayó una bomba informativa: la Audiencia Nacional condenaba a veintinueve

exdirigentes del PP como colofón a una prolongada causa judicial en la que el propio presidente del Gobierno había prestado declaración como testigo. Según el tribunal, estas personas habían creado un «sistema de corrupción institucional» que implicaba el cobro de comisiones ilegales por la concesión de contratos públicos. Los magistrados sentenciaron a Luis Bárcenas, extesorero del partido, a treinta y tres años de prisión por su papel en dicho sistema[19]. En su sentencia, también pusieron en duda la credibilidad del testimonio del todavía presidente del Gobierno[20]. Sánchez vio una oportunidad y presentó una moción de censura en el Congreso, mientras Albert Rivera, el joven líder de Ciudadanos, exigía una convocatoria inmediata de elecciones generales.

Rajoy se encontraba en una posición insostenible en aquel momento. Llevaba años defendiendo —en el contexto de la demanda separatista de un referéndum de independencia en Cataluña— que el Estado de derecho era el fundamento básico de la democracia y que había que respetar las decisiones judiciales. Aquella fue la primera vez, desde el restablecimiento de la democracia en España, en que triunfaba una moción de censura contra el presidente del Gobierno en ejercicio. Tras exponer su postura contraria a la moción desde la tribuna de oradores del Congreso el día antes, Rajoy se retiró acompañado de un grupo de estrechos aliados suyos a un salón privado de un restaurante cercano, donde pasaron las ocho horas siguientes en una titánica sobremesa con *whisky* y puros. Los *flashes* de la prensa lo sorprendieron a la salida con un aspecto bastante desmejorado[21]. Sus críticos interpretaron aquella ausencia como un desprecio al Congreso. Pero, en el fondo, mostraba la humanidad bastante llana de un líder que nunca había dejado de ser un hombre modesto y corriente. Hubo algo muy español en aquel último almuerzo, con la comida, la bebida y la conversación como protagonistas indefectiblemente prioritarias de la vida. Rajoy renunció a su escaño parlamentario y regresó a su puesto de trabajo de décadas antes como registrador de la propiedad, esta vez en una localidad costera próxima a Alicante, de la que poco después obtendría el traslado a Madrid. Rajoy no dejaba de ser el funcionario por antonomasia. Los roces de su partido con la corrupción fueron su perdición (nunca hubo pruebas ni hallazgos contundentes de que él personalmente fuese un corrupto), pero, en cualquier caso, parecía cansado y desgastado tanto por la confrontación en Cataluña como por cierta pérdida de empatía con la preocupación que muchos españoles tenían por la desigualdad existente en el país, una vez superada la crisis de unos años antes[22].

Sánchez se negó a convocar elecciones, una decisión por la que se ganó la animosidad personal y duradera de Rivera, cuyo partido estuvo brevemente por delante de los demás en los sondeos. Con solo ochenta y tres escaños en el Congreso, Sánchez formó un Gobierno caracterizado por los símbolos y los gestos. Nombró un Gabinete con mayoría de ministras. El Gobierno ordenó también la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, el grandioso monumento que el antiguo dictador ordenó levantar para conmemorar su victoria en la Guerra Civil. (Los obstáculos legales impidieron que tal exhumación pudiera llevarse a cabo hasta octubre de 2019). Decretó un fuerte aumento del salario mínimo. Y mantuvo unas conversaciones preliminares (y sin mayor trascendencia) con representantes del Gobierno autonómico catalán. Ante la imposibilidad de conseguir la aprobación de unos nuevos presupuestos del Estado, Sánchez convocó elecciones para abril de 2019. A los socialistas les fue bien y consiguieron ciento veintitrés escaños, pero, aun así, se quedaron cortos con respecto a sus expectativas de partida, tal vez porque Sánchez estuvo deslucido en los dos debates televisados seguidos que se celebraron antes de los comicios. El PP, encabezado por su nuevo líder, Pablo Casado, había virado hacia la derecha para neutralizar la amenaza de Vox, un nuevo partido de la derecha dura. Perjudicado por su asociación con la corrupción, el PP sufrió sus peores resultados históricos en unas elecciones generales y perdió más de la mitad de sus escaños. Muchos antiguos votantes *populares* optaron en esa ocasión por Vox o por Ciudadanos.

España (y Portugal) había destacado hasta ese momento entre los países europeos por la ausencia en su escena política de un partido nacional-populista nacionalista importante, si bien, en ciertos aspectos, se podría decir que los independentistas catalanes ya lo eran en su propia área geográfica de influencia. Los analistas políticos lo atribuían a que el franquismo había vacunado a los españoles contra el nacionalismo ultraderechista. Pero el tiempo y las circunstancias terminaron por debilitar esa inmunidad. Nacido como escisión del PP, Vox fue, sobre todo, una reacción a la amenaza de secesión en Cataluña y a lo que sus dirigentes calificaron de manejo pusilánime de aquella situación por parte del Gobierno de Rajoy. Saltó a la escena política en las elecciones autonómicas andaluzas de finales de 2018, en las que conquistó el 11 % de los sufragios. A su mensaje de denuncia de la inmigración ilegal y de defensa de los valores conservadores de la familia y de la cultura española «tradicional» (la tauromaquia, por ejemplo) sumaba el antifeminismo y la

representación de cierto «ello» masculino español. En su particular mezcla, tienen cabida tanto un nacionalismo conservador católico similar al de Ley y Justicia, el partido gobernante en Polonia, como el populismo antiglobalista trumpista. En su programa, abogaba por la abolición del sistema autonómico y la vuelta al Estado centralizado. En ese sentido, venía a representar una posición de rechazo de la Constitución. A Vox no le fue tan bien en las elecciones generales como se pronosticaba en algunos sondeos, pero, aun así, se llevó un 10 % de los votos y veinticuatro diputados. Por vez primera desde los años setenta, la ultraderecha tenía representación en las Cortes Generales.

Del equilibrio de fuerzas surgido de aquellos comicios parecía derivarse una vía muy clara hacia la formación de un Gobierno reformista fuerte que pudiera abordar la ralentización del crecimiento económico, y los problemas del disfuncional mercado laboral español y del conflicto catalán: una coalición de centro-izquierda entre los socialistas y Ciudadanos (que sumaban ciento ochenta diputados en total). Pero, imperdonablemente, Rivera había reiterado su veto a esa opción durante la campaña electoral en un intento por superar al PP como partido dominante en la derecha, un empeño en el que fracasó. Aquella postura movió a varias figuras destacadas de Ciudadanos a abandonar la formación. Sánchez podría haber hecho algo más por tratar de persuadir a Rivera, pero él también parecía reacio a abrir un hueco a la izquierda de su partido moviéndose hacia el centro. Así que, en vez de eso, los socialistas emprendieron unas negociaciones apresuradas y poco serias con Podemos que fracasaron. Abocado a la arriesgada maniobra de someter a un electorado ya cansado a unas nuevas elecciones, Sánchez quiso justificarse diciendo que «no dormiría por la noche» si accediera a formar un Ejecutivo de coalición con Podemos. «No necesitamos dos Gobiernos en uno», declaró.

Su envite no produjo el efecto deseado. En la repetición de elecciones generales en noviembre de 2019, el principal beneficiado fue Vox, que, con cincuenta y dos escaños, pasó a ser la tercera fuerza en el Congreso. Los socialistas perdieron tres diputados y Podemos, siete. El electorado cargó a Rivera la mayor parte de las culpas por el *impasse* previo: Ciudadanos sufrió un devastador rechazo y se quedó solo con diez de sus anteriores cincuenta y siete escaños. Rivera dimitió de inmediato y dejó la política. Tragándose sus palabras de unas semanas antes, Sánchez enseguida anunció que había alcanzado un acuerdo para formar un Gobierno de coalición con Pablo Iglesias, líder de Podemos. Sumadas, sus fuerzas se quedaban aún a veintiún escaños de la mayoría absoluta de la cámara. Pero el Gobierno fue

investido en el Congreso por ciento sesenta y siete votos frente a ciento sesenta y cinco y dieciocho abstenciones. Consiguió el apoyo de los nacionalistas vascos y de cuatro pequeñas formaciones regionales, y la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y de Euskal Herria Bildu (EH Bildu), coalición en la que están integradas formaciones independentistas vascas y militantes y simpatizantes de la antigua ETA. Alfredo Pérez Rubalcaba, predecesor de Sánchez en el cargo de secretario general del PSOE, había rechazado anteriormente esa alianza con los separatistas calificándola de «Gobierno Frankenstein». Pero Sánchez prometió que esta sería una coalición «de progreso»: a instancias de Podemos, el programa conjunto preveía la derogación de la reforma laboral de Rajoy, además de fuertes subidas de impuestos. Al menos, Sánchez había hallado un modo de responder a lo dicho por González sobre la necesidad de contar con políticos italianos para manejar la nueva situación: por vez primera en el periodo democrático contemporáneo, España tendría un Gobierno de coalición (hasta ese momento, seguía siendo uno de los dos únicos países de la UE —junto con Chipre— que no había tenido ninguno).

Transcurridos apenas dos meses de mandato, el nuevo Ejecutivo tuvo que enfrentarse al reto de la pandemia de COVID-19. El 14 de marzo de 2020, declaró el estado de alarma en todo el país y centralizó el control sobre la sanidad y la Policía, además de decretar un confinamiento nacional que duraría hasta el 20 de junio. Pese a ello, España fue uno de los países europeos más golpeados por la primera ola del virus. Miles de personas mayores sufrieron angustiosas muertes en soledad en residencias de la tercera edad que no contaban con personal médico suficiente. La crisis puso de manifiesto las carencias del hasta entonces bien valorado sistema sanitario español: como sus funciones se habían descentralizado en las décadas previas, el Ministerio de Sanidad no era más que una estructura vacía de funcionarios envejecidos y próximos a la jubilación. Pasó auténticas angustias para organizar la adquisición de equipos y materiales médicos vitales; de hecho, tuvo que dejar la mayor parte de esas tareas en manos de los Gobiernos autonómicos.

La repercusión económica de la pandemia fue desproporcionadamente severa en España. El PIB se contrajo en un 11,2 % en 2020, el peor dato de toda Europa, y en 2021 apenas recuperó la mitad de la producción perdida el año anterior[23]. Hubo dos razones principales para ello. Una fue el peso de sectores muy castigados por la pandemia, como el turismo (un 13,5 % del PIB) y otros servicios presenciales directos en el total de la economía nacional. La segunda fue que el hecho de que ni Rajoy ni Sánchez

hubiesen atajado el déficit público más decididamente en su momento implicó que España dispusiera de menor margen fiscal que otros países europeos para adoptar medidas compensatorias. Aun así, gracias al apoyo ilimitado del Banco Central Europeo, el Gobierno pudo hacer mucho más que durante la recesión de 2008-2013: hasta cuatro millones de trabajadores en el momento más crítico pudieron acogerse a un expediente de regulación temporal de empleo y seguir cobrando a costa del Estado mientras conservaban sus puestos de trabajo en suspenso. El Gobierno garantizó también créditos de emergencia por valor de 140.000 millones de euros para empresas y negocios. También introdujo una medida permanente y verdaderamente progresiva: una renta mínima garantizada (o «ingreso mínimo vital») dirigida a reducir las tasas escandalosamente altas de pobreza infantil en el país y a taponar un agujero en el Estado del bienestar. Con todo, la economía solo recuperó su nivel de 2019 al final de 2022. Luego sucedió la invasión rusa de Ucrania y el aumento de la inflación que golpeó el nivel de vida de los españoles, como a otros europeos.

Como muchos otros Gobiernos, el equipo de Sánchez cometió errores en la gestión de la pandemia. En concreto, se demoró unos días de más en imponer el confinamiento. Pero, al menos al principio, la oposición conservadora cometió aún más: Casado viró erráticamente entre ofrecer el apoyo crucial que se necesitaba en un momento de crisis nacional o hacerle la vida lo más difícil posible al Gobierno aun a costa del interés del país. Se negó, por ejemplo, a apoyar una prórroga del estado de alarma, el único instrumento legal del que disponía el Ejecutivo para dar una respuesta nacional a la emergencia de la pandemia. La respuesta de Sánchez fue encogerse de hombros y delegar en los Gobiernos autonómicos la responsabilidad de decidir las restricciones concretas a los movimientos y las reuniones de los ciudadanos. Cuando una segunda ola de la pandemia golpeó el país en el otoño de 2020, el Gobierno consiguió apoyo parlamentario para un segundo estado de alarma más prolongado, de seis meses. Pero Sánchez dejó en manos de las comunidades autónomas la implementación de los controles que considerasen oportunos conforme fueran llegando nuevas olas del virus. El país descubrió en esos meses que había descentralizado la sanidad, pero no había previsto unos medios eficaces de coordinación entre el Gobierno central y los autonómicos en situaciones de crisis. El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que, en 2020, se registraron setenta y cinco mil muertes más que en 2019, lo que supuso una de las mayores tasas de mortalidad de toda Europa.

A corto plazo, el Gobierno salió reforzado de la tragedia, pero el efecto se diluyó enseguida. Tras sus apariciones semanales en televisión durante la primera ola, el presidente del Gobierno casi desapareció del ojo público. En vez de liderar la lucha contra la pandemia, optó por colgarse el mérito de la buena marcha de las vacunaciones (organizadas por la UE) y por hablar de los fondos de recuperación europeos (de los que se asignaron a España unos 140.000 millones de euros en subvenciones y préstamos). De todos modos, Sánchez consiguió poner progresivamente en marcha un programa socialdemócrata de gobierno, con nuevos y sensibles aumentos del salario mínimo, una ampliación del permiso de paternidad y la legalización de la eutanasia. Su Ejecutivo también revocó parcialmente la reformas laboral y la de las pensiones de Rajoy, y dio pasos para calmar el conflicto catalán (véase el capítulo 9). Podría decirse que trajo cierta estabilidad precaria al país.

Pero la tardanza en la recuperación económica pospandémica, el aumento de la inflación desencadenado en parte por la invasión rusa de Ucrania y las dificultades de gobernar en coalición se unieron para causar el desgaste del Gobierno de Sánchez. Esto se manifestó en una derrota en las elecciones regionales y municipales de mayo de 2023. El PSOE perdió seis autonomías, principalmente debido a una fuerte caída en el voto de sus socios más a la izquierda. Sánchez respondió inmediatamente con un sorpresivo adelanto de las elecciones generales al 23 de julio, que ganó el PP con ciento treinta y siete escaños en el Congreso de los Diputados (un incremento de cuarenta y ocho), pero los socialistas resistieron, incluso ganando un escaño. Vox perdió seiscientos mil votos y diecinueve escaños. El voto de Sumar, la nueva formación de izquierda dura liderada por Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo en el Gobierno de coalición, se redujo en un porcentaje similar a la bajada de Podemos en 2019. Gracias a un controvertido acuerdo con Carles Puigdemont, que incluyó la promesa de elaborar una ley de amnistía para los independentistas catalanes que enfrentaron cargos legales por su intento inconstitucional de separación de España, Sánchez finalmente logró investirse como presidente del Gobierno para otra legislatura. El coste fue la división más profunda entre los españoles desde los reproches por las elecciones de 2004 (véase el capítulo 9).

La monarquía cuestionada

En 2012, cuando los españoles estaban sufriendo las profundidades de la depresión económica y el desempleo masivo, conocieron la sorprendente noticia de que el rey Juan Carlos se había

caído y se había fracturado la cadera mientras estaba cazando elefantes en Botsuana en compañía de Corinna Larsen, una danesa que, en aquel entonces, se hacía llamar por el apellido de su exmarido aristócrata, Zu Wittgenstein. Aquello indignó a muchos. Los Borbones españoles arrastraban una accidentada trayectoria histórica, tras haber sido derrocados en tres ocasiones entre 1808 y 1931. Juan Carlos debía su puesto a la Ley de la Sucesión de Franco, pero había compensado esa ausencia de legitimidad original con sus acciones durante la Transición y, sobre todo, con su intervención para detener la intentona golpista de 1981. Su carácter sociable y llano le había hecho muchos amigos. Era un activo embajador internacional de España y de las empresas hispanas. No todos los españoles se habían vuelto monárquicos, ni mucho menos, pero una gran mayoría se reconocían «juancarlistas».

Sin embargo, la figura de Juan Carlos fue adquiriendo con el tiempo trazos shakespearianos. Según escribió el historiador José Álvarez Junco, «en vez de mantener la prudencia que le había guiado cuando se sentía débil, bajó la guardia, creyéndose fuerte, y cometió error tras error»[24]. La campechanía externa del monarca ocultaba inseguridades muy profundas. Nacido en Roma, a los diez años lo sacaron del internado en el que estudiaba en Suiza para ser educado en España y convertirse en moneda de cambio entre su padre (don Juan de Borbón) y Franco. Su elevación a la condición de sucesor del dictador provocó una ruptura del futuro monarca con su progenitor. Más tarde confesaría a un amigo que, «desde pequeño, siempre he oído hablar en casa de problemas económicos. Para nosotros el dinero era un tema constante de preocupaciones»[25]. Históricamente, los Borbones tenían fama de notorios mujeriegos. Juan Carlos parecía «colecciona[r] amantes como si fueran regalos de Estado», señalo Lucía Méndez, analista política del diario *El Mundo*[26]. A la reina Sofía, su durante tanto tiempo sufrida y ampliamente respetada esposa, apenas se la veía ya con él en público.

Juan Carlos parecía víctima no solo de sus propias debilidades, sino también del cambio de las circunstancias y de los criterios de valoración moral. Uno de los legados de la Transición y de la incertidumbre en la que esta se desarrolló fue el secretismo con el que los medios de comunicación ampararon las actividades del monarca. Pero el episodio de Botsuana hizo que todo eso volara por los aires. Al inicio de su reinado contó con avisados mentores que supieron guiarlo por los enrevesados vericuetos de la Transición. A partir de entonces, ya no hubo nadie que pusiera límites a su comportamiento. La Casa del Rey es una institución pequeña y su personal está formado por

funcionarios cautelosos, exdiplomáticos en su mayoría. Él parecía creer que era inmune a cualquier escrutinio crítico. Jamás comprendió que su cargo le obligaba a mantener una conducta ejemplar y le privaba del derecho a tener una vida privada paralela.

Su reputación nunca se recuperó del incidente de la cacería de elefantes. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), instituto encargado de los sondeos y encuestas patrocinados por el Estado, la confianza en la monarquía cayó desde su nivel máximo del 75 % en 1995 hasta un mínimo del 37 % en 2013. La institución monárquica se vio muy dañada también por la condena judicial de Iñaki Urdangarin, antiguo jugador olímpico de balonmano casado con la infanta Cristina, la segunda de las hijas de Juan Carlos. Pese a tener un puesto bien remunerado en una empresa privada, Urdangarin estableció una consultoría que obtuvo contratos de varios Gobiernos autonómicos para la realización de trabajos ficticios. Por ello lo sentenciaron a seis años y tres meses de cárcel en 2017[27].

Juan Carlos abdicó del trono en 2014 en favor de su hijo, Felipe, y asumió el título de «rey emérito». Felipe representa una figura mucho más moderna; educado en parte en Estados Unidos, se casó con una plebeya, Letizia Ortiz, una experiodista de televisión. Proyecta una imagen de monarca juicioso e inteligente, aunque también un tanto soso. Durante su reinado como Felipe VI, ha restablecido parte del antiguo lustre de la monarquía. Cortó lazos con su hermana Cristina y con el marido de esta.

Pero Juan Carlos aún deparaba nuevas controversias. Un fiscal suizo abrió una investigación por un regalo de 100 millones de dólares del rey saudí a Juan Carlos en 2008, abonados en forma de un pago a una de las dos fundaciones domiciliadas en paraísos fiscales vinculadas al exmonarca español. La fundación transfirió entonces 65 de esos 100 millones a Corinna Larsen en 2012[28]. La causa abierta en Suiza terminó archivándose en 2021, cuando el fiscal admitió que no había podido demostrar ninguna conexión entre aquel regalo y la concesión, tres años más tarde, de un contrato valorado en 6.700 millones de euros a un consorcio español para la construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad entre La Meca y Medina[29]. En marzo de 2022, la Fiscalía del Tribunal Supremo también archivó su investigación tras no haber hallado indicios suficientes de actividad delictiva. Argumentó, en concreto, que los presuntos delitos investigados ya habían prescrito o bien se habían producido cuando Juan Carlos gozaba de inviolabilidad como monarca en ejercicio. Los abogados del rey emérito insistían en que su representado no había hecho nada ilegal[30], pero, entretanto, Juan Carlos anunció su retirada

de la vida pública en 2019. Los abogados de Larsen llegaron a alegar que el actual rey, Felipe VI, era beneficiario de las dos fundaciones encontradas en paraísos fiscales. En una declaración televisada en marzo de 2020, el rey anunció que renunciaba a su herencia y que cancelaba el salario anual de su padre de 194.232 euros[31]. En 2020 y 2021, los abogados de Juan Carlos efectuaron pagos a la Agencia Tributaria española por un total de 5,1 millones de euros en concepto de tributación atrasada por donaciones recibidas por su cliente[32].

Podemos y los independentistas catalanes intentaron utilizar los escándalos de la monarquía para forzar la entrada de la causa republicana en la agenda política. No era una cuestión fácil para Sánchez, pues una parte de las bases socialistas simpatiza con el republicanismo, pero el partido es leal a la Constitución y, por ende, a la monarquía. El Gobierno presionó a Felipe VI para que desalojara a Juan Carlos I del palacio de la Zarzuela, su casa durante los cincuenta y ocho años previos. Y eso sucedió en agosto de 2020. Juan Carlos subió sin demora a un *jet* privado con destino a Abu Dabi, donde continúa residiendo. Según alguien que lo ha visitado allí, se le ve triste y nostálgico. No deja de llamar la atención que siete generaciones sucesivas de Borbones españoles hayan vivido el exilio (autoimpuesto o no) o el destierro[33]. Felipe VI trata de mantener en pie la institución, pero los sondeos muestran que la monarquía ha perdido atractivo entre los jóvenes, los votantes de izquierda y la población de Cataluña y el País Vasco. Su principal apoyo actual es la inercia.

Todo lo que era sólido

La depresión de 2008-2013 y sus secuelas ha sometido a la sociedad española a grandes tensiones. Muchos jóvenes tuvieron que retrasar sus planes de tener una profesión, una vivienda propia e hijos. La euforia del *boom* se trocó en depresión y sensación de fragilidad. Instituciones aparentemente sólidas hasta entonces, desde la banca hasta la Justicia, se hundieron en el desprestigio. La polarización y la fragmentación políticas desplazaron al consenso y la estabilidad anteriores: el sistema de dos partidos se fraccionó y dio lugar a uno de cinco, sin contar las formaciones nacionalistas y regionalistas periféricas. En total, dieciséis organizaciones políticas diferentes tenían representación en el Congreso después de las elecciones de noviembre de 2019, frente a las diez de 2004. Ningún Gobierno ha contado con mayoría absoluta parlamentaria desde 2015; durante sus dos primeros años como presidente, Sánchez no consiguió aprobación para unos presupuestos generales y tuvo que gobernar con los de

Rajoy de 2016 prorrogados. Mientras tanto, la Transición —el pacto fundacional de la democracia española actual, con la monarquía en su centro— está más cuestionada que nunca.

Muchos de los problemas de España —como, por ejemplo, el aumento de la desigualdad, la elevada deuda pública, la insostenibilidad de las pensiones y la fragmentación política— son los mismos que los de otras democracias europeas. La verdadera singularidad española es lo que en la propia España se conoce como el «problema territorial», es decir, sus nacionalismos periféricos. Durante gran parte del periodo democrático, las tensiones más agudas en ese sentido se produjeron en el País Vasco. Pero el terrorismo de ETA contribuyó a desacreditar su propia causa y la plena independencia nunca llegó a atraer un amplio apoyo popular en el territorio. Es Cataluña, más bien, que es el dolor de cabeza más persistente de España.

2

Un otoño catalán

El viernes 27 de octubre de 2017, hubo una revolución fallida en Barcelona. Ese día por la tarde, a instancias de Carles Puigdemont, presidente del Gobierno autonómico catalán, el Parlament aprobó una resolución por la que constituía «la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social». Sobre las majestuosas escaleras de mármol de la sede parlamentaria, varios cientos de alcaldes de localidades de toda Cataluña, blandiendo sus varas de mando, aclamaban a Puigdemont. Esa noche, una eufórica multitud de miles de personas se concentró para celebrarlo ante el palacio de la Generalitat, sede de origen medieval del Ejecutivo autonómico situada en la plaza de Sant Jaume, en pleno corazón del Barrio Gótico de Barcelona, entre cánticos de «¡libertad!». «Es un sueño, es maravilloso», me comentaba David, un agente inmobiliario, mientras trataba de abrirme paso entre la apretada muchedumbre. «Tal vez perjudique al sector en el que trabajo —admitía—, pero prefiero pensar en el futuro de mis hijos». Había traído consigo a su hija adolescente para que fuera testigo de lo que él consideraba un momento histórico.

Pero, a medida que avanzaba el atardecer con un frio otoñal, el sueño se fue revelando más bien como un delirio. Una titubeante contrarrevolución se había puesto ya en marcha. Mientras la gente celebraba en Barcelona, en Madrid el Senado aprobaba por vez primera la activación del Artículo 155 de la Constitución española de 1978, con lo que quedaba suspendida la autonomía regional de Cataluña y se imponía el gobierno directo desde el Ejecutivo central. Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno conservador, contó para ello con el apoyo de Pedro Sánchez y de la oposición socialista. Puigdemont y sus consejeros desaparecieron. No habían llegado ni siquiera a arriar la bandera española que ondeaba sobre la entrada del palacio barcelonés, junto a las franjas escarlatas y doradas de la *senyera*, la bandera oficial catalana.

La declaración de independencia que no fue señaló el clímax de la campaña para secesionarse de España emprendida por los líderes nacionalistas catalanes en 2012. Puigdemont, que se había convertido en presidente del Gobierno autonómico en 2016, era menos cauteloso que sus predecesores en dar continuidad a dicha campaña. Experiodista de modales afables y peinado de *beatle*, Puigdemont había sido hasta ese momento alcalde de la histórica ciudad de

Gerona, en el corazón nacionalista de la Cataluña interior. Al acceder a la presidencia de la Generalitat, se comprometió a convocar un referéndum para dar cumplimiento al «derecho a decidir» de los catalanes sobre su independencia. Esto entraba en confrontación directa con el Artículo 2 de la Constitución y su proclamación de «la indisoluble unidad de la Nación española». La Carta Magna afirmaba el derecho al autogobierno regional, pero no a la secesión. Cuando me senté a conversar con él en su despacho del Palacio de la Generalitat en un frío y húmedo día de diciembre de 2016, insistió mucho en que bloquear aquel referéndum sería una «mala noticia para la democracia». Estaba dispuesto a negociar el momento de su celebración, pero no el principio. «No renunciaremos a ello sin más. Creo que nos hemos ganado el derecho a que se nos escuche». De entrada, podía parecer una postura bastante razonable. En el fondo, sin embargo, representaba un desafío trascendental a la democracia española misma.

Son muchos los catalanes que sienten desde hace mucho tiempo que su territorio —de 7,5 millones de habitantes y un peso económico equivalente al 19 % del PIB español— es un país aparte, con su lengua, su historia y su cultura propias. Pero desde su surgimiento en el siglo XIX, la corriente central del nacionalismo catalán siempre había buscado una mayor autonomía para la región dentro de España. El reconocimiento pleno de ese estatus autónomo en la Constitución de 1978 y su desarrollo posterior se han traducido en que la Generalitat administre hoy no solo la educación y la sanidad en el territorio catalán, sino también su propia fuerza de policía, el sistema penitenciario y varios servicios más. El Gobierno autonómico ha abierto incluso una docena de «embajadas» en el extranjero. Aun así, el porcentaje de catalanes que ansiaban la independencia no pasaban de ser una minoría pequeña.

Hasta que, de pronto, «la minoría se hizo multitud», como ha escrito Enric Ucelay-Da Cal, historiador afincado en Cataluña[1]. La multitud hizo acto de presencia por primera vez el 11 de septiembre de 2012 con motivo de la Diada, la fiesta nacional de Cataluña, que conmemora la caída de Barcelona ante las fuerzas del primer rey Borbón español en 1714, al término de la Guerra de Sucesión española. Los organizadores del acto de ese día dijeron que habían participado en él un millón y medio de personas; otras fuentes, más realistas, situaron la cifra de manifestantes en unos no menos impresionantes seiscientos mil. Envalentonado por tan masiva participación, Artur Mas, antecesor de Puigdemont en el cargo de *president*, convocó elecciones autonómicas anticipadas (dos años antes

del término natural de la legislatura) con la intención de obtener un mandato popular para la misión de convertir Cataluña en «un Estado dentro de Europa» y hacer efectivo «el derecho a decidir» sobre su estatus nacional. En muchos balcones de Barcelona, ciudad de larga tradición socialista y anarquista, comenzó a colgar cada vez más no ya la *senyera*, sino la «estelada», que añade a los colores de la enseña catalana oficial un triángulo azul con estrella blanca superpuesta, y es la bandera oficiosa del independentismo. Mas, que había sido un economista bastante gris y cauto, comenzó a posar en público con gestos más propios de un Moisés moderno, con los brazos extendidos, liderando a su pueblo hacia la tierra prometida.

Tres cosas explicaban esa basculación de la opinión nacionalista hacia el independentismo. La primera era el chapucero intento de reforma del Estatuto de autonomía, que había sembrado en Cataluña el germen de un intenso resentimiento hacia Madrid (véase el capítulo 3). La segunda era que ese giro de los líderes nacionalistas hacia el separatismo coincidió en el tiempo con la fuerte depresión económica en España y con los años de la política de austeridad. Mas, cuyo partido (Convergència i Unió, CiU) era de inspiración fundamentalmente conservadora y democristiana, llevaba unos meses practicando recortes en el gasto público autonómico. En junio de 2011, los *indignados* de Cataluña, en uno de sus actos de protesta contra las medidas de austeridad, se manifestaron ante el Parlamento catalán y lo bloquearon, rodeándolo justo el día en que estaba previsto que se debatieran en pleno los presupuestos autonómicos. Humillados, Mas y sus consejeros tuvieron que acceder en helicóptero para evitar la multitud de manifestantes que les impedían la entrada por cualquier otra vía. Y la tercera de las explicaciones era que algunos miembros de CiU, formación que había ostentado el Gobierno de la Generalitat desde 1980 hasta 2003, estaban siendo investigados por irregularidades financieras[2]. Para los críticos del *procés* —nombre con el que los nacionalistas bautizaron su campaña hacia la independencia —, este no fue más que una cortina de humo para tapar esos problemas económicos y políticos. Para algunos dirigentes nacionalistas comenzó siendo una mera táctica dirigida a arrancar más dinero y competencias del Gobierno central. Pero Rajoy, empeñado en aquel entonces en evitar la quiebra de la contabilidad nacional, no se mostró en absoluto dispuesto a escuchar las demandas de la Generalitat.

En las elecciones autonómicas de 2012, CiU perdió tanto votos como escaños, aunque fue en beneficio, sobre todo, de ERC, partido nacionalista de izquierda minoritario hasta entonces que, en 1989,

había adoptado la causa independentista en su programa político, pero que, unos años más tarde, había formado un Gobierno autonómico de coalición con los socialistas catalanes del PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya), que duró de 2003 a 2010. Mas había fracasado en su intento de obtener el mandato popular para impulsar un Estado catalán. Pero el Gobierno de Rajoy en Madrid parecía no entender hasta qué punto el movimiento independentista catalán había adquirido ya un impulso decisivo. Diversas localidades del interior de Cataluña comenzaron a celebrar sus propios referéndums oficiosos. El proceso culminó con un plebiscito en toda Cataluña en noviembre de 2014 que había sido convocado por Mas, pero que fue organizado por asociaciones y movimientos independentistas de la sociedad civil para evitar la implicación directa de la Administración autonómica. Rajoy optó por ignorar lo ocurrido. Tras la consulta, Mas convocó unas nuevas elecciones anticipadas y, esta vez, dijo que tendrían el carácter de un plebiscito por la independencia. CiU y ERC se presentaron bajo una candidatura común, pero el bloque nacionalista volvió a quedar por debajo de la mayoría absoluta en votos. El socio minoritario de ese bloque, una organización izquierdista llamada Candidatura de Unidad Popular (CUP), exigió la cabeza de Mas a cambio de apoyar un nuevo Gobierno independentista, lo que condujo a la investidura de Puigdemont.

Este prometió seguir impulsando el *procés* independentista. Las autoridades del Gobierno central en Madrid estaban convencidas de que terminaría echándose atrás. Confiaban en el canal de comunicación paralelo que mantenían con Oriol Junqueras, el escurridizo líder de Esquerra que era vicepresidente del Gobierno de Puigdemont. Sin embargo, en septiembre de 2017, Puigdemont y Junqueras usaron la estrecha mayoría de escaños de que disponía el bloque independentista en el Parlamento catalán para imponer unas leyes por las que convocaban un referéndum «vinculante» sobre la independencia para el 1 de octubre, y proclamaban la «desconexión» soberana de Cataluña respecto al resto de España. La ley del referéndum establecía que a la votación seguiría una declaración automática de independencia si la mayoría del electorado se decantaba por el «sí», fuera cual fuere el nivel de participación. Por su parte, una segunda ley otorgaba a Puigdemont poder para organizar un nuevo Estado republicano y para nombrar a los jueces de este. Aquellas leyes violaban no solo la Constitución, sino también el Estatuto de Autonomía de Cataluña (pues toda modificación de este requería de una mayoría cualificada de dos tercios del Parlamento autonómico); además, su aprobación solo cuarenta y ocho horas

después de su presentación ante la cámara legislativa catalana contravenía la propia normativa parlamentaria, por lo que la oposición decidió abandonar el pleno antes de que este procediera a la votación de ambos proyectos de ley. «En un día, pretenden liquidar la Constitución y la soberanía nacional —dijo Rajoy—. Nadie va a liquidar la democracia española»[3]. El discurso más elocuente en el Parlament ese día lo dio Joan Coscubiela, un excomunista y líder sindical que representaba al socio catalán de Podemos: «No quiero que mi hijo Daniel viva en un país donde la mayoría pueda tapar los derechos de los que no piensan como ella»[4], declaró.

El Tribunal Constitucional anuló ambas leyes de inmediato, pero Puigdemont prosiguió con los preparativos del referéndum de todos modos. A mediados de septiembre, en una conferencia de prensa con periodistas internacionales, disimuló cualquier nerviosismo del momento bajo una capa de desafiante arrogancia. Recalcó que, fuera cual fuere la participación registrada, el resultado de la votación sería vinculante: «Esta vez lo organizan las instituciones, no la sociedad civil». Rajoy fio a la Justicia y a la Policía la neutralización de la consulta. Uno de sus altos cargos dijo, refiriéndose a Puigdemont y remedando a Sting: «Every step you take I'll be watching you» (A cada paso que des, te estaremos vigilando). Pero el presidente catalán se adelantó a los hechos: durante el fin de semana del domingo 1 de octubre, un buen número de activistas independentistas ocuparon las escuelas que se iban a usar como colegios electorales. A escondidas de los Servicios de Seguridad del Estado, el independentismo había conseguido adquirir e introducir en Cataluña unas diez mil urnas de plástico procedentes de China. Se importaron a través de Marsella y se guardaron en el lado francés de la frontera hasta justo antes de distribuirlas por los colegios ante las mismas narices de la Policía.

Tocando el vacío

No era la primera vez, pero el 1 de octubre de 2017 por la mañana me desperté en el sitio equivocado. Me había desplazado a Barcelona con antelación para estar allí durante el fin de semana del referéndum. Pero supuse que el abanico de medidas desplegadas por el Gobierno español garantizaría que no habría votación ese día. «No habrá referéndum», había asegurado categóricamente Rajoy en agosto. Así que el sábado, 30 de septiembre, por la tarde, tomé un tren rumbo a Vic, localidad a medio camino entre Barcelona y la frontera francesa. Me llevó unos ochenta minutos recorrer un trayecto de apenas setenta kilómetros. El mal estado de la red ferroviaria de cercanías es un asunto por el que los catalanes sienten un justificado

agravio. Con sus cuarenta y cinco mil habitantes, de la próspera ciudad de Vic, que, además de los restos de un templo romano y una antigua catedral, alberga una pujante industria cárnica, se dice a veces que es «la capital de la Cataluña catalana», el corazón del independentismo. De todos los edificios de la plaza mayor medieval colgaban banderas, pancartas o carteles a favor del referéndum. Una de ellas, gigantesca, en la que se podía leer un simple «sí», pendía de lado a lado de la plaza por su centro. Costaba encontrar un letrero en los escaparates o en las calles que no estuviera exclusivamente en catalán, aun cuando la ley estipula que el español (o castellano) es también un idioma oficial en Cataluña. La joven camarera del restaurante donde cené tuvo problemas para traducir al español algunas de las palabras de la carta, que estaba en catalán.

A la mañana siguiente me desperté y vi, no lejos de mi hotel, una fila de unas doscientas personas que aguardaban tranquilamente a depositar su voto en un centro de votación alojado en una escuela. Dos agentes de los Mossos d'Esquadra observaban la escena sin inmutarse. Las urnas estaban atendidas por una mezcla de ciudadanos elegidos por sorteo (como en unos comicios normales) y voluntarios. Había papeletas de voto sobre las mesas, junto a las urnas de plástico que llevaban estampado el escudo de la Generalitat. «Cataluña ya es diferente; es un nuevo Estado en Europa», declaró entusiasmada Dolors Solà, representante de Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont. En otro colegio electoral del otro lado de la ciudad, donde otros cientos de personas más esperaban también para poder votar, localicé a Anna Erra, la alcaldesa de Vic, maestra e independentista de toda la vida. La votación iba lenta debido a problemas informáticos, dijo, pero esperaba que la participación llegase al 90 %. «Esta es una ciudad con una gran conciencia de la historia. Hemos conservado nuestras tradiciones y nuestro deseo de ser quienes somos. Tras seis años pidiendo diálogo, [el referéndum] es lo único que nos queda».

Mientras la mañana discurría con calma en Vic, en Barcelona la Policía antidisturbios estaba intentando desalojar a los activistas de algunas escuelas para impedir la votación. Me dirigí a toda prisa hacia la capital catalana en taxi, pero para cuando llegué allí, hacia la hora del almuerzo, la Policía ya se había retirado y la gente hacía pacíficamente cola para votar. Rajoy había fracasado en su intento de impedir que el referéndum llegara a producirse. Las escenas de policías blandiendo sus porras y descerrajando golpes contra ciudadanos indefensos que les oponían resistencia fueron un desastre propagandístico para la democracia española. De hecho, muchas de

las imágenes informativas de aquella jornada fueron falsas, algunas de ellas distribuidas desde servidores rusos[5]. Solo un puñado de personas resultaron heridas por los agentes, y no los centenares contabilizados por el Gobierno catalán. Una foto muy reproducida esos días en los medios de una mujer de cabello canoso con la cabeza sangrando correspondía en realidad a un incidente anterior, relacionado con un enfrentamiento no con la Policía española, sino con los *mossos*. Según el recuento de las autoridades catalanas, imposible de verificar, ese día votó un 43 % del electorado, del que un 92 % (unos dos millones de personas) lo hizo a favor de la independencia.

Pese a ser los triunfadores aparentes de aquella jornada, Puigdemont y sus seguidores habían alcanzado un tope y ya no tenían un lugar más allá al que ir. Su estrategia había consistido en forzar un enfrentamiento. Así se explicitaba en un documento titulado «#EnfoCATs» que la Policía halló en el domicilio de Josep Maria Jové, uno de los colaboradores de Junqueras. El plan pretendía «generar un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a crear inestabilidad política y económica, que fuerce al Estado a aceptar la negociación de la separación… o un referéndum forzado». Una declaración unilateral de independencia «generará un conflicto que, bien gestionado, nos puede llevar al Estado propio»[6]. Ese documento fue muy revelador acerca de la naturaleza del proyecto separatista: estuvo conducido en todo momento desde arriba por las autoridades de la Generalitat, que no mostraron el más mínimo sentido de lealtad constitucional pese a ser —legalmente— las representantes del Estado español en territorio catalán.

Esas autoridades estaban convencidas de que «Europa» obligaría a Rajoy a sentarse en una mesa de negociación. También decían estar seguras de que «Europa» aceptaría a una Cataluña independiente en su seno porque el independentismo catalán era europeísta, y porque el nuevo Estado catalán sería un contribuyente neto al presupuesto comunitario, como si eso fuera lo único que preocupara en Bruselas. En ese sentido, su inteligencia política era tan limitada como la de Rajoy. Angela Merkel, entre otros muchos líderes de los demás países europeos, no quiso recibirlos. «El principio de integridad territorial no debe ser puesto otra vez a prueba», declaró la canciller en presencia de Rajoy durante una cumbre europea celebrada en Malta en marzo de 2017, a lo que también añadió: «Debemos decir alto y claro que los nacionalismos y separatismos que intentan debilitar la Unión Europea son lo contrario de un patriotismo moderno»[7]. Con esas palabras, Merkel parecía estar aludiendo al «patriotismo constitucional», el concepto del que había sido especial valedor el filósofo

socialdemócrata alemán Jürgen Habermas y con el que quiso decir que las normas y los valores de la democracia liberal son un fundamento de apegos y de vínculos políticos más saludable que los del nacionalismo.

Lo más que recibieron de «Europa» fueron declaraciones cautelosas de Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y de Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, poco después del 1 de octubre, en las que condenaban la violencia y hacían un llamamiento genérico al diálogo. En la reunión del Consejo Europeo de ese mismo mes, el resto de dirigentes nacionales se alinearon con Rajoy[8]. Nadie en el exterior reconoció el «derecho a la autodeterminación» de menos de la mitad de Cataluña. Enseguida se hizo evidente que todo aquel ímpetu del *procés* se había centrado en la celebración del referéndum y en la proclamación de la independencia, pero que no se había pensado ni planificado a fondo lo que ocurriría a continuación.

Puigdemont recibió fuertes presiones para que renunciara a declarar la independencia. Estuvo en contacto estrecho con Íñigo Urkullu, el presidente nacionalista del Gobierno autonómico vasco, que trataba de mediar entre Puigdemont y Rajoy desde julio. En la madrugada del 26 de octubre, Puigdemont decidió convocar unas nuevas elecciones autonómicas para frenar tanto la declaración de independencia como la entrada en vigor de la suspensión de la autonomía en virtud del Artículo 155 de la Constitución. Según Lola García, directora adjunta de *La Vanguardia,* el principal diario barcelonés, Puigdemont declaró durante una prolongada reunión de su grupo parlamentario: «No quiero ser el presidente de un país virtual […]. Me niego a ir por el mundo repartiendo tarjetas de una república inexistente»[9].

Pero este acabaría siendo, en realidad, su destino. Sus palabras fueron recibidas con gritos de «traidor» por algunos de los presentes en la reunión, gritos que comenzaron a llegar también desde las redes sociales y desde los estudiantes que se manifestaron en la plaza de Sant Jaume a la mañana siguiente. Puigdemont optó entonces por desdecirse. Envió un mensaje de texto a Urkullu en el que alegó «dificultades para mantener su decisión»[10]. Más tarde declararía que había desistido de convocar elecciones porque Rajoy no le había dado garantías de que, si lo hacía, el Gobierno español no aplicaría el Artículo 155. Pero en ninguna de sus comunicaciones con Urkullu había planteado este tema. Tras haber convocado un movimiento de masas por la independencia, los líderes separatistas se habían convertido en sus rehenes. Su propia división interna tanto entre tres

partidos rivales como entre dos asociaciones (la Asamblea Nacional Catalana, o ANC, y Òmnium Cultural) generó una lógica de radicalización competitiva que fue la que impulsó el avance del *procés* desde 2011. Esquerra y Junqueras se presentaban en ocasiones como una fuerza moderadora. Pero aquel 26 de octubre fue Esquerra la que amenazó con acusar a Puigdemont de traición, tal vez calculando que eso le beneficiaría si se convocaban elecciones autonómicas. Fue uno de los múltiples ejemplos recientes en la política catalana y española de cómo las consideraciones tácticas cortoplacistas se imponen a la estrategia a largo plazo.

En aquel enloquecido otoño de 2017, en el que medios de comunicación de todo el mundo acudieron a ver lo que pasaba en Barcelona, la contrarrevolución no tardó en cobrar fuerza. En un breve mensaje televisado el 3 de octubre, Felipe VI había recalcado que era «responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones». Su intervención fue criticada desde algunos sectores por no haber incluido algún párrafo en catalán en el que mostrara empatía por la frustración que podía estar sintiendo la mitad nacionalista de Cataluña. Pero, por lo general, fue vista como una llamada de ánimo dirigida a un Gobierno central desmoralizado ante la situación y también como una llamada a la calma y la confianza a la mitad de los catalanes, los no nacionalistas, que, según dijo el monarca, «no están solos, ni lo estarán[, y] tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles, y la garantía absoluta de nuestro Estado de derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos»[11].

La ofensiva independentista y el aliento del rey despertaron a esa otra mitad de Cataluña que desea permanecer dentro de España y que se había mantenido pasiva hasta entonces. Esos catalanes salieron a las calles en esos días y participaron en manifestaciones casi tan numerosas como las independentistas de semanas antes. Mientras, más de cuatro mil empresas trasladaron su domicilio social fuera de Cataluña en busca de seguridad jurídica. De pronto, por toda España aparecieron banderas nacionales colgadas de los balcones. Aquello era una novedad: desde la muerte de Franco, los españoles habían tendido a ser circunspectos en relación con muestras públicas del nacionalismo, una ideología desacreditada tras el abuso que de ella había hecho el dictador. La generación que realizó la transición democrática (personas que, en su mayoría, están actualmente ya en la setentena o en la ochentena) puso mucho más el acento en la consolidación de un Estado democrático que en la nación española. Sus hijos perdieron esa inhibición.

Tras la humillación del 1 de octubre, el Estado español contraatacó por medio de los fiscales y los jueces. Puigdemont y otros veinticuatro líderes separatistas fueron acusados formalmente de delitos que iban desde la rebelión hasta la malversación, castigados potencialmente con penas de hasta veinticinco años de prisión. Pero Puigdemont había desaparecido de escena al día siguiente de su declaración unilateral de independencia para reaparecer unas horas después en Bélgica. Otros cinco dirigentes independentistas huyeron también a territorio belga, a Escocia y a Suiza.

Los nacionalistas amenazaron con responder al gobierno directo desde Madrid llamando a sus seguidores a la desobediencia civil masiva. Al final, esto se tradujo simplemente en una huelga de un día que ni siquiera contó con el respaldo de los principales sindicatos. Para reducir tensiones, Rajoy usó los poderes que le confería el Artículo 155 para convocar nuevas elecciones autonómicas en Cataluña para diciembre. Pero los comicios apenas cambiaron el panorama: la coalición de Puigdemont volvió a quedarse a poco de una mayoría absoluta del voto popular, pero revalidó la mayoría absoluta independentista en escaños del Parlament (el sistema electoral catalán asigna un número de escaños desproporcionadamente grande a las tres provincias menos pobladas a costa de la de Barcelona). La novedad fue que Ciudadanos se convirtió en el partido más votado (con un 25 % de los sufragios). Su líder, Inés Arrimadas, una joven inmigrante andaluza y catalanohablante, concentró los sufragios del electorado antiindependentista. «Si la ilusión que tienen es dejar de ser españoles, aquí nosotros tenemos la ilusión de que las listas de espera [en la sanidad] se reduzcan», dijo ante unos centenares de asistentes a un mitin en una fría noche de diciembre, unos días antes de las elecciones, junto al estadio de fútbol del Espanyol en Cornellà de Llobregat, en el cinturón de Barcelona.

EL JUICIO DEL *PROCÉS*

Una docena de antiguos colegas de Puigdemont —incluido Junqueras— fueron llevados a juicio en febrero de 2019 en una larga vista celebrada ante siete magistrados del pleno del Tribunal Supremo español en Madrid. Revestida de mármol negro, la decoración modernista de la sala resultaba más opresiva que exuberante. La mayoría de los acusados estaban encarcelados desde noviembre de 2017. El propio Puigdemont estuvo temporalmente detenido en Alemania cuando se desplazaba por carretera por aquel país en 2018, pero el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein se negó a extraditarlo por rebelión alegando que las pruebas aducidas por el juez instructor

español no justificarían tal acusación bajo la jurisdicción germana. El expresidente de la Generalitat seguía a salvo, pues, en Bélgica, un país que acumula un largo y poco honroso historial de negativas a dar cumplimiento a las órdenes europeas de detención y entrega cursadas desde España contra ciudadanos españoles en territorio belga, terroristas de ETA incluidos.

A lo largo de cincuenta y dos sesiones de juicio oral que se prolongaron hasta junio, declararon cuatrocientos veintidós testigos y el país revivió los hechos del otoño catalán de 2017. Muchos abogados no creían que la acusación pudiese demostrar que sus defendidos habían cometido rebelión, una figura penal pensada para castigar los golpes militares y que implica el uso de violencia a gran escala. Lo cierto es que el *procés* había sido extraordinariamente pacífico. Más apropiado —y menos inflamatorio— habría sido el cargo de desobediencia, que los defensores de la mayoría de los dirigentes sentados en el banquillo admitieron en sus alegatos finales, y que habría comportado simplemente una pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público y una multa, pero no prisión. Uno de los argumentos esgrimidos por la defensa fue que la declaración de independencia jamás había llegado a producirse de manera efectiva, pues no se publicó en el boletín oficial de la Generalitat ni en el del Parlamento catalán. Clara Ponsatí, exconsejera de Educación del Gobierno de Puigdemont que, para eludir su arresto, había huido a Escocia, donde desempeñaba un puesto de docente universitaria, aseguró que todo había sido un «farol» que se les había ido de las manos.

Al final, el alto tribunal descartó el cargo de rebelión, pero halló a nueve de los acusados culpables de sedición (y a cuatro de ellos también de malversación). En un veredicto dictado por unanimidad, sentenció que los líderes independentistas sentados en el banquillo habían «moviliza[do] a la ciudadanía en un alzamiento público y tumultuario»[12] que impidió la aplicación de la ley y de las decisiones de los tribunales. A Junqueras le cayeron trece años de prisión y a otros seis antiguos altos cargos, penas de entre diez y doce años de reclusión. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de la ANC y de Òmnium, respectivamente, fueron condenados a nueve años cada uno. Se les acusó, básicamente, de haber mantenido movilizada durante horas una manifestación masiva frente a una de las consejerías de la Generalitat para intimidar a un equipo enviado allí por un juez instructor para que practicara un registro de dichas dependencias. Como ninguno de los dos «Jordis» (como acabaron siendo popularmente conocidos) ejercía cargo público alguno en aquel

momento, sus sentencias parecían particularmente desproporcionadas. Pero el tribunal entendió que habían actuado en connivencia con la Generalitat, como todo parecía indicar que había sido.

Las sentencias desataron una semana de disturbios en Barcelona, con hogueras y barricadas en las calles al anochecer, que inspiraron en algunos observadores de ambos bandos recuerdos de la *rosa de foc* (la «rosa de fuego»), la oleada de incendios de iglesias provocados por anarquistas en la capital catalana en 1909[13]. Los exdirigentes encarcelados no eran presos políticos, como clamaban los independentistas. Tal como la acusación había repetido una y otra vez, se les había juzgado y condenado por sus actos contra la Constitución y la ley, no por sus ideas. Pero sí que eran políticos presos, sentenciados a largas penas de prisión por unos actos políticos, y eso era algo fuera de lo común en una democracia europea.

Para muchos observadores externos, el hecho de que España no se hubiese avenido a autorizar un referéndum y que, a continuación, hubiese perseguido judicialmente a los líderes catalanistas representaba una actitud incomprensible, antidemocrática y represora. Lógicamente, ese era también el punto de vista alentado por la propia Generalitat, que dedicó esfuerzos, personal y fondos públicos a hacer propaganda de su causa en el extranjero. Lo hizo mucho más efectivamente que la lenta y pesada maquinaria del Gobierno español. «Puede que estemos perdiendo la guerra de la propaganda —admitió el ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, en un encuentro informativo con periodistas extranjeros en septiembre de 2017—. Pero no queremos hacer propaganda. Queremos decir la verdad. Y es difícil contrarrestar semejante absurdidad».

La dureza con la que reaccionó el Estado obedeció a la gravedad de las acciones de Puigdemont y Junqueras. Conseguir la democracia constitucional había costado a los españoles décadas de sufrimiento. Pese a la tradicional insatisfacción de algunos catalanes y vascos con ese *statu quo*, España ha sido una nación definida por, más o menos, las mismas fronteras desde el siglo XVI. Si Cataluña votase a favor de su independencia, los vascos seguirían su ejemplo casi con toda seguridad (e incluso los baleares podrían aspirar a unirse a Cataluña). Para muchos españoles, la ruptura de su país y la salida de él de algunas de sus regiones más ricas son un escenario inconcebible. En España se lamentó mucho la ingenuidad de David Cameron, el primer ministro británico, cuando convocó el referéndum del Brexit de 2016 confiado en que podía ganarlo y, al final, tuvo que permitir que una exigua mayoría coyuntural en una votación binaria sobre un tema tan complejo como aquel provocara una transformación (o, a juicio de

muchos, un daño) irrevocable en la situación económica de su país y en el lugar de este en el mundo.

Algunos españoles vieron también en las leyes aprobadas por el Parlamento catalán el 6 y el 7 de septiembre de 2017 algo parecido a un «golpe posmoderno», por utilizar la expresión empleada en el título de un libro de Daniel Gascón[14]. Desde Madrid, las autoridades insistían en que ninguna otra democracia europea habría actuado de manera distinta si se hubiera tenido que enfrentar a un desafío parecido. Lejos de ser una excepción, la protección constitucional de la unidad territorial de la nación española es normal en otros países de la Europa continental, como bien se encargó de recordar el Tribunal Supremo en su sentencia: «No existe ninguna Constitución europea que avale el "derecho a decidir"» [15]. Lo cierto es que los tribunales constitucionales alemán e italiano han prohibido recientemente referéndums sobre la independencia en Baviera y el Alto Adigio respectivamente. Tampoco en Estados Unidos se permite la secesión. Checoslovaquia —con su «divorcio de terciopelo» de 1993— y Canadá y el Reino Unido, cuyos Gobiernos nacionales sí han autorizado la celebración de referéndums de independencia (pero que, tal vez, ya no estarán tan dispuestos a hacerlo en el futuro), representan excepciones. En cuanto al Artículo 155 de la Constitución española, es una copia casi calcada del Artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución alemana.

De todos modos, también eran muchas las voces que culpaban en España a Rajoy por no haber sabido dar una respuesta política más imaginativa al órdago independentista y por haber dejado que los acontecimientos llegaran tan lejos. Según me comentó Felipe González, cuando Artur Mas autorizó el referéndum oficioso de 2014, él «le habría advertido de la aplicación del Artículo 155», y, al mismo tiempo, «le habría ofrecido un diálogo». La táctica de Rajoy consistió en limitarse a aplicar la ley. Las encuestas mostraban una y otra vez que una mayoría de los catalanes quería un referéndum sobre el estatus de Cataluña en España, aunque pactado con el Gobierno nacional. También evidenciaban que una mayoría de la ciudadanía española creía que Rajoy debía negociar y que su intransigencia estaba ayudando a la causa separatista. La oposición se quejaba al mismo tiempo de que el Gobierno estaba delegando en los jueces y los fiscales una acción que debía ser política.

El Ejecutivo central discrepaba de ese punto de vista. Dado el carácter binario de la demanda de referéndum, una negociación era difícil. «Estamos seguros de que el tiempo se encargará de desinflar el problema», declaró en marzo de 2017, siete meses antes del

referéndum, un alto cargo del Gobierno de Rajoy que se ocupaba de la gestión del conflicto catalán. «Junqueras quiere ser presidente [autonómico]. Estamos seguros de que no llegará hasta el final. Creemos, más bien, que convocarán un referéndum, el Tribunal Constitucional lo anulará y, entonces, convocarán elecciones». Esto nos da una idea de lo mucho que el Gobierno erró en su lectura de las intenciones de sus adversarios. Comentaristas políticos conservadores compararon repetidamente el *procés* con un «suflé» que pronto bajaría de volumen. Pero no lo hizo. «El suflé es de granito», me comentó el historiador catalán Joan B. Culla en Barcelona, antes del referéndum. Tenía razón. En la Cataluña independentista, el encarcelamiento de sus líderes se vivió como una humillación.

Precisamente por ello, la derrota del separatismo en 2017 no se tradujo de inmediato en un cambio del equilibrio de poder en Cataluña. Los partidos independentistas volvieron a conseguir una mayoría absoluta de escaños en las elecciones autonómicas de febrero de 2021 y, por vez primera, también conquistaron más de la mitad de los sufragios de los votantes (un 51 %, repartido entre cuatro partidos), aunque la importancia histórica de ese apoyo quedó bastante diluida por la abstención récord registrada: la participación fue de un 54 % frente al 79 % de 2017. Parte de la culpa fue de la pandemia, pero también cabe atribuir lo ocurrido a una sensación generalizada de desencanto político. Ciudadanos sufrió una derrota aplastante no muy distinta de la que había sufrido ya en las generales de 2019. El PSC, liderado por Salvador Illa en su primera candidatura a la presidencia de la Generalitat, justo después de haber sido ministro de Sanidad en el Gobierno nacional, se convirtió en el partido más votado (con un 23 % del total). En esas elecciones, se produjo un vuelco en el bando nacionalista: Esquerra, con el 21 % de los votos y treinta y tres escaños, superó los resultados de Junts. Pere Aragonès, segundo de Junqueras en ERC, terminó convirtiéndose así en el primer presidente de la Generalitat de ese partido desde la década de 1930.

Cuatro meses después de aquellos comicios, Sánchez firmó decretos de indulto para los nueve presos independentistas, que comportaron su inmediata excarcelación. Fue una medida audaz, pues la oposición conservadora lo acusaba de estar traicionando al Estado de derecho y pagando a Esquerra el precio de su apoyo al Gobierno con los votos de sus diputados en el Congreso. Muchos de los presos indultados dijeron no arrepentirse de lo que habían hecho. Solo Junqueras admitió que el referéndum no fue entendido como «plenamente legítimo» por una parte de la sociedad catalana y que la vía unilateral hacia la independencia no era «viable ni deseable»16.

Los indultos no significaron la plena amnistía que reclamaba la Generalitat: eran condicionados a que no volvieran a infringir la ley; no revocaban la inhabilitación para el ejercicio de cargo público que se mantenía para el mismo periodo de duración de las penas de prisión originales. Puigdemont, que, mientras tanto, había sido elegido parlamentario europeo, seguía estando en un limbo jurídico, igual que Ponsatí y dos de los otros fugitivos iniciales. Tras la negativa de tribunales en Alemania e Italia a extraditarlos, el magistrado instructor del Tribunal Supremo español remitió unas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la validez de las euroórdenes de detención que había cursado contra ellos. Independientemente del fallo del TJUE, es muy probable que Puigdemont continúe siendo durante bastante tiempo un molesto asunto pendiente para el Gobierno español.

Los indultos dividieron a la opinión pública del conjunto de España, pero fueron ampliamente bien recibidos en Cataluña. Sánchez vio enseguida justificada su decisión, pues sus medidas de gracia pronto dejaron de ser un tema de preocupación nacional y, al mismo tiempo, contribuyeron a drenar buena parte del veneno emocional que tanto exacerbaba el conflicto. En julio de 2021, regresé a Barcelona en mi primera visita desde el inicio de la pandemia y comprobé que el ambiente estaba más relajado que nunca antes desde el comienzo del *procés* independentista. Había muchas menos «esteladas» en los balcones. Aun sin renunciar al objetivo de pactar un referéndum con el Estado, Aragonès y Esquerra accedieron a abrir un diálogo con el Gobierno nacional. Las conversaciones empezaron por asuntos más mundanos, como las infraestructuras. Nadie esperaba que fuesen rápidas ni fáciles. Pero ofrecieron un camino para volver a cierto grado de normalidad política. A mediados de 2022, el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat encontró que el apoyo a un Estado catalán independiente había caído hasta un 41 % de la población, el más bajo desde el inicio del *procés*, mientras que un 52 % de los encuestados se declaraban en contra. Si la pregunta se formulaba planteando otras opciones, como la posibilidad de que Cataluña fuese un estado dentro de una España federal, el porcentaje de los favorables a la independencia bajaba aún más, hasta el 34 %[17]. «Cataluña ha estado digiriendo un fracaso político desde 2017 —me dijo Illa—. El problema ahora es encontrar vías para convivir de nuevo, tanto unos catalanes con otros, como los catalanes con los otros españoles».

Las dos Cataluñas

En 2018, ocho meses después del referéndum, volví a Vic. En aquel momento, casi todos los edificios de su plaza mayor tenían una pancarta que reclamaba «democracia» y la liberación de los presos independentistas. Fui a ver a la alcaldesa en el ayuntamiento, un palacete de piedra ocre que data del siglo XIV y se ubica en una esquina de la plaza. Junto a la *senyera* y la bandera estrellada de la UE, podía verse una bandera española ondeando sobre un mástil del tejado. Un letrero de disculpa casi la tapaba: en él se explicaba que la presencia de tan ofensiva enseña era por orden judicial. Anna Erra mostró ese día un tono tan desafiante como de arrepentimiento al mismo tiempo. «Se creen que van a hacernos desaparecer con cárcel y represión. Pero con esto solo hacen más grande la brecha», dijo. La independencia llevará más tiempo de lo que se creía, admitió: no bastaba solo con declararla, como mucha gente esperaba. «La vía unilateral será muy difícil; no ha funcionado como pensábamos». Pero, añadió, «creo que, al final, conseguiremos como mínimo un referéndum. Somos un pueblo que tiene una lengua, una historia, una cultura».

En el otro extremo de esa misma línea de ferrocarril, los trenes procedentes de Puigcerdà y de Vic terminan en L'Hospitalet de Llobregat. Encajado entre Barcelona y su aeropuerto, este municipio, con sus doscientos sesenta mil habitantes, es el segundo más poblado de Cataluña. Ha sido durante mucho tiempo una ciudad dormitorio de los obreros de la industria inmigrados aquí desde el resto de España; sus poco arboladas calles (unas de las más densamente pobladas de Europa) están atravesadas por una maraña de líneas férreas.

En la actualidad, aproximadamente una cuarta parte de su población la forman personas nacidas fuera de la UE, muchas de ellas en América Latina. L'Hospitalet posee también un moderno barrio de flamantes edificios de oficinas y hoteles, así como las nuevas instalaciones de la Fira de Barcelona, donde se celebra el Mobile World Congress. En una biblioteca y centro cultural municipal alojada en una antigua fábrica textil, había cuando estuve allí una exposición de mantillas andaluzas. Después del Barça, el equipo de fútbol con más seguidores en L'Hospitalet es el Real Betis, orgullo de Sevilla. Esta es la Cataluña que mira al resto de España, al mundo y al futuro. A sus hijos se les enseña en catalán en las escuelas, pero, en el patio del recreo y en casa, hablan en español. Aunque no faltaban balcones en L'Hospitalet de los que colgasen «esteladas», las tradiciones políticas que allí dominan son las del socialismo y el anarquismo. «No olvidaremos el desprecio que demostraron» los independentistas hacia aquellos que discrepaban de ellos, me dijo la alcaldesa socialista de la

ciudad, Núria Marín. Ella es hija de padre vasco y madre navarra. «El problema no es solo entre Cataluña y España, sino que está dentro de Cataluña también. Aquí no puede haber ganadores y perdedores».

3

La invención de Cataluña

Para alguien de fuera, puede resultar sorprendente que Cataluña sea un escenario de agrio conflicto político. Pocos rincones del planeta parecen poseer un entorno más privilegiado. Encajada entre los Pirineos, el Mediterráneo y la corriente formada por los ríos Noguera Ribagorzana y Ebro, Cataluña lo tiene todo en cuanto a belleza física y creatividad cultural: al accidentado litoral de la Costa Brava y a las colinas boscosas y las fértiles llanuras y valles del interior cabe sumar una asombrosa historia arquitectónica —desde lo medieval hasta lo modernista—, una fuerte tradición comercial, una gran ciudad europea como es Barcelona, un nivel de vida generalmente próspero, unos excelentes vinos (Priorato, Montsant, Ampurdán) y una gastronomía rica e innovadora como la que se manifiesta en dos restaurantes (El Bulli y El Celler de Can Roca) que han sido declarados en diferentes momentos los mejores del mundo. Sus gentes se enorgullecen de su *seny*, palabra catalana traducible como sensatez o sentido común. Pero cuando de política se trata, como bien señaló Jaume Vicens Vives —distinguido historiador nacionalista catalán de mediados del siglo XX—, han tendido a actuar más bien con la actitud contraria: la *rauxa*, la impulsividad emocional. Y, una y otra vez, los catalanes han evidenciado algún tipo de división interna en momentos cruciales. No hablamos de expresiones de un presunto carácter nacional esencial: se trata simplemente de un patrón histórico. Cuando se estudia la historia de Cataluña, se tiene a veces una extraña sensación de *déjà vu*. Pero ese no es el único patrón. Mientras que el conflicto, la violencia y la desconfianza forman un elemento en la relación entre Cataluña y el resto de España, ambos territorios están unidos por muchos otros hilos. Aunque diferentes en ciertos aspectos, los catalanes se parecen mucho más a los otros españoles que a ningún otro pueblo. A pesar de todo lo ocurrido, los sondeos de opinión revelaban en 2020 que en torno a dos tercios de los encuestados en Cataluña se sienten españoles en mayor o menor grado, y que solo una cuarta parte de ellos se consideran exclusivamente catalanes[1]. Si hubiera indicios claros de que la opinión consolidada de la inmensa mayoría de los catalanes es favorable a la secesión, sería muy difícil oponerse a la celebración de un referéndum. Pero esa situación de una mayoría social independentista holgada y sólida es un escenario que nunca se ha dado.

Los temores que algunos catalanes me manifestaron en 2017

respecto a que su país estuviese siguiendo una deriva que lo llevaría a un conflicto sectario al estilo de lo ocurrido en Irlanda del Norte han remitido, afortunadamente. Pero continúa habiendo dos Cataluñas, muchas veces visibles dentro de una misma localidad o ciudad, que ni se hablan ni se escuchan mucho. Cuando Puigdemont asegura representar a *«un sol poble»* (un solo pueblo), no dice la verdad[2]. Esa es una razón fundamental por la que el proceso secesionista no ha triunfado hasta la fecha. Pero el movimiento independentista no lo ve así. El referéndum, según declaró Puigdemont cuando lo convocó, significaba el «ejercicio del legítimo derecho a la autodeterminación que tiene una nación milenaria como Cataluña»[3]. Tal como me comentó la alcaldesa de Vic, Anna Erra, esta reclamación del derecho a ser Estado-nación se fundamenta en la historia, la lengua y la cultura propias.

Algunos partidarios de la independencia tratan de distanciarse del nacionalismo por las connotaciones derechistas y racistas que este puede tener. Se declaran defensores de un internacionalismo de mentalidad abierta y sostienen que el proceso independentista giró básicamente en torno a la democracia participativa. Esta postura está manifestada por Francesc-Marc Álvaro, periodista catalán simpatizante de la independencia, en un libro reciente y bien documentado:

> Los académicos y los estudiosos de la cuestión nacional saben que el nacionalismo catalán es de naturaleza cívica, y no étnica ni esencialista. […] Este carácter cívico del catalanismo ha pasado automáticamente al independentismo catalán y eso ha servido para subrayar el marco de la demanda independentista, que es de «más democracia», no de «más identidad» ni de identidad pretendidamente pura[4].

Esta afirmación tiene su correlato en el argumento según el cual quienes se opusieron a la independencia de Cataluña eran defensores del nacionalismo español, el cual, desde ese punto de vista, es malo por naturaleza. Lo que se venía a decir era que el franquismo no había desaparecido en realidad y que Cataluña había sido su víctima particular y continuaba siéndolo hoy en día. Puigdemont escribió en un artículo de opinión publicado en noviembre de 2017 que era «la democracia en sí» lo que estaba en juego[5]. Todos estos argumentos revestían de cierta pátina de «progresismo» izquierdista lo que, en el fondo, era un movimiento derechista. La independencia no es, en general, la causa que abraza la clase obrera en Cataluña: los sondeos muestran que cuenta con más apoyo entre sectores económicamente más acomodados. No deja de ser sintomático que casi la mitad de los

alcaldes designados por el franquismo que estaban en sus cargos al término de la dictadura se presentasen justo después como candidatos de CiU, principal partido nacionalista catalán, en las primeras elecciones municipales democráticas[6]. No obstante, los argumentos de los nacionalistas fueron aceptados sin mayor cuestionamiento en muchos comentarios extranjeros.

La realidad es que tanto el nacionalismo como el independentismo catalanes tienen mucho que ver con la identidad. El propio Álvaro lo reconoce, contradiciendo en parte su propio argumento, cuando escribe unas páginas después sobre la demanda del reconocimiento de «una identidad, un sentido de pertenencia y una memoria colectiva» implícita en ese movimiento[7]. Al hablar con los asistentes a las concentraciones y manifestaciones independentistas, lo que traslucía en sus palabras era una sensación generalizada de victimismo en la que se entremezclaban historia, aspectos prácticos relacionados con la financiación y las infraestructuras, y cuestiones identitarias. «Se aferran a Cataluña como se aferraron a las colonias», me dijo Sergi Cercós, un directivo de Vilafranca del Penedès (localidad situada en pleno país del cava, al oeste de Barcelona), durante la manifestación de la Diada de 2017. Muchos de los partidarios más jóvenes de la independencia sentían una desconexión emocional con el resto de España. «No nos sentimos españoles», decía Sergi Rubió, un amigo de Cercós. «No les gustamos para nada —juzgaba Joana Reñé, una joven enfermera, mientras aguardaba de pie entre la multitud concentrada frente al Parlamento catalán en los momentos previos a la declaración de independencia—. Ellos dicen que el catalán es un dialecto y que los catalanes somos tacaños». Anna Erra se hacía eco de ese sentimiento: «En el fondo, no les gustamos», me dijo en 2018.

¿Existe, entonces, una base sólida para la reivindicación de Cataluña como nación y como Estado? «El derecho a decidir» es un lema simple y atractivo. Pero el derecho internacional solo reconoce un derecho a la autodeterminación en casos de colonización, invasión o negación flagrante de los derechos humanos de la población del territorio en cuestión. Ninguna de esas condiciones se daba en Cataluña, por mucho que los independentistas se esforzasen por argumentar lo contrario. Una de las sensaciones más extrañas para quienes cubríamos la actualidad catalana de aquel momento era oír a funcionarios de la Generalitat comparar muy en serio la situación de su tierra con la de lugares arrasados por la guerra (como Kosovo) o recién salidos del totalitarismo (como la Lituania postsoviética) mientras hablamos en el entorno próspero y sofisticado de Barcelona.

Costaba no tomárselo a broma.

Sin embargo, desde que la Generalitat se hizo con el control del sistema educativo, a muchos catalanes se les ha enseñado no solo que Cataluña es una nación inveterada —e, implícitamente, un antiguo Estado soberano—, sino también que desde Madrid se la ha oprimido de forma reiterada y se la ha tratado como a una colonia, pues los Gobiernos de España han actuado guiándose exclusivamente por los intereses de Castilla. La realidad histórica, sin embargo, no es tan clara. No cabe duda de que, en el transcurso de los últimos cuatro siglos, los Gobiernos de Madrid han aplicado en ocasiones políticas opresivas y de mano dura con Cataluña reveladoras de un fuerte desdén (de hecho, muchos derechistas en el resto de España retratan a los catalanes como unos desleales, unos materialistas y unos egoístas crónicos). Pero los argumentos nacionalistas son, cuando menos, medias verdades. La nación catalana según la conciben los independentistas es un ejemplo muy claro de lo que el historiador británico Eric Hobsbawm llamó «la invención de la tradición». Es una práctica que implica «el uso de antiguos materiales para construir tradiciones inventadas de género nuevo para propósitos nuevos», y que a menudo comporta el recurso a la «semificción» o incluso a la falsificación[8]. Fue una dinámica muy frecuente en toda Europa durante la segunda mitad del siglo XIX inspirada por el romanticismo y el surgimiento del nacionalismo a raíz de la Revolución Francesa. El nacionalismo español no es ajeno a tal proceso inventivo: por ejemplo, las historias escritas en el siglo XIX remontaban el inicio de la «Reconquista» de la España musulmana por los reyes cristianos a la batalla de Covadonga, en Asturias, a comienzos del siglo VIII. Los historiadores actuales dudan incluso de que tal contienda tuviera lugar. Y la «Reconquista» fue, en realidad, una conquista a secas, ya que no existía una continuidad intencionada entre los nobles y monarcas cristianos del norte peninsular y el anterior reino visigodo hispano de los siglos V a VII con capital en Toledo. Pero, en el caso de Cataluña, el relato nacionalista oficial guarda una relación especialmente endeble con los hechos históricos.

La Corona de Aragón

Los orígenes de Cataluña se encuentran en el condado de Barcelona, un señorío feudal de la Marca Hispánica, la zona de frontera instaurada por los francos a modo de territorio tapón para proteger el Imperio carolingio de los árabes y bereberes que habían invadido la península ibérica en el siglo VIII. Los condes de Barcelona terminaron emancipándose de sus lazos de vasallaje con los reyes de

Francia y, hacia mediados del siglo XII, ya dominaban el resto de condados del territorio que hoy conocemos como Cataluña. Ahora bien, esa Cataluña medieval era una entidad dinástica y patrimonial; a diferencia de Escocia, por ejemplo, nunca constituyó claramente un país independiente, reconocido como tal por otros, ni menos aún un Estado. Por medio de matrimonios dinásticos, los condes de Barcelona llegaron a ser temporalmente señores de una amplia extensión de territorio en el sur de Francia. A su oeste, surgió el reino de Aragón, fundado sobre feudos cristianos establecidos en los valles de los Pirineos centrales y crecido en importancia tras conquistar Zaragoza a los árabes. En 1137, el condado de Barcelona se fusionó —por matrimonio— con su vecino aragonés. Los posteriores condes-reyes de Aragón acabarían reinando sobre un considerable imperio mediterráneo que comprendía Valencia, las islas Baleares, el sur de Italia y emporios comerciales en sitios tan alejados como Grecia. Cataluña fue sin duda la parte más dinámica de ese reino hasta aproximadamente el año 1350, momento a partir del cual Valencia ocupó ese lugar. Pero, de todos modos, los condes-reyes se coronaban normalmente como tales en Zaragoza, no en Barcelona[9].

La materia prima con la que se ha elaborado la tradición catalana (re)inventada es de ese periodo, de la Edad Media. La invasión árabe empujó a muchos campesinos cristianos a buscar refugio en los angostos valles pirenaicos. Allí construyeron iglesias románicas decoradas con frescos de sencilla e impresionante belleza, muchos de los cuales se han trasladado al espléndido Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona. La nobleza franca instauró un sistema feudal más elaborado allí que en ninguna otra parte de la antigua Hispania, donde la «reconquista» del territorio musulmán aún tardaría varios siglos más. El campo catalán ha dado lugar a la existencia de un tipo de pequeño agricultor fieramente independiente; sus sólidas casas de labradío, las masías, formaban la base de una sociedad patriarcal, católica y conservadora. Barcelona, por su parte, desarrolló una potente clase mercantil. El magnífico Barrio Gótico de la ciudad, con su extensa colección de edificios públicos y religiosos medievales (una de las más amplias de Europa), da fe —en sus paredes de piedra y en los altos y esbeltos arcos de iglesias como Santa María del Mar— de la riqueza de esa clase. En aquel momento de la historia, Madrid no era más que un antiguo poblado araboberber fortificado, perdido en medio de la meseta castellana, que había pasado a manos cristianas.

El reino de Aragón se caracterizaba por un mayor respeto por los usos y leyes locales, y por un gobierno menos centralizado que el de Castilla. Tanto en Cataluña como en Aragón propiamente dicho y en

Valencia, se desarrollaron instituciones de gobierno medievales y modelos de contrato social. En los *Usatges* (u «Observancias») de Barcelona, un documento redactado en 1068, se dio expresión a los fundamentos jurídico-legales del orden feudal catalán. Las *Corts* (o «Cortes»), asamblea de representación de los nobles, el alto clero y la burguesía más próspera, se reunían cada tres años para aprobar las solicitudes del monarca en materia de recaudación tributaria y de leyes. En Cataluña, las Corts tenían una comisión permanente de doce miembros, conocida como la Diputación del General, o Generalitat, nombre que se recuperaría en el siglo XX. Barcelona era gobernada por el Consell de Cent (Consejo de Ciento), que representaba principalmente a los grandes mercaderes. En el relato nacionalista de la historia, se entiende que todas estas instituciones eran protodemocráticas. De ahí que, para reforzar su argumento de que era el presidente de una nación milenaria, Puigdemont se presentara como el 130.° presidente de la Generalitat, reclamando así la continuidad de su Gobierno con la institución medieval homónima, aun cuando no exista en realidad similitud alguna —más allá de la nominal— entre aquella y el Gobierno autonómico actual. La realidad se muestra mucho mejor en las grandes pinturas de las Cortes valencianas, que todavía cuelgan de las paredes del salón empedrado donde dicha institución solía reunirse en el siglo XV, en el palacio de la Generalitat de Valencia. Allí puede verse a los obispos, la nobleza guerrera y los grandes mercaderes de las ciudades; ni rastro de las masas campesinas ni de los artesanos urbanos. En la actualidad, los libros de texto escolares en Cataluña hacen referencia al «Estado catalán medieval» o al «imperio catalán», mientras que los historiadores nacionalistas hablan de la «federación catalano-aragonesa». Ninguno de esos términos se empleó en aquel entonces para designar la entidad política que los cronistas de la época llamaban la Corona de Aragón. De hecho, no es hasta, más o menos, el momento de la unión dinástica con Aragón cuando empieza a tenerse constancia de los términos «catalán» y «Cataluña», según ha escrito Jordi Canal, historiador catalán que enseña en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París[10]. En el *Cantar de mio Cid*, poema épico que se compuso hacia el año 1200, a los catalanes se les seguía llamando «francos».

A partir del año 1300, Cataluña entró en decadencia. Cuando el conde-rey de Aragón falleció sin heredero en 1410, tres representantes de cada territorio componente de la Corona aragonesa se reunieron y eligieron como sucesor a Fernando de Antequera, de la dinastía de los Trastámara, reinante en Castilla. Ahí se originaría la posterior unión de las coronas de Castilla y Aragón en 1479, en las personas de Isabel

y Fernando, los Reyes Católicos. Su régimen era una «monarquía compuesta», no un Estado-nación unificado como sostienen algunos historiadores españoles conservadores[11]. Ambos territorios continuaron siendo entidades separadas. Aragón conservó su propio sistema de gobierno, por ejemplo.

Cataluña se vio sometida a las exigencias centralizadoras de la monarquía de los Habsburgo (Austria) en el siglo XVII, cuando el conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV, quiso recaudar más dinero y hombres de aquellos territorios para mantener su campaña militar en la Guerra de los Treinta Años. En aquel conflicto, Francia le declaró la guerra a España en 1635 e invadió Cataluña. El ejército de Felipe IV expulsó a los invasores, pero, justo después, se vio enfrentado a un levantamiento contra el acantonamiento de las tropas y contra otras exacciones. Varios centenares de *segadors* organizaron una revuelta en Barcelona; Pau Claris, canónigo de la Seu d'Urgell y presidente de la Diputación, proclamó una república que duró una semana e invitó a Francia a protegerla, con el rey francés Luis XIII como nuevo conde de Barcelona. Las fuerzas galas se quedaron doce años en territorio catalán; una parte de la nobleza autóctona huyó a Castilla. Al final, tras la firma del Tratado de los Pirineos de 1659, Francia se quedó con los condados de la Cerdaña y el Rosellón, que eran la parte de la antigua Marca Hispánica que quedaba al norte de los Pirineos. Según J. H. Elliott, «la rebelión de 1640 dejó un amargo recuerdo permanente en la corte [en Madrid], como también lo dejó en Cataluña —un recuerdo que tendría una influencia duradera en la política de la Corona hacia los catalanes—»[12].

El conflicto volvió a hacer acto de presencia en tierras catalanas cuando Carlos II, el último de los Austrias españoles, falleció sin descendencia en 1700, lo que desencadenó la Guerra de Sucesión española. En su testamento, designó como heredero a Felipe, duque de Anjou y nieto de Luis XIV de Francia. Temerosas de la expansión del poder borbónico francés, Inglaterra, Austria, Holanda y, más tarde, Portugal formaron coalición para respaldar los derechos al trono del rival de Felipe, el archiduque Carlos de Austria. Tras su proclamación, Felipe V visitó Barcelona, donde fue bien recibido y donde juró respetar los fueros locales. Pero el sentimiento antifrancés era intenso en Cataluña, sobre todo en las comarcas interiores, por el recuerdo de invasiones pasadas, y también el clero catalán se alineaba con el bando austracista. Los *vigatans*, grupo de la pequeña aristocracia de Vic y su área de influencia, se rebelaron contra Felipe y firmaron un pacto con Inglaterra. Tras sufrir una importante derrota militar en La Mancha, las fuerzas austriacas e inglesas se retiraron de España y

reconocieron a Felipe como rey. Barcelona (aunque no así el resto de Cataluña) siguió luchando hasta el final contra un monarca que ya nunca la perdonaría por haber cambiado de bando. Unos cuarenta mil soldados españoles y franceses sitiaron la ciudad, defendida por unos cinco mil hombres, fundamentalmente milicianos, bajo el mando de Rafael Casanova, *conseller en cap* del Consejo de Ciento barcelonés. Parte de la nobleza y de la burguesía catalanas desertó y se pasó a las fuerzas de Felipe. El 11 de septiembre de 1714, tras catorce meses de asedio y siete mil muertos, la ciudad se rindió.

Los orígenes del nacionalismo catalán

Aquella fue una derrota aplastante que terminaría convertida en potente mito nacional que todavía resuena con fuerza en el pensamiento colectivo. Hoy se recuerda en el Centro de Cultura y Memoria de El Born, en el barrio de La Ribera, en plena «ciudad vieja» barcelonesa. Se trata de un antiguo mercado de fruta y verdura: un esplendoroso ejemplo de la arquitectura del hierro forjado y el vidrio del siglo XIX. Bajo lo que era el suelo del mercado, los arqueólogos excavaron y destaparon en años recientes media docena de calles adoquinadas, así como los cimientos de las casas que las flanqueaban y que el ejército borbónico conquistador demolió para construir la fortaleza desde donde los militares dominarían las revueltas barcelonesas durante cerca de dos siglos a partir de entonces, y en cuyos restos reformados se aloja actualmente el Parlamento catalán. La derrota señaló «el auténtico fin de la nación catalana —tal como se explica en un panel didáctico del museo—. La libertad de Cataluña y sus derechos y fueros pronto serían eliminados por completo». Este no deja de ser un nuevo ejemplo de imposición del lenguaje democrático contemporáneo a una realidad histórica muy diferente de la actual.

El día nacional de Cataluña se celebra precisamente el 11 de septiembre. El tricentenario de la derrota proporcionó un acicate adicional al *procés* independentista: Artur Mas habló incluso de ganar en las urnas en 2014 lo que se había perdido en 1714. Para ser históricamente precisos, la guerra fue tanto internacional como intrahispánica; en ella, de hecho, la mayor parte de la Corona de Aragón se enfrentó contra la mayor parte de Castilla. Pero, a uno y otro lado de ese frente, amplias minorías apoyaron al bando contrario. A los partidarios catalanes de Felipe, que controlaban varias localidades del interior, se les llamó por aquel entonces *botiflers*, una palabra que se ha quedado en el vocabulario político del país y que hoy usan como insulto los independentistas para descalificar a los catalanes que no están de acuerdo con ellos.

La derrota de 1714 significó el largamente demorado final de la Cataluña medieval, y abrió la puerta a lo que acabaría siendo la versión moderna. Tras su victoria, Felipe impuso una monarquía absolutista y centralizada siguiendo el modelo francés de su abuelo, Luis XIV. En Cataluña lo hizo a través del llamado Decreto de Nueva Planta (o «nuevo plan») de 1716, que abolió las Corts (que solo se habían reunido en dos ocasiones desde 1640), el Consell de Cent, los fueros y la Universidad de Barcelona, y convirtió el castellano en única lengua oficial de la Administración pública y de los tribunales de Justicia. La Nueva Planta conservó, de todos modos, el derecho civil catalán y concedió una amnistía. Pero Felipe acantonó un ejército de ocupación permanente en Cataluña y transformó Barcelona en una ciudad cuartel con la construcción de la fortaleza de la Ciudadela, tal como el museo del Born tan conmovedoramente muestra.

Pese a ello, la política borbónica de integración de Cataluña en una España unitaria vino a dar un mayor ímpetu a lo que ya era una incipiente recuperación de la economía catalana tras siglos de declive. Los catalanes pudieron disfrutar por fin de acceso en igualdad de condiciones al comercio y a los puestos administrativos en la América española. Las industrias catalanas del vino, el aguardiente y el textil se beneficiaron de esa entrada en los mercados español y americano. Al término del siglo XVIII, la industria catalana de los tejidos de algodón se había convertido en la mayor del mundo después de la de Lancashire: el «primer conjunto industrial propiamente dicho de la España moderna»[13]. Dependía, eso sí, del proteccionismo: presionado por Cataluña, el Gobierno español impuso un arancel a la importación de los tejidos de algodón.

La industrialización trajo cambios sociales y políticos de gran alcance. Incrementó la brecha entre la Cataluña rural y Barcelona, e introdujo nuevos conflictos de clase en la ciudad. Pero, sobre todo, dio origen a una conciencia nacional en Cataluña que no había existido en la Edad Media ni en 1714 siquiera. Comenzó en la década de 1830, con un movimiento cultural conocido como la *Renaixença* («renacimiento»), dirigido a promover la lengua catalana y la historia y las tradiciones «nacionales». El catalán había seguido siendo el idioma de uso oral preferente. Pero, a partir de entonces, vivió un resurgimiento literario, con concursos de poesía (los «juegos florales»), con la publicación de obras en catalán y, en 1879, con la aparición del primer diario en esa lengua. Pompeu Fabra, un ingeniero y lingüista aficionado, publicó el primer diccionario y la primera gramática del catalán, siempre optando por el vocabulario y los usos más alejados del castellano. La Diada comenzó a celebrarse hacia el final del siglo

XIX. La Renaixença supuso también la recuperación —o invención— del folclore tradicional, con bailes como la sardana (una especie de versión algo más soñolienta de la danza folclórica escocesa) o con ejercicios como las extraordinarias torres humanas conocidas como *castells*. También se adoptó como himno nacional catalán *Els segadors*, canción basada en los protagonistas de la rebelión de 1640. Muchos profesionales urbanos participaban los fines de semana en excursiones organizadas para explorar los pueblos románicos de los valles pirenaicos en busca de la esencia de Cataluña. Esas prácticas pueden parecer bastante cursis a ojos de un observador actual, en pleno siglo XXI, pero lo cierto es que no diferían en mucho de las de los románticos ingleses o escoceses de la época.

El catalanismo, como ese movimiento cultural dio en llamarse, estaba muy ligado de entrada al catolicismo, y entre sus principales promotores abundaban los miembros del clero. Pero también estaba muy influido por el romanticismo, sobre todo en sus versiones alemana y británica. Las novelas históricas escocesas de *sir* Walter Scott fueron una fuente de inspiración; también lo fue Wagner, cuyas óperas hicieron verdadero furor en el barcelonés Teatro del Liceo, en las décadas de 1880 y 1890[14] (en Madrid, siempre fue más popular Verdi). Los catalanistas estaban imbuidos asimismo de las ideas de Johann Gottfried Herder, filósofo alemán que opinaba que una nación era una esencia orgánica definida por la lengua, y no una construcción cultural y política como piensan los teóricos actuales. Artur Mas describió en una ocasión a los catalanes como «más germánicos y menos romanos» que otros españoles, pese a la abundancia de ruinas de esta última civilización en su territorio[15]. Y no cabe duda de que, en términos puramente arquitectónicos, en Cataluña el gótico tuvo una presencia más prominente que el barroco. Incluso el modernismo catalán —el movimiento en arte y arquitectura con el que asociamos a Antoni Gaudí, el más grande de los arquitectos de Barcelona— tenía un componente retrospectivo.

Buena parte del campesinado sentía amenazado su modo de vida por el capitalismo y optó por adherirse al carlismo, un movimiento tradicionalista católico y, sobre todo, antiliberal (véase el capítulo 4). La Cataluña rural fue escenario de duros combates tanto en la primera (1833-1840) como en la segunda (1846-1849) y, sobre todo, la tercera (1872-1876) de las guerras carlistas. Al mismo tiempo, en Barcelona y otras ciudades, el grueso de la población tenía otras preocupaciones: la creciente clase obrera sufría unas muy duras condiciones de trabajo en las nuevas fábricas y peores condiciones de vivienda que el del Londres dickensiano. La densidad demográfica de la capital catalana a

mediados del siglo XIX duplicaba la de París, según el estudio elaborado por Ildefons Cerdà, el visionario ingeniero civil y socialista utópico, que planificó el Eixample («Ensanche») de Barcelona, su nueva ciudad16. Desesperados, muchos de aquellos trabajadores recurrieron a la insurrección y el anarquismo. Barcelona se transformó en la ciudad más insurreccional de Europa: huelgas, barricadas y bombas, por un lado, y torturas policiales y represión militar, por el otro, se convirtieron en un modo de vida. La larga pugna —a menudo violenta— entre el sindicalismo anarquista y el católico (con sus respectivas bandas de pistoleros) alcanzó su intensidad máxima entre 1917 y 1923.

En ese contexto, el catalanismo evolucionó y dejó de ser un movimiento puramente cultural para convertirse en un actor político: el nacionalismo catalán. Fue un proyecto de la burguesía en expansión y los profesionales de clase media, que veían sus intereses amenazados por el anarquismo y por la relativa debilidad del Estado español dirigido desde la lejana Madrid. Esta endeblez quedó puesta de relieve con el llamado «Desastre» de 1898: la aplastante derrota que el pujante Estados Unidos infligió a la decadente España en la guerra Hispano-Estadounidense, en la que esta última perdió las colonias que le quedaban en América y Asia, que eran Cuba, Puerto Rico y las Filipinas (véase el capítulo 4).

El nacionalismo catalán ha tenido varias corrientes. Una, que fue la dominante durante unos años en la década de 1930 y que volvería a serlo en las de 1960 y 1970, es republicana, socialista y federalista; actualmente, vemos ecos de esa tradición en algunos líderes de Esquerra y en la vena catalanista del socio local del PSOE, el PSC. Otra corriente, más propiamente conservadora, bebió de la herencia del tradicionalismo y el localismo carlistas. El carlismo fue un movimiento profundamente reaccionario en el sentido más literal del término. No es casualidad que las zonas de influencia carlista durante el siglo XIX —como el Pirineo, el Prepirineo, y el valle del Ebro, entre otras— sean también aquellas donde el independentismo tiene mayor fuerza hoy en día. Berga, una localidad no muy distante de Vic que fue cuartel general del carlismo durante la Tercera Guerra Carlista, tiene alcalde de la CUP. En la Segunda Guerra Carlista, el cuartel general del comandante de las fuerzas antiliberales, el general Ramón Cabrera, estuvo en Amer, localidad natal de Puigdemont cercana a Gerona.

La corriente dominante en el nacionalismo catalán desde la década de 1880 hasta la de 1930, y de nuevo en las de 1980 y 1990, fue una de raigambre conservadora y católica, aunque alineada con los intereses de empresarios y comerciantes, y más moderna. Esa fue

la posición ideológica del primer partido nacionalista, la Lliga Regionalista de Catalunya, entre cuyos fundadores se encontraban Enric Prat de la Riba, abogado y escritor, y Francesc Cambó, empresario, político y mecenas de las artes. Era una formación que representaba a los industriales, a los banqueros y a los profesionales liberales. Aprobó un programa, redactado por Prat de la Riba, en el que proponía la instauración de un Gobierno propio en Cataluña como región autónoma dentro de España y con el catalán como idioma oficial. Como síntoma de las inseguridades que generaba la llegada de inmigrantes desde el resto de España para trabajar en las fábricas de la región, en aquel documento se proponía que todos los empleos públicos estuviesen reservados para catalanes de nacimiento (o naturalizados como tales). La Lliga abogaba por el proteccionismo económico. Su causa se vio fortalecida por el Desastre del 98, pues Cuba había sido hasta entonces un gran mercado para las exportaciones catalanas y contaba con una numerosa comunidad de expatriados catalanes. La burguesía catalana había apoyado la inflexible represión militar española de las rebeliones cubanas, pero luego culpó al Gobierno de Madrid del fracaso de aquella política. Los sucesos de 1898 hicieron «que el catalanismo dejara de ser un credo minoritario para convertirse en vehículo de una protesta generalizada», según Raymond Carr[17].

En 1914, la Lliga consiguió un gobierno autónomo limitado para Cataluña; Prat de la Riba se convirtió entonces en el presidente de una «Mancomunitat» que reunía las competencias y autoridades de las cuatro diputaciones provinciales catalanas. Prat de la Riba no era separatista; creía que una España federal era lo máximo a lo que Cataluña podría aspirar. «La vida en común desde antiguo ha creado vínculos con la unidad más amplia de España que no pueden quebrarse», escribió[18]. Pero, al mismo tiempo, siguiendo una dinámica de tensión con la que nos hemos familiarizado en fechas más recientes, también quiso utilizar la Mancomunitat como herramienta para la construcción nacional catalana. Sus planes, sin embargo, se interrumpieron a causa de su temprana muerte. Cambó, que fue ministro en varios Gobiernos nacionales, se esforzó por hacer del nacionalismo catalán una fuerza al servicio de la reforma de España. Pero fracasó en el intento.

Presa de la desesperación ante la interminable agitación anarquista, la burguesía catalana recibió de muy buen grado el pronunciamiento en 1923 del general Miguel Primo de Rivera, capitán general de Barcelona, que suspendió el gobierno parlamentario en España para instaurar una dictadura bajo su propio mando. Unos

cuatro mil catalanes elegantemente vestidos fueron a la estación a despedir a Primo de Rivera en su viaje hacia Madrid para asumir el poder. Este no tardaría en defraudarles. El nuevo dictador, en una especie de aperitivo de lo que sería el régimen franquista de unos años más tarde, clausuró la Mancomunitat y prohibió el uso del catalán en las escuelas. Con aquello, selló el final de la línea de moderación representada hasta entonces por la Lliga.

Cuando el fracaso de la dictadura de Primo de Rivera desembocó en la caída de la monarquía, fue Francesc Macià —un anciano excoronel del Ejército y agricultor que había roto con la Lliga— quien, el 14 de abril de 1931, proclamó desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona en la plaza de Sant Jaume un Estado catalán dentro de la república federal ibérica que esperaba que se proclamase a su vez en breve. Junto con Lluís Companys, entre otros, había fundado ERC apenas unas semanas antes. Y habían obtenido en Cataluña una victoria arrasadora en las elecciones municipales del 12 de abril, en las que Companys había salido elegido alcalde de Barcelona. El Gobierno provisional de la recién proclamada República española se avino enseguida a ofrecer un estatuto de autonomía para Cataluña, que las Cortes aprobaron al año siguiente. El nuevo «Estatut» proclamaba la cooficialidad de las lenguas catalana y española en la región y restablecía la Generalitat por primera vez desde 1714. «Yo era separatista del Estado español monárquico —aclaró Macià—. No queremos el Estatuto para apartarnos de los demás pueblos de España»19.

No habían transcurrido aún cuatro años cuando Companys, un abogado laboralista y periodista que había ascendido al cargo de presidente de la Generalitat a la muerte de Macià, apareció en el balcón del palacio del Gobierno autónomo para proclamar un «Estado catalán dentro de la República Federal Española». Aquel acto coincidió con el levantamiento armado en Asturias (octubre de 1934) contra el nuevo Gobierno derechista que había sido elegido por las Cortes salidas de las urnas en 1933. El «Estado catalán» duró diez horas, el tiempo que Companys y sus otros líderes tardaron en ser arrestados. «Aun perdiendo, Cataluña ganará porque necesita mártires que le aseguren la victoria definitiva el día de mañana», dijo Companys20. Puigdemont bien podría haber dicho lo mismo.

Companys representaba el ala republicana federalista de Esquerra, pero la presión interna le obligaba a hacer gala de sus credenciales nacionalistas. El partido contenía también un ala ultranacionalista encabezada por Josep Dencàs y Miquel Badia, fundadores de un movimiento de juventudes y de una milicia que

vestía uniformes de color verde oliva. Companys había nombrado a Dencàs —un médico de Vic— consejero del Interior del Gobierno autónomo, y había colocado a Badia al frente de la Policía de la Generalitat. Ambos mantenían una pugna criminal con los anarquistas. Según escribió Gerald Brenan en *El laberinto español*, su obra clásica sobre los orígenes de la Guerra Civil española publicada en 1943, el movimiento de Dencàs «representaba al nacionalismo catalán en su forma más intransigente: de hecho, era el fascismo catalán»[21]. Dencàs le dijo al cónsul italiano que él estaba «militarizando» a la juventud catalana y que sus milicias eran «escuadras de acción de pura esencia fascista»[22]. Otros historiadores posteriores han matizado lo que Brenan escribió en su día. A juicio de Ucelay-Da Cal, por ejemplo, nunca existió un fascismo catalán organizado, pero sí había un buen número de fascistas catalanes[23].

Companys fue condenado a treinta años de prisión, pero fue indultado al poco de que el izquierdista Frente Popular ganase las elecciones de 1936. De su triunfal regreso dio fe Manuel Chaves Nogales, extraordinario periodista español de los años treinta, cuyas crónicas desde Barcelona en aquel marzo de 1936 suenan hoy inquietantemente actuales. Escribió entonces: «Un millón de personas en las calles. Ni un solo guardia. El espectáculo era bonito». Lo mismo podría decirse de las manifestaciones de la Diada. Chaves consideraba que el nacionalismo catalán era un movimiento sentimental: «Reconozcamos que Cataluña tiene esta virtud imponderable: la de convertir a sus revolucionarios en puros símbolos, ya que no puede hacer de ellos perfectos estadistas». Como otros contemporáneos suyos, él opinaba que los catalanes más capaces se dedicaban a la empresa privada y que, debido a ello, la región contaba con líderes políticos poco válidos: «Acaso [en Cataluña] tendría alguien que preocuparse de rellenar el tiempo con una tarea que tal vez no sea del todo superflua: la de gobernar, la de administrar, la de hacer por el pueblo algo más que ofrecerle ocasión y pretexto para estos deslumbrantes espectáculos». Esto se podría haber escrito sobre Cataluña en cualquier momento de la última década. Chaves concluía afirmando que «el separatismo es una rara sustancia que se utiliza en los laboratorios políticos de Madrid como reactivo del patriotismo, y en los de Cataluña como aglutinante de las clases conservadoras»[24].

De Franco a Pujol

Las ilusiones del nacionalismo catalán volaron brutalmente por los aires con el golpe fallido del 18 de julio de 1936 contra la República encabezado por Franco y por otros generales que

desencadenó la Guerra Civil en España. Como en tantos otros sucesos previos, la contienda sacó a relucir las divisiones internas en Cataluña. Barcelona fue escenario de aquella revolución proletaria liderada por los anarquistas y otros grupos de izquierda que con tanta viveza describió Orwell. La Generalitat de Companys fue básicamente una observadora pasiva de aquellos hechos; su continuidad fue tolerada por un Comité Central de Milicias Antifascistas que fue el que ostentó el poder real hasta que, al año siguiente, se lo arrebataron el Comintern y el Gobierno republicano de Madrid en aras de que no decayera el esfuerzo de guerra contra Franco. Unos cuatrocientos miembros de la Lliga se contaron entre las (aproximadamente) seis mil personas asesinadas por los milicianos antifascistas en Cataluña entre julio y diciembre de 1936. Temiendo por sus vidas, en Cataluña, los carlistas, los falangistas y los monárquicos o bien se pasaron al bando franquista o bien partieron hacia el exilio25. Cambó huyó a la Italia de Mussolini. Al Gobierno del Frente Popular en Madrid no le podía interesar menos la suerte del nacionalismo catalán en aquellos momentos. «No estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino —escribió en 1938 Juan Negrín, presidente del Gobierno republicano—. No hay más que una nación: ¡España!»26.

Cuando las fuerzas franquistas invadieron Cataluña al final de la guerra, en enero de 1939, unos cuatrocientos mil refugiados, demacrados, hambrientos y ateridos, cruzaron la frontera con Francia camino del exilio. Otros jalearon la entrada del ejército victorioso en las calles de Barcelona. Muchos esperaban que Franco liquidase a la izquierda, pero reconociese en el nacionalismo catalán a un aliado natural. Pero, en vez de eso, la victoria franquista supuso la clausura —durante décadas— del ciclo que se había iniciado con la Renaixença. Joan Estelrich, escritor cercano a Cambó, escribió en su diario personal: «Hace un año, el día de la liberación, toda Cataluña unánime estaba por Franco y el Movimiento; era el momento para emprender una política de conciliación moral, de integración española. Después han venido las decepciones; toda Cataluña se siente, con razón o sin ella, hostilizada»27. Sin duda, había cierta exageración en esas palabras, pero sirven igualmente para dar al traste con el mito de que Cataluña y el nacionalismo catalán eran unánimemente antifranquistas y antifascistas. Nada más lejos de ello.

Al final, Franco y sus generales nacionalistas españoles hicieron gala de una particular animosidad contra el nacionalismo catalán, que consideraban traidoramente divisivo. Companys, apresado por la Gestapo en la Francia ocupada por Alemania, fue devuelto a España y

fusilado tras proceso sumario en las instalaciones del Castillo de Montjuïc, cuartel militar desde el que se domina la vista de toda Barcelona. A la represión que la dictadura franquista impuso en toda España (véase el capítulo 5) se añadió en Cataluña el desmantelamiento del aparato cultural del catalanismo. Era como si se volviera a repetir lo de 1714, solo que agravado. Se prohibió el uso del catalán en todos los contextos públicos. Incluso se castellanizaron los nombres de pila: quienes se llamaban Jordi pasaron a llamarse Jorge, las Dolors pasaron a ser Dolores, etcétera.

Se tardó décadas en reconstruir el nacionalismo catalán. Como ya ocurriera en el siglo XIX, ese proceso se inició en el plano de la cultura antes de pasar al de la política. En 1962, se inauguró en Barcelona una editorial de libros en catalán, llamada precisamente Edicions 62; seguirían una librería especializada en esa misma lengua y la enseñanza de esta (como si fuera un idioma extranjero) en la Universidad de Barcelona, así como en algunos institutos de secundaria. La Iglesia católica y, en particular, el monasterio benedictino de Montserrat y su abad, Aureli Maria Escarré, tuvieron especial importancia en el incipiente renacer cívico del catalanismo durante esos años. Escarré cobijó y promovió una organización de catalanistas católicos[28]. Uno de sus miembros era quien posteriormente sería la figura central en Cataluña durante el cuarto final del siglo XX: Jordi Pujol. Hijo de un empresario que había ganado dinero, en parte, eludiendo los controles cambiarios, Pujol estudió medicina y trabajó como representante de una compañía farmacéutica de la que su padre era accionista. Ese trabajo le permitió recorrer toda Cataluña en coche y hacerse así una idea muy detallada de la región, además de establecer una buena red de contactos. Pujol, hombre tan bajo en estatura como grande en ambición, alcanzó por primera vez protagonismo público en parte debido a la Policía franquista. En 1960, durante un concierto en el Palau de la Música de Barcelona —templo histórico de la Renaixença y, como tal, asociado al renacimiento de los cantos populares— al que asistían varios ministros de Franco, un grupo de activistas comenzó a entonar el *Cant de la Senyera*, uno de los himnos oficiosos, y por entonces prohibidos, del catalanismo. La Policía cargó violentamente contra ellos y confiscó octavillas redactadas por Pujol. Aunque alertado de su inminente detención, él optó por no huir. Tras ser arrestado, torturado y juzgado, cumplió dos años de la pena de prisión de ocho a la que había sido sentenciado. Ya de nuevo en libertad, él y un grupo de camaradas nacionalistas compraron un pequeño banco, trasladaron su sede a Barcelona y cambiaron su nombre por el de Banca Catalana. Luego usó la faceta

patrocinadora de la entidad como instrumento para tratar de adquirir un papel hegemónico en las actividades culturales locales[29].

A medida que muchas de las prohibiciones del régimen franquista fueron levantándose a lo largo de la década de los sesenta, dio la impresión de que el nacionalismo conservador católico de Pujol iba quedando arrinconado por otras corrientes políticas. Un frente liderado por los comunistas pasó a ser la principal organización antifranquista en Cataluña. Barcelona se convirtió por aquellos años en la capital cultural de España, y en el centro de la edición (en español), del arte y del disentimiento, un fenómeno que poco se podía atribuir al catalanismo. En las elecciones generales de 1977, los vencedores en Cataluña fueron los socialistas. Y fue Josep Tarradellas, un republicano y antiguo miembro del Gobierno de Companys, quien pactó con Adolfo Suárez la restauración de la Generalitat. Pero Pujol supo moverse con astucia y negoció con el Gobierno central el nuevo Estatuto de Autonomía, que se aprobó en 1979. Comparado con el de 1931, este otorgaba a la Generalitat competencias más amplias en educación, cultura, política lingüística y sanidad, aunque menores en orden público y justicia. Fijaba el catalán y el español como lenguas cooficiales y tomaba la Constitución como referente para definir a Cataluña como «nacionalidad», en vez de como nación.

Pujol había fundado un partido en 1974, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que pronto formó coalición con Unió Democràtica de Catalunya (UDC), un partido democristiano. La formación resultante, CiU, se hizo sorprendentemente con la victoria en las primeras elecciones autonómicas, las de 1980. Pujol se convirtió entonces en presidente de la Generalitat y ya no dejaría de serlo en los veintitrés años siguientes. Su proyecto político se definía por la fórmula *fer país,* «hacer país». Había asimilado dos importantes lecciones del pasado. La primera era su aversión al aventurerismo político: él era decididamente pragmático. En vez de agitar las aguas, prefería obtener ventajas de Madrid en todo lo que fuera posible. Ese enfoque es lo que terminó conociéndose como *peix al cove* (literalmente, «pescado en la cesta»). Cuando, primero, Felipe González y, más tarde, José María Aznar necesitaron del apoyo parlamentario de CiU en Madrid, Pujol se lo proporcionó encantado. Su precio fue la obtención de competencias adicionales para la Generalitat. En un acuerdo negociado en 1996 entre Mariano Rajoy y Pujol y conocido como Pacto del Majestic (por el hotel barcelonés en el que se selló), Aznar accedió a transferir competencias policiales a la Generalitat, lo que permitió el despliegue integral del cuerpo de los Mossos d'Esquadra. Pujol rechazó las repetidas invitaciones de los

sucesivos presidentes españoles a integrarse en el Gobierno central aportándole ministros de CiU. Su modelo no era el de Cambó, empeñado en reformar España desde Cataluña, sino el de Prat de la Riba. Por similares razones, Pujol nunca disimuló el poco entusiasmo que le producía la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona, considerados por muchos un verdadero éxito transformador tanto para la ciudad como para España en general.

La segunda lección que Pujol había asimilado bien tenía que ver con la importancia de esforzarse por ganarse el apoyo de la clase obrera —y, en especial, de su amplio componente demográfico inmigrante— para la causa del nacionalismo catalán. Para él, esto no era solo una cuestión de políticas sociales, sino también de identidad. En los años sesenta, Cataluña había experimentado una nueva oleada de rápido crecimiento industrial. El régimen franquista eligió instalar una gran fábrica automovilística de SEAT en Martorell, en el valle del Llobregat. Durante esos años, llegaron muchos inmigrantes de Andalucía, Murcia, Extremadura y Galicia. Pujol había escrito en 1968 que estos eran «hombres que proceden de tierras nacional y socialmente dislocadas. […] Los inmigrantes también necesitan, y también tienen derecho, a disponer de comunidad nacional. Y en Cataluña esta comunidad nacional es la catalana». La labor del nacionalismo debía consistir, pues, en «la defensa, el fortalecimiento y el perfeccionamiento de la personalidad nacional de Cataluña»[30].

La lengua y la política

La lengua catalana es el corazón del proyecto nacionalista. Los lingüistas nos explican que un idioma tiene dos funciones básicas: es un medio de comunicación y es también una herramienta con la que forjar una identidad común. Pujol era muy consciente de ello. «Un pueblo es un hecho de mentalidad, de lengua, de sentimientos —escribió—. Es un hecho histórico, y es un hecho de etnicidad espiritual. Por último, es un hecho de voluntad. En nuestro caso, sin embargo, es, en un importante sentido, un logro de la lengua»[31]. El catalán no es un dialecto, como sostenían las autoridades franquistas. Desciende del latín, como el castellano, aunque por una vía independiente de la de este último. Y, concretamente, desciende de una versión posterior (y más demótica) del latín que esa otra lengua de la clase alta, más formal, que, con algunos aditamentos arábigos, terminaría por dar lugar al español[32]. El catalán tiene una literatura propia, aunque esta fue bastante escasa hasta la llegada de la Renaixença decimonónica. Hasta entonces, su figura más sobresaliente había sido Ramon Llull (1235-1316), extraordinario monje y filósofo

mallorquín que escribió una enciclopedia y varias novelas en catalán, y entabló un diálogo erudito con pensadores islámicos.

La piedra angular de la política lingüística de Pujol era la inmersión total en catalán, que es hoy la única lengua instrumental de enseñanza en todos los centros educativos públicos de primaria y de secundaria en virtud de una ley autonómica de «normalización lingüística» que data de 1983 y que fue apoyada también por los socialistas catalanes. Como si de un reflejo invertido de la política franquista se tratara, ahora es el castellano el que se enseña como idioma extranjero en las aulas de Cataluña. En un primer momento, este enfoque concitó un amplio consenso, ya que se consideraba una manera de reparar el daño lingüístico infligido por Franco y de conseguir que la sociedad fuera realmente bilingüe. Y, conforme a sus propios objetivos iniciales, la ley ha sido un éxito: según datos de la Generalitat de 2019, un 81,2 % de los habitantes de la comunidad autónoma saben hablar catalán y un 65,3 % saben también escribir en ese idioma (frente a solo un 31,5 % en 1981). Y eso que, entremedias, hubo también una fuerte oleada de inmigración entre 2003 y 2008, lo que significa que más de un tercio de la población catalana actual nació fuera de Cataluña. Según la Generalitat, el catalán es la lengua materna del 31,5 % de los habitantes, mientras que el español lo es del 52,7 % (lo era del 55,1 % en 2013). Aun así, y como reflejo de la política educativa, el catalán es la «lengua de identificación» del 36,3 % de las personas residentes en Cataluña, mientras que el español lo es para el 46,6 %[33]. Por tanto, aunque el catalán no corre peligro, el hecho de que el español continúe siendo el idioma preponderante hace que, para los nacionalistas catalanes, la política lingüística sea una especie de tótem innegociable, a pesar de la controversia en que se ve envuelta en la actualidad.

Una pequeña minoría de madres y padres han manifestado su descontento por no poder escolarizar a sus hijos en español. El Artículo 3 de la Constitución dice que el castellano es la lengua oficial del Estado: «Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla», sin que ello obste para que «las demás lenguas españolas se[a]n también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos». El Tribunal Constitucional ha sentenciado que «el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza»[34]. El Tribunal Supremo español y el Superior de Justicia de Cataluña han entendido —de manera un tanto arbitraria— que ese fallo obliga a que al menos un 25 % de la enseñanza (y una asignatura del currículo) se imparta en castellano. Pero esto no se aplica en la práctica, según la Asamblea

por una Escuela Bilingüe en Cataluña. Según un análisis reciente de las prácticas lingüísticas de dos mil quinientos centros educativos catalanes, no hay enseñanza de castellano en preescolar y este solo se enseña una media de dos horas semanales en primaria y tres en secundaria[35].

En el último decenio, unas ochenta familias han obtenido de la Justicia resoluciones que obligan a los centros donde estudian sus hijos a cursar al menos un 25 % de los contenidos en castellano. En algunos casos, esos alumnos han sido objeto de marginación e insultos; en otros, las escuelas concernidas han optado por aplicar las órdenes judiciales sin llamar mucho la atención. En noviembre de 2021, el Tribunal Supremo dictaminó que la mencionada cuota del 25 % debía aplicarse en todas las escuelas catalanas, una resolución que la Generalitat dijo en un primer momento que no acataría. Pero la realidad es que es la Justicia, y no el Gobierno autonómico, la que, en esta materia, parece estar más en sintonía con las preferencias de una mayoría del electorado. Según un proyecto de investigación para el que se encuestó a mil quinientos catalanes en octubre de 2021, el promedio de los encuestados quería que más o menos la mitad del tiempo lectivo fuese en catalán, una cuarta parte en castellano y una quinta parte en inglés. Incluso los votantes independentistas decían querer que una quinta parte de la enseñanza fuese en español[36].

La Generalitat subvenciona la publicación de libros, diarios y revistas en catalán. Pero, en Cataluña, se venden más libros en español que en catalán: solo un 26 % de las ventas editoriales en 2017 fueron de títulos en este último idioma, aunque esa cifra se eleva hasta el 48 % si se incluyen los libros de texto escolares[37]. Muchos de los escritores catalanes más conocidos, como Eduardo Mendoza o Juan Marsé, por ejemplo, han optado por escribir principalmente en castellano. La Generalitat, mientras tanto, continúa quejándose de que la democracia española minimiza el catalán. Las intervenciones de los diputados en el Congreso (aunque no así en el Senado) tenían que ser en castellano hasta que se cambió el reglamento en septiembre de 2023 para permitir hablar en catalán, euskera o gallego. Son muy pocos los españoles de fuera de los territorios de habla catalana que aprenden este idioma. Hasta hace bien poco, el Instituto Cervantes ignoraba a los escritores en catalán. El PP ha recurrido la política lingüística catalana ante los tribunales. La oposición conservadora manifestó también su indignación cuando, en 2020, el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez suprimió de la nueva ley educativa nacional toda referencia a la enseñanza del castellano en las comunidades autónomas que poseen una segunda lengua oficial. Fue

una supresión realizada a instancias de Esquerra: Sánchez buscaba los votos de los diputados de la formación independentista para aprobar los presupuestos. El PSC, mientras tanto, se pronuncia a favor de que se apliquen las resoluciones judiciales.

Los nacionalistas catalanes tienen seguramente razón cuando recuerdan que su lengua es una fuente de riqueza cultural para España. Pero, al mismo tiempo, su política de protección del catalán se ha llevado a extremos de rigidez e intolerancia. Se ha multado a comercios por rotular en castellano. Algunos altos cargos catalanes se niegan infantilmente a responder preguntas de los periodistas cuando se las formulan en español. Cataluña se arriesga así a dejar pasar las grandes oportunidades que ofrece la lengua castellana, que es la materna de unos 489 millones de personas en todo el mundo y que hablan un total de 585 millones, según el Instituto Cervantes[38]. «Si Barcelona quiere seguir siendo la capital del libro en español, algo tiene que hacer», comentaba en 2018 Ricardo Cayuela, director editorial de Penguin Random House en México. Cayuela, quien, por cierto, es bisnieto de Companys, añadía también que «es un suicidio cultural no sentir como propios a Borges, Vallejo o Neruda solo por el conflicto artificial con Madrid»[39].

Lo que hace que el problema de la lengua esté tan politizado es que ambos bandos enfrentados en Cataluña saben que el apoyo a la independencia es mayor entre los hijos e hijas de padres catalanohablantes. La promoción —o imposición— del idioma se vincula con una política cultural orientada a la construcción de la nación catalana. Para los observadores críticos, las clases de historia en los colegios y los institutos son puros ejercicios de adoctrinamiento. El Gobierno central nunca ha podido demostrarlo, pero, en la práctica, el sistema nacional español de inspección educativa no es efectivo en Cataluña. Los medios de comunicación públicos catalanes —fundamentalmente, TV3 y Catalunya Ràdio— emiten exclusivamente en catalán y fomentan la cosmovisión nacionalista. Para muchas personas de la Cataluña rural, estos medios son su única fuente de noticias (aparte de las redes sociales, siempre sesgadas y tendentes a confirmar los puntos de vista de sus usuarios). En TV3, «uno no puede salir hablando en español a menos que sea Lionel Messi», se me quejó un día Francisco Moreno, editor barcelonés[40]. Cuando se inauguró a principios de los años ochenta, TV3 aspiraba a ser una televisión de calidad y servicio público. Pero pronto fue captada para la causa nacionalista. Su presupuesto anual a cargo del contribuyente es de 245 millones de euros y tiene a más de dos mil cien personas en plantilla. Pero la radicalización de su cobertura informativa durante el *procés* le

hizo perder cuota de audiencia en Cataluña, donde ya solo era del 14 % en 2021 frente a los niveles del 20 al 30 % en los que se había movido en el pasado. Incluso el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), un organismo regulador instituido por la Generalitat, ha criticado la poca imparcialidad de la cadena. El CAC constató en un informe que, entre marzo y agosto de 2020, TV3 había entrevistado a setenta y siete políticos favorables a la independencia, pero solo a veinticinco contrarios a ella. Asimismo, realizó ciento treinta entrevistas a miembros de la Generalitat, y solamente cuatro a representantes del Gobierno español[41].

Para los nacionalistas, la meta última consiste en crear un nuevo Estado-nación que abarque la totalidad de los *països catalans*, es decir, aquellos territorios donde la lengua catalana aún pervive en mayor o menor medida. Entre ellos se incluirían el Rosellón y la Cerdaña (en Francia), así como las islas Baleares y Valencia (aun cuando en cada uno de esos territorios se hablan versiones propias y particulares del catalán). El mapa del tiempo en TV3 muestra el conjunto de estos *països catalans*. En el pronóstico meteorológico, es habitual que se informe a los espectadores de si lloverá o hará sol en Perpiñán, pero no se diga nada del tiempo que hará en Madrid o en Zaragoza[42].

Los españoles harían bien en mirar el ejemplo de Quebec, donde las medidas adoptadas a lo largo del último medio siglo para salvaguardar la posición del francés, tanto en dicha provincia como en el conjunto de Canadá, han desempeñado un importante papel en la desmovilización del separatismo quebequés. Reconocer el catalán como lengua dominante en el sistema educativo es un precio muy pequeño que pagar por mantener a Cataluña dentro de España. A su vez, la Generalitat podría ser más flexible en cuanto a permitir la enseñanza y el uso público del castellano sin que ello signifique comprometer el principio de la inmersión lingüística. Proteger una lengua y un patrimonio cultural no tiene por qué convertirse en un arma de la política identitaria…, salvo, claro está, que precisamente de eso se trate.

De minoría a multitud

En parte, lo que transformó a la «minoría en multitud» y al autonomismo en independentismo fue el éxito de las iniciativas de construcción nacional promovidas por Pujol y la llegada de nuevas generaciones que no tenían ya ningún recuerdo adulto de la dictadura ni de la Transición. Pero la transformación tuvo mucho que ver, también, con el malestar general provocado por las políticas de austeridad, y con una sucesión de accidentes políticos y de titubeos

torpes e insensibles de los Gobiernos tanto de Barcelona como de Madrid. Uno de los primeros percances tuvo su origen en la rivalidad entre Pujol y Pasqual Maragall, el exitoso alcalde socialista de Barcelona entre los años 1982 y 1997, quien había organizado los Juegos Olímpicos de 1992. Cataluña se había acostumbrado a que los socialistas fuesen el partido más votado en las elecciones generales pero que la CiU de Pujol fuese la fuerza dominante en las autonómicas. En los comicios catalanes de 2003, los primeros en los que Pujol no se presentaba a la reelección, Maragall se mostró decidido a desbancar a CiU del Gobierno autonómico. Para ello trató de competir en el terreno del nacionalismo catalán con la promesa de dotar a Cataluña de un nuevo y ampliado Estatuto de Autonomía. En aquel momento, no había ningún clamor público a favor de tal iniciativa. De hecho, era algo a lo que Pujol, muy poco amigo del aventurerismo político, se había opuesto. «Abriríamos un proceso de consecuencias inciertas», declaró en 1996 [43]. Y qué razón tenía.

El PSC de Maragall derrotó a la CiU de Artur Mas, aunque solo por siete mil votos de diferencia (apenas un 0,3 % de los emitidos en aquella jornada). Para obtener una mayoría en el Parlamento autonómico, Maragall formó coalición con Esquerra (y con una formación de izquierda más pequeña). Era la primera vez que un partido declaradamente independentista entraba en el Gobierno catalán. Al hacer del nuevo estatuto su prioridad, Maragall perdió la oportunidad histórica de ofrecer un proyecto coherente para Cataluña que rivalizase con el de Pujol. En vez de eso, se embarcó en lo que Jordi Amat, ensayista catalán, ha llamado una «conjura de los irresponsables»[44]. El borrador del nuevo Estatut fue redactado por un equipo presidido por Carles Viver Pi-Sunyer, exmagistrado del Tribunal Constitucional que, en 2017, sería también el redactor de las tristemente famosas leyes de «desconexión». El texto estatutario era un documento ciertamente voluminoso de doscientos veintitrés artículos (para el Estatuto de 1979 habían bastado cincuenta y siete)[45]. Pretendía introducir una reforma constitucional por la puerta de atrás que instaurara en España algo parecido a una confederación (o asociación de Estados soberanos). Afirmaba como principio fundamental que Cataluña poseía unos derechos históricos que la legitimaban para aumentar su soberanía y sus competencias, así como para establecer una relación bilateral con el Estado español.

En el mitin final de campaña de Maragall en 2003, Rodríguez Zapatero, el líder del PSOE, prometió apoyar el nuevo Estatuto que aprobara el Parlamento catalán. En aquel momento, nadie esperaba que Zapatero ganase las siguientes elecciones generales; como

ocurriría unos años después con David Cameron y el referéndum del Brexit, fue una promesa que hizo fundamentalmente con fines políticos internos y que no creía que tuviese que cumplir. Sin embargo, el PSOE ganó las elecciones celebradas tres días después de los atentados de Madrid de 2004 (véase el capítulo 1) y, como a Cameron después de él, a Zapatero lo obligaron a no faltar a su palabra. El PP organizó entonces una campaña pública contra el nuevo Estatut. Pero los nacionalistas catalanes reaccionaron organizando una manifestación en la que, por vez primera, abrazaron la idea de un «derecho a decidir» soberanista. Presionado, Zapatero negoció con Artur Mas unas enmiendas al texto estatutario salido del Parlament para su tramitación posterior de rigor en las Cortes Generales, lo que solo sirvió para alejar a Esquerra. Tras su aprobación en el Parlamento nacional, el Estatut fue sometido a referéndum en Cataluña, donde reinaba un clima de indiferencia ciudadana bastante generalizada ante aquel proyecto. La participación en el plebiscito fue de solo un 48 % del electorado censado; el 74 % de los votantes se decantaron por el sí. Al poco tiempo, Maragall anunciaría que se retiraba de la política, porque se encontraba en las primeras fases de la enfermedad de Alzheimer.

Un factor que contribuyó muy especialmente a que la saga del Estatut se convirtiera en un acelerador del sentimiento independentista era un defecto de diseño en la Constitución de 1978, que no obligaba al Tribunal Constitucional (TC) a fallar sobre la constitucionalidad del texto estatutario antes de que fuera sometido al plebiscito del pueblo catalán. De hecho, el TC emitió su dictamen cuatro años más tarde. Su sentencia declaró inconstitucionales catorce artículos del Estatut: básicamente, aquellos que proponían la creación de un poder judicial autónomo en Cataluña. También modificó otras disposiciones estatutarias. En el artículo que proclamaba el catalán como «la lengua de uso normal y preferente», borró lo de «y preferente». Confirmó la validez del preámbulo, en el que se declara que Cataluña es una nación; pero matizó que se trataba de un término histórico y cultural, carente de validez jurídica[46]. Los secesionistas alegaron entonces que el alto tribunal español había actuado de forma ilegítima y que, con su sentencia, había justificado sus reivindicaciones independentistas. Cuando las repúblicas bálticas obtuvieron la independencia a principios de los años noventa del siglo XX, Pujol había comentado que «Cataluña es como Lituania, pero España no es como la URSS». Sin embargo, dos décadas después, decidió tirar la toalla autonomista. Antes, el nacionalismo tenía argumentos de peso para rechazar la independencia, escribió. «Ahora

ya no los tiene»[47].

Perdiendo frente a Madrid

En 2007, la Plataforma por el Derecho a Decidir, una entidad soberanista formada durante el conflicto del nuevo Estatut, organizó una gran manifestación de protesta contra los problemas de la red ferroviaria regional y de cercanías de Barcelona. Una de las características definitorias del *procés* fue su tendencia a mezclar lo mundano con lo trascendental. La crisis financiera de 2008 convirtió la cuestión de la fiscalidad en un gran motivo de agravio para Cataluña, sobre todo, después de que Artur Mas pasara de ser un adalid de la austeridad a un Moisés liderando a su pueblo hacia la tierra prometida. En el sistema de financiación autonómica español, Cataluña transfiere más ingresos tributarios hacia el resto del país de lo que luego recibe de este en gasto e inversión públicos, algo que se debe al hecho de que el sistema se basa en el principio de solidaridad, por el que las regiones más ricas transfieren renta hacia las más pobres. Pero muchos catalanes se quejaban ya entonces de que esas transferencias eran desproporcionadas. La Generalitat también reclamaba que Cataluña recibía una cuota de inversión pública menor de la que le correspondía.

Andreu Mas-Colell, uno de los economistas españoles más brillantes y asesor económico de Mas, quería que Rajoy se aviniera a modificar las reglas de la financiación autonómica. Concretamente, propuso que Cataluña tuviese un mismo «pacto» fiscal que el del País Vasco y Navarra, dos comunidades autónomas que recaudan ellas mismas los impuestos del Estado y luego transfieren una cantidad acordada con el Gobierno central y se quedan con el resto. Al tratarse de dos de las regiones más ricas de España, su sistema particular viola el principio de solidaridad entre comunidades autónomas, pero lleva vigente desde la década de 1830 y ningún Gobierno democrático se ha atrevido a derogarlo. «Para nosotros, lo esencial era disponer tanto de la capacidad de recaudar nuestros propios impuestos como del poder para decidir sobre todos los recursos que se gastaran en Cataluña», me explicó Mas-Colell. Pero Rajoy, inmerso como estaba por entonces en la lucha por evitar un rescate de la economía española por parte de la UE, rechazó esa propuesta de plano. El problema que un sistema así representaba para España era que la economía catalana es mucho mayor que las del País Vasco y Navarra.

En el fondo de esas demandas, latía la angustiosa sensación de que Cataluña ya no era la locomotora de cabeza de la economía española. Al amparo de la Constitución de 1978 y del Estado

autonómico, el resto del país había comenzado a ponerse a su nivel. Ferran Mascarell, antiguo colaborador de Maragall y luego independentista, se lamentó de que Cataluña estuviera «perdiendo peso específico en España y muy probablemente también en el mundo»[48]. Unos meses antes de que el Tribunal Constitucional emitiese su veredicto sobre el nuevo Estatut, todos los principales diarios de la comunidad autónoma publicaron un editorial conjunto titulado «La dignidad de Cataluña», en el que se quejaban de un nuevo centralismo que se avecinaba en España, liderado por el PP. Muchos catalanistas moderados opinaban que se había perdido el impulso inicial de descentralización puesto en marcha por la Transición y que España estaba adoptando un modelo organizativo crecientemente orientado a beneficiar a Madrid.

La columna vertebral de la economía catalana la forman la industria y las empresas familiares medianas, a las que el ingreso de España en la UE abrió nuevos mercados para la exportación. Pero solo unas pocas han terminado convirtiéndose en multinacionales. Barcelona cuenta con una importante base de investigación científica. Pero la globalización ha tendido a favorecer más a Madrid, dotada de una conexión aérea más directa con el continente americano. Las multinacionales españolas —algunas de ellas, antiguas compañías públicas privatizadas, como Telefónica— tendieron a concentrarse en la capital. Y si Barcelona es una ciudad encajada en un espacio limitado entre los montes circundantes y el mar, Madrid cuenta con terreno de sobra para expandirse por la meseta castellana. Desde la época de Aznar, los Gobiernos centrales han favorecido a la capital…, o esa, al menos, es la percepción que se tiene desde Barcelona. La red ferroviaria de alta velocidad (AVE) ha sido una particular manzana de la discordia: su forma radial conecta gran parte de España con Madrid. Pero, desde Cataluña, eso se ve como una discriminación (en el mejor de los casos), cuando no como una conspiración para perjudicar a Barcelona, que hasta 2013 no tuvo su propia línea de tren de alta velocidad hasta la frontera francesa. Barcelona y Valencia, que son la segunda y la tercera ciudades de España por población, respectivamente, siguen sin tener una línea de alta velocidad que las conecte entre sí (todavía está en construcción). Barcelona tenía buenos argumentos para reclamar que se la tratara como «cocapital» de España. «Yo quiero que sea una Múnich, y no una Marsella o una Lyon», me comentó un empresario local con fuerte influencia política en Barcelona. Sin embargo, casi todas las instituciones y organismos del Estado tienen su sede en Madrid o sus inmediaciones, a excepción de la Escuela Judicial (y un supercomputador de titularidad pública

que el Gobierno central también ubicó en Barcelona). Zapatero trasladó en su día el organismo regulador del mercado de las telecomunicaciones a la capital catalana, pero la presencia de esta agencia en Cataluña fue efímera, pues Rajoy la fusionó posteriormente con otra entidad reguladora para crear un nuevo organismo más grande con sede en Madrid.

A la muerte de Franco en 1975, la economía catalana era un 25 % mayor que la de la región de Madrid. En 2018, el PIB de Madrid, con 6,6 millones de habitantes, había superado ya al de Cataluña, con 7,6 millones. El PP, que gobierna en la comunidad madrileña desde 1995, atribuye este crecimiento económico a su política de liberalización, favorable a la libre empresa, que se ha complementado con recortes en la carga tributaria autonómica que totalizan unos 53.000 millones de euros desde 2004. «Creemos que existe una correlación directa entre la reducción de la carga fiscal y el crecimiento económico», me explicó Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Economía de la Comunidad de Madrid entre 2019 y 2023. Desde luego, Cataluña es en parte culpable de su declive relativo. La prolongada incertidumbre generada por el proceso independentista y la posibilidad de que Cataluña acabase quedándose fuera de la UE castigaron la confianza empresarial. Pero los catalanes no son los únicos que piensan que Madrid extrae unos beneficios injustificados de la presencia allí de las instituciones nacionales y del Gobierno central, y que sus rebajas de impuestos constituyen un injusto ejercicio de *dumping* fiscal, en palabras del expresidente socialista de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.

El giro populista

En 2014, Pujol dejó caer una verdadera bomba informativa: el patriarca de la Cataluña moderna admitió que su familia tenía cuentas bancarias en Andorra de las que habían ido extrayendo regularmente unos ingresos no declarados. Su comunicado fue una reacción a los avances de una investigación policial sobre las finanzas del clan Pujol durante las últimas décadas. Un juez de la Audiencia Nacional de Madrid terminaría acusando formalmente a Pujol, a su esposa y a sus siete hijos e hijas, de asociación ilícita, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública[49]. Él mismo reconoció que ellos habían abusado de su posición política privilegiada para acumular una fortuna (que, según la unidad de delitos financieros de la Policía, ascendía a unos 290 millones de euros). Pujol afirmó que el dinero que estaba en Andorra era una herencia de su padre (la cual, aun siendo eso verdad, él debería haber declarado a efectos fiscales). Al

menos una parte de aquellos fondos, según la conclusión del juez, procedía de comisiones ilegales pagadas por empresas diversas a cambio de ayuda para la concesión de contratos públicos, la recalificación de terrenos y otros favores de la Generalitat[50]. Uno de los hijos de Jordi Pujol, Oriol, que había entrado en política e incluso había sido secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya, fue condenado en 2019 por tráfico de influencias, cohecho y falsificación documental en una causa relacionada con la concesión de licencias para instalar y dirigir centros de inspección técnica de vehículos en Cataluña[51]. En otro caso paralelo en el tiempo, Fèlix Millet, quien durante cuarenta años había dirigido el Palau de la Música en Barcelona, confesó haber actuado como un canal adicional para el cobro de comisiones por la concesión de contratos públicos de la Generalitat. En su juicio oral, celebrado en 2017, admitió que la comisión acostumbrada era del 4 %, que él se embolsó el 1,5 % y que el resto, hasta el total de 6,6 millones de euros que sumaban los cobros investigados en aquella causa, se destinó a la financiación de Convergència[52]. Aquello condenó políticamente tanto a Artur Mas como a su partido, que terminó cambiando de nombre y pasó a denominarse Partido Demócrata Europeo Catalán, PDeCAT. Puigdemont se desentendió de ese proceso y fundó su propio vehículo político, Junts per Catalunya. Muy atrás quedaba el viejo sueño de una Cataluña que impulsara la «regeneración» moral de España.

Lejos de invitar a la autocrítica, estas revelaciones coincidieron con un giro hacia un creciente populismo en el nacionalismo catalán a medida que este iba evolucionando hacia el separatismo. El populismo, en puridad, implica un método político basado en la definición de un pueblo, un líder y un enemigo. Como ya hemos visto, en el relato independentista, los catalanes aparecían definidos como *un sol poble*; quienes discrepaban de la independencia eran «malos catalanes» o *botiflers*, cuya opinión no se debía tener en cuenta. Quim Torra, editor y antiguo agente de seguros que fue designado por Puigdemont como su sucesor en la presidencia de la Generalitat, escribió en una ocasión que «no es nada natural hablar español en Cataluña. […] Cuando se decide no hablar en catalán, se está decidiendo dar la espalda a Cataluña»[53]. Dicho de otro modo, solo una parte de la población de la comunidad autónoma constituía el verdadero pueblo catalán, y solo esa parte contaba. Tras el referéndum, aparecieron pancartas en las que se podía leer que *«el poble mana, el govern obeeix»* («el pueblo manda, el Gobierno [catalán] obedece»). En lo que respecta a la elección de un líder, ahí estaban Artur Mas —transformado en Moisés— o Carles Puigdemont —que

consiguió hacer de sí mismo la resistencia personificada—. Siempre ha habido un fuerte culto al líder en el nacionalismo catalán, desde Macià hasta Puigdemont. Pujol fundó su propia formación política, pero nunca fue un hombre de partido. Y el enemigo, obviamente, era Madrid o Castilla, igual que lo era «Bruselas» para los *brexiteros*, o «el Pantano» (en referencia a Washington) o «los globalistas» para los seguidores de Donald Trump[54]. «España nos roba» se convirtió en un lema muy popular. En 2013, un instituto de estudios históricos adscrito a la Generalitat incluso organizó un simposio titulado «España contra Cataluña».

El referéndum, un mecanismo al que suelen ser muy favorables los populistas, se convirtió en una obsesión solipsista para un movimiento independentista que parecía acelerar sin freno. Tanto Mas, en su día, como Puigdemont, posteriormente, entregaron a Rajoy sendas listas que incluían otras muchas demandas, relacionadas, sobre todo, con financiación e infraestructuras. El Gobierno central se ofreció a negociarlas. Pero solo había una demanda que importara de verdad, y era la del referéndum. Se siguió reclamando con independencia de si contaba o no con el suficiente apoyo popular, y sin atender seriamente a los condicionamientos políticos en Madrid ni a las prioridades en Bruselas o en Berlín, ni a la probable reacción en todas esas instancias a una acción inconstitucional como la que se proponía. En palabras de Francesc-Marc Álvaro, en esa actitud traslucía la falta de experiencia y de conocimiento respecto a la política madrileña de la que adolecía la nueva generación de líderes nacionalistas, y que tuvo su reflejo recíproco en la ignorancia que en la capital de España imperaba a propósito de los cambios en la realidad política catalana[55]. Parecía ciertamente simbólico que, cuando Rajoy realizaba alguna de sus visitas relámpago a Barcelona, lo hiciera por lo general participando en actos organizados en un hotel de la zona del puerto, como si él, al igual que Francisco Pizarro durante la conquista del Perú, necesitase tener sus barcos cerca por si tuviera que emprender la huida. «El problema es que en Cataluña se quiere hacer política sin gobernar y en Madrid quieren gobernar sin hacer política», comentó Joaquim Gay de Montellà, presidente de la principal patronal catalana en esos tiempos[56]. El PP consideraba que su línea dura contra el separatismo le daba votos en el resto de España.

Esta tendencia populista en el movimiento independentista rayaba en el supremacismo racista en las manifestaciones de desprecio que algunos separatistas dirigían hacia España y hacia el resto de los españoles. A diferencia del vasco, el catalán no es un nacionalismo de

base étnica. Aun así, entre algunos de sus partidarios circulaba cierto relato subliminal de racismo que afloraba en ideas como la de que los catalanes sí que eran europeos, o que Cataluña era «el sur del norte», mientras se daba a entender que los españoles eran africanos o gitanos. El ya mencionado comentario de Mas sobre que los catalanes eran «más germánicos y menos romanos» era típico en ese sentido. Prat de la Riba había escrito que la «raza catalana» era «europea», mientras que la española era «africana» o «bereber»[57]. Junqueras trató una vez de reivindicar —citando de manera errónea un estudio de la Universidad de Róterdam— que los catalanes eran genéticamente diferentes de los demás españoles y más similares a los franceses[58]. En Cataluña era habitual oír alusiones a los andaluces caracterizados como unos gorrones perezosos. «Han gastado cantidades ingentes de dinero en Andalucía y no han conseguido reducir el desempleo», me comentaba quejoso en una ocasión un funcionario de la Generalitat. Jaume, dueño jubilado de una empresa familiar de fabricación de maquinaria, me contó, mientras hacía cola en Vic para votar en el referéndum, que «aquí trabajamos para progresar, mientras que en otras zonas cobran pagas y no trabajan». El racismo era bastante explícito en los escritos de Torra, que había sido director del Centro Cultural del Born y se declaraba admirador entusiasta de Dencàs, el independentista cuasifascista de la década de 1930. En una serie de artículos xenófobos, calificó a los españoles de «carroñeros, víboras, hienas», y de «bestias con forma humana»[59]. Al tomar posesión del cargo de presidente del Gobierno autonómico, se disculpó por aquellas publicaciones, aunque sin insinuar en ningún caso que hubiese cambiado de opinión. Josep Sort, candidato de Junts en las elecciones autonómicas de febrero de 2021, tuiteó a propósito de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona por En Comú Podem (candidatura en la que se encuadraba Podemos en Cataluña) desde 2015, que no era «más que una puta histérica española; haremos limpieza de españoles [en Cataluña], lo prometo». Fue obligado a renunciar a su candidatura[60].

Sería injusto deducir de lo anterior que los sentimientos expresados en estos comentarios eran compartidos por la mayoría de los dos millones aproximados de personas que se pronunciaron a favor de la independencia. El independentismo catalán siempre ha tratado de subrayar su antirracismo. Como también ha ocurrido en el resto de España, la Cataluña del siglo XXI ha absorbido un gran número de inmigrantes procedentes de fuera de la Unión Europea sin grandes fricciones. Y no deja de ser cierto que el resto de españoles se ha abonado con frecuencia a los estereotipos anticatalanes. Pero la cuestión de fondo es que, si bien algunos de esos dos millones tal vez

pensaban que lo que estaba en juego en aquel conflicto era la democracia —como también lo creían muchos partidarios del Brexit —, la realidad es que es imposible negar el carácter identitario del nacionalismo catalán. Y puesto que Cataluña no es —ni nunca ha sido — una colonia, su nacionalismo propio no puede reclamar para sí ninguna superioridad moral sobre el español.

Amartya Sen señaló hace unos años que todos los seres humanos tenemos múltiples identidades relacionadas con nuestro género, nuestro trabajo, nuestras aficiones, nuestras preferencias, etcétera. «La imposición de una identidad supuestamente única es a menudo un componente básico del "arte marcial" de fomentar el enfrentamiento sectario», escribió[61]. Esta es la base de lo que hoy conocemos como política identitaria. En el corazón del impulso independentista late este énfasis divisivo en una identidad catalana unidimensional basada en una lengua. Torra fue explícito al respecto: «El catalanismo ha de basarse en una defensa encarnizada de nuestra identidad y nuestra cultura y del orgullo de ser catalanes»[62].

Si Cataluña de verdad es una nación, no es una nación «milenaria», sino cultural. Dicho de otro modo, la nación catalana se inventó en el siglo XIX gracias al impulso de la Renaixença y del movimiento cultural catalanista. Dichas iniciativas triunfaron porque tenían una materia prima creíble sobre la que fundarse, sobre todo, la lengua catalana. Pero más que en el caso de muchas otras naciones, Cataluña es más bien una nación plural. En sitios como Vic, apenas se nota la presencia del Estado español, reducida a poco más que la oficina de la Policía Nacional donde se expiden carnés de identidad y pasaportes, y la de la Seguridad Social, donde se abonan las pensiones. Pero esto dio a algunos en el movimiento separatista la falsa impresión de que la independencia sería rápida e indolora. El comentario de Prat de la Riba sobre los lazos que «la vida en común desde antiguo» ha creado entre Cataluña y el resto de España sigue siendo tan válido hoy como entonces. Cuando las autoridades autonómicas catalanas me insistían —como solían hacer cuando hablaba con ellas— en que era ya «demasiado tarde» para buscar una solución reformista al conflicto, estaban anteponiendo su sentimiento populista a la racionalidad política.

No existe ninguna razón intrínseca por la que una nación cultural deba contar con un Estado propio. En el mundo hay unas seis mil lenguas, pero solo unos doscientos Estados-nación. Casi todos ellos —con la sola excepción de aquellos donde se ha practicado la limpieza étnica— contienen minorías culturales. Como bien ha escrito José Álvarez Junco, historiador español del nacionalismo,

> [l]a gran pregunta […] es por qué de la existencia de unos rasgos culturales diferenciados debemos deducir que al grupo humano portador de tales rasgos ha de corresponder la gobernación del territorio en el que habita. Parece que de un planteamiento basado en la defensa de unas peculiaridades étnicas o culturales debería deducirse solo una conclusión de tipo cultural: la exigencia de que se respeten, o se fomenten o subvencionen, las expresiones fundamentales de esa cultura.

En el momento en que el grupo nacionalista que insiste en la especificidad cultural de un territorio logre el control político sobre este, «tenderá a eliminar la heterogeneidad cultural que encuentre en la zona que controle», añade Álvarez Junco[63].

Por su parte, al rechazar la idea de que Cataluña es una nación cultural con sus propios rasgos específicos, los nacionalistas españoles se niegan a reconocer la realidad cotidiana que viven —les guste a ellos o no— millones de personas en Cataluña. El resto de España tiene que aceptar que el catalanismo es un sentimiento legítimo y no inherentemente subversivo. Lo mismo puede decirse, aunque a escala algo más pequeña, del caso de los vascos. Y si no quiere perder legitimidad democrática a largo plazo, el Estado-nación actualmente existente en España tendrá que funcionar mejor para todos sus ciudadanos y ciudadanas, incluyendo a todos esos millones de catalanes y vascos. Eso, a su vez, significa aceptar que España no tiene la misma uniformidad cultural y política que Francia, por poner un ejemplo, por mucho que este último país haya constituido un modelo muy deseado —aunque frustrantemente inalcanzable— para cierta élite política en España. A fin de cuentas, esta diversidad española es un resultado de su historia y de su geografía.

4

Por qué España no es Francia

La pequeña localidad de Frómista, perdida en la monótona y parda llanura del norte de Castilla, debe su puñado de iglesias antiguas a su ubicación en plena ruta de peregrinaje medieval hacia Santiago de Compostela. Pero está situada también junto a otra arteria de comunicaciones. En las afueras del pueblo hay una impresionante serie de esclusas del canal de Castilla, un ambicioso proyecto concebido a mediados del siglo XVIII con el propósito de conectar los trigales castellanos con el puerto de Santander. Su construcción comenzó en 1753, pero se vio interrumpida en numerosas ocasiones por falta de fondos. En 1831, la Corona, siempre corta de efectivo, decidió privatizar el proyecto. Hacia la década de 1850, un buen número de barcazas surcaban los aproximadamente doscientos kilómetros del canal, dividido en tres ramales. Pero jamás llegó a Santander, pues, para ello, habría sido necesario perforar túneles en la cordillera cantábrica. Además, la inauguración de una línea de ferrocarril con un recorrido paralelo al ramal principal —el que pasa por Frómista— puso fin a la viabilidad económica del canal antes incluso de que se hubiera podido construir del todo.

Durante la época dorada del Imperio español, el trigo y el ganado lanar otorgaron a Castilla un predominio económico (y demográfico) sobre el conjunto de la península ibérica. A partir del siglo XVIII, sin embargo, la región castellana perdió terreno económico frente a Cataluña, el País Vasco y las áreas costeras en general. Los tejidos catalanes y el hierro vasco fueron pioneros de la revolución industrial española. Las naranjas valencianas y los vinos de Jerez prosperaron como negocio gracias a la exportación. Todos ellos se beneficiaron de su acceso directo a los puertos y al transporte marítimo. Castilla, sin embargo, se enfrentaba a serios obstáculos geográficos en ese sentido, pues es un territorio alejado del mar en todas las direcciones, y la separan de él, además, importantes cadenas montañosas. Después de Suiza, España es el país más montañoso de la Europa occidental; es, además, extenso en comparación con la mayoría de sus vecinos. Todo esto retrasó la formación de un mercado nacional. El canal fue una especie de esfuerzo quijotesco encaminado a vencer esos obstáculos y a conseguir un crecimiento económico más equilibrado desde el punto de vista geográfico. Ese desequilibrio continuado acabó teniendo una repercusión fundamental en el desarrollo español, como explicará este capítulo sobre la relación entre el Estado, la población y el territorio

durante el periodo formativo crucial de la nación española moderna, entre 1808 y 1936.

Además de sus dificultades en materia de transportes, el cultivo del cereal en Castilla era ineficiente; sus tierras eran improductivas y padecían una progresiva despoblación. Antonio Machado, el gran poeta español de principios del siglo XX, supo captar magistralmente el melancólico declive iniciado doscientos años antes:

> Castilla miserable, ayer dominadora,
> envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora.
> ¿Espera, duerme o sueña?
> […] Sobre sus campos aún el fantasma yerra
> de un pueblo que ponía a Dios sobre la guerra[1].

Pero Castilla retenía el poder político. Mientras otros centros urbanos comenzaban a crecer, Madrid seguía siendo la capital de un imperio multinacional. «Solo Madrid es corte», rezaba el adagio que se hizo popular allí tras un intento fallido del duque de Lerma, el corrupto valido de Felipe III, a principios del siglo XVII, de trasladar la capital a Valladolid, ciudad cercana a su pueblo natal. Pero aquel dicho tenía un corolario: Madrid era la corte… y poco más. Su población en 1750 era de unos ciento cuarenta mil habitantes, frente a los seiscientos mil que en aquellos momentos tenían Londres o París. Como escribiría un siglo después Richard Ford, escritor inglés de viajes, «la capital influye por la ambición más bien que por el afecto del país en general»[2].

Bajo el reinado de Felipe V (1700-1746) y, sobre todo, bajo los de Fernando VI (1746-1759) y su medio hermano Carlos III (1759-1788), los Borbones emprendieron una política decidida de modernización de España con el propósito de frenar su deriva hacia la miseria y de transformarla en una monarquía absoluta centralizada. Libres de los compromisos dinásticos de los Habsburgo que los precedieron, estos monarcas libraron menos guerras, tan caras, en el exterior. Reorganizaron la administración de sus colonias americanas, consiguiendo extraer más ingresos de las élites locales. Para la gestión de los asuntos públicos de España y de su imperio, recurrieron a funcionarios profesionales, muchos de los cuales actuaron inspirados por las ideas de la Ilustración francesa. Esta clase funcionarial de nueva planta fomentó la industria con la instalación de las llamadas «reales fábricas» (de porcelana, cristales y tapices, por ejemplo), situadas principalmente en torno a Madrid. Francesco Sabatini, arquitecto favorito de Carlos III, dejó su sello en la capital con la

creación de un nuevo Palacio Real, elegantes paseos decorados con esculturas clásicas, un Jardín Botánico, arcos ornamentales como la Puerta de Alcalá, y un gran hospital que aloja actualmente el Museo de Arte Reina Sofía. José Moñino, que fue «secretario de Estado» de 1777 a 1792 y ostentaba el título nobiliario de conde de Floridablanca, planificó una red radial de carreteras con centro en Madrid, de la que, en 1788, se habían construido ya mil cien kilómetros y trescientos veintidós puentes. Del optimismo que reinaba en los ambientes oficiales en aquellos años dan buena fe los cartones para tapices que pintó Francisco de Goya con escenas de la vida aristocrática y con retratos de personajes de la corte y de autoridades y pensadores, varios de los cuales eran amigos y mecenas suyos[3].

Si este proceso de construcción y reforma del Estado se hubiese mantenido ininterrumpido durante dos o tres generaciones más, es muy posible que España se hubiera convertido en un país muy diferente. Pero eso no pasó. Para empezar, la calidad del gobierno declinó durante el reinado de Carlos IV (1788-1808). Y, luego, España volvió a verse arrastrada a la guerra. Manuel Godoy, un joven oficial de la Guardia de Corps y favorito de los reyes, pasó a ocupar el puesto de Floridablanca e hizo que España se aliara con el Directorio que gobernaba la Francia posrevolucionaria y declarara la guerra a Gran Bretaña, lo que llevó a la pérdida de la flota española —guardiana del comercio de la metrópoli con sus colonias americanas— en la batalla de Trafalgar. Poco después, en 1807, Napoleón Bonaparte envió un ejército francés a tierras españolas para atacar a Portugal, aliada de los británicos; pero la maniobra derivó enseguida en una invasión a gran escala del territorio español. Bonaparte recluyó a Carlos IV (que acababa de abdicar) y a su hijo Fernando VII en Bayona, e instauró a su propio hermano José en el trono de España. Aquello desencadenó una rebelión popular y siete años de guerra en la que las fuerzas españolas, británicas y portuguesas lucharon contra el Imperio francés. Para Napoleón fue su particular «úlcera española»; la hemorragia de efectivos entre sus tropas (se calcula que murieron unos doscientos mil soldados del bando francés) contribuyó en muy buena medida a su derrota final.

Para España, la guerra y sus ramificaciones supusieron un desastre que la victoria final poco ayudó a paliar. No existen estimaciones precisas del número de víctimas, pero la contienda mató a más de trescientos mil españoles. Goya retrató las matanzas, la crueldad, las violaciones, la destrucción y la miseria en una serie de desgarradores aguafuertes titulados *Fatales consequencias de la sangrienta guerra en España con Buonaparte*, o, simplemente, *Los*

desastres de la guerra[4].

En el vacío de poder que se creó durante la contienda, la América española continental, dolida por las reformas borbónicas, se separó de la metrópoli, aunque aún necesitaría años de combates para que sus diferentes territorios constituyentes alcanzaran sus independencias respectivas. Pero en la propia España, la guerra contra Napoleón se vio enseguida como el acontecimiento que había marcado el nacimiento de la nación moderna, tal como lo demuestra el hecho de que, a partir de la década de 1820, pasara a ser conocida precisamente como la «Guerra de la Independencia». España es un país con una larga historia como tal: ya a principios del siglo XVI, los Reyes Católicos reinaban sobre un territorio que tenía casi las mismas fronteras que las que tiene la España actual, lo que constituye un raro caso de continuidad geográfica en Europa. Pero, en aquellos tiempos, «España» se identificaba principalmente con la monarquía, aun cuando el término se remontara a la época de la Hispania romana y del reino visigodo que precedió a las invasiones araboberebereres. En los siglos siguientes fue adquiriendo progresivamente connotaciones políticas, lingüísticas y culturales. Los Borbones fundaron la Real Academia Española (de la lengua) en 1714, la Real Academia de Historia en 1738 y también otra de bellas artes. Como bien ha explicado José Álvarez Junco, ya «desde mucho antes de 1808 se había ido formando una identidad española, embrión de esa nación que iba a despegar el vuelo a partir de entonces»[5].

La identidad nacional española y el nacionalismo asociado a ella no son, pues, inventos de Franco. Sus orígenes se remontan tan atrás en el tiempo como sus equivalentes franceses, por ejemplo. Si el nacionalismo moderno nace en la batalla de Valmy de 1792, en la que, por primera vez, un ejército ciudadano francés luchó por la entonces revolucionaria idea de la soberanía popular y no por su monarca, la experiencia española de la guerra contra Napoleón presenta ciertas similitudes con esos orígenes del nacionalismo galo. Antonio de Capmany, un historiador económico catalán que falleció en 1813, dijo que la causa por la que se libraba aquella contienda era novedosa: «Es guerra casera, es guerra de nación […] antes que ser de soldados»[6]. De hecho, parte de la resistencia más obstinada con la que se encontraron las fuerzas napoleónicas se dio en Cataluña, que participó de lleno en esta causa nacional. Esta epopeya patriótica y su alto precio en vidas humanas quedaron fijados de forma perenne en el imaginario de las posteriores generaciones de españoles gracias a Goya y un par de cuadros suyos que se exponen en el Prado. En *El 2 de mayo de 1808 en Madrid* se representa el alzamiento del populacho de

la capital contra las tropas de Napoleón. Coraceros y mercenarios mamelucos al servicio del emperador cargan a sablazos contra la muchedumbre que, por la pura fuerza de su número, los están derribando de sus caballos. La terrorífica represalia se representa en *El 3 de mayo de 1808 en Madrid,* cuadro también conocido como *Los fusilamientos.* En él se muestra a los prisioneros alineados en plena oscuridad de la madrugada contra la tapia de un cementerio, mientras un pelotón de fusilamiento francés dispara sobre ellos. Varios han caído ya sobre un mar de sangre. El foco de la escena está puesto en un hombre con camisa blanca, arrodillado, con ojos aterrados y brazos extendidos: la viva imagen de la vulnerabilidad y del desafío. La gente corriente se había convertido en la protagonista de la historia española.

Fatales consecuencias de la sangrienta guerra

La experiencia de aquella guerra en España aportó dos nuevas palabras al mundo. Una fue «guerrilla», para designar a los grupos de combatientes irregulares que se enfrentaban a los franceses. La figura del guerrillero insurgente había hecho así acto de aparición en la vida política española y en ella iba a quedarse. Pero la otra palabra fue «liberal». La guerra y sus quebrantos y fracturas desencadenaron una prolongada y enrevesada lucha por la definición política de la recién reforzada identidad nacional del país en unas circunstancias muy complicadas. Las «fatales consecuencias» a las que se refería Goya fueron ciertamente serias. La guerra y la pérdida de gran parte de su imperio retrasó a España durante décadas. En 1829, el volumen de su comercio exterior seguía totalizando solo un tercio de lo que importaba en 17857. La América española proporcionaba una tercera parte de los ingresos de la hacienda pública en el siglo XVIII; ya no se podía contar con prácticamente nada de aquello. Lo que quedaba era un Estado débil desde el punto de vista financiero y mal dotado para la construcción nacional (peor dotado que el Estado que Napoleón había legado a los franceses del siglo XIX, por ejemplo). Acabaría rehaciéndose, pero aquella flaqueza inicial tendría consecuencias trascendentales.

Mucho de lo que se ha escrito sobre la España de la Edad Contemporánea tiende a dar por supuesto que su historia posterior a 1815 fue oscuramente «excepcional» en comparación con el resto de la Europa occidental: en definitiva, que España fue verdaderamente «diferente». Ante esto, lógicamente, cabe preguntarse qué países eran «normales». Sí, España iba rezagada respecto a Gran Bretaña en cuanto a crecimiento económico y estabilidad democrática. Pero

cuando miramos por debajo de la revuelta capa superficial de inestabilidad gubernamental, sorprende ver lo mucho que, en otros aspectos, la evolución de los acontecimientos en España guardaba paralelismos con la de sus países vecinos. Muchos de los temas de la historia española de ese periodo son comunes al conjunto de la Europa occidental: la pugna entre el absolutismo y el liberalismo, las querellas por la supresión de los privilegios de la Iglesia católica y la venta de sus tierras, el ascenso del nacionalismo, la urbanización y la industrialización, y el aumento de las tensiones sociales y de clase. Al compararlo con el de otros países europeos, el balance de la evolución de esos fenómenos destaca de manera diferenciada en España en tres aspectos muy relacionados entre sí: la pervivencia de las identidades culturales y las lenguas periféricas, la reiteración de guerras civiles y la intensidad del conflicto entre la Iglesia católica y la secularización y el anticlericalismo[8]. Todos ellos nacen de la debilidad relativa del Estado y de lo que el politólogo Juan Linz denominó la falta de «penetración» de ese Estado en la sociedad a través de la educación y de los valores y los símbolos nacionales[9]. No obstante, en la historiografía más reciente se sostiene que, bajo los continuos enfrentamientos políticos, el caos y la corrupción típicos de la España decimonónica, hubo un mayor progreso subyacente del que se quería aceptar hasta hace bien poco. Como ha escrito Adrian Shubert, un historiador hispanista canadiense, «la antigua visión de un país fallido y atrasado ha sido sustituida por otra que ve una auténtica revolución liberal, la cual trajo consigo una ruptura profunda y significativa con el Antiguo Régimen»[10]. Quizá esa fuera una de las razones por la que Franco declaró en su día que «el siglo XIX, que nosotros hubiéramos querido borrar de nuestra historia, es la negación del espíritu español»[11].

Durante la Guerra de la Independencia, la Junta Central de oficiales y notables opuestos a Napoleón convocó a unas Cortes, nominalmente, en representación del recluido rey Fernando, por vez primera desde el siglo XVII. Con trescientos cincuenta representantes de la España peninsular y también de la América española, las Cortes se reunieron en Cádiz de 1810 a 1814. Una estrecha mayoría de sus miembros eran reformistas y se les acabó llamando por ello «liberales» (fue la primera vez que se usó esa palabra como un término político). Los diputados aprobaron una constitución radical en 1812. Inspirada tanto por la Ilustración borbónica (el primer presidente de la Junta fue el ya anciano Floridablanca) como, por irónico que parezca, por algunos de los principios de la Revolución francesa, la nueva Constitución proclamaba en su segundo artículo que «la Nación

Española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona». Y en el tercero, especificaba que «la soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales». En aquella carta magna también se decía que España era una «Monarquía moderada» (entiéndase «constitucional») y que el poder para dictar leyes residía en «las Cortes con el Rey». Proclamaba la católica como la religión perpetua de los españoles y prohibía la práctica de otros credos, pero abolía la Inquisición, decretaba la libertad de prensa, derogaba numerosos privilegios de la nobleza y promulgaba la liberalización de la agricultura, la industria y el comercio. Definía la nación como «la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios», aunque este reconocimiento llegaría ya demasiado tarde para satisfacer a los hispanoamericanos. El texto constitucional incluía también disposiciones relativas a la división de poderes y a la elección de un Parlamento unicameral por sufragio masculino indirecto (y con algunas restricciones censitarias por razón de raza, nivel educativo y estatus económico)[12].

Aquel documento representaba un decidido ataque contra la monarquía absoluta y una sonora declaración de soberanía popular: fue la Constitución más radical de su momento en Europa. Pero no dejaba de ser una carta de intenciones del liberalismo urbano dictada por una reducida minoría ilustrada para un país mayormente rural, pobre y conservador. La mayoría de los españoles eran analfabetos y subsistían a duras penas como pequeños agricultores que trabajaban terrenos a menudo áridos, o como jornaleros estacionales del campo. Los principios de la Constitución se convirtieron enseguida en caballo de batalla. Una vez restablecido en el trono, Fernando VII decretó su derogación. También envió un ejército a ultramar en un vano intento por impedir la independencia de la América española. Cuando se estaba reuniendo otro más en Cádiz, en 1820, uno de sus comandantes, el coronel Rafael de Riego, se amotinó y declaró su fidelidad a la Constitución y su oposición a aquella impopular expedición militar. El Ejército lo secundó y forzó a Fernando a ceder. Fue el primero de muchos «pronunciamientos» (alzamientos —por lo general, incruentos— de oficiales de las fuerzas armadas) que vendrían y que se convertirían en instrumento fundamental para el cambio político en España a lo largo del siguiente siglo y pico[13]. El levantamiento puso de relieve lo mucho que la causa liberal dependía de los militares.

Aquel primer triunfo liberal fue efímero: los liberales terminaron enfrentados entre ellos (otra pauta que se repetiría a lo largo del siglo

XIX español) y divididos entre moderados (favorables a una reforma impuesta desde arriba) y radicales o *exaltados*, partidarios de un cambio más general desde abajo, impulsado por medio de juntas y milicias locales. La restaurada monarquía borbónica francesa envió al poco tiempo un ejército para apoyar a Fernando y sus pretensiones absolutistas. Esta vez no hubo levantamiento popular para contrarrestarlo.

LIBERALES *VERSUS* CARLISTAS Y CONSERVADORES

Una docena de presos de pie en una playa y cogidos de la mano. Unos monjes encapuchados les están vendando los ojos a algunos de ellos. Varios de los presos visten levita, lo que delata su origen social de clase alta. Ante sus graves y abatidos semblantes yacen cuatro de sus camaradas, a quienes el pelotón de soldados situado frente a ellos ya ha fusilado. Este enorme y naturalista lienzo de Antonio Gisbert fue un encargo, en 1888, del Gobierno liberal encabezado por Sagasta, con el fin de ser colgado en el Museo del Prado. Se convirtió desde ese momento en un «poderoso icono liberal», según Miguel Falomir, director del museo. Aunque no tan conocido en el extranjero, merece ser incluido en «la galería de los grandes cuadros dedicados a la historia de España» junto al *2 de mayo* y el *3 de mayo* de Goya, y el *Guernica* de Picasso, según el propio Falomir[14]. Representa la ejecución del general José María Torrijos y sus camaradas en Málaga, donde habían desembarcado en 1831 con la (vana) intención de derrocar el régimen absolutista del rey Fernando. Torrijos, que contaba entonces con cuarenta años de edad, había luchado junto a Wellington. Tras unirse a otros liberales españoles exiliados en Gran Bretaña, los *whigs* británicos los adoptaron tanto a él como a su causa; especial apoyo recibió de un entonces joven Alfred Tennyson (el célebre poeta posromántico inglés) y de los «Apóstoles», un club de estudiantes de la Universidad de Cambridge del que Tennyson era miembro. El pelirrojo alto que está también de pie, tercero por la izquierda desde Torrijos, es Robert Boyd, un antiguo oficial del Ejército británico que donó su fortuna para la expedición del general español. Un siglo antes de la Guerra Civil, los conflictos políticos en España ya inspiraban una activa solidaridad en el extranjero, y muy especialmente en Gran Bretaña.

Tras una «década ominosa» (así fue llamada) de absolutismo reaccionario, los liberales regresaron al poder en 1833, a la muerte de Fernando VII, cuando su viuda, María Cristina, recurrió a ellos para asegurar los derechos dinásticos de su hija Isabel, aún menor de edad, frente a las pretensiones rivales de su cuñado, don Carlos. Los

partidarios de este último no tardaron en levantarse en armas e iniciar la que acabaría conociéndose como Primera Guerra Carlista (1833-1840). Aquella fue una guerra civil de una escala parecida a la de la mucho más famosa contienda de 1936-1939, con la que compartió bastantes características, aunque no su resultado final[15]. El conflicto se saldó con unos ciento cincuenta mil muertos (sobre una población total de 13 millones), lo que, en proporción, no es mucho menos que los trescientos mil (sobre un total de 24,5 millones de habitantes) que dejó la Guerra Civil de un siglo después[16]. Enfrentó a las ciudades liberales contra el campo católico conservador. La principal base social y militar del carlismo no se encontraba solamente en el País Vasco y Navarra, sino también en la Cataluña rural y en las remotas montañas del Maestrazgo, entre Aragón y Valencia. Sus partidarios eran campesinos, artesanos y miembros del clero y la baja nobleza. Defendían la jerarquía, la tradición, el orden social y una economía preliberal, así como los *fueros* locales frente al Estado centralizador[17].

La guerra duró lo que duró, en parte, por la eficacia de las tácticas guerrilleras de los carlistas, sobre todo en los montes vascos, y en parte también, porque los Gobiernos de María Cristina carecían de los recursos necesarios para organizar y equipar un ejército efectivo. La correspondencia de quien se convirtió en comandante supremo de las fuerzas armadas de la regente, Baldomero Espartero, es una letanía de quejas por la escasez de fondos y de tropas con la que tuvo que operar y que le indujo a adoptar una estrategia militar precavida. Venció, pero tardó siete años en conseguirlo. Espartero, el menor de los nueve hijos de un carretero de una pequeña localidad de La Mancha, se convirtió así en un popular héroe nacional, y lo seguiría siendo durante el resto de su longeva vida… salvo para algunos en Barcelona, ciudad que bombardeó para aplastar una revuelta contra los impuestos y el libre comercio[18]. Al final, el número de efectivos movilizado por ambos bandos fue muy elevado. En 1835, el Gobierno contaba con una fuerza de doscientos cincuenta mil soldados, entre los que se incluían unos veintidós mil de fuerzas auxiliares extranjeras (británicas, sobre todo). Un bloqueo naval británico en el norte impidió que llegaran armas a los carlistas, cuyos ejércitos sumaban en 1839 un total de setenta mil efectivos[19]. Los liberales se impusieron gracias, en parte, a ese apoyo exterior. El grueso de las fuerzas carlistas entregó las armas en virtud de la paz firmada en 1839 y conocida como «Abrazo de Vergara» a cambio de la promesa del Gobierno de conservar una versión modificada de los fueros vascos. Espartero actuó con magnanimidad. Antes había afirmado:

> En las guerras civiles no hay gloria para los vencedores ni mengua para los vencidos. Tened presente que cuando renace la paz, todo se confunde, y que la relación de los padecimientos y los desastres, y la de los triunfos y conquistas se mira como patrimonio común de los que antes pelearon en bandos contrarios[20].

Esa actitud generosa de Espartero demuestra que no había nada inherentemente español en las represalias tomadas por Franco contra la derrotada República en 1939[21].

El carlismo fue uno más de los varios movimientos «legitimistas» que actuaron en Europa tras las guerras napoleónicas y que defendían no solo la monarquía absoluta y el derecho divino de los reyes frente al progresivo avance liberal, sino también el principio según el cual la sucesión monárquica siempre debía ser patrilineal y recaer en el hijo varón de mayor edad. En Francia y en Portugal, el legitimismo dejó de suponer una amenaza militar tras la década de 1830, aunque mantuvo su presencia política. De hecho, aún en fecha tan tardía como 1873, un centenar de legitimistas fueron elegidos para la Asamblea Nacional francesa, aunque sobre un total de seiscientos cincuenta diputados[22]. Pero, en España, el carlismo se convirtió en una tradición militar e insurreccional muy arraigada en ciertas zonas del país. Durante la Guerra Civil de 1936-1939, una milicia carlista reclutada sobre todo en Navarra luchó con el bando de Franco en el frente vasco. La durabilidad del carlismo debió mucho al hecho de que España siguiese siendo una sociedad eminentemente rural hasta bien entrado el siglo XX, y al papel ideológico de la Iglesia católica. Su propensión a la insurrección violenta fue tal vez consecuencia de la relativa debilidad del Estado liberal en un país cuya geografía conspiraba contra el monopolio de la fuerza legítima por parte del aparato gubernamental[23].

Aun así, el Estado liberal iba haciendo progresos entre semejante clima de inestabilidad política. Un alzamiento de los sargentos en el palacio de La Granja en 1836 obligó a María Cristina a aceptar la Constitución de 1812. Y aunque esta pronto se reformaría, lo cierto es que España ya nunca más volvió a estar bajo un régimen de monarquía absoluta[24]. Dos partidos emergieron en el seno del liberalismo: los moderados y los progresistas (herederos de los *exaltados)*. Su rivalidad fue uno de los motivos por los que España tuvo treinta y dos Gobiernos diferentes entre 1843 —fecha en la que Isabel II fue declarada mayor de edad a sus trece años casi recién cumplidos— y 1868. También se aprobaron cinco Constituciones distintas entre 1834 y 1876. Ninguna de las promulgadas antes de esta última (la de 1876) fueron textos consensuados; al contrario, con cada

nueva Carta Magna se pretendía borrar la huella de la Constitución precedente.

Varias buenas oportunidades se perdieron en medio de tan enmarañado desarrollo de los acontecimientos. En 1836, Juan Álvarez Mendizábal, presidente del Gobierno progresista y hombre de negocios, se enfrentó al poder corporativista y crematístico de la Iglesia. Abolió el diezmo, suprimió todos los conventos menores y, finalmente, puso en venta la mayor parte de las propiedades inmobiliarias eclesiásticas españolas. Era algo que los reformadores ilustrados siempre habían soñado hacer. Mendizábal pudo hacerlo porque, en aquel momento, la Corona necesitaba con urgencia dinero para financiar la guerra carlista, y porque la opinión pública se había vuelto cada vez más anticlerical por el apoyo dispensado por muchos curas y monjes a la causa del carlismo. Sin embargo, y aunque los historiadores discrepan en cuanto a la proporción exacta, buena parte de aquellas antiguas tierras de la Iglesia y ejidos municipales (que también se pusieron en venta posteriormente) terminaron en manos de grandes terratenientes no religiosos[25].

Los Gobiernos de los años treinta y cuarenta del siglo XIX sentaron muchas de las bases de un Estado moderno; retomaron, pues, la labor allí donde los reformistas del siglo XVIII la habían dejado[26]. En 1833, el territorio español fue subdividido en cuarenta y nueve provincias de extensión no muy diferente entre ellas siguiendo el modelo de los departamentos franceses. La nueva organización territorial fue erosionando paulatinamente —tal como pretendieron sus promotores iniciales— las anteriores adhesiones a las regiones que provenían de los reinos medievales. El mensaje que se quiso lanzar con ello era que España era un Estado-nación unitario en el que todos los ciudadanos y territorios estarían sujetos a las mismas leyes. De hecho, las provincias han sobrevivido incluso tras la recuperación de las regiones (en forma de comunidades autónomas) con la Constitución de 1978 y continúan siendo referentes de la vida cotidiana. Por este mismo motivo, muchos en el nacionalismo catalán reniegan de la división provincial. En 1844, un Gobierno liberal moderado instituyó una fuerza policial profesional, la Guardia Civil. Su despliegue por el territorio español tuvo un impacto importante, sobre todo en la lucha contra el bandidaje y el bandolerismo del que los viajeros tanto tiempo llevaban quejándose. Pero fue creada como un cuerpo de naturaleza militar que, inicialmente, respondía ante los altos mandos de las fuerzas armadas. La regla por la que los guardias civiles no podían ser destinados a su región de origen —pensada para aislarlos de influencias políticas indebidas— tuvo el efecto de hacer que

parecieran, a ojos de muchos, una especie de fuerza de ocupación. En paralelo, se fue desarrollando también un funcionariado civil. Juan Bravo Murillo, jefe del Gobierno durante el bienio 1850-1852 y cuyo lema era «más administración y menos política», estableció categorías e itinerarios de promoción para los funcionarios[27]. El ingreso en la Administración pública se fue basando cada vez más en exámenes competitivos (las llamadas «oposiciones») y en los méritos. Algunos historiadores creen, sin embargo, que el objetivo principal de la creación de aquel nuevo funcionariado fue proveer de empleos a la creciente clase media antes que de servicios públicos a la gran masa de la población.

Una oportunidad perdida mayor aún fue la que se abrió con el levantamiento popular acompañado de «pronunciamiento» que se produjo en 1868 y que pasaría a la historia como «la Gloriosa» revolución que derrocó a Isabel II. La reina, que solo tenía treinta y ocho años cuando la obligaron a renunciar al trono, se había vuelto una figura reaccionaria, más interesada por la religión que por la política; su reputación estaba muy tocada por los escándalos financieros y, presuntamente, también sexuales; intervenía despótica y arbitrariamente incluso contra sus ministros más leales, con lo que ella misma contribuía a socavar el sistema parlamentario que la sostenía en el poder. «Siempre había sido demasiado joven para hacerse cargo de la dirección» de un país tan conflictivo, señaló Isabel Burdiel, autora de una biografía de la reina[28]. Ante la formación de juntas o comités revolucionarios en las ciudades de provincias de todo el país, el Ejército y buena parte de la élite política se volvieron contra Isabel, que partió entonces hacia el exilio en París.

El líder principal de la Gloriosa fue Juan Prim, un general catalán que era ya un héroe popular en España por su victoria en un episodio de la guerra colonial en Marruecos. En realidad, él pretendía instaurar una monarquía constitucional, pero no una borbónica. Eso mismo querían una mayoría de los miembros de las Cortes Constituyentes de 1869, las primeras que se eligieron por sufragio universal masculino. La constitución aprobada ese año puede entenderse como una especie de anteproyecto de construcción de una España moderna y democrática, pues incluía elementos como el sufragio universal masculino, la libertad de organización (y, por lo tanto, el derecho a formar sindicatos) y la libertad de religión[29]. Introducía reformas importantes, como el matrimonio civil y un registro civil de nacimientos y fallecimientos. Prim terminó ofreciendo el trono de España a Amadeo de Saboya, hijo del rey Víctor Manuel de Italia. Desde nuestra visión actual de las cosas, esta especie de «monarquía

en alquiler» puede parecer extraña, pero no era tan inusual en aquel entonces. Otto Wittelsbach, un príncipe bávaro, fue rey de Grecia de 1832 a 1862, por ejemplo. En todo caso, la maniobra de Prim fracasó. La noche antes de la llegada de Amadeo a España, Prim fue tiroteado en una calle de Madrid por unos enemigos anónimos y murió tres días después. Solo Prim podía mantener reunida a la variopinta coalición de liberales y radicales que habían hecho la revolución; los conservadores, por su parte, no aceptaban el nuevo régimen ni a su monarca extranjero. Amadeo solo aguantó dos años antes de abdicar.

La Cortes votaron entonces a favor de declarar la república en España. Pero ¿qué tipo de república? Algunos querían un Estado unitario como el francés. Otro grupo (más numeroso) era partidario de una república federal descentralizada. En este último bando militaba Francisco Pi y Margall, político catalán que fue el más destacado líder de los republicanos y también ejerció brevemente el cargo de presidente. Pero Pi y Margall perdió enseguida el control sobre el desarrollo de los acontecimientos, que degeneraron a veces en desórdenes violentos, sobre todo a medida que diversas juntas fueron proclamando repúblicas locales («cantones») en villas y ciudades del Levante y de Andalucía en lo que se conocería como la Rebelión Cantonal. El Gobierno republicano se enfrentaba también a una nueva guerra carlista y a una rebelión en Cuba contra la esclavitud y a favor de la autonomía de aquel territorio. Y, al mismo tiempo, la disciplina en el ejército colapsaba, pues la República había prometido abolir las levas forzadas. El régimen republicano duró menos de un año, periodo durante el que se sucedieron cuatro presidentes, intelectuales todos ellos, hasta que un pronunciamiento instituyó un breve Gobierno militar en su lugar y, a continuación, otro nuevo alzamiento militar incruento restauró la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II que, en aquel momento, contaba diecisiete años de edad y era cadete en la academia militar de Sandhurst.

Una vez más, el país idealizado de los liberales había chocado con el país real. En la década de 1930, la historia volvería a repetirse. El caos de la Primera República dañó para siempre la reputación del federalismo en España. Y esto tendría serias consecuencias: ese fue el motivo por el que los ponentes de la Constitución de 1978 optaron por no instituir un régimen formalmente federalista como el que, posiblemente, le habría ahorrado al país algunas de sus tensiones actuales.

Logros y fracasos de la Restauración

La revolución de 1868 fijó las líneas maestras de la batalla entre

la democracia librepensadora y el conservadurismo, de formas más o menos autoritarias, en la que se vería envuelto el país durante el siglo siguiente. Pronto llegarían nuevas presiones para realizar un cambio social más radical con la entrada en escena del socialismo y el anarquismo. El sistema político instaurado bajo la restablecida monarquía priorizó la estabilidad sobre la representación democrática. Pero esta dinámica estaba abocada a tener unos rendimientos decrecientes. El reto de fondo al que se enfrentaba el país era el de si el sistema podría evolucionar hacia una democracia plena, capaz de adaptarse a una sociedad en rápido cambio y de incorporar nuevas fuerzas políticas. Al final, no logró estar a la altura, pese a los esfuerzos de muchos dirigentes políticos y sus buenas intenciones.

El artífice del nuevo sistema conocido como la Restauración fue Antonio Cánovas del Castillo, un astuto político conservador proveniente del antiguo Partido Moderado. La nueva Constitución de 1876, que se mantendría vigente hasta 1931, tenía un carácter pragmático: reconocía el catolicismo como religión del Estado, pero toleraba la práctica de otros cultos, por ejemplo. El mecanismo de funcionamiento político del sistema era el llamado «turno pacífico»: la alternancia en el poder sin violencia ni pronunciamientos entre dos partidos de bases amplias como eran el Conservador (de Cánovas) y el Liberal (liderado inicialmente por Sagasta). Los sucesivos Gobiernos se valían de la manipulación electoral —organizada desde el Ministerio de la Gobernación— para procurarse las mayorías correspondientes en las Cortes. Para sus críticos, el sistema no hizo más que afianzar el dominio de una oligarquía y el poder de los potentados locales en la España rural, los «caciques» (palabra de origen caribeño). Pero era más flexible de lo que podría parecer. Sagasta reimplantó muchas de las conquistas de los tiempos de la Gloriosa, como el sufragio universal masculino, la libertad de asociación y de organización sindical, y los juicios con jurado. El Estado fue asumiendo progresivamente funciones antes reservadas a la Iglesia o a los ayuntamientos (siempre cortos de recursos), como la sanidad y la educación. Los Gobiernos de la Restauración introdujeron reformas sociales, como, por ejemplo, leyes sobre la seguridad en las fábricas. En 1919, tras una larga huelga en Barcelona, España se convirtió en el primer país del mundo en legislar la jornada laboral de ocho horas para sus trabajadores.

En realidad, el caciquismo era una forma de clientelismo político: el cacique era el intermediario entre el Estado y un electorado mayoritariamente analfabeto, al que ofrecía servicios y protección a cambio de votos (un sistema común a muchas democracias europeas

de aquel entonces y aún vigente en partes de América Latina). Supuso un problema más grave la excesiva frecuencia con la que los Gobiernos de la Restauración recurrieron a las fuerzas de seguridad y a la represión para hacer frente a la agitación de los obreros organizados o a la desesperación de los jornaleros andaluces sin tierra, adheridos muchos de ellos a un anarquismo utópico. Los anarquistas recurrieron a la venganza y contribuyeron a cerrar la puerta a las vías reformistas. Inspirados por Mijaíl Bakunin, el filósofo anarquista ruso que pregonaba la «propaganda de los hechos», terroristas de ese movimiento asesinaron a tres primeros ministros españoles entre 1897 y 1921. El primero de estos fue el propio Cánovas, tiroteado mientras tomaba unos baños en un balneario del País Vasco. Los otros dos fueron presidentes del Gobierno reformistas: José Canalejas (un liberal) y Eduardo Dato (un conservador). Canalejas, que, según Raymond Carr, venía a ser una potencial versión hispana de David Lloyd George, el reformista liberal británico, llevaba tiempo tratando en vano de mitigar una oleada de huelgas con una política que mezclaba las concesiones con la represión[30].

Mucho de lo que pasaba en España en esa época no era particularmente excepcional para la Europa de la época. La Italia posterior a la unificación padeció también su propio problema de caciquismo y elecciones amañadas, al que cabía sumar la violencia política asociada al medio siglo aproximado de guerra civil no declarada en el sur del país. La élite intelectual y política española estaba obsesionada con comparar a España con Inglaterra, con la Alemania bismarckiana o con Francia, ante los que solía salir mal parada. Pero no en todos los aspectos. España estuvo más años del siglo XIX bajo un sistema de gobierno constitucional que Francia y que cualquier otro país europeo continental, de hecho[31]. También los franceses sufrieron altas dosis de inestabilidad política: tuvieron quince Constituciones desde 1789, frente a las nueve que rigieron en España desde 1812. Los caciques del sistema parlamentario español no diferían mucho de los *notables* de la Tercera República francesa. En Italia, donde el sufragio estuvo mucho más restringido hasta 1912, hubo incluso un periodo, el del «transformismo» (desde la década de 1880 hasta la Primera Guerra Mundial), en el que se sucedían Gobiernos que eran amalgamas amorfas de presuntos oponentes ideológicos. En Portugal, a partir de la década de 1850 —como en la España de la Restauración—, las elecciones tendían a seguir (en lugar de preceder) a los sucesivos cambios de Gobierno, y el Ministerio del Interior se encargaba de organizarlas de tal modo que de ellas siempre surgiera la mayoría parlamentaria requerida.

Los observadores coetáneos y numerosos historiadores posteriores (marxistas, sobre todo) se lamentaron de la presunta ausencia de revolución industrial en España. Pero la liberalización parcial de la economía, la sustitución de las relaciones corporativistas (presididas por los intereses estamentales del clero y la nobleza) por las capitalistas y la apertura a las importaciones y a la inversión de origen extranjero, sobre todo en minería y ferrocarriles, impulsaron el crecimiento de la economía. El historiador económico Leandro Prados de la Escosura ha reconstruido una serie coherente de datos de la contabilidad nacional que se remontan a 1850. En ella puede verse que, entre 1850 y 1883, la renta per cápita creció en España a un ritmo medio anual del 1,3 %, por encima de Francia (1,1 %) o Alemania (1,2 %), y casi tan rápido como en la Gran Bretaña victoriana (1,4 %)32. El crecimiento se ralentizó luego, desde principios de la década de 1880 hasta 1913. La hipótesis de Prados de la Escosura es que esto se debió a que los Gobiernos de la Restauración fueron volviéndose cada vez más proteccionistas, sobre todo después de la pérdida del mercado cubano en 1898. El crecimiento repuntó de nuevo durante la Primera Guerra Mundial (en la que España se benefició de su neutralidad) y los años veinte, y volvió a declinar durante la Gran Depresión, la Guerra Civil y la autarquía que Franco impuso a continuación. En resumen, y por decirlo en palabras de Diego Palacios, un historiador español que enseña en la Universidad de Stirling, «lo más característico de España en el siglo XIX fue la lentitud del crecimiento, los cambios y el desarrollo institucional, pero hubo crecimiento, hubo cambios y se desarrollaron las instituciones»33. Aun así, en ciertos aspectos cruciales, esos cambios y ese despliegue institucional fueron excesivamente tardíos. En la década de 1930, el Estado todavía no estaba lo bastante desarrollado —ni la sociedad era lo bastante democrática— como para impedir la Guerra Civil a la que lo abocaron sus dirigentes y, en general, sus irresponsables élites (véase el capítulo 5).

La difícil construcción nacional

Cruzando el río Bidasoa desde la localidad fronteriza de Irún (Guipúzcoa) se llega directamente en Hendaya, una dispersa población francesa famosa por haber sido escenario de un histórico encuentro en su estación de ferrocarril entre Franco y Hitler en octubre de 1940. Hendaya y los pueblos de sus alrededores fueron usados durante muchos años como refugio por los miembros de ETA y sus simpatizantes. En torno a una cuarta parte de los habitantes de la

localidad son vascos españoles. Pero el euskera no es lengua oficial en Hendaya ni en ningún otro lugar del departamento de los Bajos Pirineos, que abarca el territorio del País Vasco francés, y no comenzó a enseñarse en sus escuelas hasta fecha reciente. He ahí la consecuencia del enérgico y, por lo general, exitoso ejercicio de construcción nacional llevado a cabo por el Estado galo.

En 1863, aproximadamente un cuarto de la población de Francia no hablaba el idioma francés, según un informe estadístico oficial de la época. Más de la décima parte de los cuatro millones de niños y niñas que iban a la escuela tampoco hablaban nada del idioma nacional, y 1,5 millones no sabían escribirlo[34]. Y estas cifras oficiales son, con casi toda seguridad, subestimaciones. La Francia de aquel periodo era —más aún que España— un mosaico de lenguas (se hablaba bretón, flamenco, vasco, gascón, catalán y varias versiones de occitano, lengua estrechamente emparentada con la catalana). La mayoría de los no francófonos vivían en las zonas rurales del oeste, el sur y el centro del país. Si España había contado con unas fronteras más o menos estables desde el siglo XVI, Francia era un conglomerado que se fue formando por la vía de las conquistas o las anexiones, la última de las cuales (dejando a un lado las sucesivas batallas por Alsacia y Lorena entre Francia y Alemania) fue la incorporación de la Saboya occidental en 1858. En *De campesinos a franceses*, un texto clásico de la teoría de la modernización, el historiador de origen rumano Eugen Weber sostuvo que todo eso cambió entre 1870 y la Primera Guerra Mundial como consecuencia de unas políticas públicas aplicadas con toda la intención por un Estado que contaba con los recursos necesarios para implementarlas. Durante ese periodo, escribió Weber, «la Francia subdesarrollada se integró en el mundo moderno y en la cultura oficial de París, la de las ciudades. […] [L]as tradiciones murieron y no se instauraron otras en su lugar»[35].

La revolución de 1789 en Francia legó a las generaciones posteriores el concepto de unidad nacional como un ideal integrador. La Revolución «completó la nación, que devino una e indivisible», escribió el historiador francés Albert Soboul[36]. Pero ese ideal no empezó a ser una realidad consistente hasta la Tercera República, a partir de 1870. Weber señaló tres potentes agentes de cambio e integración. El primero fue un programa de choque, financiado por el Gobierno, de construcción de ferrocarriles y de carreteras, especialmente de las de la red secundaria, adecuadas para todo tipo de condiciones meteorológicas en las áreas rurales. Se amplió la red ferroviaria, que pasó de los aproximadamente veinte mil kilómetros que sumaba en 1879 a unos sesenta y cinco mil en 1910. El segundo

factor fue la escolarización. En 1876, cerca de ochocientos mil de los 4,5 millones de niños y niñas en edad escolar que vivían en Francia no estaban matriculados en ninguna escuela, y muchos y muchas de los que sí lo estaban no iban a clase. Las niñas eran las que más probabilidades tenían de no ir. Jules Ferry, el ministro de Educación a comienzos de la década de 1880, impulsó reformas de gran calado que hicieron que la enseñanza primaria fuese obligatoria, gratuita y laica, y que convirtieron en requisito que toda la docencia se impartiera en lengua francesa. El Estado financió un ingente programa de construcción de escuelas, mejoró los métodos de enseñanza e introdujo la historia y la geografía como asignaturas del plan de estudios. El tercer agente de cambio fue el servicio militar. Introducido por Napoleón, hasta aquel momento había contado con numerosas escapatorias que permitían que muchos jóvenes de las clases acomodadas se libraran de él y era visto por los campesinos como una especie de tributo desproporcionado que les imponía un Estado ajeno a sus intereses. Hacia la década de 1890, sin embargo, se puso freno a las exenciones, se mejoró el trato a los reclutas de leva y su alimentación, y el ejército comenzó a ser considerado por el pueblo en general como algo «nuestro» y no «de los de arriba». Tanto los centros educativos como las fuerzas armadas enseñaban patriotismo y *laïcité* a quienes tenían a su cargo. A juicio de Weber, el «Dios católico, particularista y solo identificado con la patria por los revisionistas tras el cambio de siglo [del XIX al XX], fue sustituido por una divinidad laica: la Patria y sus símbolos vivos, el ejército y la bandera. El catecismo fue sustituido por lecciones de ciudadanía»[37].

La religión laica del republicanismo francés se ha demostrado duradera y, por lo general, popular. Aún poco después de su elección como presidente en 2017, Emmanuel Macron declaró ante un público de jóvenes que el Estado francés «se construyó sobre la base de la lengua francesa»[38]. El artículo 2 de la Constitución francesa de 1958 afirma lisa y llanamente que «el idioma de la República es el francés», y ninguna otra lengua goza de estatus oficial. Joseph Pérez, historiador nacido en Francia aunque de origen valenciano y especializado en Historia de España, recordaba que él se había criado en Francia en la década de 1930 hablando valenciano (o catalán de Valencia) como lengua materna. Luego fue a la escuela: «En la escuela jacobina entraba un pequeño español, un pequeño portugués y salía un francés. […] La idea jacobina es fundar una nación formada por ciudadanos con los mismos derechos, nadie me dijo nada por ser español»[39].

En décadas recientes, ese aplastamiento de las lenguas,

costumbres y particularismos locales ha topado con cierta resistencia, y se ha observado cierta revitalización de los nacionalismos bretón, corcégo y en menor medida occitano y vasco-francés, por no hablar de las demandas culturales de algunos inmigrantes musulmanes. En 2008, se introdujo una enmienda en la Constitución en la que se reconocía que «las lenguas regionales contribuyen al patrimonio de Francia». Hoy los alumnos pueden estudiar una lengua regional como asignatura optativa y, en algunos casos, hasta la mitad de la docencia se realiza en alguna de esas lenguas. Pero pocos estudiantes optan por esa alternativa: solo ciento setenta mil (de un total de 12 millones) de escolares reciben clases en alguno de los idiomas regionales, y solo una minoría de ellos estudian en escuelas privadas —gestionadas por asociaciones culturales— donde se ofrece una «inmersión» en una lengua de ese tipo. En 2021, la Asamblea Nacional aprobó una ley impulsada por Paul Molac, un nacionalista bretón, que autorizaba la «enseñanza inmersiva» de lenguas regionales en los centros educativos públicos[40]. La ley contaba, sin embargo, con la oposición del Gobierno de Macron. A las pocas semanas, el Consejo Constitucional del país galo anuló la disposición referida a la inmersión. Pero aceptó la constitucionalidad del hecho de que los Gobiernos locales financiasen con fondos públicos la enseñanza de lenguas regionales como una asignatura más del plan de estudios[41].

¿Por qué no hay en España la misma uniformidad cultural que en Francia? Desde los tiempos de la Ilustración, una parte importante de la élite hispana ha sido profundamente francófila, los llamados *afrancesados*. Los Gobiernos españoles del siglo XIX llevaron a cabo iniciativas dirigidas a la construcción nacional. Pero siempre contaron con el hándicap de la pobreza del Estado y, por tanto, tendieron a ser medidas demasiado pequeñas y tardías como para vencer la fuerza de los regionalismos[42]. Otra de las oportunidades perdidas en España fue una reforma fiscal introducida en 1845 por un Gobierno moderado en la que este, al final, cedió buena parte del control sobre el sistema tributario a juntas locales de terratenientes y de otros notables. El resultado fue que los ricos se imponían menos tributos a sí mismos de los debidos y ocultaban riqueza al fisco, mientras que los pequeños agricultores y el consumo estaban gravados de más. El sistema era sumamente ineficiente: entre 1850 y 1890, por cada peseta que el Gobierno español invirtió en el cobro y la recaudación de impuestos y aranceles obtuvo solamente seis de provecho. Compárese esa ratio, por ejemplo, con la de catorce a uno que se consiguió en Francia.

Los Gobiernos sabían de la importancia de la inversión en conexiones de transporte. De ahí que fomentaran la entrada de capital

extranjero para construir ferrocarriles. Bayona, la capital del País Vasco francés, estaba conectada por tren con Burdeos y París desde 1855; la línea de Madrid a Irún, que recorría un terreno mucho más accidentado, se completó en 1864. La construcción ferroviaria se aceleraría aún más en las décadas de 1880 y 1890, aunque la falta de mantenimiento siempre supuso un lastre para una red ineficiente de por sí. Pero en lo que España estaba verdaderamente rezagada era en carreteras y en escolarización. El Ministerio de Fomento, instaurado en 1845 para supervisar las redes de transportes y comunicaciones, se llevó solamente el 9 % del presupuesto público nacional entre 1850 y 1890, mientras que los departamentos ministeriales homólogos en Francia y en Países Bajos gastaban en transportes en torno al 15 % de presupuestos que eran más grandes que el español. Todavía en 1910, cuatro mil de los nueve mil doscientos municipios españoles no contaban con conexión por carretera ni por ferrocarril[43]. Los Gobiernos tenían otras prioridades: más de la mitad del presupuesto público español se dedicaba a pagar la deuda soberana y las fuerzas armadas. En 1898, el Estado gastó tanto en la Iglesia y en los salarios del clero como en infraestructuras, y el quíntuple que en el sistema educativo.

La educación universal había sido proclamada como principio fundamental en la Constitución de 1812, pero no quedó consagrada en la legislación hasta 1857. Fue esta última ley la que por fin hizo que la escolarización fuese obligatoria para niños y niñas de entre seis y nueve años de edad. Sin embargo, dejaba en manos de los municipios el encargo de proporcionar las correspondientes escuelas de primaria, y estos carecían de recursos. Se suponía también que las autoridades provinciales debían construir al menos un instituto de secundaria en cada capital de provincia, pero, a finales del siglo XIX, la mitad de los centros educativos previstos por la ley no existían todavía. Solo un 40 % de los niños y las niñas estaban matriculados en escuelas, y muchos de ellos eran alumnos de centros de la Iglesia[44]. No es de extrañar, pues, que, en 1900, uno de cada dos españoles fuese analfabeto, frente a uno de cada seis franceses o uno de cada treinta británicos. En *La forja*, la primera parte (dedicada a sus memorias de infancia) de la trilogía de Arturo Barea titulada *La forja de un rebelde,* el autor contaba una anécdota acaecida en Méntrida, pueblo situado a apenas sesenta kilómetros de Madrid, en torno a 1910:

> El maestro quiso abrir una escuela para los mozos y las mozas por la tarde, todos los días, para que aprendieran a leer y a escribir, porque casi ninguno de ellos sabe. El cura se enfadó mucho y el alcalde le cerró la escuela. El maestro quedó solo para enseñar a leer a los niños. Es lo único que puede hacer, porque

de los siete a los nueve años ya se los llevan a trabajar al campo[45].

En España, el servicio militar siguió estando muy lejos de ser universal hasta más de veinte años después de que en Francia ya se hubiese universalizado de verdad. Solo las clases trabajadoras servían como soldados, y el ejército trataba mal a sus reclutas, por lo que el pueblo detestaba las levas. En 1909, en Barcelona, el embarque de tropas de leva con destino a la guerra en Marruecos desencadenó unos graves incidentes que se prolongaron durante toda una semana de quemas de iglesias que los propagandistas católicos bautizarían más tarde con el nombre de «Semana Trágica». Pero aquello sirvió al menos para que el Gobierno de Canalejas impulsara una reforma del servicio militar en 1912.

El segundo gran motivo de la supervivencia y el resurgir de las lenguas y el sentimiento regionales en España fue el problema con el que comenzaba el presente capítulo: si en Francia las regiones que conservaron sus idiomas y su identidad cultural particulares durante más tiempo tendieron a ser aquellas más pobres y remotas, en España, a finales del siglo XIX, eran las zonas que presentaban el mayor dinamismo económico de todo el país.

El «regeneracionismo» y sus problemas

En solo tres horas de la mañana soleada y en calma del 3 de julio de 1898, una flota española de guerra compuesta por cuatro cruceros acorazados y dos destructores fue aniquilada frente a las costas de Santiago de Cuba por un escuadrón de siete buques de la armada estadounidense. Aquello condenó a España a una rápida derrota en la guerra Hispano-Estadounidense y la consiguiente pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Se extinguieron así las brasas finales del imperio que había dominado el mundo en el siglo XVI[46]. El «Desastre», como se conoció aquella derrota, fue un duro golpe a la autoestima española. Disparó un brote de melancólica introspección en el alma nacional, así como llamamientos a la «regeneración» de un país que se consideraba inmerso en siglos de decadencia. Sagasta, primer ministro en aquellos momentos, parecía ser de los pocos que mantenía una visión realista de las cosas cuando, según se le atribuye, dijo: «Somos un país pobre. ¿Acaso es extraño que nos hayan vencido?».

El «regeneracionismo» adoptó formas distintas en Madrid, en Barcelona y en el Ejército. En Barcelona, como ya hemos visto, el Desastre del 98 dio un impulso decisivo al nacionalismo catalán (véase el capítulo 3). En Madrid, un grupo poco cohesionado de escritores e intelectuales conocido como la Generación del 98 (aunque, en

realidad, abarcaba dos generaciones diferentes) reflexionó sobre las causas de lo que ellos entendían que eran el declive y el atraso españoles, y propuso algunos remedios bastante contradictorios entre sí. Algunos de ellos eran liberales en términos generales. Defendían un programa de choque basado en la promoción de la educación pública laica y en la europeización de España. En plena conmoción por la derrota, se aprobaron diversas medidas de ese tipo, como, por ejemplo, una reforma fiscal que incrementó la recaudación y, por fin, la creación de un Ministerio de Educación en 1900. Otras figuras de esa generación, entre las que se incluía Miguel de Unamuno, creían que España debía reconectarse con sus tradiciones católicas. Joaquín Costa, historiador y político aragonés, no solo llamó al Gobierno a dedicar un mayor esfuerzo inversor en infraestructuras de transportes y en desarrollo industrial, sino que también manifestó su desprecio por el régimen parlamentario de la Restauración —fue él quien acuñó la palabra «caciquismo»— y pidió un «cirujano de hierro» que interviniera practicando una renovación política radical, y no necesariamente por medios democráticos. Muchas de las figuras de la Generación del 98 estuvieron asociadas a la Institución Libre de Enseñanza, un proyecto destinado a la difusión en España de una educación racional y humanista. Incorporaba también un organismo dedicado a la financiación de estudios de posgrado en el extranjero (la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas), dirigido por Santiago Ramón y Cajal, neurólogo ganador del premio Nobel de Medicina en 1906. Estas iniciativas tuvieron una gran influencia en la formación de una élite intelectual liberal. En el ámbito del conservadurismo, tales medidas tuvieron su correlato en la acción de los jesuitas, fundadores de la primera universidad católica privada del país en el barrio bilbaíno de Deusto en 1886[47].

Nadie supo expresar con mayor claridad esa permanente sensación de fracaso de la que se nutría el «regeneracionismo» que el escritor y filósofo José Ortega y Gasset. Aunque los españoles suelen encuadrarlo en las filas de los liberales, Ortega fue en muchos sentidos un conservador de corte elitista. En la vigorosa prosa de su *España invertebrada,* un influyente ensayo breve que escribió en 1922 a modo de invectiva, ofrecía ciertas percepciones de gran agudeza entremezcladas con un hondo pesimismo cultural y análisis histórico bastante deficiente, y todo ello recubierto de una pátina de pseudociencia[48]. Él veía el auge de los separatismos en Cataluña y en el País Vasco como parte de una dinámica más general de «particularismo» —un repliegue desde el interés nacional común hacia lo local y lo sectorial—, que, según él, era el mayor problema del país.

También detectaba un parecido crecimiento de ese particularismo en Galicia, Asturias, Aragón y Valencia. Lo atribuía al debilitamiento de Castilla. «Castilla ha hecho a España y Castilla la ha deshecho»[49]. Pero también echaba la culpa a la falta de un proyecto nacional común —sobre todo tras la pérdida del imperio— y a la debilidad histórica de la aristocracia hispana y de la élite española en general.

En cuanto al Ejército, Ortega sostenía que este se había olvidado de que formaba parte del conjunto de la sociedad española y se había dedicado a perseguir su propio interés corporativo particular. El «Desastre» sirvió enseguida de acicate para que los generales buscaran redimirse alimentando una guerra oportunista, brutal e impopular en el norte de Marruecos con el objetivo de expandir la presencia colonial española en la zona. Con ello, no hicieron más que exponer las fuerzas armadas a una nueva humillación, como fue la derrota aplastante sufrida por un ejército de veinte mil efectivos ante unos pocos miles de milicianos tribales en la batalla de Annual de 1921. Según Ortega, «Marruecos hizo del alma dispersa de nuestro Ejército un puño cerrado, moralmente dispuesto para el ataque. Desde aquel momento, [ha venido] a ser el grupo militar una escopeta cargada que no tiene blanco a que disparar»[50]. ¿Acaso no fue inevitable, se preguntaba, que se volviera contra la nación misma cuando reprimió la huelga general de julio de 1917 como lo hizo? No fue ninguna casualidad que Franco y muchos de sus camaradas cabecillas del golpe de 1936 fuesen antiguos combatientes de las campañas de Marruecos.

En un sentido más general, el «Desastre» del 98 y otros fenómenos políticos de aquellos años del cambio de siglo provocaron ciertos realineamientos políticos, especialmente en torno a la «cuestión territorial» de cómo debía organizarse España. Por un lado, el ideal de España de los liberales había cambiado. Su apoyo a las milicias y las juntas locales había transformado a muchos liberales y republicanos en descentralizadores y federalistas, mientras que otros siguieron siendo partidarios de un Estado centralizado fuerte de estilo jacobino. Por otro lado, el Ejército se fue despojando de su compromiso decimonónico con el liberalismo, pero sin abandonar su tradición de intervencionismo político anterior a la Restauración. La Iglesia, debilitada en su momento por Mendizábal, había adquirido fuerzas renovadas dentro de un resurgimiento católico general en toda Europa en la parte final del siglo XIX. Tanto los conservadores como la alta jerarquía de la Iglesia comenzaron a considerar que un Estado central fuerte era el mejor garante posible de sus intereses, sobre todo frente al internacionalismo de las organizaciones o las redes de los movimientos socialista y anarquista. El Ejército y otras fuerzas

conservadoras hicieron suyo un nacionalismo defensivo e identitario que veía en los nacionalismos catalán y vasco una amenaza a la unidad nacional. Como escribió Álvarez Junco, «el mundo conservador acabó sintiendo que *todo* estaba en peligro: la religión, la propiedad, la familia… e incluso la nación, que en el origen del proceso había sido una creación de la revolución liberal frente a los tronos absolutos»[51]. Un primer intento de centralización conservadora llegó con la dictadura de Primo de Rivera. Terminada esta, la Segunda República trató de afrontar la tarea de llevar a cabo una descentralización ordenada.

Descentralización republicana, centralismo franquista

En un célebre debate parlamentario sobre el Estatuto catalán de autonomía de 1932, Ortega y Gasset, que había sido elegido diputado por un pequeño partido republicano, sostuvo que Cataluña era un problema «continuo» de la historia de España que «no es para resolver, sino para conllevar». Manuel Azaña, el entonces jefe del Gobierno de la República (y, más tarde, presidente de esta), en la larga réplica que dio en aquel debate y que fue todo un alarde de oratoria en el que hizo un repaso general de la historia española, comenzó señalando que «la política de Madrid» frente al catalanismo había consistido en negar su existencia en vez de reconocer lo que era: el problema primordial de la organización del Estado español. «La realidad es el hecho de los sentimientos diferenciados en las regiones de la Península —siguió diciendo—. […] Podríamos preferir que […] hubiese triunfado en España una política de asimilación, de unificación; podrá ser que a alguien le parezca que esto hubiera valido más y que ahora todos los españoles hablasen el mismo idioma». Sin embargo, añadió entre aplausos: «A mí me hubiera parecido un empobrecimiento de la riqueza espiritual de España; pero el caso es que esto, parezca bueno o malo, no ha ocurrido»[52].

Esto condensó el enfoque que adoptó la República ante la cuestión «territorial» y que se expresó, en primer lugar, en el Estatuto catalán de autonomía (véase el capítulo 3). El conservadurismo católico de los vascos suscitaba escasas simpatías entre los republicanos y eso hizo que su Estatuto de autonomía se retrasase. Pero fue aprobado finalmente en referéndum en 1933, aunque no lograra la mayoría de los votos en el parcialmente carlista territorio de Álava. De todos modos, entró apresuradamente en vigor al inicio de la Guerra Civil, para premiar el hecho de que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) se mantuviera leal a la República. Eso sí, apenas si hubo tiempo para que se pudiera constituir un Gobierno provisional vasco

antes de la llegada de los tanques franquistas. Hacia el final del siglo XIX, también Galicia vivió un resurgimiento del sentimiento regionalista y de la lengua gallega. En junio de 1936 se aprobó un Estatuto gallego de autonomía, pero el estallido de la Guerra Civil impidió que entrara en vigor. También en Andalucía, Valencia y Aragón surgieron organizaciones regionalistas[53].

Tras su victoria, Franco instauró una rígida centralización conservadora de la que solo quedaron excluidas, a modo de excepciones, Navarra y Álava, a las que, como deferencia por haberle sido leales, permitió mantener algunos de sus privilegios fiscales. Se impuso el nacionalismo español en su nueva variante conservadora e identitaria. Se prohibió el uso público de todas las lenguas regionales. Todos los españoles tenían la obligación de hablar «en cristiano» o en «la lengua del imperio», por decirlo con expresiones típicas de los tiempos del régimen. Pero como ya había declarado Azaña, la negación de la existencia de «sentimientos diferenciados» no hizo que estos desaparecieran sin más. Los argumentos de Azaña terminarían imponiéndose, a título póstumo, en los principios de la Constitución de 1978.

El historiador estadounidense Carlton Hayes, embajador de su país en Madrid durante la Segunda Guerra Mundial, escribió que en todas partes la evolución de una conciencia nacional había sido una «historia de la superación de las fuerzas centrífugas en la vida de la nación por las fuerzas centrípetas»[54]. En España, sin embargo, las fuerzas centrífugas eran demasiado fuertes para ser vencidas, pero también eran demasiado débiles para vencer. El historiador de la Universidad de Santiago de Compostela Xosé Manoel Núñez Seixas ha argumentado algo parecido: «España puede ser considerada como un Estado-nación imperfecto, o incompleto; pero también es, al mismo tiempo, un Estado multinacional imperfecto, ya que las identidades nacionales alternativas aún no han alcanzado una plena hegemonía social en sus territorios de referencia». Él apunta que «los matrimonios mixtos, los procesos de asimilación lingüística, las identidades múltiples e híbridas constituyen rasgos característicos de la historia de España»[55]. Esa es la realidad que los redactores de la Constitución de 1978 se propusieron abordar mediante una combinación de descentralización y unidad nacional.

5

Hablemos de Franco

La inmensa cruz de piedra plantada en la cima de un afloramiento rocoso que sobresale entre un pinar de las estribaciones de la sierra de Guadarrama es visible desde las afueras de Madrid. A su pie se extienden una explanada abierta y una columnata semicircular que flanquea la entrada a una enorme cripta de piedra, de doscientos cincuenta metros de longitud, excavada en la ladera de la montaña. En su vestíbulo exterior figuran un par de estatuas de ángeles exterminadores portando grandes espadas. Todo en el Valle de los Caídos ha sido pensado para impresionar, para inspirar temor, antes que pena o reconciliación. No es un monumento en memoria de las víctimas de la guerra, sino de homenaje a la victoria, al hecho de que el general Francisco Franco exterminara a los «rojos» en la Guerra Civil como parte de lo que él mismo llamó su «Cruzada» (así, con «C» mayúscula). En el decreto de 1940 por el que ordenó su edificación, se podía leer: «La dimensión de nuestra Cruzada […] no puede quedar perpetuada por los sencillos monumentos con los que suele conmemorarse en villas y ciudades […]. Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos […] para que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los héroes y mártires de la Cruzada»[1]. La idea de Franco era que el Valle fuese el lugar donde se diera sepultura a los soldados y partidarios de su causa durante la guerra. Pero, a pesar de que se recurrió en parte a la mano de obra de prisioneros usados como trabajadores forzados, el complejo tardó dieciocho años en construirse. Cuando ya se hubo finalizado, muchas familias de los nacionales caídos no quisieron que los restos de sus seres queridos se trasladaran allí, por lo que los alcaldes enviaron a algunos muertos republicanos también. Se calcula que hay allí enterradas unas 34.000 personas, de las que 21.423 están identificadas. Muchos huesos están irremediablemente mezclados unos con otros.

Tras morirse en la cama en 1975, Franco fue enterrado en el Valle de manera bastante precipitada y sin apenas reflexión previa. Pero su presencia en aquel lugar, en una de las dos únicas sepulturas con nombre situadas a sendos lados del altar (siendo la otra la de José Antonio Primo de Rivera, hijo de Miguel, el anterior dictador, y fundador de la Falange Española) fue vista por muchos como una aberración. Para empezar, Franco no murió en la guerra. Pero lo más anómalo de la situación era que, como bien dijo Carmen Calvo,

entonces vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez, «un dictador no puede tener una tumba de Estado en una democracia consolidada como la española»2. En octubre de 2019, en una operación organizada por el Ejecutivo de Sánchez y a la que asistieron veintidós de los descendientes del dictador, se procedió a la exhumación del ataúd de Franco. En la retransmisión televisiva en directo pudo verse cómo la familia lo introducía, primero, en un coche fúnebre y, a continuación, en un helicóptero que llevó los restos hasta un tranquilo cementerio público de El Pardo para ser enterrados de nuevo allí, en las instalaciones de un acuartelamiento militar de las afueras de la capital donde ya descansaban los de la esposa del exdictador. Sánchez daba cumplimiento así a una resolución del Congreso de los Diputados y a una promesa que había hecho al acceder a la Presidencia del Gobierno. Se tardó más de un año en superar las trabas legales que puso la familia de Franco —que prefería enterrar sus restos en un lugar mucho más destacado, en la cripta de la catedral de Madrid— y la amenaza de desobediencia con la que amagó el prior benedictino que administra la basílica y el monasterio ubicados en el mismo Valle. La alta jerarquía de la Iglesia católica española y el Vaticano reconvinieron al prior, y el Tribunal Supremo falló por unanimidad que el Gobierno podía exhumar los restos de Franco para que se les diera nueva sepultura en El Pardo.

«Es una gran victoria para la democracia española», dijo Sánchez a propósito del fallo judicial que autorizaba al Gobierno a proceder con la exhumación3. El porcentaje de españoles que estaba de acuerdo con él era ligeramente superior al de aquellos que no lo estaban, pese a que el momento elegido para la operación —un par de semanas antes de unas elecciones generales— hacía que esta pareciera más bien una maniobra de campaña. Solo Vox expresó su oposición activa a lo que calificó de «profanación» de la tumba de Franco. El PP se quejó de que todo aquello reabriera viejas heridas, pero dijo que prefería hablar del futuro y no del pasado.

Más de dos años después de que Franco saliera del Valle, el Gobierno no había decidido aún qué hacer con aquel lugar. El grupo parlamentario socialista quería convertirlo en un «museo de la memoria». Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, así como muchos historiadores, opinan que ese museo debería explicar la propia historia del Valle y los usos propagandísticos que de él se hicieron. Muchos piensan que debería desacralizarse y que los benedictinos deberían ser desalojados de allí. A otros les gustaría dejarlo como una ruina abandonada. Entre estos últimos está Nicolás Sánchez-Albornoz,

historiador a quien enviaron a trabajar al Valle tras ser arrestado por activismo político contra el régimen cuando aún era un estudiante, en 1947. Con la ayuda del grupo político al que pertenecía, logró escapar de allí a los cuatro meses. «No deben gastar un centavo en el mantenimiento del Valle», dijo. «Deja que la naturaleza siga su curso»[4].

A menudo se dice que España se ha inhibido como ningún otro país a la hora de afrontar el legado de su pasado. Lo cierto es que varias naciones europeas más han tenido dificultades para alcanzar consensos sobre qué hacer con lugares asociados a sus dictadores y han tardado tiempo en lograr los correspondientes acuerdos[5]. La España contemporánea no está poseída por el fantasma de Franco, o, al menos, no es evidente que lo esté: el pequeño número de simpatizantes activos del exdictador ejerce muy escasa o nula influencia en la política o en el Estado (al menos, si excluimos a Vox, que, de todos modos, rara vez hace referencia explícita a Franco). La mayoría de los españoles de hoy en día no tienen ningún recuerdo propio del antiguo dictador. Tras haber estado omnipresente en la vida del país durante casi cuatro décadas, Franco desapareció del discurso y el debate públicos con sorprendente rapidez. En una encuesta publicada por *El País* veinticinco años después de su muerte, un 42 % de los consultados dijeron que el nombre de Franco les dejaba «indiferente», mientras que un 38 % manifestaron que les provocaba «sentimientos negativos», y un 17 %, «positivos». Al mismo tiempo, un 59 % de los encuestados opinaban que el régimen franquista era «definitivamente algo pasado», un 33 % juzgaba que aún tenía «alguna influencia», y solo un 5 % pensaba que todavía seguía «influyendo mucho»[6].

Si Franco ha vuelto a adquirir recientemente un protagonismo más destacado en el discurso político, se debe en parte a lo oportuno que esto ha sido para la propaganda de Podemos y del independentismo catalán. Pero eso no significa que el fallecido dictador no siga proyectando cierta sombra sobre la política y la sociedad españolas. La ausencia de unanimidad en cuanto a su exhumación evidenció lo mucho que al país aún le queda por recorrer para alcanzar cierto consenso sobre su pasado…, suponiendo que pueda alcanzarlo alguna vez. España cuenta con numerosos museos, pero ninguno dedicado a su historia del siglo XX. Desde la izquierda, muchas voces señalan que no tiene nada parecido a los monumentos conmemorativos antifascistas que sí existen en Alemania o en Italia. Pero la comparación es un tanto engañosa, como este capítulo explica. Y podría incluso decirse que no hay homenaje público a la memoria

de las víctimas de Franco y del fascismo más potente que el *Guernica* de Picasso, que fue la gran denuncia del artista contra el horror y el dolor de la guerra. Pintado para el pabellón de la asediada República española en la Exposición Internacional de París de 1937, está expuesto desde 1981 en el Museo Reina Sofía de Madrid, con su contexto histórico perfectamente explicado. Sí, hay asuntos que han quedado sin resolver desde la dictadura, pero cuántos es materia de agria disputa política. Es una cuestión sobre la que las afirmaciones con afán generalizador suelen estar equivocadas.

La «memoria histórica»

Cuando la democracia llegó a España a finales de la década de 1970, no vino impuesta por ejércitos extranjeros de conquista, como en Alemania o Italia al término de la Segunda Guerra Mundial. Se instauró más bien como el fruto de acuerdos entre los moderados del régimen dictatorial anterior y una oposición democrática realista (véase el capítulo 1). Hubo una ruptura con el pasado, consagrada en la Constitución de 1978, pero esta no fue tan radical como, por ejemplo, en la vecina Portugal tras su revolución de 1974. Uno de los pilares de la transición española a la democracia fue la Ley de Amnistía y el consenso general para no utilizar el pasado como un arma política, unos acuerdos a los que hoy suelen referirse algunos —en forma engañosa— como un «pacto del olvido». Dado lo hondos y crudos que eran los conflictos del pasado, aquella fue una actitud sensata. Además, los acuerdos no impidieron el rápido desmantelamiento del franquismo. Lo que sí implicó la amnistía, sin embargo, fue que ningún funcionario ni soldado franquista fuese llevado a juicio por sus actos.

Muchos valoraron aquella Transición, generalmente fluida, como un éxito. Pero, entre las generaciones más jóvenes y entre ciertos sectores de la izquierda, causa inquietud el hecho de que España nunca haya afrontado los crímenes del pasado ni algunos de los traumas profundos que este dejó. Ellos piensan que debería afrontarlos. El primer paso en esa dirección lo dio Zapatero, quien representó una nueva generación que no tenía ningún recuerdo directo de la Guerra Civil y que apenas si guardaba alguno de la dictadura. El abuelo paterno de Zapatero era capitán del ejército en León y fue ejecutado en agosto de 1936 por haberse negado a sumarse a la rebelión franquista. (Zapatero no mencionaba, sin embargo, que su abuelo materno —al que sí conoció— luchó por el bando nacional). Zapatero era un convencido del uso político de los temas polémicos y divisivos. La ley de «memoria histórica» de 2007 promovida por su

Gobierno, aunque tímida, topó con la oposición frontal del PP, pero seguramente esa era una de las razones políticas por las que la impulsó. También había otras razones. El intento del juez español Baltasar Garzón de acusar y extraditar al general Augusto Pinochet, exdictador chileno, amparándose en una supuesta jurisdicción universal para la persecución judicial de los crímenes contra la humanidad exponía a España a una acusación de hipocresía. Y varias organizaciones de la sociedad civil habían empezado ya a presionar para la «memoria histórica», como la llamaban.

La Ley de la Memoria Histórica fue un intento de corrección de una anomalía: el régimen de Franco había honrado a sus propios muertos, pero había ignorado o perseguido a las víctimas republicanas. La ley declaró ilegítimos los tribunales militares de Franco y sus sentencias; prohibió los relativamente pocos monumentos públicos que aún quedaban en pie en honor de Franco y de sus colaboradores y aliados; obligó a la Iglesia a retirar placas de homenaje a los «caídos por Dios y por España» en la «Cruzada»; prohibió toda conmemoración franquista en el Valle de los Caídos, y exhortó a transformar el Valle en un monumento por la memoria de todas las víctimas de la guerra. Estableció también una vía de financiación pública para abrir las fosas colectivas con víctimas sin identificar a las que se habían arrojado muchas de las otras víctimas de la represión política de ambos bandos[7]. Es evidente que, en una democracia, la gente tiene derecho a saber dónde están enterrados sus familiares, sobre todo si estos han sido víctimas del Estado; de hecho, algunos historiadores cuestionaban incluso la necesidad de aprobar una ley para instar al Gobierno a hacer algo que debería haber hecho de todos modos. Aun así, cuando el PP regresó al poder en 2011 en plena recesión económica, recortó los fondos destinados a cumplir con los preceptos de la Ley de la Memoria Histórica. De todos modos, algunos Gobiernos locales y asociaciones civiles continuaron financiando y organizando exhumaciones.

En noviembre de 2018, me subí a un AVE con destino a Valencia, ciudad que me recibió con un diluvio que hizo que el breve trayecto de taxi hasta el pueblo periférico de Paterna resultara casi imposible. Pero, pese a todo, conseguimos llegar a su pequeño cementerio municipal. Es un lugar rodeado de altos muros de ladrillo recubiertos de nichos; hay palmeras y cipreses entre las tumbas. Justo a un lado de la vía central, una lona azul protegía de la lluvia un hoyo de unos dos metros de profundidad. Era una de las múltiples fosas comunes sin identificar repartidas por aquel terreno, entre las tumbas convencionales —adornadas con flores y otros recuerdos— de las

demás personas fallecidas. Aquella mañana, el arqueólogo Alejandro Vila y su equipo habían exhumado un esqueleto del hoyo, el número 266 desde que iniciaran sus trabajos en aquel cementerio ocho meses antes. En un despacho junto a la entrada, varios conjuntos de huesos estaban cuidadosamente ordenados en bandejas. El equipo tomaba muestras de su ADN y las analizaba para hallar correspondencias con el de los familiares vivos de aquellas víctimas.

Valencia fue uno de los últimos bastiones de la malograda República. Tras su triunfo militar, las fuerzas de Franco instauraron allí un reinado del terror. Los tribunales castrenses sometieron a consejo de guerra no solo a los combatientes republicanos y a miembros de los partidos izquierdistas, sino también a civiles acusados de simpatizar con el que, en realidad, había sido el Gobierno legal hasta entonces. «Fue una purga política», me comentó Vila. Solo en Paterna, más de dos mil civiles fueron fusilados por vía sumaria; sus cuerpos fueron luego arrojados a fosas comunes. «Conocemos casi la totalidad de sus nombres, pero no sabemos si todos ellos están aquí, en el cementerio», me dijo Rosa Pérez Garijo, representante de Izquierda Unida en la Diputación Provincial de Valencia y encargada de memoria histórica. La Diputación era la que financiaba la excavación. Algunos familiares de las víctimas —nietos o nietas muchos de ellos— se lo toman con el máximo interés. «Algunos vienen casi a diario —reconoce Vila—. Se sienten aliviados. Hubo una larga noche de silencio. Tienen la sensación de que les han quitado una carga de encima». Algunas familias quieren llevarse los restos a sus localidades de origen. También las hay que solo buscan que les den una confirmación para poder colocar una placa conmemorativa en el propio cementerio. Y, según la propia Rosa Pérez, algunas no quieren que se desentierre a sus parientes. En total, puede que haya unas cien mil personas inhumadas en fosas de este tipo por todo el país. Entre 2000 y 2019, se abrieron setecientas ochenta y cuatro de esas fosas, de las que se exhumaron unos nueve mil seiscientos cadáveres. Según un asesor del Gobierno, solo unos veinte mil más seguirían siendo recuperables[8].

Hoy han desaparecido ya casi todos los recuerdos públicos de la dictadura, salvo algún que otro nombre de calle o plaza, o algún monumento en pueblos o localidades pequeñas. Con el paso del tiempo, se van corrigiendo las anomalías que aún puedan persistir. En 2015, Manuela Carmena, abogada laboralista que había escapado por poco de morir asesinada en la masacre en la que varios de sus compañeros de despacho fueron tiroteados por pistoleros de extrema derecha durante la Transición —conocida como la Matanza de Atocha

—, fue elegida alcaldesa de Madrid al frente de una coalición de izquierdas. Su Gobierno municipal nombró un amplio y variado comité de historiadores que sugirió cambiar los nombres de cincuenta y dos calles o plazas, una medida que fue aprobada por todos los partidos del consistorio a excepción del PP, que se abstuvo. En 2020, una jueza obligó a la familia Franco a retornar al patrimonio nacional (y sin compensación) el Pazo de Meirás, una mansión rural gallega que un grupo de simpatizantes había «donado» al dictador en 1938, pero para que la usara como residencia estival en calidad de jefe del Estado y no como propiedad privada particular. La casa había sido construida en su día por orden de la escritora y feminista Emilia Pardo Bazán. La magistrada sentenció que Franco se había apropiado ilegalmente de la finca en 1941 con un documento de compraventa falsificado9. La familia conserva aún una casa señorial urbana en La Coruña que fue «donada» en similares circunstancias. Y varios de los generales de guerra del bando franquista siguen estando enterrados en tumbas ubicadas en espacios destacados de varias catedrales españolas.

En 2020, Carmen Calvo hizo público un anteproyecto de ley de «memoria democrática» que iba mucho más allá de lo que había ido la ley de 2007. Constituía un poco de todo. En él se reiteraba, por ejemplo, el compromiso del Gobierno con la localización de los restos de las víctimas. La nueva ley también anularía las sentencias de los consejos de guerra franquistas (yendo más allá del simple hecho de negar su legitimidad) y retiraría los títulos nobiliarios y las medallas que hubieran concedido las autoridades de la dictadura. Proponía asimismo la expulsión de los benedictinos del Valle de los Caídos y la reconversión de todo ese espacio en un cementerio civil que se acompañara de una explicación de su historia. Más cuestionables, sin embargo, resultaban otras de las disposiciones contempladas. Así, en el anteproyecto se preveía otorgar al Gobierno el poder de clausurar organizaciones que hiciesen «exaltación» o «apología» de la dictadura, como sería el caso de la Fundación Francisco Franco, una entidad que custodia un archivo privado desde un discreto piso de Madrid y que atrae a un reducido número de nostálgicos del régimen. Convertirla en una especie de mártir por la libertad de expresión no parecía la opción más inteligente. Y, aun así, las dos partes más problemáticas del mencionado anteproyecto de ley eran la que obligaba a las escuelas a incorporar la «memoria democrática» en el currículo de las asignaturas de historia —algo que parecía sugerir que el Gobierno quería establecer una historia oficial y decidir quiénes serían los buenos y los malos de esa historia— y la que proponía instaurar una

fiscalía especial para investigar los abusos de los derechos humanos entre 1936 y 1978. Esto último no solo era, en esencia, fútil, dado que la mayoría de perpetradores de esos abusos están ya muertos, sino que también parecía un intento de derrocar por la puerta de atrás la Ley de Amnistía de la Transición.

Algunos sectores bastante influyentes, entre los que se incluyen abogados de la ONU, organizaciones de defensa de los derechos humanos, Podemos y algunos socialistas, quieren dar marcha atrás a aquella amnistía y, por lo tanto, a la Transición. Una de sus razones es que contraviene los principios de lo que hoy se conoce como «justicia transicional»10, según la cual, los acuerdos de paz deben incluir disposiciones que responsabilicen a los culpables de violaciones de los derechos humanos a gran escala llevándolos ante los tribunales y/o ante comisiones de la verdad. También esa justicia transicional promueve reparaciones para las víctimas e iniciativas oficiales para preservar en la memoria colectiva el recuerdo de los abusos pasados. Se trata de un enfoque bien intencionado y que, en algunos casos, ha resultado eficaz (al menos, parcialmente), sobre todo en países en los que las comisiones de la verdad se instituyeron al poco de iniciarse las transiciones democráticas (Argentina, Chile, El Salvador y Sudáfrica, por ejemplo).

En otoño de 2021, Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu propusieron una enmienda al proyecto de ley de memoria democrática con el fin de derogar partes de la Ley de Amnistía. El PSOE y Podemos reaccionaron entonces presentando otra enmienda a su propio proyecto de ley para modificar la Ley de Amnistía para reconocer que el derecho humanitario internacional ahora mantiene que los crímenes contra la humanidad no pueden ser objeto de amnistía ni tampoco pueden prescribir en el tiempo. Calvo ya había salido del Gobierno, pero su sustituto, Félix Bolaños, admitió que este cambio no tendría efecto práctico alguno, dada la irretroactividad que la Constitución establece para una ley de ese tipo, y debido a que casi todos los antiguos funcionarios franquistas están ya muertos. Si para algo sirvió este episodio fue para dar a entender que el debate sobre la historia había degenerado en una mera política tacticista de gestos.

Por muy deseables que sean las tres, la verdad, la justicia y la reconciliación forman una trinidad imposible de compaginar. Seguramente, el éxito de la transición española a la democracia radicó precisamente en el hecho de que no incorporase la justicia transicional como principio, pues esto la habría retrasado, la habría convertido en un proceso más violento o, simplemente, la habría impedido. Además, la Ley de Amnistía y otras normas legislativas de la Transición ya

preveían sus propias medidas de reparación. Más de setecientas mil personas se beneficiaron de ellas y recibieron un total de más de 21.000 millones de euros a lo largo de los cuarenta años siguientes. Entre ellas estaban los familiares de fusilados durante la guerra o en años posteriores, los soldados republicanos o sus familias, los presos políticos de la dictadura y los funcionarios de la República y sus parientes cercanos[11]. La ley de Calvo intentaba además encajar la caótica y compleja historia de la Guerra Civil y su represión posterior en un molde simplista que respondía más a las batallas políticas del momento que al interés por un estudio serio del pasado. Y lo cierto es que no estaría de más revisar esa historia por muy familiarizados que algunos crean estar con ella.

De la República a la Guerra Civil

Por lo general, la Guerra Civil ha sido vista y presentada por sus observadores extranjeros —los únicos que pudieron escribir libremente sobre ella mientras Franco aún vivía— como una heroica lucha antifascista que sirvió de preludio a la Segunda Guerra Mundial. Y esa fue, sin duda, una de sus dimensiones. Pero hubo también un «terror rojo» que fue, en parte, espontáneo y, en parte, orquestado por el Comintern, y del que Orwell y otros informaron en su momento. La guerra encerró también otros significados adicionales para los españoles. En sus orígenes, fue un conflicto interno, una continuación de las batallas del siglo XIX aunque a una escala aumentada por las ideologías totalitarias, los armamentos modernos y la intervención de las potencias extranjeras. Estalló en un contexto de tensiones políticas cada vez más profundas entre una sociedad urbana modernizadora y otra rural atrasada, entre los católicos y los anticlericales, y entre los demócratas leales al poder civil y los devotos del pretorianismo militar (véase el capítulo 4). También fue, en parte, una lucha de clases que enfrentó a los terratenientes, los industriales y ciertos sectores de la clase media contra los movimientos organizados de obreros y campesinos. La guerra no fue un suceso inevitable, como quienes la caracterizan como un prólogo de la contienda mundial subsiguiente vendrían a insinuar. La casualidad, el azar y las acciones de los individuos desempeñaron también un papel importante.

Pese a lo que la preocupación demostrada por los miembros de la Generación del 98 pudiese dar a entender, España había cambiado mucho en las tres primeras décadas del siglo XX. Gracias, en parte, a su no intervención en la Primera Guerra Mundial, el país vivió en aquel entonces una «Edad de Plata» —como se la llamó posteriormente— de progreso económico y ebullición cultural. La población de las

principales urbes se duplicó entre 1900 y 1930. Una clase media creciente y más diversa pasó a ocupar los lujosos edificios residenciales modernistas de los nuevos «ensanches» de numerosas ciudades, mientras una nueva clase obrera de trabajadores inmigrados desde la España rural se concentraba en barriadas marginales de las periferias. El resultado fue una sociedad que «ofrecía los contrastes más violentos» entre modernización y atraso, según escribió Manuel Azaña en 1939. «En ciertos núcleos urbanos, un nivel de vida alto, adaptado a todos los usos de la civilización contemporánea, y a los pocos kilómetros, aldeas que parecen detenidas en el siglo XV»12. Al menos la mitad de los españoles ya no eran analfabetos y, por vez primera, no llegaban al 50 % los que trabajaban en la agricultura. Pero, sobre una población total de 24 millones de habitantes, seguía habiendo unos dos millones de minifundistas en el norte y un millón y medio de jornaleros sin tierras que trabajaban como temporeros en los latifundios de Andalucía, Extremadura y La Mancha.

Azaña, un hombre tímido, amante de los libros y con cierto aire de candidez potenciado por sus gafas de cristal grueso, fue, en palabras de Paul Preston, «la personificación de la Segunda República»13. Él ya era un abogado, intelectual, alto funcionario y escritor antes de entrar en política como republicano liberal. Fue jefe del Gobierno de 1931 a 1933 y entre febrero y mayo de 1936, además de ministro de Guerra, y luego ejerció como presidente de la República de 1936 a 1939. Era un orador sobresaliente, tanto en Cortes como en mítines con gran concurrencia de público. Era también un demócrata y un hombre de leyes de una honestidad y una integridad personales absolutas. Fue posiblemente el más grande de los liberales españoles. Su principio fundamental era que la esencia de la patria residía en la igualdad de los ciudadanos ante la ley, antes que en definiciones excluyentes sobre la identidad racial o religiosa. También creía que la política debía regirse por la razón y los votos. Siguió siendo leal a la República hasta el final, aun sabiendo que su destino estaba sellado (falleció en 1940 en el exilio francés, en Montauban). Todo esto lo convirtió en blanco de un odio y una inquina especiales por parte de la derecha.

Azaña era también vanidoso, poco empático y capaz de ser poco flexible. Como los estadistas de la Ilustración española del XVIII, tendía a sobreestimar la capacidad de las leyes para cambiar la realidad. Su juicio político fue equivocado en ocasiones. La facilidad con la que la monarquía se derrumbó en 1931 indujo en él una falsa sensación de confianza. Fue uno de los que calificó lo ocurrido de «revolución», cuando, en realidad, aquello no implicó transformación fundamental

alguna en las estructuras de poder. La República posiblemente trató de cambiar demasiadas cosas con demasiada rapidez. Azaña infravaloró una y otra vez lo mucho que el país seguía estando dividido en dos en el plano político, y tampoco supo apreciar la verdadera medida de la amenaza que para la República representaron la derecha católica, primero, y los conspiradores del ejército, después[14].

La República inició su andadura en 1931 bajo los auspicios del centro-izquierda —liderado por Azaña— decidida a abordar las cuestiones pendientes del siglo XIX: poner coto a la influencia de la Iglesia católica, reformar las fuerzas armadas y buscar algún tipo de arreglo para los conflictos sociales y regionales que la dictadura de Primo de Rivera (véase el capítulo 3) había tratado de sofocar sin éxito. Azaña se quejaba de que, pese a las reformas de Mendizábal, la Iglesia hubiese recuperado influencia política durante la Restauración monárquica. «En vez de hacerse con la propiedad, se hizo con la conciencia de los propietarios y de este modo se adueñó tanto de las conciencias como de la propiedad»[15]. Una nueva Constitución estableció la separación entre Estado e Iglesia, que pasó a convertirse en una asociación civil sometida a la ley; también se redujeron los salarios del clero, se prohibió a las órdenes religiosas impartir enseñanza civil y se retiraron los crucifijos de las escuelas públicas. Fue un intento decidido de imponer el laicismo de corte francés. «España ha dejado de ser católica», declaró Azaña. Con estas palabras quiso afirmar un hecho jurídico que, sin embargo, a oídos de sus oponentes sonó como una provocación. Los frenos constitucionales a la Iglesia llevaron a algunos centristas a abandonar la coalición de gobierno. Gracias a la defensa que la abogada feminista Clara Campoamor, diputada del Partido Radical, hizo de la causa de las mujeres, la Constitución incluyó también no solo el divorcio y el reconocimiento legal de los hijos nacidos fuera del matrimonio, sino también el sufragio universal femenino. Esto último llegó tras un enconado debate en el que ciertas figuras de la izquierda manifestaron su oposición a dejar que las mujeres votasen porque entendían que estas estaban, por lo general, demasiado influidas por los curas católicos; por su parte, la derecha se opuso a esta medida alegando los consabidos argumentos sexistas tradicionales.

Desde su cargo como ministro de Guerra, Azaña prometió «republicanizar» el Ejército. Comenzó recortando el número de oficiales en activo mediante pases anticipados a la reserva. Clausuró la academia militar de Zaragoza, de la que Franco era director desde 1928 y que estaba dominada por los oficiales «africanistas», como se conocía a los que habían servido en las guerras coloniales en

Marruecos. Azaña intentó instaurar un mayor control civil sobre los ascensos castrenses y promovió los de oficiales conocidos por sus simpatías republicanas16. Eran medidas ciertamente apropiadas para una democracia, pero causaron un hondo resentimiento entre muchos altos oficiales, que comenzaron a ver a Azaña como un enemigo. Un buen número de ellos, además, se oponían de plano también al Estatuto de autonomía aprobado para Cataluña en 1932.

La República nació en medio de un difícil contexto internacional. España fue golpeada por la Gran Depresión, como el resto de Europa: entre 1929 y 1935, la economía se contrajo en casi un 10 %, la inversión cayó en aproximadamente un 35 %, las exportaciones descendieron un 25 %, el desempleo aumentó y las cuentas públicas pasaron a ser deficitarias. El Estado carecía de fondos suficientes para financiar sus reformas. La ley agraria, por ejemplo, preveía la expropiación de grandes fincas con la correspondiente compensación. Pero tanto esta como la reforma laboral encendieron las alarmas de los propietarios sin satisfacer tampoco a los agricultores ni a los obreros. Los anarquistas aprovecharon la ocasión para iniciar una campaña de huelgas contra el Gobierno.

Algunos dirigentes de uno y otro lado del espectro político comenzaron a cuestionar la democracia (retóricamente, al menos). José María Gil Robles, líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), un nuevo partido derechista católico que crecía como la espuma, se declaró admirador del autoritario y corporativista «Estado Novo» instaurado por António Salazar en Portugal en 1933. «¡Qué importa que nos cueste hasta derramar sangre! —declaró Gil Robles durante la campaña electoral de 1933—. […] La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo. Llegado el momento, el Parlamento o se somete o le hacemos desaparecer»17. En esa misma campaña, Francisco Largo Caballero, líder del ala izquierdista del PSOE, amenazó: «Vamos legalmente hacia la evolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución violentamente. […] Estamos en plena Guerra Civil. No nos ceguemos, camaradas»18. (Esto lo dijo casi tres años antes de que estallara la verdadera Guerra Civil). Con la izquierda dividida después de que Largo Caballero se negase a que los socialistas continuasen coaligados con otros republicanos más centristas, la derecha barrió en los siguientes comicios. También había moderados tanto en la CEDA como en el PSOE. Pero cuando la CEDA entró en el Gobierno en octubre de 1934, la izquierda respondió con un llamamiento a la revolución. La UGT, la confederación sindical socialista, convocó una huelga general. Los mineros de Asturias se

levantaron en insurrección armada e impusieron allí un orden social revolucionario durante un par de semanas, periodo en el que asesinaron a treinta y cuatro sacerdotes y seminaristas. El Gobierno despachó hasta allí a Franco al mando de dieciocho mil soldados para sofocar la revuelta, cosa que hizo, aunque a costa de causar mil cien muertos entre los insurgentes, trescientos entre sus tropas, y unas treinta mil detenciones.

Azaña siempre pensó que la unidad de los partidos republicanos y los socialistas era fundamental para el éxito y la supervivencia de la República. Así que formó un Frente Popular que incluía tanto al PSOE como al pequeño Partido Comunista de España (PCE) y que se presentó unido a las elecciones de febrero de 1936, que ganó por muy estrecho margen. El ambiente era de polarización en aumento y esta se vio más exacerbada por una sucesión de asesinatos de mutuo castigo: cuando un teniente socialista de la Guardia de Asalto —fuerza policial creada por la República— fue asesinado por pistoleros falangistas, sus camaradas mataron a José Calvo Sotelo, el líder parlamentario de los monárquicos, en represalia. Ese fue el desencadenante del *putsch* militar que un grupo de generales llevaba ya un tiempo planeando. Su líder, el general Emilio Mola, pretendía efectuar un golpe de Estado violento que pusiera a todos los líderes políticos y sindicales bajo arresto e instaurase una dictadura militar basada en el modelo del régimen de Primo de Rivera. Los oficiales que no se sumaran al alzamiento serían fusilados.

Sin embargo, el golpe, que se dio finalmente entre los días 17 y 18 de julio, solo triunfó a medias. Una mayoría del alto generalato y una minoría importante de las tropas bajo su mando se mantuvieron leales a la República, como también lo hizo la mayor parte de la armada y de la aviación. En algunas ciudades —Madrid, entre ellas—, las organizaciones obreras se levantaron, lo que hizo que en muchos cuarteles se dudase. También el Gobierno vaciló, pues no estaba seguro de si armar a los trabajadores o no, como al final hizo. La intentona golpista derivó en guerra civil, revolución y contrarrevolución. A comienzos de agosto, España estaba ya dividida en dos zonas definidas por las lealtades de los altos mandos militares y por el equilibrio de fuerzas en las diversas ciudades y regiones. Los rebelados (nacionalistas españoles o *nacionales)* controlaban una amplia zona del oeste de Andalucía, así como León, la Castilla situada al norte de Madrid, Galicia, Navarra y parte de Aragón; la costa septentrional entre el País Vasco y Asturias estaba bajo control republicano, así como el resto del país.

Los nacionales ganaron tras casi tres años de guerra sin cuartel

por dos motivos principales. En primer lugar, recibieron un apoyo exterior más temprano y más efectivo que la República. Hitler y Mussolini enviaron escuadrones de aviones de transporte para trasladar el ejército de África de Franco (es decir, las fuerzas de la Legión y los mercenarios marroquíes, muy curtidos en combate) hasta la Península. Esa fue una intervención crucial, pues, sin ella, el golpe probablemente habría fracasado y la guerra jamás habría tenido lugar. En seguida despacharon equipo y material, así como la Legión Cóndor alemana, cuyos bombardeos aéreos de las localidades vascas de Durango y Guernica constituyeron crímenes de guerra (denunciados por Picasso). Habiéndole sido negada ayuda por parte de los Gobiernos británico y francés, empeñados en seguir una política de no intervención, la República consiguió finalmente el apoyo de los soviéticos, sobre todo, en forma de tanques y de unas Brigadas Internacionales organizadas por el Comintern. Todo esto sirvió para prolongar la guerra, pero no para ganarla[19].

El segundo motivo fue que los *nacionales* tuvieron tanto un mando como un propósito unificados. En la zona republicana, por el contrario, la entrega de armas a los obreros hizo fuertes a una infinidad de milicias izquierdistas que, en muchos casos, estaban más interesadas por hacer la revolución que por ganar la guerra. Solo la influencia creciente de los comunistas y la dedicación de oficiales de carrera leales al régimen consiguieron que, al final, la República organizase un ejército disciplinado. Entre esos oficiales leales estuvieron el general José Miaja, que estuvo al mando de la defensa de Madrid, y el general Vicente Rojo, que ascendió hasta el puesto de jefe del Estado Mayor republicano. Ese ejército resistió. Incluso se anotó algunos éxitos tácticos iniciales en batallas importantes (como las de Brunete y Teruel en 1937, y la del Ebro en 1938) que, aun así, fue incapaz de transformar en victorias decisivas debido, sobre todo, a su deficiente sistema de comunicaciones y a la calidad inferior de sus oficiales de menor rango.

Mitos y realidades de la guerra

La Guerra Civil española no tardó en adquirir un estatus mítico. Según un recuento, hasta el año 2007, se habían publicado un mínimo de cuarenta mil libros sobre el tema, y desde entonces no han dejado de editarse muchos más. A juicio del historiador español Enrique Moradiellos, son dos los grandes mitos que han surgido en torno a aquella guerra: uno es el mito de la Guerra Civil como conflicto épico y heroico entre el bien y el mal, como algo digno de elogio y recuerdo; el otro es el mito de un conflicto entendido como un episodio de

trágica locura colectiva que debería lamentarse y olvidarse[20]. La historiografía moderna sugiere una perspectiva más matizada. Los españoles vivieron aquella guerra como un desesperado conflicto fratricida que dividió a familias, vecinos y colegas. En ambos bandos hubo durante la guerra héroes y villanos, idealistas y oportunistas, actos de crueldad y actos de bondad. A veces, las familias quedaron escindidas: hubo hermanos que lucharon en bandos opuestos, ya fuera por convicción, ya fuera (las más de las veces) por el lugar donde se encontraban cuando estalló la guerra. Ambos ejércitos recurrieron al reclutamiento forzoso.

La confrontación política fue más compleja de lo que el primer mito da a entender. Moradiellos sostiene que, en la Segunda República, hubo una «pugna triangular» que enfrentó a tres fuerzas entre sí: el reformismo democrático republicano, la reacción autoritaria fascista y la revolución socialista internacionalista. La división entre demócratas y revolucionarios que había debilitado a los Gobiernos de centro-izquierda se prolongó en el bando republicano durante la guerra. Recorrió incluso el partido socialista por su mismo medio. Largo Caballero, el engreído, incompetente, pero también poderoso presidente de la UGT, el sindicato socialista, se vanagloriaba del sobrenombre de «el Lenin español» que le había puesto el corresponsal del diario soviético *Pravda* en España. En la primavera de 1936, ya había asestado un primer golpe muy debilitador al Gobierno de preguerra con su rechazo sectario a la entrada en él de ministros socialistas y con su bloqueo al nombramiento como primer ministro de Indalecio Prieto, el tenaz y capaz líder del ala moderada del partido, y gran rival de Largo[21]. Además, si la República hubiera ganado la guerra con la ayuda soviética, España habría tenido que sufrir casi con toda seguridad un régimen comunista análogo a los de los países de la Europa del este tras 1945.

Aquella situación produjo una gran consternación en Manuel Chaves Nogales, el periodista sevillano que había informado con tanta perspicacia desde Cataluña (véase el capítulo 3). A él, que se autodefinía como «un pequeño burgués liberal» y «ciudadano de una república democrática y parlamentaria», de temperamento tan antifascista como antirrevolucionario, lo avisaron antes de que se iniciara la guerra de que un grupo fascista quería matarlo, y de que los anarquistas y los comunistas lo consideraban «perfectamente fusilable». Cuando estalló la contienda, el «consejo obrero» formado por los trabajadores del diario *Ahora*, del que él era director en Madrid, expulsó al dueño y se incautó de la empresa. Chaves siguió trabajando amigablemente con ellos, pero abandonó la capital en

noviembre de 1936, el mismo día en que el Gobierno republicano encabezado por Largo Caballero, que se había convertido en primer ministro en agosto, decidió huir del asedio de las fuerzas franquistas a Madrid y partir rumbo a Valencia. Chaves consideró que aquel gesto significaba el fin de la república parlamentaria en la que él creía. A comienzos de 1937, exiliado en París, publicó una recopilación de relatos extraordinariamente realistas de episodios de los primeros meses de la guerra. En el prefacio, escribió que fuera cual fuere el bando que ganase, el resultado sería «un gobierno dictatorial que con las armas en la mano obligará a los españoles a trabajar desesperadamente y a pasar hambre sin rechistar durante veinte años, hasta que hayamos pagado la guerra»[22]. Cuánta razón tenía.

Los reformistas democráticos perdieron por partida doble. Algunos —como Azaña, o como Juan Negrín, jefe del Gobierno socialista de mayo de 1937 a marzo de 1939— sirvieron lealmente a la República hasta el final. Otros muchos (liberales, demócratas y socialistas moderados) no vieron más opción que tomar el camino del exilio antes incluso de que la guerra terminara. Entre ellos estaban figuras como Clara Campoamor, Ortega y Gasset y otros muchos intelectuales y escritores. Uno de ellos era Arturo Barea, escritor y socialista comprometido que había trabajado en el gabinete de censura de la República durante el sitio de Madrid. Traumatizado por los bombardeos de las fuerzas franquistas, y caído en desgracia ante el PCE, que no se fiaba de él ni de Ilsa Kulcsar, marxista austriaca a la que Barea conoció durante la guerra y con la que se casaría posteriormente, buscó refugio junto a ella primero en Francia y, finalmente, en Gran Bretaña. *La forja de un rebelde*, trilogía autobiográfica memorable que escribió sobre su infancia en el popular barrio madrileño de Lavapiés, su servicio militar en la guerra de Marruecos y su vivencia de la Guerra Civil en primera persona, no se publicaría en España hasta 1978. También Chaves terminó refugiándose en Gran Bretaña. Olvidado desde entonces en España, ni él ni su obra fueron redescubiertos hasta esta pasada década.

El Gobierno republicano gozaba de una legitimidad democrática de origen de la que la rebelión franquista carecía por completo. El proyecto de Franco era autoritario, represivo, oscurantista y ultrarreaccionario: una rebelión contra el mundo moderno. Azaña se mantuvo en su puesto a pesar de los muchos reparos que le producían los revolucionarios en el bando republicano: su rechazo fundamental al alzamiento franquista era más fuerte que todos sus recelos. En un discurso que pronunció en Valencia en 1937, dijo:

> Aunque hubiesen sido ciertos todos los males que se cargaban a la República, no hacía falta la guerra. Era inútil para remediar aquellos males. Los agravaba todos, añadiéndoles los que resultan de tanto destrozo[23].

Pero el comportamiento de los republicanos distó mucho de ser impecable. Si Franco y la Falange impusieron un reinado del terror en su zona de España, los activistas izquierdistas hicieron lo propio en la suya. Antes se decía que la represión en la España republicana fue más espontánea, más vinculada a la acción de milicias descontroladas. Aunque eso fue cierto en parte, según estudios recientes obedeció en buena medida a una eliminación mucho más organizada de oponentes políticos[24].

Las estimaciones sobre el total de muertos causados por la Guerra Civil y la represión de posguerra varían inmensamente. Según cálculos recientes de varios historiadores españoles, entre trescientas mil y trescientas cincuenta mil personas murieron en la guerra en sí (ciento setenta y cinco mil de ellas en el frente o por efecto de los bombardeos). Unas tres quintas partes de esa cifra corresponden a muertes en el bando republicano. Además, otras ciento cincuenta y cinco mil murieron víctimas de la represión (unas cien mil en las zonas franquistas y el resto en las republicanas). Veinte mil más fueron ejecutadas por el régimen de Franco durante los seis primeros años desde el final de la guerra. Otras trescientas cincuenta mil personas murieron de enfermedad o hambre durante el conflicto. Por lo menos ciento setenta mil partieron hacia el exilio de forma permanente[25]. Como en las guerras carlistas del siglo previo, muchos prisioneros fueron pasados por las armas sin más trámite, al menos durante las primeras semanas de la contienda. Y, como en cualquier conflicto bélico, hubo numerosos casos de violaciones y de violencia sexual contra las mujeres. Los tribunales militares de Franco conmutaron muchas de las penas de muerte que inicialmente impusieron a los reos republicanos; fueron más los prisioneros a los que se les terminó perdonando la vida que aquellos a los que se fusiló finalmente, lo que viene a demostrar que no hubo ningún «holocausto español». Pero no cabe duda de que la meta que el dictador tenía en mente era aplastar a «los rojos». La magnanimidad en la victoria que demostró Espartero en la Primera Guerra Carlista no iba con él. De hecho, ordenó borrar el nombre de «Príncipe de Vergara» (título nobiliario que se concedió en su día al general liberal) de una de las calles más largas de Madrid y sustituirlo por el de «General Mola».

En aquellos años, la vida y la muerte fueron una lotería para la población civil, sobre todo durante los primeros meses de la guerra y, para los republicanos, también durante los primeros momentos de la

posguerra. El asesinato más tristemente famoso de todos fue el del poeta y dramaturgo Federico García Lorca en agosto de 1936, a quien tres hombres (entre ellos, un exdiputado de la CEDA y un terrateniente falangista) sacaron de su casa de las afueras de Granada. Cuando la columna del ejército de África comandada por el coronel Juan Yagüe tomó Badajoz en agosto de 1936, sus tropas agruparon a unos mil doscientos milicianos y civiles desarmados en la plaza de toros de la ciudad y los fusilaron a todos. Una columna de mujeres y niños que huían de Málaga ante la inminente llegada de los *nacionales* fue ametrallada en la carretera hacia Almería por la aviación de Franco y bombardeada con obuses desde el mar. Al inicio del sitio franquista del Madrid republicano, y siguiendo órdenes de Santiago Carrillo —a la sazón un joven comisario político que acabaría liderando el Partido Comunista de España—, unos dos mil prisioneros, entre los que había tanto oficiales del ejército como civiles, fueron sacados de los penales en los que estaban recluidos y fusilados en un paraje de Paracuellos del Jarama, un pueblo situado actualmente junto al madrileño aeropuerto de Barajas. Leopoldo Alas, rector de la Universidad de Oviedo y miembro del partido Izquierda Republicana, liderado por Azaña, fue fusilado por un pelotón franquista en dicha ciudad; uno de los miembros de este, antiguo alumno del rector, fue fusilado a su vez por negarse a disparar contra su antiguo profesor. Melquíades Álvarez, amigo de Alas, compañero suyo como profesor de la Facultad de Derecho de la misma universidad y republicano conservador, fue arrestado y, posteriormente, ejecutado sumariamente por milicianos de izquierda en Madrid en agosto de 1936 simplemente por su aspecto de «burgués». La noticia de su asesinato hizo que Azaña, quien en 1913 había ingresado en el Partido Reformista de Álvarez, se planteara presentar su dimisión como presidente[26].

Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, actual presidente del Patronato de la Fundación del Teatro Real de Madrid y cuyo abuelo paterno fue el famoso médico y liberal español homónimo, narró la historia de su abuela materna que se crio en una familia liberal, varios de cuyos miembros habían tenido que exiliarse o habían sido perseguidos e incluso asesinados por los Gobiernos absolutistas del siglo XIX. En agosto de 1936, a sus setenta años, fue sacado de su casa por milicianos republicanos y fusilado ante la tapia del cementerio de Aravaca, en las afueras de Madrid[27]. Joan Peset i Aleixandre era un bacteriólogo y abogado que había sido rector de la Universidad de Valencia y, posteriormente, diputado por el partido de Azaña. Durante la guerra trabajó en varios hospitales militares y se esforzó por impedir la muerte de unas cuantas personas a manos de los

anarquistas. Cuando cayó Valencia, tres envidiosos rivales profesionales suyos le acusaron —sin pruebas— de haber ordenado asesinatos. Un consejo de guerra lo halló culpable de rebelión y lo condenó a muerte, aunque recomendando que se le conmutara la pena. Pero la Falange presentó ante el tribunal una conferencia que Peset había impartido en la que condenaba el golpe de 1936, lo que activó de nuevo la pena capital para el acusado. Fue fusilado en el cementerio de Paterna en 1941[28].

Franco, dictador y superviviente

¿Franco era fascista? ¿Se le debe situar en la misma categoría que a Hitler y a Mussolini? Franco, a diferencia de estos, era un oficial militar de carrera. Nació y se crio en el puerto gallego de Ferrol en el seno de una familia de clase media baja y larga tradición naval[29]. «Soy un soldado»: así se definía a sí mismo. Su ideología era la de muchos oficiales del ejército de África: un nacionalismo español extremo para el que la religión católica era parte integral de la gloria pasada del país. Para él, las causas de la decadencia nacional radicaban en el liberalismo, la masonería (una particular obsesión suya), el comunismo y los nacionalismos catalán y vasco, causas todas ellas que combatió sin tregua. Recelaba del mundo exterior. Antes que a Hitler o a Mussolini (que fueron derrocados por invasiones extranjeras), Franco era más parecido a los dictadores militares reaccionarios en la Europa del este de entreguerras, o a los de América Latina, o al portugués Salazar (1933-1970).

En Marruecos, donde sirvió diez años, Franco destacó como un oficial valiente y entregado a su trabajo, pero también despiadado; sobrevivió a una grave herida de combate. Su ascenso fue meteórico y alcanzó el rango de general de brigada a los treinta y tres años. Como el general chileno Augusto Pinochet, Franco también abusó del poder para acumular patrimonio personal —propiedades y tierras, sobre todo— apropiándose de donaciones públicas y cobrando sobornos. Según Paul Preston, al morir, su fortuna estaba valorada en unos 400 millones de euros (en precios de 2015). También fue extraordinariamente malicioso y cruel, dotado de un instinto sumamente desarrollado para buscar su propia supervivencia y encontrar los puntos débiles de sus rivales. Transformó la inescrutabilidad arquetípica del carácter gallego en un arte. Se valió de su condición de comandante del ejército de África al comienzo de la guerra, y de negociador de la ayuda de Alemania e Italia, para maniobrar veloz hasta situarse a la cabeza de la rebelión. Tras dos días de conversaciones en un campo de aviación próximo a Salamanca en

septiembre de 1936, se aseguró el respaldo de sus colegas generales, pese a que muchos de ellos estaban por encima de él en la jerarquía militar. Accedieron a que se convirtiera en el «Generalísimo» de las fuerzas armadas y el jefe del Gobierno mientras durase la guerra[30]. Muchos de aquellos generales esperaban que, al término de la contienda, se produjera una rápida restauración de la monarquía. Pero Franco convirtió aquel mandato condicional en una de las dictaduras personales más largas del siglo XX. Y lo logró gracias tanto a la suerte como a su habilidad. Varios rivales potenciales se habían apartado de la pugna por el poder: los generales Sanjurjo y Mola, rebelados de mayor rango que él, habían fallecido en sendos accidentes aéreos, y el estallido de la Guerra Civil sorprendió a José Antonio Primo de Rivera en territorio leal a la República, donde fue encarcelado y, finalmente, ejecutado.

Franco encabezaba una amplia coalición de derechas que abarcaba desde fascistas y carlistas hasta católicos moderados. Y tal como Preston ha señalado, supo manipular y controlar con maestría a las diferentes «familias» del régimen enfrentándolas entre sí y forzándolas a ser cómplices suyos a base de implicarlas en sus corruptelas. Como el argentino Juan Domingo Perón, que prestó ayuda económica a España a finales de los años cuarenta y, luego, eligió Madrid como ciudad en la que exiliarse de 1955 a 1973, Franco era experto en dejar en cada uno de esos grupos la impresión de que estaba de acuerdo con ellos. También «tenía el don de creerse sus propias mentiras», según Preston[31]. El régimen franquista se basaba en tres pilares institucionales: el Ejército, la Iglesia y el «Movimiento», que formó en 1937 tras fusionar a la fuerza todos los partidos de derecha existentes en un solo partido oficial de Estado bajo el enrevesado nombre de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (o FET y de las JONS). Fundada en 1933, la Falange original era aún una fuerza bastante pequeña cuando estalló la guerra. Al principio, el Movimiento adoptó buena parte de la simbología de la Falange, pero, con el tiempo, se fue volviendo menos ideológico y pasó a ser una maquinaria dirigida a premiar a los partidarios del régimen con puestos o sinecuras. Ya en los años sesenta, surgiría un cuarto pilar institucional formado por un funcionariado profesional y meritocrático.

Franco fue un fascista de conveniencia —más que por convicción — que situó a falangistas en puestos destacados durante la Segunda Guerra Mundial, cuando le fueron útiles, y luego los relegó. Debía su victoria, en parte, a las potencias del Eje y creía que estas ganarían la Segunda Guerra Mundial. Sabía que España estaba demasiado débil,

económica y militarmente, para entrar en aquella contienda. Pero envió a una fuerza de «voluntarios», la División Azul, a combatir en el frente ruso, y aspiraba a quedarse con Gibraltar como premio tras lo que suponía que sería una derrota de los Aliados[32]. Al suspicaz nacionalista y antiliberal que era Franco le gustaba la política falangista de autarquía y control estatal de la economía. Y, de hecho, la huella más duradera de la Falange sería el corporativismo, el sistema mussoliniano de «sindicatos» verticales que conciliaba los intereses de los trabajadores y de los empresarios (o, más bien, que supeditaba los primeros a los segundos). Pero el fascismo no era la esencia de la ideología de Franco, como bien comprendió Azaña en fecha bastante temprana. En 1937, el presidente republicano escribió esto en su diario:

> Hay o puede haber en España todos los fascistas que se quiera. Pero un régimen fascista no lo habrá. Si triunfara un movimiento de fuerza contra la República, recaeríamos en una dictadura militar y eclesiástica de tipo tradicional. Por muchas consignas que traduzcan y muchos motes que se pongan. Sables, casullas, desfiles militares y homenajes a la Virgen del Pilar. Por ese lado, el país no da para otra cosa[33].

Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, Franco se fue distanciando rápidamente del Eje. Casi de la noche a la mañana, la ideología del régimen comenzó a poner el acento en el catolicismo y en la tradición conservadora española que remontaba al siglo XIX o incluso a la Contrarreforma. En la mesa de escritorio de Franco, la foto del papa reemplazó a las de Hitler y Mussolini. Nombró ministro de Exteriores al líder de la organización seglar Acción Católica, Alberto Martín-Artajo, que conservó ese cargo de 1945 a 1957. Martín-Artajo fue engañado a creer que el dictador lo había colocado ahí para que trabajara a favor de la vuelta del monarquismo católico. Los propagandistas de Franco sostuvieron falsamente durante mucho tiempo que el dictador había ayudado a salvar a los Aliados resistiéndose a las supuestas presiones de Hitler para que España entrara en la guerra (la realidad, como Hitler le contó a Ciano, ministro de Exteriores de Mussolini, en 1940, era que los alemanes consideraban que la intervención española «costaría más de lo que vale»)[34]. Franco comenzó a presentarse a sí mismo como paladín anticomunista de la Guerra Fría, el «centinela de Occidente». Aquello le bastó para procurarse la firma de un tratado de defensa con Estados Unidos (país al que invitó a instalar bases militares en España) y de un Concordato con el Vaticano.

Hacia 1950, la represión había empezado a aflojar, pero el nivel

de vida en España seguía siendo inferior al de 1930. El empeño en aplicar una autarquía ultraproteccionista llevó la economía nacional al borde de la quiebra. Aquella situación propició un cambio de fase en el régimen. Luis Carrero Blanco, el gris oficial naval que llevaba ya tiempo sirviendo como jefe de Estado Mayor de Franco y que terminaría siendo su jefe de Gobierno *de facto,* reclutó a un equipo de economistas de talento, muchos de ellos miembros de la organización seglar católica Opus Dei. Ellos pusieron en marcha un «plan de estabilización» en 1959 que abrió la economía al exterior. Ayudada por la inversión extranjera, por los inicios de la llegada del turismo de masas a España, y por las remesas de cientos de miles de españoles que habían emigrado a otros países en busca de trabajo, durante la década y media siguiente la economía creció a un ritmo anual medio próximo al 7 %. Surgió así una amplia clase media, y todo ese proceso hizo que Franco gozara de mayor apoyo popular. También se implantó el acceso a la función pública por méritos, sin excluir ya a los hijos de los antiguos republicanos.

A medida que su salud se deterioraba en los años finales de su vida, Franco se fue encerrando en una especie de semiaislamiento. Henry Kissinger dijo que, cuando él y el presidente Richard Nixon visitaron El Pardo en 1970 para entrevistarse con Franco y otras altas autoridades, este enseguida se quedó dormido. En 1969, ya había designado a Juan Carlos —nieto de Alfonso XIII— como su sucesor. En el régimen, había quienes esperaban que, a la muerte del dictador, las cosas siguieran como estaban. Él mismo había afirmado que lo dejaba todo «atado y bien atado». Pero toda opción de que eso fuera así se desvaneció en 1973 cuando ETA asesinó al almirante Carrero Blanco tras salir de su misa matutina en una iglesia de la calle Serrano de Madrid, al hacer explosionar las cargas que dispuso en el recorrido del coche oficial y provocar que este volara hasta lo alto de un edificio próximo. Aquel incidente motivó una última ola de represión (la Policía siguió torturando hasta el final de la dictadura). Pero, tras la muerte de Franco, los moderados del régimen se impusieron rápidamente a sus halcones.

UN PACTO PARA EL RECUERDO

En 1938, en su último discurso en público desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona y con motivo del segundo aniversario de la sublevación militar, Azaña advirtió de que, cuando a futuras generaciones «les hierva la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelva a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su lección:

[…] paz, piedad, perdón»[35]. Precisamente ese fue el espíritu de perdón y tolerancia mutuos en el que discurrió la Transición. Puede decirse que, en muchos sentidos, la actual monarquía parlamentaria española representa los valores de Azaña y de la República.

¿Hubo un «pacto de olvido»? Y si lo hubo, ¿fue algo negativo? El término es, cuando menos, poco apropiado. De hecho, puede entenderse que la democracia española nace más bien de un pacto que fomenta el recuerdo: según una encuesta de 2008, el 74 % de los consultados dijeron que, cuando eran pequeños, en su familia se hablaba «poco» o «nada» de la Guerra Civil, y lo mismo manifestaron el 70 % a propósito del régimen franquista[36]. Pero, desde los años setenta, la sociedad española ha «recordado» la Guerra Civil y la dictadura a través de un aluvión de publicaciones, estudios, exposiciones, películas y conmemoraciones. Javier Cercas, quien ha escrito de forma conmovedora sobre la Guerra Civil, ha declarado que lo que hubo, en realidad, fue un pacto de recuerdo, aunque en un sentido diferente: todo el mundo era consciente de los horrores del pasado y estaba decidido a no repetirlos[37]. La amnistía general decretada durante la Transición fue una demanda de la izquierda, no de la derecha. Era una propuesta política del Partido Comunista de España desde 1956, y del PSOE desde incluso antes. Ese acuerdo para no usar el pasado como arma política tenía mucho sentido, visto lo terriblemente divisivo que este era.

La «memoria histórica», ese concepto que llevan por bandera quienes denuncian que hubo un pacto de olvido, es un oxímoron. La memoria no es historia. Es individual y es frágil[38]. Tod a iniciativa para convertirla en un producto colectivo patrocinado por el Estado, como el Gobierno de Sánchez parecía estar tratando de hacer, es un intento de reescribir la historia con fines políticos. «La memoria solo busca rescatar el pasado para servir al presente y al futuro», escribió el historiador francés Jacques Le Goff[39]. La historia, por el contrario, debería consistir en un intento de dilucidar con la mayor objetividad posible los hechos y las complejidades del pasado.

Quienes defienden la necesidad de la «memoria histórica» aducen dos argumentos para ello. Uno es que el recuerdo público supone un reconocimiento y un alivio del sufrimiento de las víctimas. El otro es que el fomento de una «memoria histórica» impedirá la repetición de las atrocidades pasadas. Pero lo primero que hay que determinar, antes de nada, es qué recordar y cómo recordarlo: a quién hay que exaltar y a quién hay que condenar en ese presunto ejercicio de «memoria democrática». Y, como este capítulo ha mostrado, ni la Guerra Civil ni el régimen franquista son tan sencillos de interpretar

como los mitos que circulan en torno a ellos pueden inducirnos a pensar. Hubo una guerra civil, no un genocidio. Casi la mitad del país votó a la derecha en 1936. Los Gobiernos extranjeros terminaron reconociendo a Franco. En la misma encuesta de 2008 antes citada, casi el 60 % de los consultados coincidieron en señalar que Franco había hecho cosas malas y buenas[40].

El debate debe partir de la base de que el Ejecutivo republicano de 1936 era, sin lugar a duda, el Gobierno legítimo de España, y los generales del bando nacional orquestaron una intentona golpista ilegal. Pero, a partir de ahí, ya no hay blancos y negros, sino solo grises. Cercas ha señalado que, si bien la República tuvo la razón política de su parte, no tuvo el monopolio de la razón moral ni de la virtud. «Igual que hay canallas de las buenas causas, hay gente que de buena fe se pone del lado equivocado. Juzgarlos ahora es muy fácil»[41]. No todos en el bando republicano eran demócratas, ni todos en el bando nacional no lo eran. Y ni siquiera quienes eran demócratas lo fueron todo el tiempo. Prieto, cuyo cuestionable papel en el levantamiento de octubre de 1934 fue la única mancha en su, por lo demás, impecablemente democrática carrera política, escribió a Negrín en 1939 con autoconciencia crítica: «Pocos españoles de la actual generación estarán libres de culpa por la infinita desdicha en que han sumido a su patria. De los que hemos actuado en política, ninguno»[42].

De visita oficial en Chile en 2018, Pedro Sánchez declaró que quería crear «una comisión de la verdad para acordar una visión de país de lo que ocurrió durante la guerra civil y la dictadura franquista». Quería que la comisión «sea lo más plural posible [y en la] que estén incorporadas todas las perspectivas históricas sobre la Guerra Civil y sobre la dictadura» para «que de una vez por todas se cierren esas heridas»[43]. Parece muy razonable. Desde que comenzaron a crearse en los años ochenta, más de cincuenta comisiones de la verdad se han formado en países de todo el mundo. Su función primordial es determinar lo ocurrido y permitir que las víctimas cuenten sus propias historias si desean hacerlo. Eso puede resultar especialmente valioso cuando aún están recientes las heridas de un conflicto, aunque algunos defensores de esa fórmula aseguran que no hay barrera temporal para su validez. El presidente Macron decidió crear en 2021 una comisión sobre la guerra colonial de Francia contra la independencia argelina que se prolongó de 1954 a 1962. «Francia lleva mucho tiempo en estado de negación», declaró Benjamin Stora, el historiador que la dirigiría[44]. Esa decisión se adoptó poco después de que en Bélgica se hubiese tomado otra muy parecida: allí una

comisión está investigando el terrorífico historial de su actuación como potencia colonial en el Congo.

En el caso de España, sin embargo, la labor ya realizada por numerosos historiadores e investigadores ha hecho que sea muy poco ya lo que queda por saber acerca de la Guerra Civil y de la dictadura. Para rellenar los vacíos, mejor haría el Gobierno en reformar la ley sobre secretos oficiales para permitir que los investigadores tengan acceso a los archivos militares, algo que sucesivos Ejecutivos han prometido que harían, pero no han hecho: una inacción que parecía delatar más la inercia burocrática que unos oscuros afanes conspirativos. Además, ochenta y cinco años después de que estallara la Guerra Civil, serían ya los descendientes —y no las víctimas— quienes testificarían ante una comisión de la verdad. No cabe duda de que algunas familias de republicanos sentían que su sufrimiento no fue reconocido por mucho tiempo. Es cierto que no lo estuvo durante la dictadura, pero ahora sí que lo está. También resulta muy cuestionable que se pueda llegar a establecer nunca una «visión de país» del pasado. El recuerdo y la reconciliación son especialmente dolorosos y difíciles tras las guerras civiles, como bien apuntó el general Charles de Gaulle ya hacia el final de sus días: «Todas las guerras son malas. […] Pero las guerras civiles, en las que ambos bandos son hermanos, son imperdonables, porque la paz no nace al terminar la contienda».

«Deberíamos plantear preguntas, antes que respuestas», me comentó una vez Santos Juliá, uno de los más distinguidos historiadores españoles, fallecido en 2019[45]. Para cerrar heridas y no abrirlas, la ley de «memoria democrática» tendría que haber sido negociada también con el PP. Pero el Gobierno no mostró intención alguna de hacerlo. Asimismo, una comisión de la verdad tendría que ser un ejercicio de autocrítica y de reconocimiento y perdón mutuos por parte tanto de la derecha como de la izquierda. En 2002, el PP decidió por fin condenar el golpe de Estado de 1936[46]. Pero, sabedores de que muchos de sus votantes de más edad crecieron siendo franquistas, los políticos populares no se sienten cómodos ahondando en el pasado. Y la izquierda continúa mitificando a los republicanos.

Todo lo relacionado con las propuestas de creación de una comisión de la verdad y con la aprobación de la ley de memoria democrática puso de manifiesto lo mucho que la historia está volviendo a usarse como arma política. De hecho, esta tendencia se remonta ya a unos veinte años atrás, en pleno comienzo de siglo. «Nada de eso ocurrió en la Transición —me dijo Juliá—. Nadie preguntaba entonces en qué bando luchó tu padre en la Guerra Civil».

Pero dos décadas después, los políticos comenzaron a identificarse políticamente con los actos de sus abuelos. Desde entonces, Podemos, en particular, se ha valido del antifranquismo como discurso político. Pero, recientemente, se ha hecho política con la historia tanto desde un lado de la divisoria política como desde el otro. Tras la publicación del anteproyecto de ley de «memoria democrática», el Ayuntamiento de Madrid, en manos del PP, decidió retirar una placa dedicada a Largo Caballero que se había colocado por decisión unánime del pleno consistorial en 1981 (y pese a que tanto él como Prieto continúan contando con destacadas estatuas en espacios públicos de Madrid).

El segundo argumento de los defensores de la «memoria histórica» y de la justicia transicional es que el no afrontamiento del pasado conduce a una democracia más débil o defectuosa, todavía impregnada de rasgos autoritarios. En una célebre frase, George Santayana, filósofo español que pasó gran parte de su vida en Estados Unidos e Italia, argumentó: «Quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo». Pero eso no es así. Según ha argumentado David Rieff en una bien meditada y erudita crítica del concepto de «memoria histórica»,

> la memoria histórica colectiva tal como las comunidades, los pueblos y las naciones la entienden y despliegan —la cual […] siempre es selectiva, casi siempre interesada y todo menos irreprochable desde el punto de vista histórico — ha conducido con demasiada frecuencia a la guerra más que a la paz, al rencor y al resentimiento (que parece cada vez más la emoción que caracteriza a nuestra época) más que a la reconciliación, y a la determinación de vengarse en lugar de comprometerse con la ardua labor del perdón[47].

Esto está siendo sin duda así en los Balcanes: para los nacionalistas serbios, la derrota en la batalla de Kosovo de 1389 juega un papel parecido al que 1714 juega para sus homólogos catalanes. También lo es en Irlanda del Norte, y en las recreaciones y los homenajes conmemorativos de la Confederación en el sur de Estados Unidos, de los que se deriva una línea de conexión directa con los intentos actuales de restringir el derecho de sufragio de los estadounidenses negros. Como concluye Rieff, «no es preciso negar el valor de la memoria para reiterar que la documentación histórica […] no justifica el paso franco moral que actualmente se le suele conceder a la rememoración»[48]. Según Carmen Calvo, «no tenemos ningún derecho a olvidar; existe la obligación de recordar»[49]. Pero, otra vez, no es así. No existe ningún deber moral absoluto de recordar, y los proponentes del concepto de «memoria histórica» tampoco pueden reclamarse poseedores de ninguna superioridad moral en ese sentido.

Todas estas son cuestiones que corresponde decidir a los individuos según crean oportuno, pero no al Estado.

La pregunta importante en la práctica es si el fantasma de Franco continúa ejerciendo alguna influencia sobre la sociedad española y sobre las instituciones de su democracia. Y la respuesta es que sí, pero muy poca. Apenas quedan uno o dos bares en todo el país (de las muchas decenas de miles que hay) acondicionados como locales consagrados a su memoria, y sus partidarios declarados son un pequeño núcleo de no más de unos pocos miles de incondicionales. Tras unos años de adaptación, la Guardia Civil terminó asimilando las prácticas democráticas como cuerpo. La democracia trajo consigo, además, una nueva fuerza de seguridad del Estado, la Policía Nacional, para complementar a los guardias civiles. Como las fuerzas del orden, también la Judicatura es predominantemente conservadora —como jueces y policías tienden a serlo en muchos países—, pero actualmente ya no queda ningún juez ni magistrado que fuera nombrado por Franco. Las fuerzas armadas, por su parte, perdieron su antiguo poder de veto político cuando Suárez impuso la legalización del PCE contra su voluntad y cuando el intento de golpe de 1981 fracasó. El ingreso en la OTAN y la participación en misiones internacionales de paz han introducido en la estructura militar española aquella modernización democrática con la que Azaña había soñado.

Los acontecimientos de los últimos años han suscitado leves murmullos de descontento entre las fuerzas de seguridad. Causó alarma en ellas, por ejemplo, la amenaza a la unidad de España planteada por el independentismo catalán. También se percibió preocupación en esos círculos cuando Pablo Iglesias y Podemos, partido manifiestamente republicano cuya lealtad a la Constitución no estaba del todo clara en un principio, entraron en el Gobierno. Los acuerdos del Ejecutivo con EH Bildu y Esquerra para la aprobación de los presupuestos del Estado de 2021 encendieron particularmente las iras de la derecha. También se sintió molesto el Ejército por el hecho de que Sánchez acordara con el Partido Nacionalista Vasco la transferencia de un importante cuartel de San Sebastián al ayuntamiento de esa ciudad para que este dedicara el solar a otros usos. En noviembre de 2020, esa inquietud afloró en los medios cuando un centenar aproximado de exmandos militares ya retirados firmaron una carta abierta al rey Felipe VI en la que se quejaban de que el «Gobierno socialcomunista, apoyado por filoetarras e independentistas», era una amenaza para la unidad nacional. Otra carta, firmada esta vez por un grupo ampliado de esos mismos

oficiales retirados —unos doscientos setenta sobre el total de veinte mil mandos que componen la oficialidad de las fuerzas armadas en España— e impulsada por el presidente de la Fundación Francisco Franco, clamaba que «la unidad de España y su orden constitucional» corrían un grave riesgo. También se publicó por entonces la filtración de un chat privado de WhatsApp de un grupo de mandos militares retirados en la que, entre varias bravuconadas, se podía leer una invocación de la figura de Franco.

El general Miguel Ángel Villarroya, jefe de Estado Mayor de la Defensa, emitió un comunicado crítico con las cartas y con el grupo de WhatsApp, y recalcó que los firmantes de las primeras y los participantes en este último no representaban a las fuerzas armadas. La fiscalía investigó lo ocurrido, pero llegó a la conclusión de que el chat pertenecía al ámbito de las comunicaciones estrictamente privadas y que los que en él se expresaron no tenían ninguna intención de que lo allí dicho se hiciera público[50]. Estos incidentes quedarían pronto puestos en perspectiva cuando, en abril de 2021, en Francia, otro grupo mucho mayor de generales retirados y de otros mil doscientos exmilitares firmaron una misiva abierta que enviaron a una revista de derecha extrema. En ella se quejaban de la «desintegración» de la nación gala a manos de los antirracistas y de los islamistas «que desprecian nuestro país, sus tradiciones y su cultura», y advertían de la necesidad de que se produjera una intervención militar. El ejército identificó a dieciocho soldados en activo entre los signatarios.

Un estudio determinó que, en la primera ronda de las elecciones presidenciales de 2017, un 41 % del personal militar francés y un 54 % del policial habían votado a Marine Le Pen, la candidata de la derecha extrema, porcentajes muy superiores al 16 % de votos que cosechó entre el total del electorado. Pero el jefe del Estado Mayor francés también insistió —como el español unos meses antes— en que la inmensa mayoría de su personal militar respetaba su obligación de mantener la neutralidad política[51]. También en Alemania se han apreciado recientemente signos de simpatías ultraderechistas en el seno de su ejército. En octubre de 2020, Horst Seehorfer, ministro del Interior, comunicó que se habían detectado mil cuatrocientos casos de presunto extremismo de ultraderecha en la Policía, el Ejército y los servicios de inteligencia. Al año siguiente, el Ejército disolvió una compañía de sus fuerzas especiales por sus vínculos con la extrema derecha[52]. No parece apropiado, pues, afirmar que esta desafección entre algunos sectores militares en España es consecuencia de una transición democrática supuestamente defectuosa. Más que con Franco, los desafectos parecen sintonizar con Vox, que es uno más

entre la docena aproximada de partidos de derecha dura que han surgido con fuerza en Europa en lo que llevamos de siglo.

Despierta el nacionalismo español

Durante algo más de treinta años desde que se inició el actual periodo democrático, el nacionalismo español estuvo en hibernación, desacreditado por la forma autoritaria bajo la que se había promovido en tiempos de Franco. Cuando el PP accedió al poder en 1996, lo más a lo que se atrevió Aznar fue a instalar una bandera de España gigantesca en la plaza de Colón, en pleno corazón del Madrid burgués, que se convirtió a partir de entonces en punto de encuentro para las manifestaciones de la derecha. Mientras en otros países brotaban partidos nacionalpopulistas derechistas diversos, muchos analistas notaron la ausencia de uno en España atribuyendo esto a menudo al tóxico legado del franquismo. La realidad es que fue solo cuestión de tiempo y de que se dieran las circunstancias requeridas que ese panorama cambiara.

Lo que despertó al nacionalismo español de su largo letargo fue, sobre todo, el *procés* independentista en Cataluña. En otoño de 2017, aparecieron banderas españolas en balcones de todo el país. Y Vox emergió de la sombra. El partido había sido fundado en 2013 por dirigentes del PP de Cataluña y el País Vasco que habían roto con el partido furiosos por la presunta pusilanimidad de Rajoy ante los nacionalismos de ambos territorios. Entre sus líderes fundadores estaban Santiago Abascal (cuya familia había sido blanco de ataques y episodios de acoso reiterados por parte de simpatizantes de ETA), Javier Ortega Smith (un abogado con conexiones franquistas y militares), Iván Espinosa de los Monteros (un aristócrata y promotor inmobiliario) y la esposa de este último, Rocío Monasterio, una arquitecta de origen hispano-cubano. El primer gran éxito electoral de Vox llegó con las elecciones autonómicas andaluzas de 2018, en las que recibió el 11 % de los votos y se hizo con doce de los ciento nueve escaños del Parlamento regional.

Tres han sido los factores que explican ese crecimiento, según me comentó Espinosa de los Monteros. «Cataluña nos ha dado visibilidad», dijo. El segundo es su defensa de las tradiciones —como la caza o los toros— frente a la corrección política y al feminismo. Desde un punto de vista freudiano, Vox representaría el «ello» español. El partido se negó a aceptar desde un principio que la violencia de género fuese un problema como tal, y llegó incluso a afirmar (falsamente) que había mujeres que mataban a hombres en no menor medida que había hombres que mataban a mujeres. Y el tercer factor

es que WhatsApp y otras redes sociales han permitido que el partido se salte los medios tradicionales para llegar directamente al electorado. A medida que el problema del separatismo catalán ha ido perdiendo perentoriedad, Vox ha puesto mayor énfasis en la cuestión de la inmigración ilegal. En la campaña para las elecciones autonómicas madrileñas de mayo de 2021, estigmatizó a los menores inmigrantes no acompañados, de quienes exageró su cifra real y el coste que representan para el Estado.

Una noche del mes de abril de 2019, fui a la plaza de Colón a escuchar el mitin de final de campaña de Vox para las elecciones generales que terminarían marcando su entrada en la política nacional. Habría allí seguramente unos quince mil asistentes que llenaban el espacio abierto elevado de la plaza situado justo debajo de la enorme bandera española y ante el monumento de estilo brutalista que conmemora el viaje de Colón a América. Hablaron los cuatro líderes fundacionales de Vox. Su mensaje fue simple: defensa férrea de la unidad de España, apoyo a los valores morales conservadores tradicionales («los valores de vuestros padres», según dijo Abascal) y rechazo de la inmigración ilegal, por ese orden. No hubo alusión alguna a Franco. El mensaje que recibí al hablar con varias de las personas que habían ido allí a escucharles fue siempre el mismo. Eran antiguos votantes del PP a los que ese partido les parecía ya débil y corrupto. Les gustaba Vox porque «defiende la familia, la vida y la nación», como me dijo Ricardo Rojo, un administrativo del Ayuntamiento de Madrid. Solo una vez ha hecho referencia Abascal a Franco en alguna ocasión pública importante y ha sido de forma indirecta. En un debate parlamentario sobre una moción de censura presentada por su grupo en octubre de 2020, dijo que el Ejecutivo de Sánchez había sido «el peor Gobierno en ochenta años de historia». En su embrollado discurso de ese día, defendió a Donald Trump, se alineó con él en su crítica al «globalismo», atacó las «aspiraciones soviéticas» de la UE (pese a que esta proponía ya por entonces conceder a España 140.000 millones de euros en fondos de ayuda de emergencia) y cargó también contra el «parque temático» del sistema autonómico. Todos los demás partidos presentes en el Congreso de los Diputados, incluido el PP, votaron en contra de aquella moción. Pero Vox y Podemos, en un deprimente ejercicio de estupidez histórica, siguieron desplegando, tanto en sus encontronazos parlamentarios como durante la campaña de las elecciones autonómicas de Madrid de 2021, la vieja retórica guerracivilista de los «rojos» y los «azules» para echársela mutuamente en cara. Por fortuna, al parecer, la mayoría de los españoles no se dejaron influir por ello.

Es evidente que Vox bebe de algunas de las mismas tradiciones del nacionalcatolicismo de las que bebía el franquismo, anteriores incluso al propio Franco. Pero se hace difícil ver que su surgimiento sea consecuencia de un presunto fracaso de la Transición. Después de todo, también en Portugal ha surgido recientemente un partido de la derecha extrema (Chega). Vox creció con rapidez hasta lograr el 15 % del voto (y cincuenta y dos escaños) en las elecciones generales de noviembre de 2019, con lo que se convirtió en la tercera fuerza política en el Parlamento nacional. Según algunos investigadores, quienes votan a Vox tienden a ser hombres que se inclinan ideológicamente hacia la derecha y no están contentos con el funcionamiento de la democracia. Resulta significativo que su electorado tienda a ser más joven de media que el de otros partidos (algo que también ocurre con el de Chega en Portugal). Según un estudio reciente, «los partidarios de la derecha radical populista ibérica no son personas mayores nostálgicas de los regímenes autoritarios del pasado, sino, sobre todo, miembros de una nueva generación de personas atraídas por la derecha radical»[53]. Los votantes de Vox parecen estar satisfechos en general con la labor de anteriores Gobiernos del PP. Cabe deducir, pues, que muchos exvotantes *populares* simpatizan ahora con Vox, pero podrían volver a votar al PP. Dicho de otro modo, un líder *popular* decidido y efectivo podría conseguir frenar el crecimiento de Vox.

Pese a los contactos mantenidos por algunos líderes de Vox con Steve Bannon, exasesor de Trump, el partido se identificaba más bien con el Gobierno nacionalista católico de Polonia. Abascal también ha mantenido encuentros amistosos con el húngaro Viktor Orbán y con Giorgia Meloni, de Hermanos de Italia, partido descendiente de Mussolini. Vox no está a favor de la economía corporativista nacionalista que propone la francesa Marine Le Pen. «Somos liberales en lo económico y conservadores en las cuestiones morales», me aclaró Iván Espinosa de los Monteros en 2019. Desde entonces, ha tratado de maniobrar alejándose un poco de ese programa económico neoliberal y de bajos impuestos, y acercándose más a una defensa de un Estado del bienestar de corte «nativista» (para los españoles primero). Por toda Europa, durante la última década, diversos movimientos nacionalpopulistas de derecha han tratado de sacar partido del descontento por el estancamiento económico y de la sensación de desplazamiento provocada por la inmigración masiva, la globalización y el crac financiero de 2008. Más que Franco, las fuentes del apoyo a Vox son la inquietud ante esos problemas y ante el independentismo catalán. Y lo cierto es que España necesita

abordarlos, como los capítulos siguientes pondrán de manifiesto.

Pero, antes, hay otra cuestión reciente que guarda una relación importante con la memoria histórica: la larga campaña de terror promovida por ETA que asoló el País Vasco en nombre del nacionalismo. En un intercambio de intervenciones parlamentarias en 2020, Cuca Gamarra, portavoz del grupo del PP en el Congreso, criticó la manera selectiva de aproximarse a la memoria histórica que tenía el Gobierno, pues acababa de negociar el apoyo a sus presupuestos de EH Bildu: «¿Por qué remueven los rescoldos de hace ochenta años y [por otro lado] pisotean la memoria de las víctimas de ETA?». Carmen Calvo le replicó: «¿Por qué necesitan traerla [a ETA] constantemente a la política española?»54. La respuesta es que el terror de ETA es mucho más reciente que el de Franco. Ha sido, de hecho, otro aspecto importante del excepcionalismo español, aunque actualmente esté ya, por fin, en remisión.

6

La paradoja vasca y el galleguismo

En 1968, se inauguró en la actual plaza de la Constitución, en el corazón del Casco Viejo de San Sebastián, una librería llamada Lagun («amigo» o «compañero», en euskera). Los dueños de Lagun eran socialistas y fueron multados por la dictadura de Franco por haber cerrado la librería para secundar una huelga. Sin embargo, sería ETA la que haría casi imposible la continuidad del negocio. La banda terrorista y sus simpatizantes de la autodenominada izquierda *abertzale* (patriótica) entendían que el Casco Viejo era su territorio. «No les gustaba nuestra presencia allí», me contó en 2018 Ignacio Latierro, copropietario de Lagun. A partir de mediados de los años ochenta, comenzaron a hacer pintadas con espray en las ventanas de los escaparates de Lagun y, más adelante, a romper esas cristaleras reiteradamente. Los dueños reaccionaron colocando sobre estas unas protecciones de madera. «Aquello era como Fort Apache», añadió Latierro. Entonces, un grupo de solidarios ciudadanos acudieron en su ayuda. «Durante una quincena, vendimos libros como nunca». Así que, en enero de 1996, los *abertzales* saquearon el establecimiento y quemaron sus existencias de libros en medio de la plaza. La tienda siguió funcionando, bajo protección policial. ETA disparó al marido de la socia comercial del señor Latierro y lo dejó gravemente herido. En 2001, Lagun se trasladó a un local del principal barrio comercial de la ciudad, donde pudo sobrevivir hasta los mucho más calmados tiempos actuales, llegados después de que ETA renunciara a la violencia en 2011. «Era la librería con más guardaespaldas del mundo», dijo Latierro. Tanto la hostilidad de ETA como la del régimen franquista obedecieron a «las mismas razones fundamentales: no estábamos dispuestos a hacer lo que ellos querían que hiciésemos»[1].

Resulta paradójico que el único desafío violento serio a la democracia española viniera del País Vasco. Con una población total de apenas 2,2 millones de habitantes, esta es una de las partes más prósperas y desarrolladas de España. Desde la Transición, ha gozado de la autonomía política más amplia de todas las regiones de la Unión Europea. El Gobierno vasco no solo gestiona servicios públicos importantes, su propia fuerza policial (la Ertzaintza) y una cadena de televisión pública, sino que también se encarga de recaudar los impuestos autonómicos y los del Estado en su territorio. Conforme a un sistema llamado «concierto económico», entrega luego al Gobierno central una pequeña parte de lo ingresado en concepto de pago por los

pocos servicios restantes que la Administración central del Estado presta en aquella comunidad autónoma. La consecuencia de ello es que, en el País Vasco y en Navarra (que goza de un privilegio similar), el gasto público por persona es mayor que ninguna otra región española. También es paradójico que una organización como ETA —que se declaraba opositora izquierdista radical al régimen de Franco— terminase practicando lo más parecido al fascismo que se ha visto en el país en los últimos cuarenta años. Fue «el rastro final del franquismo», me comentó en 2008 Alfredo Pérez Rubalcaba, quien, desde su puesto como ministro del Interior del Gobierno de Rodríguez Zapatero, contribuyó en muy buena medida a poner fin al terrorismo etarra. Los asesinatos de oponentes políticos cometidos por ETA, sumados a la intimidación violenta practicada por los *abertzales*, con ataques como los realizados contra Lagun o, en general, con la llamada *kale borroka* o «lucha callejera», todos en nombre del nacionalismo, recordaban mucho a las acciones de los *squadristi*, los activistas paramilitares y matones que allanaron el camino a Mussolini para su acceso al poder en Italia en los años veinte. O, como dijo Eduardo Madina, exdiputado socialista en el Congreso por Vizcaya, estos «señores, aquí, que no toleraban otra cosa que no fueran sus ideas […] nos configura[ban] a los vascos como la última esquina del país que resistía a la democracia»2.

Tras haber declarado dos treguas —una en 1998 y otra en 2006, ambas rotas al poco tiempo—, ETA anunció por fin el «cese definitivo» de su violencia en 2011 y su disolución en 2018. La coalición política que la sucedió, EH Bildu, está ahora volcada en una «batalla del relato», tal como la ha llamado Arnaldo Otegi, su líder y antiguo miembro de ETA3. En otras palabras, está intentando reescribir la historia reciente del País Vasco.

La invención de tradiciones

El nacionalismo vasco presenta numerosas similitudes con su homólogo catalán, como son su defensa identitaria de una lengua y una cultura separadas, su victimismo, sus vínculos históricos con la Iglesia católica y las frecuentes divisiones internas entre sus seguidores. Pero existen también diferencias entre uno y otro. El nacionalismo vasco no surgió como tal hasta finales del siglo XIX y no alcanzó un amplio apoyo entre la población hasta el actual periodo democrático. Constituye un caso de «triunfo verdaderamente espectacular de una invención de la identidad y de la tradición», según Álvarez Junco4. Esa identidad está fundada en parte en una fértil colección de mitos desarrollados entre los siglos XV y XVII. Entre ellos,

se incluyen leyendas tales como que la lengua vasca fue traída a aquellos lugares por Tubal, nieto del Noé bíblico, o que los vascos fueron los primeros europeos, o que el mismísimo Noé había redactado sus fueros. Y mucho se ha hablado del hecho de que los vascos tienden ha ser de un grupo sanguíneo diferente del que predomina entre el resto de españoles. «En última instancia, más que el enigma del pasado [vasco] en sí, lo que llama la atención es la existencia de un pueblo embrujado por el hechizo etnográfico lanzado sobre ese enigma», como bien ha escrito el antropólogo vasco Joseba Zulaika[5].

Es harto dudoso que los vascos formen una raza aparte. Según un estudio publicado en 2021, presentan diferencias genéticas con otros españoles, pero estas parecen ser relativamente recientes, pues datan del periodo final de la Edad de Hierro (unos 2.500 años atrás)[6]; además, son mayores en las áreas euscaldunas centrales que en la periferia vasca. Los investigadores concluyeron que los vascos y los demás españoles descienden de un mismo grupo de migrantes de la Edad de Piedra procedentes de las estepas orientales de Europa. Al parecer, los antiguos iberos también hablaban una lengua no indoeuropea. La diferenciación solo comenzó a producirse a partir de la llegada de los romanos a la península Ibérica. Contrariamente a lo que se cuenta en algunos mitos, los romanos sí conquistaron el territorio vasco, pero, al parecer, no se instalaron en las áreas centrales antes mencionadas. Menos aún lo hicieron los invasores araboberebereres posteriores. Los investigadores concluyeron que las impenetrables montañas y la incomprensible lengua autóctona de aquella zona conspiraron contra la mezcla genética.

Fue precisamente ese aislamiento geográfico lo que dio forma a los vascos como pueblo. El País Vasco es muy diferente de los territorios de más al sur, aunque no lo es tanto de Cantabria ni de Asturias (a su oeste). Es una región de escarpados y boscosos montes y angostos valles, encajada entre los Pirineos, la cordillera Cantábrica y el golfo de Vizcaya. Por eso el idioma vasco, el euskera, logró sobrevivir en las áreas rurales. Es una de las cuatro únicas lenguas no indoeuropeas supervivientes en Europa, junto con el finés, el estonio y el húngaro. El pilar de la sociedad vasca era la sólida casa de labor de piedra, el *baserri* o caserío, de la que todavía pueden verse hoy ejemplos en muchos parajes de esa zona y que recuerda a la masía catalana. La región desarrolló un folclore y una cultura propios. En él se inscribe una tradición de canto coral y recitación poética, además de deportes como la pelota vasca, el levantamiento de piedras, el lanzamiento de troncos o las competiciones de regatas con *traineras*,

pequeñas embarcaciones pesqueras impulsadas por trece remeros. La cocina vasca es más elaborada que su austera homóloga castellana. No solo es una región con abundantes restaurantes con estrellas Michelin, sino que hay numerosos restaurantes vascos en el resto de España. La poderosa burguesía vasca ha sido tradicionalmente mecenas del arte. El Museo de Bellas Artes de Bilbao posee una de las mejores colecciones del país fuera de Madrid. Dos escultores vascos de renombre internacional, Eduardo Chillida y Jorge Oteiza, lideraron un renacimiento artístico en la región iniciado ya en las décadas finales de la dictadura.

Los nacionalistas vascos aspiran a crear un Estado propio que comprenda las tres provincias vascas españolas, Navarra y los tres distritos vascos en torno a Bayona que forman parte del departamento francés de Pirineos Atlánticos. Como en el caso de Cataluña, el País Vasco nunca ha sido un Estado-nación independiente. El señorío feudal de Vizcaya se incorporó a Castilla en torno al año 1100; hacia 1200 ya se habían incorporado también las otras dos provincias vascas españolas, Álava y Guipúzcoa; mientras, los actuales distritos vascofranceses del otro lado de los Pirineos formaban parte de la Gascuña. Navarra —que tiene partes culturalmente vascas y partes que no lo son— fue un reino independiente hasta su absorción por Castilla en 1515. Durante siglos, la identidad vasca no fue antiespañola, sino todo lo contrario; según algunas versiones, los vascos se consideraban los españoles más auténticos de todos[7]. Y, de hecho, así era como muchos españoles los veían. Más recientemente, en las múltiples manifestaciones contra el terrorismo que se organizaron en ciudades de toda España, uno de los lemas más entonados por los participantes era el de «vascos sí, ETA no». Sancho Garcés III, rey de Navarra entre los años 1004 y 1035, unificó brevemente todos los territorios vascos, pero fue porque se hizo con el control del reino de León, que era en el que estaban integradas las áreas costeras cantábricas en aquel entonces. No deja de ser significativo que, tras aquello, él mismo se autodenominara «rey de las Españas»[8]. Con el tiempo, en el País Vasco arraigó un cristianismo militante. Antes incluso de que la reina Isabel la Católica hubiese decretado la expulsión de los judíos del resto de Castilla en 1492, los señores vascos ya habían hecho lo propio en nombre de la «pureza de sangre». Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, era de Guipúzcoa. Los vascos desempeñaron también un papel destacado en la América española como marinos, colonos y funcionarios de la Corona. Los apellidos vascos continúan siendo muy comunes hoy en día en países como México, Colombia o Perú.

Bajo el régimen de sus fueros medievales, cada provincia vasca —y muchas de sus villas— gozaban de privilegios como la autonomía legislativa, unos niveles tributarios reducidos y la exención del servicio militar, unos privilegios que fueron luego aceptados por sucesivos monarcas. Como los vascos respaldaron la causa borbónica en la Guerra de Sucesión, sus fueros sobrevivieron a los decretos de «Nueva Planta» y no fueron puestos realmente en cuestión hasta el siglo XIX. Pero al sellarse el Abrazo de Vergara, que puso fin a la Primera Guerra Carlista, los fueros se incorporaron a la Constitución española a cambio de que la barrera aduanera se desplazara hasta la frontera de España con Francia y se diera así por terminada aquella especie de «área de libre comercio», por así llamarla, que las provincias vascongadas habían tenido instituida hasta entonces. En la historia que cuentan algunos nacionalistas vascos, 1839 y el fin de los fueros como régimen legal separado juegan un papel parecido al de 1714 para sus equivalentes catalanes. Los fueros eran un anacronismo en un Estado liberal que estaba tratando de construir una nación homogénea. Una ley del periodo de la Restauración borbónica, concretamente de 1876, terminó por suprimirlos del todo y los sustituyó por una especie de convenio fiscal —el «concierto económico»— por el que las provincias vascas continuaron siendo las que recaudaban los impuestos en sus territorios para repartir luego los ingresos con el Gobierno central. Solo Navarra conservó un fuero propio haciendo honor a su historia como reino independiente fusionado más tarde con Castilla.

No es casualidad que el nacionalismo vasco emergiera justamente cuando la siderurgia de Vizcaya se convirtió en el segundo gran polo de la revolución industrial española tras el textil catalán. Junto a la siderurgia, prosperaron en Vizcaya la construcción naval y, en Guipúzcoa, las empresas metalúrgicas, muchas de ellas de propiedad familiar. Una poderosa burguesía vasca, centrada sobre todo en Bilbao, comenzó a dominar buena parte del sector financiero y empresarial español. Las fábricas y los astilleros atrajeron a inmigrantes del resto de España. Bilbao y el resto de ciudades vascas eran bastiones hispanohablantes del liberalismo y del socialismo, y San Sebastián se convirtió en un elegante centro vacacional estival para los monarcas españoles y la aristocracia europea.

Esta disolución de la supuestamente «pura» raza vasca alarmó a Sabino Arana, un excéntrico y reaccionario ensayista de familia carlista y fundador del PNV en 1895. Su ideología y su concepción de la identidad vasca se basaban en un catolicismo de corte fundamentalista y en una hostilidad racista hacia el resto de

españoles, a los que se refería por el mal nombre de *maketos*. En sus ideas se advertían ecos de la antigua obsesión antisemítica por la «pureza de sangre» de la Inquisición española. Arana también consideraba que las mujeres debían subordinarse a los hombres. Él y su hermano inventaron un nombre para las provincias vascas (Euskadi) y una bandera, la ikurriña, de color rojo, verde y blanco, con un diseño copiado de la Union Jack británica. Arana abogaba por la independencia. Y a diferencia del nacionalismo catalán, él fundamentaba esa reivindicación en la raza, antes que en la lengua. El euskera —un conjunto de dialectos cuyo uso se circunscribía principalmente a las áreas rurales— no fue estandarizado y unificado como lengua hasta 1968. Los grandes escritores vascos de la época —como Miguel de Unamuno o Pío Baroja— preferían escribir en castellano. No fue hasta la llegada de la democracia actual cuando el vasco comenzó a ser fomentado activa y vigorosamente por el Gobierno autonómico como lengua de aprendizaje y uso, y cuando el euskera empezó a adquirir también una literatura propia. Arana inventó muchas palabras nuevas en euskera, incluidas también versiones adaptadas de algunos nombres de pila españoles. Uno de esos neologismos fue *jeltzalea*, empleado para designar a un partidario de su lema *Jaungoikoa eta lege zarra* («Dios y leyes viejas»). En euskera, llamó a su partido Eusko Alderdi Jeltzalea. Sus siglas oficiales actuales son EAJ-PNV.

El PNV obtuvo su apoyo inicial en el ámbito rural, pero también (y muy especialmente) entre la clase media baja urbana, que se sentía atrapada entre la élite financiera cosmopolita y la mano de obra principalmente inmigrante. Al principio, los herederos del carlismo miraron con suspicacia al PNV, al que veían como un rival. Pero el partido fue arraigando por medio de clubes sociales llamados *batzoki*, así como de sindicatos y centros excursionistas. Hacia el final de su vida, enfermo y en prisión, Arana había moderado ya sus anteriores demandas de independencia para el País Vasco por otras de autonomía política. Su legado para el movimiento que fundó fue, pues, ambivalente y, con ello, dio pie a que el PNV atrajera a partidarios de ambos tipos de demanda9. Muchos de sus dirigentes posteriores han combinado un compromiso emocional con la causa independentista con una valoración pragmática de las ventajas de una autonomía dentro de España. Tras la prematura muerte de Arana, el PNV fue abrazando cada vez más el pragmatismo. En la Guerra Civil, el PNV y las ciudades vascas principales apoyaron a la República, mientras que ochenta mil voluntarios carlistas de Navarra y Álava lucharon por el bando franquista. Lo que decantó decisivamente esa

lealtad del litoral vasco hacia la República fue la concesión del estatuto de autonomía en 1936. José Antonio Aguirre, dirigente del PNV y figura mucho más atractiva que Arana, se convirtió en el primer lendakari (presidente del Gobierno autonómico) del País Vasco. Aguirre, un político joven de solo treinta y dos años de edad, era alcalde de Getxo (municipio burgués limítrofe con Bilbao), exjugador de fútbol del Athletic de Bilbao y heredero de una empresa chocolatera familiar[10]. En lo político, era un centrista moderado. Actualmente, es el retrato de Aguirre el que cuelga del vestíbulo de la imponente sede central del PNV en Bilbao.

Después de su victoria en la guerra, Franco se mostró vengativo con los vascos. Consideró una traición personal a él mismo y a su causa que el PNV, conservador y católico, hubiera respaldado a la República. Sin embargo, permitió que Álava conservara su sistema de «concierto económico» y que Navarra hiciera lo propio con su «fuero» por el apoyo que ambas provincias le habían dispensado; incluso toleró el uso del euskera en ambos territorios, únicas excepciones en todo el régimen unitario franquista. Vizcaya y Guipúzcoa, sin embargo, las «provincias traidoras», como él las llamó, recibieron un castigo selectivo materializado por medio de un decreto publicado tras su capitulación: su «concierto económico» quedó derogado y también se prohibió en ellas el uso público del euskera (como el del catalán en Cataluña). Aquella represalia colectiva terminaría por desencadenar una reacción violenta en aquellas tierras.

ETA y el terror

Las dos almas del nacionalismo vasco volvieron a aflorar diferenciadas cuando una parte de las juventudes del PNV se escindieron del partido en 1959 para formar Euskadi Ta Askatasuna («País Vasco y Libertad», o ETA). La evolución del PNV lo había llevado a ser un partido cristianodemócrata europeísta moderado, la mayoría de cuyos dirigentes eran más partidarios de la autonomía que de la independencia. ETA quería un enfrentamiento más activo con la dictadura. Se autodefinió como «una organización revolucionaria vasca de liberación nacional». Su cosmovisión mezclaba el ultranacionalismo, el marxismo-leninismo autoritario y el misticismo católico. «Comenzó como una causa nacional que luego se hizo revolucionaria y que terminó siendo terrorismo puro y duro»: así me definió Andoni Ortuzar, actual presidente del PNV, la trayectoria de ETA[11]. Aunque sus fundadores fueron estudiantes y profesionales urbanos, pronto arraigó en las localidades pequeñas de los alrededores de San Sebastián y Bilbao, gracias, entre otras vías, a una red de

herriko tabernas (tabernas del pueblo). ETA recuperó la tradición insurreccional carlista[12]. Y ese no fue el único legado que heredó del carlismo: en el País Vasco había muchos sacerdotes católicos que eran nacionalistas, y algunos de ellos apoyaron a ETA de forma más o menos explícita. Uno de ellos fue José María Setién, obispo de San Sebastián entre 1979 y 2000, que se negó a celebrar en su catedral funerales por víctimas del terrorismo etarra. ETA atraería posteriormente los apoyos de una nueva izquierda feminista y ecologista. La mayoría de sus miembros eran de clase media y muchas de sus víctimas eran guardias civiles venidos de la España rural pobre. «Fue una lucha de clases a la inversa», según José Antonio Pérez, historiador de la Universidad del País Vasco[13].

ETA inició su actividad con acciones propagandísticas, como la colocación de ikurriñas —prohibidas por el régimen— en torres de iglesias o la detonación de artefactos explosivos colocados en monumentos franquistas[14]. En 1968, sin embargo, asesinó en Irún a Melitón Manzanas, un inspector jefe de Policía particularmente odiado. Pretendía con ello provocar a Franco. Este respondió declarando el estado de sitio en las provincias vascas, durante el que la Policía disparó sin miramientos contra sospechosos y practicó arrestos masivos y torturas a los detenidos. En 1970, el régimen llevó a juicio a quince miembros de ETA (incluidos dos curas) ante un consejo de guerra en Burgos por el asesinato del mencionado inspector jefe. Cinco fueron sentenciados a la pena capital. Aquello levantó una ola de indignación internacional que forzó a la dictadura a conmutar aquellas condenas por otras de largos periodos de prisión. Más tarde, en 1973, en un atentado cuidadosamente planificado, ETA hizo volar por los aires al almirante Carrero Blanco en su vehículo oficial al activar unos potentes artefactos explosivos a su paso. El asesinato del hombre con el que Franco contaba para dar continuidad a su dictadura tras su muerte hizo que ETA adquiriera popularidad entre muchos españoles. Si hubiera abandonado su «lucha armada» con la llegada de la transición democrática, la historia la habría juzgado sin duda de un modo muy distinto.

Pero no lo hizo. ETA formaba parte de una hornada de grupos de guerrilla urbana u organizaciones terroristas que surgieron en diversos países de Europa en los años sesenta, y entre los que se contaban el IRA en Irlanda del Norte, o la Facción del Ejército Rojo en Alemania, o las Brigadas Rojas en Italia. Sin embargo, fue la única de todas ellas que prosiguió con su campaña de violencia hasta ya entrado el siglo XXI. En total, ETA fue responsable de ochocientos cincuenta y tres asesinatos, y sus balas y sus bombas hirieron también a dos mil

seiscientas treinta y dos personas[15]. Forzó a miles de vascos a huir de la región[16]. Más del 90 % de sus asesinatos —de los que trescientos cincuenta y siete fueron de miembros de las fuerzas de seguridad— ocurrieron tras la muerte de Franco, pese a haberse beneficiado de la amnistía que liberó a sus presos y pese a la llegada de la democracia. Solo en 1978, año en que se aprobó la Constitución, mató a sesenta y cinco personas; en 1979, año de aprobación del Estatuto de Autonomía de Guernica, los muertos por sus acciones fueron ochenta y seis[17]. La organización recurrió al terrorismo indiscriminado como arma en una guerra contra la sociedad española y no solo contra el Estado. En 1987, un coche bomba en un hipermercado de Barcelona mató a veintiuna personas e hirió a cuarenta y cinco; otro, seis meses después, lanzado contra el exterior de una casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, mató a once más, cinco niños entre ellas, e hirió a ochenta y ocho. En los años ochenta, a través de lo que la propia ETA denominó —utilizando una expresión con resonancias siniestramente orwellianas— una campaña de «socialización del sufrimiento», la banda comenzó a asesinar a concejales del PSOE y del PP en el País Vasco. Secuestró a un total de ochenta y seis personas con el fin tanto de recaudar fondos como de sembrar el miedo. Según un estudio académico sobre la cuestión, se calcula que ETA recaudó unos 106 millones de euros con sus secuestros, otros 21 millones con sus sistemas de extorsión y 19 millones más con robos y atracos. La banda llegó a secuestrar a cincuenta y cinco empresarios, de los que cuatro terminaron siendo asesinados, cinco fueron liberados por la Policía y trece fueron puestos en libertad tras habérseles disparado tiros en las piernas como castigo. El resto pagaron el rescate. Gran parte de la violencia callejera de la *kale borroka* contra establecimientos comerciales estuvo vinculada con la extorsión[18]. Desde la fanática visión del mundo adoptada por ETA, la violencia se convirtió en un fin en sí mismo, y autosostenido; la banda mató, además, a varios de aquellos de sus propios miembros (o exmiembros) que osaron disentir.

La época de la Transición fue también un tiempo de mayores dificultades económicas en el País Vasco. Su industria pesada había perdido competitividad. En 1971, Vizcaya registraba la mayor renta per cápita de todas las provincias españolas, seguida por Guipúzcoa y por Álava en segundo y tercer puestos. Durante los diez años que siguieron a 1975, sin embargo, no hubo crecimiento económico en la región y, al mismo tiempo, el paro se disparó desde el 1,8 % hasta el 23,6 % como consecuencia de los dolorosos ajustes económicos que estaban teniendo lugar[19]. Pero el principal aliado de ETA fue la brutal represión policial desplegada a raíz de la muerte de Carrero Blanco.

Los excesos policiales continuaron durante los primeros años de democracia. Fue un grave borrón en el historial del primer Gobierno de Felipe González que varios miembros de la Policía del Estado organizasen un escuadrón de la muerte al que llamaron Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). El GAL mató a veintisiete miembros de ETA (reales o simplemente sospechosos de serlo) entre 1983 y 1987. Otros treinta y cinco murieron por atentados de otros grupos paramilitares de extrema derecha. Todo esto fue, en parte, una reacción de rabia contra los asesinatos etarras de altos mandos militares y policiales, con los que ETA trataba de incitar un golpe de Estado. Tras el GAL también se escondía cierta frustración con los Gobiernos franceses por su tolerancia ante el uso que de su territorio hacían los etarras como refugio seguro.

El GAL no fue solo ilegítimo, sino también desastrosamente contraproducente. Como consecuencia de la represión, hasta una quinta parte de la población vasca decía sentirse distanciada de la joven democracia española. Los *abertzales* sostenían que la violencia de ETA, más que terrorismo, era una respuesta de defensa frente a la violencia de un Estado que era antidemocrático en su esencia; decían, además, que obedecía a los efectos de un conflicto político no resuelto entre los vascos y (el resto de) España. Por muy falso e inverosímil que tal relato pudiera ser, fue el que, en mayor o menor medida, aceptaron también algunos observadores extranjeros. Es el que se expresa, por ejemplo, en el libro *La historia vasca del mundo,* de Mark Kurlansky, un gran éxito editorial que combinaba la credulidad ante muchas de las leyendas nacionalistas con una presentación de los vascos como poco menos que héroes de cómic análogos a los de Astérix y una nauseabunda equiparación moral del terrorismo con los mecanismos de un Estado democrático, por imperfectos que estos pudieran ser a veces[20]. No solo hubo una enorme desproporción entre la escala y la duración de la campaña de asesinatos del GAL y las de la de ETA, sino que el Estado terminó condenando a prisión al exdirector general de la Policía, Rafael Vera, y al exministro del Interior, José Barrionuevo, ambos socialistas, por su implicación en la organización de aquel escuadrón de la muerte, que, ya en su momento, había sido desactivado casi de inmediato.

Resumiendo, la violencia policial fue una aberración que tuvo su castigo; la violencia de ETA fue un proyecto político y una herramienta que se utilizó para conquistar el poder. El conflicto no fue entre el pueblo vasco y el Estado español, pues implicó, más bien, a una minoría de vascos que se negaron a aceptar la voluntad de la mayoría y las reglas de la democracia. A diferencia de lo acaecido en

Irlanda del Norte, «aquí —según me explicó el historiador José Antonio Pérez— nunca hubo dos bandos. Nunca hubo un partido político o un movimiento social que apoyase los crímenes de la policía». Tanto él como otros historiadores cuestionan también el relato *abertzale* de que la Policía continuó practicando la tortura sistemática contra los sospechosos de ETA hasta mucho después de la muerte de Franco. Una investigación del Gobierno vasco sobre las denuncias de torturas cifra en cuatro mil los casos de estas entre los años sesenta y la actualidad. Pero muchas de estas denuncias se hicieron años más tarde. «No hay prueba alguna de su veracidad, a excepción de unos pocos casos», comenta Pérez.

En los años ochenta y noventa, ETA incubó una sociedad dominada por el miedo. Según un cálculo al respecto, más de cuarenta mil vascos estuvieron amenazados y muchos tuvieron que vivir durante años con una escolta que los acompañaba a todas partes. En una sociedad relativamente pequeña y claustrofóbica, la amenaza podía estar en un vecino, en un antiguo compañero de clase o en un colega del trabajo. Eso hacía que fuera particularmente escalofriante. Podía empezar con unas pintadas con espray: por ejemplo, una cruz con una diana en la puerta de entrada de la casa de la persona amenazada. En un libro publicado en 2021, el político socialista Eduardo Madina y el que fuera presidente del PP de Guipúzcoa Borja Sémper conversaron sobre aquellos años. Nacidos con un día de diferencia en 1976, ambos tenían suerte de seguir vivos. En 1997, la Guardia Civil desarticuló un comando de ETA liderado por Iratxe Sorzabal que estuvo a punto de asesinar a Sémper de un disparo en la nuca en la Facultad de Derecho de San Sebastián en la que este estudiaba. La pistolera desistió en el último instante porque creyó que su objetivo llevaba escolta, aunque en aquella ocasión no la llevaba. En 2002, una bomba estalló en los bajos del coche de Madina mientras conducía hacia su trabajo. Perdió una pierna, pero, según él, sobrevivió, sobre todo, gracias a su estatura (mide 1,90 metros), pues la detonación no llegó a alcanzarle la parte superior del cuerpo[21].

Fernando Aramburu, escritor vasco que vive en Alemania, produjo un conmovedor y realista relato de ficción sobre esos años en *Patria,* una novela que ha vendido más de un millón de ejemplares en España y que fue versionada para una serie de la plataforma HBO. Ambientada en Hernani, una localidad situada a muy pocos kilómetros al sur de San Sebastián, narra la historia de dos parejas que eran vecinos y buenos amigos. Txato monta una exitosa empresa de transportes. Ayuda entonces a sus amigos Joxian y Miren, que están pasando por una mala situación económica; Miren está tan unida a la

esposa de Txato, Bittori, que es como su hermana. Pero, entonces, el hijo mediano de Miren, Joxe Mari, se hace miembro de ETA tras haberse involucrado en el mundillo *abertzale* influido por los amigos con los que siempre va a tomarse unos tragos por las *herriko tabernas*. Txato pasa a ser extorsionado por la organización. La primera vez paga el «impuesto revolucionario». Pero, a partir de ahí, se niega a seguir cediendo. Después de todo, razona, su padre cayó herido luchando contra Franco en el frente vasco durante la Guerra Civil, y «soy de aquí, hablo euskera, no me meto en líos de política, doy trabajo. […] Joder, ¿no dicen que defienden al pueblo vasco? Pues si yo no soy pueblo vasco, ya me dirás tú quién lo es». Pero, de la noche a la mañana, la pareja de amigos de toda la vida de Txato y Bittori les dan la espalda, y a Txato lo apartan de su grupo ciclista de los domingos por la mañana. Al final, lo asesinan. A Joxe Mari lo detienen, lo torturan y lo encarcelan, y, con el tiempo, se arrepiente[22].

En última instancia, tres cosas condujeron a ETA a la derrota. La primera (y más importante) fue la mejora de la labor policial y de la cooperación del Gobierno francés. En 1992, la Policía gala arrestó a la cúpula dirigente de ETA en pleno en Bidart, apenas unos kilómetros dentro de su territorio desde la frontera con España. A raíz de ahí, la Guardia Civil fue siguiéndoles reiteradamente el rastro a sus sucesores. Desde el punto de vista militar, ETA era una organización derrotada ya desde principios de la década de 2000. La segunda cosa que acabó con ETA fue el endurecimiento de la opinión mundial contra los movimientos de «lucha armada» y contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Y la tercera fue que, tras décadas de mirar para otro lado, ya fuera por miedo o por indiferencia, la sociedad vasca comenzó por fin a volverse contra los pistoleros etarras. El desencadenante fueron dos atrocidades en el verano de 1997. Primero, la Guardia Civil localizó el zulo de construcción casera en el que los terroristas habían tenido secuestrado a José Antonio Ortega Lara, un funcionario de prisiones, durante dieciocho meses. En las primeras imágenes tras su liberación, pudo verse a un hombre terriblemente demacrado, más cerca de la muerte que de la vida. Diez días más tarde, ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco, un concejal de veintinueve años del PP por la pequeña localidad interior de Ermua, situada casi a medio camino entre Bilbao y San Sebastián. Sus captores dieron cuarenta y ocho horas de plazo al Gobierno de Aznar para que trasladara todos los presos de ETA a centros penitenciarios del País Vasco, aunque sabían muy bien que ningún Gobierno español podría ni querría ceder ante tales chantajes. Blanco fue conducido a

un bosque situado a menos de una hora de distancia de donde lo tenían cautivo y ejecutado de dos tiros en la cabeza después de que le obligaran a arrodillarse[23]. Pero durante aquellas cuarenta y ocho horas de espera, toda España —también el País Vasco— se llenó de manifestaciones multitudinarias exigiendo la puesta en libertad del secuestrado.

El asesinato de Blanco fue un punto de inflexión. ETA se dio por fin cuenta de que había perdido el consentimiento tácito de una amplia franja de la sociedad vasca. A través de Herri Batasuna («Unidad Popular», o HB), el partido *abertzale* que ella misma dirigía, ETA buscó un acuerdo con el PNV al que ambas formaciones terminaron llegando. Por este «Pacto de Lizarra», firmado con anterioridad a las elecciones autonómicas vascas que se celebraron en 1998, ambos partidos se comprometieron a tratar de conseguir la independencia y a romper toda cooperación con el PP y con los socialistas, a la vez que ETA declaraba una tregua. El entonces presidente del PNV, Xabier Arzalluz, un exsacerdote jesuita que era el verdadero cerebro en la sombra del Gobierno vasco, había colaborado anteriormente tanto con González como con Aznar a cambio de la transferencia de competencias. Pero también había demostrado tener una tortuosa habilidad para jugar varios juegos al mismo tiempo. Él mismo declaró que «el pueblo vasco no cabe en esta Constitución»[24]. El Parlamento autonómico aprobó entonces una reforma del Estatuto de Guernica que incluía el «derecho a decidir» de los vascos sobre su independencia y el establecimiento de una relación como «Estado libre asociado» con el resto de España. El proyecto fue rechazado por aplastante mayoría en el Congreso de los Diputados en 2005 (por 303 votos a 29, estos últimos todos de parlamentarios de partidos nacionalistas periféricos). Para entonces, hacía ya tiempo que ETA había dado por concluida su tregua. En el año 2000, asesinó a veintitrés personas, entre ellas el secretario general del Partido Socialista de Euskadi.

En respuesta, el Gobierno de Aznar propuso a los socialistas que consensuaran una ley para prohibir HB. En las filas del PSOE, algunos se mostraron inicialmente reacios a apoyar una medida que, en el extranjero, muchos veían como antiliberal. Pero Zapatero ya había propuesto en su momento llegar a un pacto con el PP para sacar el terrorismo del debate político entre los grandes partidos, así que no tardó en manifestarse de acuerdo con la idea de Aznar. Fue la decisión correcta. La ley sería posteriormente ratificada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Era una norma que obligaba a los *abertzales* a elegir entre «urnas o pistolas», según la frase que el

ministro del Interior del nuevo Gobierno de Rodríguez Zapatero, Pérez Rubalcaba, usó para definirla. Y, al final, optaron por las urnas: Arnaldo Otegi, miembro operativo de ETA en su día y secretario general de HB desde hacía unos años, comenzó a presionar a sus camaradas armados en la organización para que firmaran la paz. Llegó así otra tregua, en 2004. Y aunque ETA la rompió en 2006, cuando detonó unos explosivos en el *parking* del aeropuerto de Barajas en Madrid que mataron a dos inmigrantes ecuatorianos recién llegados a España, la banda era ya para entonces una fuerza agotada.

Entretanto, los moderados se habían hecho con la dirección del PNV. El Gobierno de Zapatero continuó persiguiendo a los restos de ETA sin descanso mientras mantenía conversaciones muy discretas con la organización. Fruto de estas, accedió progresivamente a trasladar hacia cárceles del País Vasco a unos trescientos presos etarras (que se hallaban hasta entonces deliberadamente dispersados por centros penitenciarios de toda España), pero sin hacer concesiones políticas de ningún tipo. El PP criticó a Zapatero por aquellas negociaciones, pese a que el primer Gobierno de Aznar había dialogado directamente con ETA apenas diez años antes, tras la tregua de 1998. Pero, al final, en 2011, tres etarras encapuchados —entre quienes estaba Sorzabal, la pistolera que en su día había intentado matar a Sémper— declararon un cese indefinido de la violencia. Y, esta vez, se mantuvo. Sortu, partido sucesor de HB, había enmendado sus estatutos para que incluyeran un rechazo explícito a la violencia y logró de ese modo ser legalizado a tiempo para las elecciones al Parlamento vasco de 2012, en las que se presentó como parte de EH Bildu, una nueva coalición *abertzale*. En 2018, ETA anunció por fin su disolución. Para acentuar el elemento de presunto conflicto político subyacente —consustancial a su relato—, los *abertzales* trataron de presentarlo todo como el resultado de un «proceso de paz» e invitaron a un variopinto grupo de observadores internacionales a una ceremonia que tuvo lugar en Francia, justo al otro lado de la frontera. El Gobierno de Rajoy no participó en nada de aquello, pero tampoco puso obstáculos. Rubalcaba escribió entonces: «La única verdad es que la democracia española sufrió mucho, es cierto, pero acabó venciendo a los terroristas, que no alcanzaron ninguno de sus objetivos políticos»[25].

El éxito de Euskadi

La Euskadi de 2018 era un lugar muy diferente del País Vasco de medio siglo antes, cuando ETA comenzó su campaña de violencia. Pese a sus ambigüedades políticas, el PNV, que ha llevado las riendas del Gobierno autonómico vasco durante todos los años desde que este

se puso en marcha en 1980 salvo tres, ha realizado una labor gubernamental y administrativa limpia y eficaz en líneas generales, y ha pilotado una verdadera transformación económica. Ejemplo de ello ha sido Bilbao, que ha dejado de ser la ciudad industrial decadente y muy contaminada en que se había convertido y es ahora un ejemplo mundialmente conocido de renovación urbanística. Su icono es el Museo Guggenheim, diseñado por el arquitecto estadounidense Frank Gehry e inaugurado en 1997. Es un edificio notable; su exterior de titanio imita los pliegues de las colinas que le sirven de telón de fondo; visto desde la margen opuesta del Nervión, recuerda también a un barco a punto de zarpar. La creación de la que, por entonces, sería la primera franquicia en el extranjero del museo neoyorquino requirió de importantes inversiones públicas (se calcula que unos 170 millones de dólares) y de continuas subvenciones. La decisión de seguir adelante con aquella iniciativa se explica en buena medida por el control que el PNV ejercía sobre los tres niveles de gobierno implicados: el autonómico, el provincial y el municipal[26]. El Guggenheim fue, sobre todo, una atrevida declaración de intenciones sobre el futuro del País Vasco. Modificó incluso la sociología de la ciudad, que comenzó a atraer un turismo más cultural, tal como me comentó Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao entre 1996 y 2002, al que regresó en 2017 tras un exitoso mandato al frente del Prado, y que notó mucho el «efecto Guggenheim». Cuando se marchó a Madrid, su museo recibía unos ciento cincuenta mil turistas anuales; cuando volvió, la afluencia se había duplicado, gracias, en buena medida, a los turistas extranjeros.

Siguiendo la estela del Guggenheim, las diversas Administraciones responsables contrataron a más arquitectos de renombre para que diseñaran nuevos puentes (Santiago Calatrava), estaciones de metro (Norman Foster) y una nueva terminal de aeropuerto (de nuevo, Calatrava) para la ciudad. También en Bilbao se inauguró un paseo peatonal por la hasta entonces ruinosa orilla izquierda de la ría. Pero si el lavado de cara de Bilbao fue importante para el resurgir económico de la región, no lo fueron menos las eficaces políticas industriales y formativas del Gobierno vasco. «La vocación industrial y empresarial de los años setenta sigue estando ahí, pero la industria es ahora mucho más moderna y competitiva», afirma su consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu[27]. Aunque los servicios representan más de la mitad de la economía vasca, la industria continúa aportando más de una quinta parte de su PIB. Si incluimos Navarra, la región concentra la mitad de la industria automovilística española, una cuarta parte de la aeronáutica y un 80 % de la de

fabricación de maquinaria[28].

A principios de los años noventa, el Gobierno vasco adoptó una estrategia industrial dirigida a fomentar los clústeres de empresas, con especial atención a los sectores tecnológico, automovilístico, aeronáutico y biocientífico. Uno de sus frutos es el Automotive Intelligence Center, en las afueras de Bilbao. Este proyecto del sector privado impulsado con ayuda de la Diputación de Vizcaya es un centro neurálgico de investigación e innovación que aloja treinta y una empresas (desde locales hasta multinacionales) y proporciona ochocientos puestos de trabajo. Tienen su propia academia de formación. Mercedes tiene instalada una gran planta de producción en la cercana Vitoria, y Volkswagen tiene también la suya en Pamplona. Muchos de los trescientos fabricantes de componentes para el automóvil que están establecidos en la región son el equivalente vasco del *mittelstand* alemán, la arquetípica empresa mediana industrial de propiedad familiar. Junto al aeropuerto bilbaíno, el Gobierno autonómico y la Diputación instalaron el Parque Científico y Tecnológico de Vizcaya, que, con sus doscientas compañías de alta tecnología, es la segunda mayor incubadora de empresas de España (solo por detrás de la de Barcelona). En una conversación con Íñigo Angulo-Barturen, fundador de una *start-up* allí instalada, destacaba como puntos favorables el compromiso político de las autoridades autonómicas con el desarrollo de empresas y la disponibilidad de personal cualificado. La formación profesional, uno de los puntos débiles de España en general, funciona bien en el País Vasco. Solo en la industria del automóvil hay matriculados unos veinticinco mil alumnos en centros formativos especializados, la mayoría en programas de formación dual que implican tanto al Gobierno autonómico como a la empresa privada, y que combinan la docencia con la práctica laboral.

Todas estas nuevas compañías hicieron posible que la comunidad autónoma vasca recuperara su antigua preeminencia entre las que más renta per cápita registran en España, solo por detrás de Madrid y por encima de la media de la Unión Europea. Obviamente, el concierto económico y la generosa financiación del sector público resultante de aquel han ayudado. Pero, en general, el dinero público se ha gastado bien en el País Vasco. Y en vista de los muchos años que lleva el PNV en el poder, no deja de sorprender que solo se hayan conocido casos aislados de corrupción en esta comunidad autónoma. Tal vez se explique no solo por cierta moralidad jesuítica, sino también por lo reducidos que son los mundillos tanto político como empresarial en Euskadi. «El Gobierno es muy cercano a la gente, comentó Iñigo

Urkullu, lendakari desde 2012. Casi se puede decir que todos nos conocemos con todos»[29]. Puede que también ayude la práctica acostumbrada en el PNV de separar el cargo de jefe del partido del de jefe del Gobierno autonómico.

El PNV es la maquinaria política más impresionante de toda España. Sus líderes actuales, con Ortuzar al frente del partido y Urkullu al mando del Gobierno vasco, son astutos y realistas. Su objetivo político es conseguir un nuevo Estatuto para Euskadi que encarne una soberanía compartida con España, antes que una independencia de esta última. «No partimos de cero; llevamos veinte años construyendo instituciones —me dijo Ortuzar cuando nos sentamos a hablar durante una hora en la sede central del partido en Bilbao en 2018—. No hay nadie en Europa que se acerque tanto a ser un Estado sin serlo en realidad». Además, añadió, «la causa nacional vasca no es incompatible con España. Una nación no tiene por qué tener un Estado, no al menos en la Europa de hoy». Lo que le gustaría, dijo, sería una confederación, pero enseguida aclaró que «somos muy conscientes de que eso no existe, ni siquiera en Suiza». Esa prudencia refleja a su vez el estado actual de la opinión pública vasca. El Gobierno autonómico ha conseguido revivir el euskera. La mayoría de niños matriculados en escuelas públicas vascas reciben su enseñanza en ese idioma, que es el de uso habitual para un 40 % de la población. Pero eso no se ha traducido en un deseo de secesionarse de España. Las encuestas indican que dos tercios de los habitantes de Euskadi se sienten vascos y españoles, y que menos de la cuarta parte está a favor de la independencia[30]. Difícilmente puede llegarse a otra conclusión que no sea que la actual situación de autonomía radical representa el mejor de los mundos posibles para los vascos.

La batalla del relato

«Nos queda por delante la tarea de evitar que los derrotados impongan su falso relato», escribió Rubalcaba cuando ETA se disolvió[31]. En junio de 2021, el rey Felipe VI, Pedro Sánchez y Urkullu inauguraron un Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en el imponente edificio de la antigua sucursal provincial del Banco de España en Vitoria, capital de la comunidad autónoma. El mencionado centro es una fundación pública adscrita al Ministerio del Interior español, aunque apoyada por el Gobierno vasco, en memoria de las víctimas de todos los terrorismos, incluidos los atentados islamistas. Pero el 60 % de las víctimas allí recordadas son las de ETA. Incluye una reconstrucción del zulo donde tuvieron rehén al funcionario de prisiones Ortega Lara. Tiene por objetivos honrar y recordar a las

víctimas, proporcionar un relato verídico de lo que ocurrió y difundir información sobre ello entre los jóvenes. «Somos historiadores profesionales y estamos tratando de reconstruir un relato históricamente riguroso de lo que sucedió», me comentó Raúl López Romo, director de las exposiciones del centro. La idea de un conflicto entre dos bandos es propaganda para blanquear la imagen de ETA, añadió, aunque admitió que esa es una interpretación de lo ocurrido que está presente en la sociedad vasca y en el extranjero.

Pongamos el caso de Hernani, localidad de dieciocho mil habitantes con centro histórico medieval e importantes instalaciones industriales en la que está ambientada la novela *Patria*. Continúa siendo un bastión *abertzale*. Cuando ETA anunció su disolución en 2018, visité la villa y hablé con Koro Etxeberria, entonces tenienta de alcalde de EH Bildu. «El conflicto sigue ahí, aunque sus parámetros hayan cambiado», insistía. Ella no había participado en «la lucha armada», como la llamó, pero dijo que esta había sido «para conquistar derechos que se nos habían usurpado. […] Aquí la represión de las fuerzas del Estado fue brutal». Otros, en cambio, se sintieron excluidos de Hernani. El secretario local del Partido Socialista estuvo una década entera sin ir al centro de la localidad. Hoy lo saludan, pero no hablan con él. «Hay sitios a los que no vas —me confesó Latierro, de la librería Lagun—. En los años cincuenta y sesenta, mi generación iba a Hernani al baile de los domingos en la plaza. Pero, en los últimos veinte años, solo he vuelto por allí un par de veces».

En aquella misma visita, crucé la frontera hispanofrancesa para ir a Hendaya a hablar con Agus Hernan, uno de los líderes del Foro Social, una organización que agrupa a varios movimientos sociales *abertzales*. Él defiende la idea de una «memoria inclusiva» que recuerde que hubo dos bandos enfrentados con relatos igualmente válidos en ambos casos. «Nuestra idea es que todos tenemos que convivir, y eso significa escuchar todas las versiones». En una veintena de localidades de todo el País Vasco, ha habido iniciativas de alcaldes y alcaldesas para establecer diálogos entre las víctimas y los responsables de su dolor. Pero para muchas de las primeras, ese es un proceso muy difícil. «La reconciliación es una palabra vacía —me dijo Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE)—. Yo no tengo por qué reconciliarme con el asesino de mi hermano». Su hermano, Gregorio Ordóñez, era teniente de alcalde de San Sebastián por el PP y fue abatido de un tiro en la nuca por un encapuchado de ETA en 1995 mientras estaba sentado en un bar con otros dos colegas de su partido. «La sociedad vasca

continúa estando secuestrada. La mayoría no quiere hablar».

En 2021, Otegi fue más lejos que nunca antes en sus disculpas por la violencia de ETA cuando, dirigiéndose a las víctimas, declaró: «Queremos trasladarles que sentimos su dolor y afirmamos que nunca debería haberse producido. A nadie puede satisfacer que aquello sucediera. No se debería haber prolongado tanto en el tiempo»[32]. Para algunas asociaciones de víctimas, fue un paso dado en la dirección correcta, ya que Otegi por fin dejó de emplear su distinción anterior entre los familiares de víctimas civiles, ante quienes ya se había disculpado, y los de los policías y militares asesinados. Para otras, se quedó corto en no emitir una condena clara del terrorismo. También piden que los presos ayuden a resolver los delitos que aún están pendientes de solución y que pongan fin a los homenajes de bienvenida que se les han seguido haciendo a los presos etarras cuando terminan sus condenas y regresan a casa.

Para muchos, la aceptación política de EH Bildu por parte de los socialistas llegó demasiado pronto. Debido a la estrecha diferencia entre bloques que marcaba la aritmética parlamentaria, el Gobierno de Sánchez negoció la aprobación de sus presupuestos del Estado tanto de 2020 como de 2021 con los *abertzales*, entre otros grupos. El PSOE también recurrió al apoyo de Bildu para formar gobierno en Navarra en 2019. «Los socialistas vemos ahora a EH Bildu como un partido normal», declaró Jesús Eguiguren, antiguo presidente del Partido Socialista de Euskadi que mantuvo conversaciones con Otegi ya en tiempos del Gobierno Zapatero[33]. Es una postura que contrasta, por ejemplo, con el cordón sanitario que otros partidos continúan estableciendo en torno al Sinn Féin en la República de Irlanda todavía dos décadas después de que los Acuerdos de Viernes Santo pusieran fin a la violencia del IRA. Pero, al mismo tiempo, la negativa del PP a aceptar que la disolución de ETA ha sido un cambio importante para el País Vasco también ha tenido sus costes. Al suceder a Rajoy como líder nacional del partido en julio de 2018, Pablo Casado sustituyó a la dirección del PP vasco por otra de destacados conservadores de línea dura. Estos, sin embargo, parecían haber perdido el contacto con la realidad de la sociedad vasca actual, que había evolucionado muy rápido en la década previa. Los sondeos mostraban que muchos vascos jóvenes conocían o recordaban muy poco los crímenes de ETA. En las elecciones autonómicas de 2020, en las que el PNV logró conservar el Gobierno que ya ejercía en coalición con los socialistas, el gran triunfador fue EH Bildu, que, con el 28 % de los votos, consolidó su posición como el segundo mayor partido de Euskadi. Bien es cierto que sus avances electorales fueron principalmente a costa de Podemos,

y que la participación (de solo el 51 %) fue muy baja debido a la pandemia. Pero, en cualquier caso, el PP consiguió solo el 7 % de los votos (cuando, en 2001, había llegado a conseguir el 21 %). Todo apunta a que EH Bildu podría en un futuro no muy lejano entrar a formar parte del Gobierno autonómico vasco, lo que seguramente acarrearía nuevas dificultades para España.

El nacionalismo cultural gallego

Si viajamos quinientos kilómetros hacia el oeste desde Bilbao, llegamos a Galicia, que, en el término que usa la constitución, es la tercera de las «nacionalidades» históricas españolas. Tiene también una pronunciada identidad regional. Es una tierra de brumas, bosques y largas rías atlánticas, así como de rutas de peregrinaje hacia la colosal catedral medieval de Santiago de Compostela. Territorio distante de casi todos los demás, sus habitantes son famosos por su cautela. Al igual que Cataluña y que el País Vasco, tiene su propia lengua, el gallego, que al oído extranjero suena como una mezcla de español y portugués aderezada con elementos autóctonos, y que tiene una literatura cuyos orígenes se remontan al siglo XII. Posee una larga historia de asentamientos humanos desde los tiempos de las poblaciones celtas, así como unas fronteras bastante definidas. Al igual que en el norte de Cataluña y en el País Vasco, la presencia arabobereber fue allí escasa y breve. Durante cierto periodo de los siglos X y XI fue un reino independiente, aunque bajo la órbita leonesa, para luego quedar integrado dinásticamente en Castilla. Tiene un folclore característico en el que están presentes las gaitas, las leyendas y otros ecos de una antigua presencia céltica, visible también en las ruinas de sus numerosos «castros», poblados fortificados ancestrales. A mediados del siglo XIX, Galicia fue escenario de un movimiento cultural propio conocido como Rexurdimento e inspirado por la Renaixença catalana[34].

No obstante, su historia durante la Edad Contemporánea ha sido muy diferente de la catalana o la vasca. El nacionalismo político llegó tarde a Galicia, quizá por tratarse de una de las zonas más pobres de la península ibérica, una tierra de emigrantes, más que de inmigrantes. Las primeras organizaciones nacionalistas se fundaron en tiempos de la Primera Guerra Mundial, y el primer partido político de ese signo (el Partido Galeguista) no se creó hasta 1931. La extracción de sus miembros era principalmente urbana y de clase media, en una región donde la inmensa mayoría de la población era rural. Los representantes gallegos en las Cortes estaban negociando un estatuto de autonomía cuando estalló la Guerra Civil en 1936. El golpe

franquista sí triunfó en Galicia desde un principio. La represión ejercida posteriormente por la dictadura hizo que el germen del nacionalismo no brotara de nuevo hasta los años sesenta, aunque ya en una versión más propiamente cultural, con reivindicaciones destacadas como la recuperación del uso público de la lengua gallega. A diferencia de lo que sucedió en Cataluña o en Euskadi, los partidos nacionalistas no tuvieron un papel protagonista en la negociación del Estatuto de autonomía de Galicia de 1981. Representados desde los años noventa principalmente por el Bloque Nacionalista Galego (BNG), los nacionalistas nunca han obtenido más del 30 % de los votos en las elecciones autonómicas, y normalmente entre el 15 y el 25 %. En Galicia, curiosamente, han sido los conservadores quienes han presidido casi todo el tiempo esa fuerte identidad regional.

Manuel Fraga, antiguo ministro de Información de Franco y fundador del partido que fue el germen del actual PP, fue presidente autonómico de Galicia de 1989 a 2005. Tras un breve interludio con un presidente socialista, el PP ha seguido gobernando desde 2009 (bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo hasta 2022). En las encuestas, la mitad de los consultados dicen sentirse gallegos y españoles por igual, y solo un 15 % consideran que la suya es una identidad nacional separada. «Aquí no estamos en el diván del psiquiatra preguntándonos quiénes somos», me dijo Feijóo cuando hablé con él en su despacho de la sede de la presidencia autonómica en una colina frente a la catedral de Santiago. Como Fraga, antecesor suyo en el cargo, Feijóo practica el galleguismo. «Hemos defendido Galicia como lugar que tiene su lengua, su cultura y sus particularidades propias —dijo—. Somos el partido de la casa, de la tierra». En las escuelas, se practica lo que él denomina un «bilingüismo cordial»: la mitad de la enseñanza es en gallego y la mitad en castellano, si bien el Bloque Nacionalista Galego (BNG) se queja de que, en la práctica, el idioma autóctono recibe menos atención. Pese a ello, Feijóo sostiene que su galleguismo ha logrado frenar el nacionalismo. También ha impedido que Vox avance en su comunidad. La autonomía no ha servido tanto para crear nacionalistas en Galicia como para fortalecer la identidad dual de aquella región, según Xosé Manoel Núñez Seixas, el ya mencionado historiador de la Universidad de Santiago de Compostela: «Los gallegos se sienten muy gallegos. Pero no ven en ello contradicción ninguna con formar parte de España»[35].

Es un regionalismo que quiere avanzar en vez de separarse, y que quiere defender sus intereses tratando de ejercer una fuerte influencia en Madrid. Es una fórmula que ha funcionado bastante bien. Desde la

llegada de la democracia, Galicia ha progresado desde su pobreza inicial hasta un nivel de renta solo ligeramente por debajo de la media nacional, lo que ha hecho que sea la región española con el crecimiento económico más rápido en lo que llevamos de siglo. Dicho de otro modo, representa un ejemplo paradigmático de nivelación. Su éxito se ha debido en buena medida a su estabilidad política y a su cohesión social. A diferencia de Cataluña y del País Vasco, donde la primogenitura mantenía intacto el patrimonio de la masía o del *baserri* familiares al pasar de una generación a la siguiente, en Galicia la tradición era dividir las tierras entre todos los hijos e hijas. Esto trajo consigo no solo pobreza rural y emigración, sino también una cultura en la que se valora mucho la propiedad privada, las *leiras* (las fincas de labradío) y el esfuerzo. Hoy su economía se ha diversificado. Posee la mayor industria pesquera de Europa, pero también son importantes sus sectores de construcción naval, lácteo y maderero. Su vino blanco de la uva Albariño se ha convertido en un producto de fama internacional. Galicia cuenta también con dos grandes pilares industriales. Uno de ellos es Inditex, cuya sede central está situada cerca de La Coruña, y que desde sus orígenes como humilde mercería creció hasta convertirse en el mayor proveedor mundial de moda rápida a través de Zara y otras cadenas del grupo. El otro es la inmensa fábrica de Citroën cerca de Vigo, que genera, entre directos e indirectos, unos treinta mil puestos de trabajo ligados a la industria automovilística. El Gobierno autonómico ha invertido fondos europeos en la construcción de autopistas y autovías. Madrid sigue estando a seis horas de coche, pero antes se tardaba hasta el doble en llegar. También hay una autovía que recorre la costa cantábrica española hasta la frontera francesa. Y una autopista conecta Galicia con Oporto, en el norte de Portugal, zona con la que forma una región económica casi indiferenciada. Tras múltiples demoras en su construcción, en diciembre de 2021 llegaba por fin a Ourense el AVE desde Madrid, lo que rebaja sensiblemente los tiempos del viaje por tren.

Ahora que prácticamente se ha puesto ya al día con el conjunto de España, el reto de Galicia está en continuar su progresión socioeconómica. A Feijóo le criticaban que no hubiera sabido frenar el éxodo de talento, pues muchos profesionales jóvenes terminan yéndose a buscar oportunidades a otras partes. Núñez Seixas lo resumió así: «El modelo económico prioriza el ladrillo al conocimiento». Galicia dedica poco dinero a investigación y desarrollo (I+D) en comparación con el País Vasco. Tiene tres aeropuertos cuando uno solo bastaría; de hecho, muchos gallegos cruzan la frontera hasta Oporto, que tiene una mayor variedad de rutas

internacionales. El dinamismo económico de la franja costera que va desde La Coruña hasta Vigo contrasta con el interior, cada vez más vacío. Medio siglo atrás, había más de ochocientas mil personas dedicadas a la agricultura y la ganadería en Galicia[36]. Hoy apenas son cuarenta y cinco mil. En ese campo crecientemente despoblado, son frecuentes los incendios forestales. Además, Galicia envejece. El Gobierno autonómico está intentando fomentar la inmigración. Ana Pontón, que dio nueva vida al BNG en las elecciones autonómicas de 2020, subraya todos estos problemas y sostiene que la solución radica en «el derecho a decidir» sobre la independencia o, cuando menos, en garantizarse un concierto económico como el vasco. Pero nada parece indicar que haya una mayoría de gallegos que estén de acuerdo con ella.

El PP en Galicia es mucho más moderado y pragmático de lo que lo fue su matriz nacional bajo el liderazgo de Pablo Casado, a quien el propio Núñez Feijóo sustituyó en abril de 2022 (véase el capítulo 9). En Galicia, Feijóo era un gestor, más que un ideólogo. Sus críticos lo consideraban un cacique. Pero eso tal vez no era más que un reflejo del poder y la prominencia que los Gobiernos autonómicos han adquirido en toda España. De hecho, junto a las tres nacionalidades históricas, el Estado autonómico ha creado un mosaico de otras muchas identidades regionales más o menos sólidas, algunas de ellas puramente artificiales en sus inicios. Eso es un punto fuerte y un punto débil al mismo tiempo, una cuestión sobre la que volveremos en breve.

7

El desvanecimiento del sueño español

Linares es una densa y compacta localidad de cincuenta y ocho mil habitantes en la provincia de Jaén, cercana a la principal puerta de entrada en Andalucía desde la meseta central española. Ha sido sucesivamente un centro de la minería del plomo, un nudo ferroviario y sede de la gran fábrica de los todoterrenos Santana. En la actualidad, es una ciudad que tiene la dudosa fama de ser la que mayor tasa de desempleo registra de toda España, con un 33 % en 2021. La fábrica de Santana, que llegó a dar trabajo a más de dos mil personas en su momento de apogeo, cerró sus puertas en 2011. Los trenes de alta velocidad con destino a Sevilla y a Granada no paran en Linares, como tampoco lo hacen los turistas que quieren visitar las cercanas Úbeda y Baeza, con sus iglesias antiguas y sus palacios renacentistas de piedra melosa.

En 2021, cerraron los grandes almacenes de El Corte Inglés que había en la plaza principal de Linares; ahí sigue el edificio que los alojaba, deteriorándose como una muela penetrada de caries. También Inditex, el gigante de la moda rápida, ha clausurado recientemente la mayoría de establecimientos que tenía en la localidad. «Muchos jóvenes aquí ni estudian ni trabajan», me dijo Manuel Gámez, miembro de la plataforma Todos a Una por Linares, cuando estuve allí en junio de 2021. Desde el punto de vista económico, «toda la provincia de Jaén es un páramo», comentó. De hecho, Jaén es conocida sobre todo por su «mar verde» de olivares sin fin que producen la quinta parte de todo el aceite de oliva mundial. Gámez y yo hablamos en su tienda de muebles, donde solo entró un cliente durante la hora que duró nuestra conversación. Con él, el negocio familiar iba ya por su tercera generación, pero no era optimista sobre su futuro: «Mis hijos ya no podrán vivir de él», me confesó.

Linares había atraído efímeramente la atención nacional cuatro meses antes por un altercado que empezó en una terraza de un bar con dos policías de paisano y que derivó en una batalla campal callejera con catorce detenidos y veinte policías heridos leves. Los medios nacionales presentaron la imagen de una ciudad en una situación límite[1]. Pero exageraban. Linares tiene una mala fama desproporcionada, recalcó su alcalde de entonces, Raúl Caro-Accino, cuando me entrevisté con él. Este exdirector de la cámara de comercio local fue elegido como independiente al frente de la lista de Ciudadanos en un municipio que tradicionalmente ha votado

socialista. Caro-Accino argumentó que los cierres de tiendas habían respondido a decisiones tomadas por empresas de ámbito nacional en relación con el despegue del comercio por internet durante la pandemia. Expresó entusiasmo por las empresas tecnológicas que se estaban instalando en polígonos industriales de las afueras de la ciudad. Me llevó a ver una llamada Sicnova, que fabrica con impresoras 3D componentes de acero personalizados según el encargo específico de cada cliente. Evolutio —una filial de British Telecom especializada en servicios en la nube— tenía previsto instalar un centro de investigación en Linares. Son compañías que llegan atraídas por el hecho de que en la ciudad se ubica la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Jaén, así como su incubadora de empresas. En el fondo, la tasa de desempleo que allí se registra no se aparta demasiado de las que tienen otras zonas del sur y el oeste de España, como bien quiso aclarar el alcalde. «Tenemos un problema de baja cualificación de la mano de obra», admitió.

Ese problema implica que muchas personas en Linares estén condenadas a sufrir un paro de larga duración y a vivir la sensación de fracaso y de falta de oportunidades que lo acompañan y que forman con aquel una especie de círculo vicioso. «Llevo meses buscando empleo —comentaba Carlos Márquez, un joven de veintiún años a quien habían despedido de un trabajo como vendedor de teléfonos móviles en un hipermercado antes de la pandemia—. En Linares no hay nada. Tendré que irme a otra parte». Algunos se culpan a sí mismos por no haberse preparado mejor. «Hace siglos que estoy en paro. No estudié, me pudo la pereza», me dijo Antonia Delgado mientras paseaba por el pasaje del Comercio (principal calle comercial de la localidad) junto a su hijo. Acababan de ofrecerle un contrato de un mes de trabajo cuidando de personas ancianas, pero no era optimista. «No hay oportunidades. La cosa estaba mal y ahora, con la pandemia, está peor. Este sitio está muerto».

La economía española destaca en Europa, sobre todo, por su elevado desempleo crónico, que afecta muy especialmente a las mujeres, a los jóvenes, a los varones de más de cincuenta años y a las personas con baja cualificación o bajo nivel educativo en general. Un alto porcentaje de los parados llevan en esa situación un año o más, y muchos hasta más de dos. Esa es la principal razón por la que la desigualdad y la pobreza aumentaron por encima de la media europea tras la Gran Recesión de 2007-2009 (que, en el caso español, se prolongó entre 2008 y 2013). Esto supone un despilfarro de potencial humano y delata el fracaso de las políticas aplicadas en este terreno. Pero es un problema social «bastante invisible», según me comentó

Xavier Coller, profesor de sociología en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla[2]. Y ello se debe, en parte, a que, aunque los desempleados son pobres, «no se están muriendo de hambre», dijo. Quienes no cumplen con los criterios para cobrar el subsidio por desempleo reciben del Estado una paga de cuatrocientos euros mensuales. Algunos de los desocupados son inmigrantes. Muchos piensan que hay bastantes personas en paro que se aprovechan de la economía sumergida, sobre todo en Andalucía. Esta podría representar hasta un 17,5 %, aproximadamente, del PIB español, aunque esta es una cifra bastante próxima a la media del conjunto de la Unión Europea[3]. Una segunda característica particular de la economía es esa especie de dualismo del que es buen ejemplo Linares, con un sector moderno e internacionalizado que convive con una gran masa de pequeños negocios familiares e improductivos. Un tercer rasgo —más positivo— es la capacidad de la economía española para crecer con rapidez y reinventarse, al menos de forma parcial.

Hasta la recesión de 2008-2013, cada nueva generación de españoles desde los años sesenta del siglo XX había vivido mejor que su predecesora, y la clase media no había dejado de crecer. Muchos cumplieron —o, como mínimo, pudieron aspirar a cumplir— ese sueño tan español de ser dueños de un piso y un coche propios, y de tomarse unas vacaciones de un mes todos los años. En muchos casos, en una segunda residencia situada en la playa o en «el pueblo» desde donde sus padres o sus abuelos habían emigrado a la ciudad. Ese sueño se está desvaneciendo actualmente bajo el efecto de dos fuertes depresiones en apenas una década. Según una encuesta entre personas de dieciocho a treinta y cuatro años de edad publicada por *El País* en julio de 2021, un 75 % creen que su situación económica será peor que la de sus padres, y solo un 12 % piensan que la mejorarán. Esta generación ha llegado a la edad adulta en un contexto caracterizado no solo por una trompicada evolución de la economía, sino también por un mercado laboral disfuncional en el que la precariedad (o inestabilidad) y la temporalidad de los contratos son la norma. Su problemática situación quedó condensada en *Feria,* un sorpresivo éxito editorial de Ana Iris Simón, una escritora nacida en 1991 y desconocida hasta entonces. Un vídeo suyo de queja social en el que desafiaba a Pedro Sánchez se volvió viral: «He vivido tres ERES y mi contrato temporal finaliza dos días después de la fecha programada para mi primer parto. No tengo coche ni hipoteca, porque no puedo»[4]. Sus padres eran trabajadores de Correos de La Mancha y comunistas de toda la vida. Su libro (unas memorias de su infancia, su juventud y su entrada en la edad adulta) comenzaba así: «Me da envidia la vida

que tenían mis padres a mi edad». Como ella ponía de relieve, el contrato social implícito entre generaciones se está deshaciendo. El Estado del bienestar cuida bastante bien de los españoles de más edad, pero las generaciones jóvenes no reciben tan buen trato y se enfrentan a unas perspectivas inciertas. Este —y no los nacionalismos ni la memoria histórica— es el mayor problema al que se enfrenta el país. Y no recibe ni de lejos la atención que se merece.

¿Qué es lo que ha salido mal? Tanto la larga recesión de 2008-2013 como la pandemia de 2020-2021 castigaron más a España que al resto de Europa. Cada una a su modo, ambas recesiones sacaron a la luz ciertos puntos débiles estructurales de la economía española. Pero, entre una y otra, el país experimentó una vigorosa recuperación, y el contraste entre lo ocurrido en cada una de esas crisis apunta a que se han ido produciendo entre medias algunos cambios subyacentes potencialmente alentadores. Pero para rehacer el contrato social habrá que introducir reformas de largo alcance. Y no se perciben en el ambiente indicios suficientes de que los políticos puedan encontrar el consenso suficiente para ponerlas en práctica.

Una economía transformada a medias

Entre 1995 y 2007, la economía española creció a un ritmo medio del 3,5 % anual, muy superior a la media de la Unión Europea, que fue del 2,2 %. El desempleo, que se había disparado con la reestructuración económica y las crisis del petróleo de los años setenta, cayó por fin de forma sostenida durante aquel largo periodo de expansión hasta tocar suelo en el 8 % en 2007. Pero se trató de un crecimiento desequilibrado e insosteniblemente sesgado en favor de la construcción y el auge de la vivienda. Y fue, además, ineficiente. Un estudio posterior de un equipo de economistas para el Banco de España halló que la productividad descendió durante ese periodo al tiempo que aumentaba en el conjunto de la UE[5]. Dicho de otro modo, el crecimiento resultó de la adición de trabajadores —en plena época de despegue de la inmigración extranjera en España, y de aceleración de la incorporación de la mano de obra femenina joven— y de capital a la economía, ayudada esta última por lo barato que estaba el crédito en España tras el ingreso del país en la zona euro. La ratio de crédito total sobre el PIB se triplicó entre 1994 y 2007. Buena parte de ese dinero se despilfarró, y no solo por los miles de millones de euros que se dedicaron a compras e inversiones inútiles.

Al parecer, varios serían los motivos que explicarían esa ineficiencia en la asignación de los recursos. Uno de ellos fue que parte del crecimiento se produjo en sectores que dependían de la

regulación estatal, como la banca y la energía, a los que cabría añadir la construcción y la obra pública, sectores todos ellos muy dados a un «amiguismo» que, según las secas palabras de los autores del citado estudio, tuvo «importantes costes macroeconómicos». Otro de los motivos fue que precisamente las empresas más nuevas y eficientes fueron las que más problemas tuvieron para acceder a créditos bancarios. Como resultado, no hubo una competencia suficiente como para impulsar la eficiencia al alza. La cúpula de muchas grandes empresas españolas recordaba a una oligarquía masculina acomodada. Los altos ejecutivos de sociedades que cotizaban en Bolsa se comportaban como si fueran los dueños de las compañías, en vez de los gestores contratados por los accionistas de estas. Tendían a eternizarse en sus puestos. Por ejemplo, entre 2000 y 2018, pareció imposible despegar a Francisco González de su sillón de presidente ejecutivo del BBVA, una de las tres grandes entidades bancarias españolas. Solo se vio forzado a abandonar el cargo cuando fue acusado de cohecho y revelación de secretos por el hecho de que su equipo directivo hubiera contratado los servicios del excomisario de policía corrupto, José Manuel Villarejo, para que espiara al máximo directivo de la empresa constructora que había iniciado un movimiento para intentar hacerse con el control del BBVA. González, que se declaró inocente, tuvo que afrontar, además, cargos adicionales por administración desleal, es decir, por usar el banco para sus propios fines particulares. Otros dos máximos directivos de larga trayectoria en sus cargos, como Antonio Brufau (de Repsol, empresa petrolera y gasística) e Isidre Fainé (de La Caixa, otro de los grandes bancos), fueron investigados por el uso que sus respectivas compañías habían hecho también de los servicios de Villarejo, aunque las acusaciones en su contra se retiraron por falta de pruebas. Por su parte, Ignacio Sánchez Galán ha dirigido Iberdrola (una de las grandes compañías eléctricas españolas) desde 2001.

Los defectos de este capitalismo «de amigotes» español quedaron al desnudo con el estallido de las burbujas inmobiliaria y crediticia en 2008. Entre ese año y 2013, España perdió un 9% de su PIB en términos reales, el consumo privado cayó un 14 % y el desempleo volvió a dispararse (hasta el 27 % a comienzos de 2013)6. La gente joven fue golpeada con especial dureza por aquella situación: la renta media de los menores de treinta y cinco años descendió en una cuarta parte entre 2008 y 2014, mientras que el desempleo juvenil (es decir, el que afecta a adolescentes y jóvenes de entre quince y veinticuatro años de edad) alcanzó un estratosférico 57% en 2013. Casi doscientas treinta mil empresas tuvieron que cerrar, según una estimación del

Círculo de Empresarios, un grupo de presión de la patronal. Se calcula que aproximadamente un millón de españolas y españoles jóvenes —y parte de los inmigrantes llegados en los años anteriores— abandonaron el país en busca de trabajo[7]. Las heridas tardaron años en cicatrizar. Hubo que esperar a mediados de 2017 para que la economía superase el nivel que había alcanzado en 2008.

Aún entonces hubo lugares en los que eso todavía no ocurrió. Era el caso, por ejemplo, de Talavera de la Reina, a una hora y cuarenta minutos de (lento) tren de Madrid en dirección suroeste. Escenario de una batalla de la Guerra de la Independencia, Talavera es conocida desde siempre por sus azulejos y su cerámica de azules y amarillos pintados a mano. Pero, cuando la visité en 2017, se había hecho famosa, más bien, por su desempleo, de un modo parecido a como Linares lo sería durante la recesión de la pandemia. Aunque su población había descendido en cinco mil habitantes (hasta los ochenta y cinco mil) desde 2012, su tasa de paro seguía estando en torno al 35 %. Durante el auge de la vivienda, Talavera había prosperado porque mucha gente trabajaba allí en las empresas de fabricación de material para la construcción instaladas en torno al valle del Tajo, o se desplazaban a diario a trabajar en alguna de las muchas obras que se construían en aquellos momentos en los suburbios de Madrid. Aquellos empleos desaparecieron para no volver. En la pared exterior de la plaza de toros, alguien había pintado con espray, en inglés, *«Make Talavera Great Again»*, o «hagamos grande a Talavera de nuevo» (en un eco del eslogan con el cual Donald Trump había ganado las elecciones en Estados Unidos el año anterior). Pero parecía que hubiera solo una débil esperanza de aquello. Su moribunda industria textil no se había modernizado. El centro de exposiciones, utilizado normalmente para el mercado del ganado, celebraba en aquellos días una Feria del Empleo y Emprendimiento, pero la oferta de puestos de trabajo apenas llegaba al centenar. «Talavera necesita transformar su estructura económica», me explicó Joaquín Echeverría, director de la cámara de comercio local entonces.

Lo mismo podía aplicarse a España en su conjunto. Y, hasta cierto punto, puede decirse que esa transformación ya ha comenzado y avanza. Del estropicio dejado por el pinchazo de la burbuja de la vivienda surgió el esqueleto de una economía nueva y más competitiva. Junto a los puntos negros económicos, han ido apareciendo otros muchos —y no tan comentados— detalles que invitan al optimismo. En 2017, visité también un centro de investigación en Abrera, en el valle del Llobregat, al oeste de Barcelona, casi oculto entre la mezcolanza de pueblos vinícolas

tradicionales y rectilíneas fábricas y almacenes modernos que se extienden por toda aquella zona. El mencionado instituto era uno de la docena aproximada que posee Gestamp, una empresa burgalesa que, en solo dos décadas, se ha convertido en uno de los principales productores mundiales de carrocerías, puertas y capós para la industria automovilística internacional. Con más de cien plantas productoras en veintitrés países, y con unos ingresos totales de 9.100 millones de euros en 2019, Gestamp se ha especializado en la estampación en caliente. Este proceso crea componentes el séxtuple de resistentes que los que se fabrican mediante la estampación en frío, lo que permite hacer vehículos más seguros y ligeros, y menos contaminantes. Lo que antaño era un simple moldeado de metales se ha convertido en una técnica de alta tecnología. «Estamos trabajando en coches que no entrarán ya en fase de producción por cinco o seis años», me explicó Juan José Matarranz, uno de los más de sesenta científicos e ingenieros que desarrollan su labor en ese centro de Abrera. Este trabajo incluía el calentamiento diferencial de los componentes del automóvil para una mejor absorción de los impactos, y el diseño de puertas inteligentes que se cierran automáticamente cuando detectan un obstáculo. Gestamp tiene allí también una fábrica equipada con robots, cortadoras láser y forjas de alta temperatura en la que produce piezas para ser enviadas a Ford y Audi en Estados Unidos, o a la gran factoría que SEAT tiene a pocos kilómetros de distancia, en Martorell.

España es hoy el segundo mayor productor y exportador de automóviles de Europa, solo por detrás de Alemania. Esta industria representa el 8,5 % del PIB del país y concentra el 19 % de las exportaciones y unos dos millones de puestos de trabajo, la mayoría de ellos de calidad. En junio de 2021, Pedro Sánchez y Felipe VI acudieron a la fábrica de SEAT en Martorell para anunciar que el primer gran proyecto en el que el Gobierno tenía previsto emplear las ayudas europeas pospandemia era uno que apostaba por la movilidad eléctrica. Su monto en inversiones públicas sería de 4.300 millones de euros en total que se destinarían, en parte, a desplegar una red nacional de estaciones de carga y a ofrecer subvenciones para quienes quisieran cambiar sus vehículos impulsados con gasoil o gasolina por otros de motor eléctrico[8].

Cuando la recuperación empezó por fin en 2014, lo hizo liderada por las exportaciones, que alcanzaron niveles del 33 % del PIB en 2017, frente al 23 % que representaban en 2009. Más de ciento cincuenta mil empresas españolas exportaron en 2016, es decir, la mitad más que en 2007. Además de coches, España fabrica también

trenes y piezas de aviones Airbus. Sobresale en algunos de los sectores que ya eran tradicionales en el siglo XIX, aunque renovados ahora en sus más modernas formas actuales. Ahí está el caso ya mencionado de Inditex, principal vendedora minorista mundial de moda rápida. De la docena de clústeres de fábricas y proveedores que la compañía tiene por todo el mundo, uno sigue estando instalado en España, donde produjo ropa por un valor total de 1.200 millones de euros en 2018[9]. En Mallorca se produce mucho calzado femenino de alta calidad y cosido a mano. Hay una amplia industria de la alimentación y las bebidas. Suministra a Europa buena parte de la fruta y las hortalizas que se consumen en el continente. Sus muchos y excelentes vinos están empezando a ser reconocidos con precios más altos en el extranjero. El jamón ibérico, obtenido de cerdos que se crían en libertad con una dieta basada en las bellotas, es un producto de lujo cuyas exportaciones están creciendo. España también ha empezado a exportar productos químicos y farmacéuticos, maquinaria y servicios profesionales. En muchos casos, y siguiendo la dinámica clásica, las empresas comenzaron a vender fuera porque la recesión castigó fuertemente la demanda de sus productos en el propio país. Según un estudio, esto explicaría casi un 75 % del incremento registrado por las exportaciones entre 2009 y 2013[10]. En otro se llegó a hablar incluso de un «milagro exportador» español[11].

Una de las nuevas incorporaciones a las filas de los exportadores fue ASTI Mobile Robotics, empresa instalada en una gran y anodina nave industrial junto a la autovía entre las localidades castellanas de Burgos y Lerma. La visité en 2018 y, en su interior, en la zona del taller principal, pude ver a un buen número de empleados equipados con iPads que estaban testando mecanismos móviles sin conductor montados sobre estructuras de acero rojas o naranjas. Los robots (o vehículos de guiado automático) que estaban diseñando, produciendo y controlando con *software* personalizado están ya en servicio en fábricas y almacenes de dieciséis países, donde se encargan de suministrar componentes a las cadenas de producción. Son fruto del ingenio de Verónica Pascual, una joven ingeniera aeronáutica que se hizo cargo de la pequeña fábrica de cintas transportadoras de sus padres cuando esta empezó a tener problemas. Ella la transformó en una multinacional de tamaño medio con trescientos empleados y un volumen de ventas que crece a un ritmo de un 30 % anual desde 2015. Como empresa de alta tecnología intensiva en investigación, con ambiciones globales, que crecía rápido y que estaba dirigida por una mujer, ASTI era todo aquello que la empresa española tradicional tendía a no ser. Pero atraer el capital y los recursos para que una

firma de alta tecnología adquiera una escala global no es fácil. En 2021, Pascual vendió el negocio a ABB, gigante suizo-sueca del sector de la ingeniería, aunque reteniendo un puesto ejecutivo importante en su división de robótica12.

Como ASTI, otras compañías han surgido en estos años por todo el país lideradas por una nueva generación de emprendedores, muchos de ellos formados en el extranjero y más orientados al mercado internacional que sus padres. En Barcelona, Madrid y el País Vasco, han prosperado diversas empresas emergentes en los sectores de la tecnología y la biomedicina, algunas de ellas conectadas con las universidades locales. Entre los primeros «unicornios» españoles (es decir, *start-ups* privadas cuyo valor de mercado individual logra superar los mil millones de dólares) se cuentan empresas como eDreams —una agencia de viajes en línea con sede en Barcelona—, Cabify —rival de Uber con sede en Madrid— o Glovo —dedicada al reparto a domicilio de comida y otros pedidos de particulares—.

También el turismo experimentó un auge tras la crisis (frenado temporalmente en seco por la pandemia) debido en parte al efecto de los incidentes terroristas en otros destinos rivales, como Túnez, Egipto o Turquía. La mayor parte de ese crecimiento seguía debiéndose al tradicional flujo de visitantes de bajo coste que buscan vacaciones de sol y sangría en la costa. Pero un porcentaje cada vez mayor correspondía a un turismo cultural de todo el año que llegaba atraído por el esfuerzo que más y más ciudades de todo el país ponían en tratar de reproducir algo parecido al «efecto Guggenheim» de Bilbao. Algunas se limitaron a derrochar dinero en arquitectos estrella, pero varias tuvieron éxito finalmente. Málaga era un lugar aburrido que los turistas que hacían vacaciones en las playas de la Costa del Sol evitaban visitar. Pero, bajo el liderazgo de quien ha sido su alcalde desde el año 2000, Francisco de la Torre, ha ido reuniendo un buen conjunto de museos de arte, entre los que se incluyen una sucursal del museo estatal ruso y otra del Centro Pompidou de París, y se ha convertido en un destino turístico por derecho propio. Santander también siguió una trayectoria parecida a la iniciada en el pasado por Bilbao. Y hasta los 1.300 millones de euros despilfarrados por Valencia en su Ciudad de las Artes y las Ciencias, un complejo de edificios de fantasía que incluye un teatro de la ópera, un acuario y varios museos, comenzaron a dar rendimiento por fin en forma de aumento del número de visitantes. La proporción de turistas extranjeros que vino a España por razones principalmente culturales todavía era de solo un 15 % sobre el total, pero continuaba aumentando año tras año: de los ocho millones de 2012 habían

pasado ya a ser 12,9 millones en 2017[13].

La recuperación estaba ayudada por ciertas condiciones externas favorables, como los bajos tipos de interés y precios del petróleo (España importa gran parte de su energía). Pero también contribuyeron a ella las reformas económicas de Rajoy. La limpieza practicada en el antiguo sistema de las cajas de ahorros y en la banca en general hizo que el crédito comenzara a fluir de nuevo. Los rescates bancarios le habían costado al país 66.000 millones de euros, según una estimación del Banco de España, pero, por lo menos, parecía que habían funcionado. Durante la posterior recesión pandémica, los bancos españoles demostraron haber dejado de ser un motivo de inquietud, aunque los reguladores no hayan cesado de vigilarlos de cerca. La caída del Banco Popular, una entidad de tamaño medio, en 2017, fue una reacción retardada del estallido de la burbuja inmobiliaria, más que el inicio de una nueva oleada de insolvencia. El sector bancario pasó por una muy necesaria sucesión de fases de compactación, recorte de costes y fusiones; destacó, en especial, la absorción de Bankia por parte de CaixaBank. Entre 2008 y 2020, los bancos cerraron casi la mitad de sus sucursales y despidieron al 37 % de sus plantillas. Y, aun así, España sigue contando con una ratio de sucursales per cápita más elevada que la del resto de países de la UE a excepción de Francia[14].

Por su parte, la reforma laboral ayudó a incrementar la competitividad de las empresas. A juicio de José Luis Escrivá —que había sido nombrado por el Congreso director de la AIReF, una nueva autoridad fiscal independiente, y que sería posteriormente ministro en el Gobierno de Sánchez—, la economía española demostró durante esos años una mayor flexibilidad que la francesa o la italiana. Él comparó 2017 con 1999, un año neutral en términos del ciclo económico, y destacó numerosas diferencias entre las situaciones respectivas. El antiguo déficit por cuenta corriente, que era del 3,3 % sobre el PIB, se había convertido en un superávit próximo al 2 %. Antes de la Gran Recesión, la inflación y los costes laborales eran inquietantemente elevados en España. Desde entonces, los costes laborales unitarios habían caído hasta situarse muy por debajo de la media de la eurozona, y la inflación era más baja que en Alemania. La reforma laboral de 2012 contribuyó a que hubiera una rápida creación de empleo cuando la economía por fin se recuperó. Fátima Báñez, la ministra de Trabajo que la introdujo, me dijo que esta reforma había puesto en marcha «una nueva cultura del empleo en España, un modelo de flexiseguridad». Según ella, había ayudado a generar más de tres millones de puestos de trabajo durante la recuperación; gracias

a la reforma, la economía española ya no tenía que crecer por encima del 2,5 % anual para crear empleo neto[15]. El principal punto débil en términos macroeconómicos era que la deuda y el déficit públicos eran ahora mucho más elevados que antes por efecto de la recesión.

De todos modos, la estructura de la economía solo se cambió en parte; tampoco el entorno político-legal en el que operaban las empresas se reformó más que a medias. En la cima del sistema, las grandes compañías españolas seguían concentrándose desproporcionadamente en los sectores regulados y en Madrid, donde no han dejado de mantener un fuerte nexo con la política y con los medios de comunicación nacionales. Ese ha sido el caso de los bancos, las empresas de servicios públicos y las constructoras. Las más grandes se expandieron en los años noventa hacia América Latina, y lo hicieron luego, en la década siguiente, hacia el Reino Unido y la Europa continental, pero, finalmente, muchas de ellas optaron por replegarse ante la llegada de la recesión. En España hay también un tejido de empresas industriales medianas, de propiedad familiar muchas de ellas, concentrado especialmente en Cataluña, el País Vasco, Navarra, el noreste de Castilla y Valencia. Pero existe asimismo una amplia masa de pequeñas empresas y microempresas de baja productividad. Las empresas con más de cincuenta empleados en plantilla representan menos del 1 % del total en España, frente al 3 % en Alemania o el 1,8 % en el Reino Unido, según el Círculo de Empresarios. Y ascender en esa escala es muy difícil; en parte, porque la propia normativa lo desincentiva: en cuanto una empresa supera los cincuenta empleados o un volumen de ventas superior a los seis millones de euros anuales, tiene que instituir un comité de empresa, cumplir una serie de regulaciones adicionales y pagar más impuestos. Hay quienes defienden que estos requisitos se vayan introduciendo gradualmente a medida que las compañías crecen, y que se eleve también el umbral a partir del que empiezan a aplicarse. Empresas como Gestamp y ASTI, con sus fuertes niveles de inversión en I+D, seguían siendo casos excepcionales. El gasto público en I+D fue recortado sensiblemente durante la Gran Recesión. En 2019, totalizaba solo un 1,3 % del PIB, aproximadamente, o la mitad de la media de la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que agrupa sobre todo a países ricos.

España goza de una infraestructura de comunicaciones de primer nivel mundial, como puede verse por sus trenes de alta velocidad, su red de autovías y autopistas, y sus modernos puertos y aeropuertos (aun cuando sus conexiones ferroviarias para el transporte de mercancías y para las áreas rurales dejen bastante que desear). Posee

la red de fibra para la transmisión de datos a alta velocidad más extensa de Europa. Pero la carga de su ineficiente regulación administrativa pesa mucho. Las montañas de burocracia absurda que tan mala fama dan a los sistemas políticos y administrativos de América Latina se inventaron en España, donde siguen estando a la orden del día. En el Índice de Competitividad de 2019, publicado por el Foro Económico Mundial, España ocupaba un impresionante séptimo puesto (de 141 países) por sus infraestructuras. Sin embargo, bajaba hasta una triste 114.ª posición por la carga que representan sus regulaciones administrativas, muy por debajo incluso de países como Guatemala o Paraguay, por ejemplo16.

En España mandan los abogados y los ingenieros. Su cuerpo de élite funcionarial es el de los «abogados del Estado». Si uno busca ayuda para hacer la declaración de la renta, por ejemplo, no acude a un contable, sino a un abogado especializado en derecho tributario o un gestor. El país sufre inflación normativa desde hace décadas. El número de normas aprobadas anualmente se ha multiplicado por diez desde 197817. La mayor parte de ese incremento ha tenido que ver con regulaciones aprobadas por los Gobiernos y los Parlamentos autonómicos; también han aumentado las ordenanzas municipales. Según algunos estudios, la proliferación normativa fue un factor disuasivo para que las empresas se expandieran más allá de su localidad o su región de origen. También se puede interpretar como el efecto de cierta falta de confianza entre el Estado y los ciudadanos. En cualquier caso, la indolencia burocrática tiene raíces muy profundas en el propio pasado del país. Era ridiculizada ya en un artículo satírico publicado en 1833 por el escritor romántico Mariano José de Larra, titulado «Vuelva usted mañana». Una inmensa mayoría de los españoles tienen una opinión favorable de la Unión Europea y de su mercado único. Pero el proceso paralelo de descentralización en el interior del país ha ido erigiendo barreras dentro del propio mercado nacional: muchos permisos de actividad comercial o mercantil en una comunidad autónoma no son automáticamente válidos para otras. El Gobierno Rajoy hizo un esfuerzo por restablecer la unidad de mercado interior en España, pero fue bastante tibio y no logró vencer la resistencia contra la que chocó en Cataluña y el País Vasco, ni el deseo de otras autonomías de hacer valer sus competencias. Paralelamente, el sistema judicial continúa falto de personal y es muy lento. La resolución de casos civiles y mercantiles tarda en torno a un año en producirse, y esa demora no deja de aumentar.

Después de que el país creciera a una tasa anual de más del 3 % entre 2015 y 2017, el ritmo de la recuperación comenzó a

ralentizarse, y fue de solo el 2 % en 2019. España necesitaba reformas adicionales, pero el primer Gobierno de Sánchez estaba en una posición demasiado débil como para tomar medidas tan ambiciosas. Tuvo que hallar un equilibrio entre reducir el déficit, recuperar el gasto social y aumentar los impuestos a las empresas. «Llevamos años escuchando que la crisis había pasado, ha llegado el momento de que los españoles lo noten», declaró María Jesús Montero, ministra de Hacienda de Sánchez, cuando presentó el borrador de los presupuestos generales del Estado para 2019, acordado con Podemos, que introducía un moderado aumento del gasto social al tiempo que subía algunos impuestos[18]. Al final, Sánchez no logró sacarlos adelante en las Cortes, lo que precipitó la repetición electoral de 2019. Pero el Gobierno subió el salario mínimo un 35 % en total entre 2019 y 2022. Dado el bajo nivel de muchos salarios, la medida estaba políticamente justificada; se discutió mucho, sin embargo, cuál sería su efecto sobre el empleo, pero todo parece indicar que ha sido neutro. Pero los empresarios estaban inquietos, sobre todo después de que Podemos entrara en el Gobierno en enero de 2020. El acuerdo de coalición prometía subidas tanto del impuesto sobre la renta para los tramos de ingresos más altos como del impuesto de sociedades para financiar incrementos de las prestaciones sociales. Pero Sánchez no era un radical ideológicamente. Mantuvo la política económica apartada en gran medida de la influencia de Podemos confiándosela a su ministra de Economía, Nadia Calviño, socialdemócrata moderada que inspiraba confianza tanto entre los empresarios como entre las autoridades de Bruselas, donde había sido directora general de Presupuestos de la Comisión Europea. Aun así, la retórica anticapitalista de Podemos y el frecuente ruido político generado por las tensiones entre los dos miembros de la coalición en poco contribuyeron a fomentar la confianza económica.

La pandemia y la recuperación

Una noche de finales de febrero de 2020, en una charla casual con un alto cargo del Gobierno durante un cóctel, le pregunté cómo veía el panorama económico. Él preveía que se produciría una ligera ralentización del crecimiento en 2020 y que, a partir de ahí, el horizonte se presentaba calmado. En aquellos momentos, la COVID-19 estaba haciendo estragos en el norte de Italia. En apenas tres semanas, forzaría al Gobierno a imponer una suspensión drástica de la actividad económica. El impacto de la pandemia en la economía española fue muy grave. El PIB se contrajo un 11,2 % en 2020, cuando la media en la zona euro fue del 6,1 %. Y España tardó más en recuperarse que el

resto de Europa, logrando superar su nivel de 2019 hacia finales de 2022[19]. Sin embargo, los datos de empleo, exportaciones y recaudación fiscal dibujaron un cuadro menos pesimista.

Uno de los grandes motivos de esa lenta recuperación era el peso que el turismo y la hostelería tienen en la economía nacional. Lógicamente, ambos tipos de actividad fueron los más directamente afectados por los confinamientos, los cierres de fronteras y la restricción de las reuniones. En 2019, España había recibido 84 millones de visitantes extranjeros: era la segunda a nivel mundial, solo por detrás de Francia. El turismo representaba un 12 % del PIB y un 13 % del empleo. Otra quinta parte de la economía la concentran el comercio, el transporte y la hostelería, aunque hay cierto solapamiento entre unos y otros cálculos. En 2020, no llegó a 20 millones el número de turistas extranjeros que se acercaron a visitar las playas o las catedrales españolas. Fue «el verano más catastrófico de los últimos cincuenta años», afirmó José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, *lobby* del sector turístico español[20]. Canarias y Baleares, donde el turismo representa hasta un tercio de la economía, fueron especialmente golpeadas. Pero, más allá del turismo, también hubo muchas pequeñas empresas que se vieron sin los recursos mínimos necesarios para mantenerse a flote. En 2021, las interrupciones y alteraciones de las cadenas de suministro mundiales castigaron particularmente a la industria del automóvil. Y, luego, la invasión rusa de Ucrania empeoró el panorama económico. Tras la subida de los precios de la energía, la inflación alcanzó un pico anual de casi 11 % a mediados de 2022 antes de bajar a 3.5 % en el otoño de 2023 (aunque la tasa subyacente seguía encima de 5 %). A pesar de la consiguiente alza de los tipos de interés, la economía desafiaba los vaticinios de recesión, creciendo encima de la media europea en 2023.

En la recesión de la pandemia hubo dos factores atenuantes. A diferencia de lo ocurrido durante la depresión de 2008-2013, el Estado ha podido proveer apoyo de emergencia a muchas empresas y trabajadores. Y ello debido a que los costes políticos y sociales causados por la austeridad impuesta durante y después de la Gran Recesión habían inducido un radical cambio de mentalidad en los decisores políticos europeos. El Banco Central Europeo ofreció crédito ilimitado a los Gobiernos nacionales a coste cero al tiempo que la Comisión Europea ponía en suspensión sus tradicionales reglas de rigor fiscal. El Gobierno español proporcionó avales de crédito a empresas por un total de unos 80.000 millones de euros. Y pagó la mayor parte de los salarios de los trabajadores que estaban afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), y que

llegaron a su máximo en mayo de 2020 con 3,4 millones. A mediados de 2021, todos ellos salvo unos trescientos sesenta mil ya habían reanudado su actividad laboral. El desempleo aumentó hasta el 15,6 % en el segundo trimestre de 2021, pero luego cayó de nuevo hasta el 13,7 % de justo un año después, un nivel incluso más bajo que el de 2019. «Esta es la primera recesión en la que la caída en el empleo y en la recaudación tributaria ha sido menor que la del PIB —me comentó Calviño, la ministra de Economía—. Hemos conseguido garantizar que no hubiera una destrucción ni de puestos de trabajo ni de la renta de las familias ni de los ingresos del Estado»[21].

Los críticos con el Gobierno lo acusaron de haber sido demasiado lento y parco en sus ayudas monetarias directas a las empresas, y pusieron a Alemania como ejemplo. Tal parquedad se debió, en parte, a que el nuevo clima de laxitud en la política financiera y económica encontró a España con un menor margen de reacción fiscal que el de otros países. Tanto el Gobierno de Rajoy como el de Sánchez habían frenado el ritmo de la reducción del déficit público. Así, a pesar de la fuerte recuperación económica durante el periodo 2014-2019, España entró en pandemia con un déficit público oficial del 2,9 % sobre el PIB en 2019 y con una deuda pública equivalente al 96 % del PIB, dos de las cifras más altas de la eurozona en aquel momento[22]. Calviño insistía en que las medidas del Gobierno habían sido eficaces de cara a sentar las bases de la posterior recuperación: «En otros países, se anunciaron programas más ambiciosos, pero, al final, su realidad estuvo bastante en línea con la española». Con todo, el apoyo del Estado a la economía sumó un total aproximado de un 20 % sobre el PIB, según la OCDE.

El segundo factor potenciador fue que España tenía previsto recibir entre 2021 y 2023 un total de unos 70.000 millones de euros en subvenciones del programa de fondos de recuperación Next Generation de la UE, y le correspondía también otra cifra similar en créditos blandos. Conforme a las directrices de la Comisión Europea, buena parte de ese dinero debe ir destinado a grandes proyectos, como el ya mencionado de movilidad eléctrica y otros dirigidos a generar una economía más verde y más digital. Pero habrá también mucho dinero para la mejora de la Administración pública, para la formación profesional y para las políticas activas de empleo, dirigidas a ayudar a los parados a encontrar trabajo. Sobre el papel, se trata de una oportunidad sin igual de afrontar por fin los problemas crónicos de desempleo y baja productividad que tanto han lastrado la economía española.

¿Será una oportunidad aprovechada? Ya ha habido quejas desde

la oposición y desde las comunidades autónomas de que el Gobierno había diseñado sus planes de aprovechamiento de los fondos de la Unión Europea sin haberles consultado suficientemente y sin su participación en la toma de esas decisiones. Pero las autoridades del Gobierno central sostenían que tuvieron que actuar rápido para crear un plan nacional coherente y que, al final, la Comisión Europea lo aceptó. Al comienzo existió alguna tensión entre el interés de la UE de que sus ayudas sirvan para proceder a una transformación estructural de las economías europeas y la necesidad que muchas empresas españolas tenían de que no se interrumpiera el flujo del gasto público anticíclico. Pero esto último es algo que el Gobierno no estaba en disposición de proporcionar de manera ilimitada, sobre todo teniendo en cuenta que la deuda pública había ascendido ya hasta aproximadamente el 120 % sobre el PIB en 2021. Se temía que se produjera una cadena de quiebras en el momento mismo en que se retiraran las ayudas públicas. «Este no es momento para hablarles a muchos de mis colegas sobre sostenibilidad y digitalización, sino sobre cómo van a llegar a final de mes», comentó Gabriel Escarrer, presidente ejecutivo de Meliá, principal cadena hotelera española, en agosto de 2020. En la práctica, la fuerza de la recuperación hizo que las condiciones se relajaran para muchas compañías posteriormente. Pero para el Gobierno, la contención del déficit y la deuda publica seguía siendo una asignatura pendiente.

Las disfunciones del mercado laboral

La ayuda europea llegó ligada a promesas de reformas, sobre todo del mercado laboral y de las pensiones. La Comisión, la OCDE y otros expertos consideraban que España tenía que flexibilizar su mercado de trabajo aún más y, al mismo tiempo, poner coto al abuso que se hacía de los contratos temporales. También opinaban que el país necesitaba ajustar su sistema de pensiones a la mayor esperanza de vida prevista, ya fuera retrasando las edades de jubilación, ya fuera «topando» las prestaciones; y juzgaban no menos necesario reformar la educación, la formación y la cualificación de la mano de obra. En muchas de esas cuestiones, el Gobierno estaba atrapado entre las presiones de la Comisión Europea, por un lado, y las de los sindicatos y Podemos, por el otro. Sobre el papel, la coalición se había comprometido a dar marcha atrás a las reformas laboral y del sistema de pensiones aprobadas por los Gobiernos del PP. En su acuerdo de formación se podía leer: «Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012» (Sánchez se había referido antes de eso a la necesidad de cambiar

solamente los «peores» aspectos de aquella reforma)[23]. Los sindicatos se oponían, en particular, a aquellas cláusulas de la reforma que ponían fin a la prórroga automática de los convenios previamente existentes si se encallaban las negociaciones, y que daban validez prioritaria a los acuerdos que se alcanzaran en cada una de las empresas por encima de los convenios colectivos sectoriales, pues ambas medidas reducían su capacidad de presión e influencia. No es que en la práctica se estuviera recurriendo mucho a ellas, pero su mera existencia obligaba a los sindicatos a ser mucho más prudentes en las negociaciones.

La reforma de 2012 permitía que las empresas pudiesen ajustarse a un deterioro de las condiciones del mercado recortando (o no subiendo) los salarios de sus trabajadores, en vez de despidiendo a algunos, como ocurría anteriormente. No fue casual que durante la recuperación económica posterior a 2013 se crease empleo a mayor ritmo que en otras recuperaciones anteriores[24]. La reforma introdujo también la figura de los ERTE, que tan vital importancia tuvo durante la pandemia. No puso fin, sin embargo, a la dualidad del mercado laboral, en el que un 25 % de los trabajadores tenían contratos temporales, algunos de solo una semana; eso hacía que, en la práctica, les fueran negados muchos de sus derechos como empleados. Pero tampoco se puede decir que este problema naciera con esa reforma. Los contratos temporales fueron introducidos por el Gobierno de Felipe González en los años ochenta como respuesta al aumento del desempleo. Desde entonces, no habían dejado de proliferar, en muchos casos, como vía aprovechada por los empresarios para esquivar las farragosas regulaciones ligadas a los contratos indefinidos o permanentes.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo del Gobierno de coalición, quería no solo revocar la reforma de 2012, sino incluso abolir por decreto la práctica totalidad de contratos temporales. Díaz, comunista e hija de líder sindical, fue designada para el cargo por Podemos. Cuando Pablo Iglesias dimitió como vicepresidente del Gobierno, la eligió como su sucesora en el puesto. Se revelaba como una figura más conciliadora que su predecesor y atrajo simpatías de sectores que nunca habían tenido muchas por Podemos. «Que no salgamos de la crisis más desiguales aún de lo que hemos entrado. Eso es lo que no me deja dormir», declaró en una entrevista[25].

Eso era importante, sin duda: la desigualdad de renta ya era relativamente alta para los estándares europeos antes de la pandemia, aunque no tanto si se tienen en cuenta los costes relacionados con la vivienda en una sociedad en la que la mayoría de la población adulta

es dueña de sus viviendas habituales y ha pagado ya sus hipotecas. En 2018, la renta del 20% de habitantes con mayores ingresos era el séxtuple que la del 20 % de población con menores ingresos, cuando en el conjunto de la UE es el quíntuple[26]. Pero buena parte de ese incremento de la desigualdad de renta era de origen reciente, consecuencia del alto desempleo y los bajos salarios, y el mejor remedio pasaba por un crecimiento general más rápido. El problema era que las propuestas de Díaz habrían sesgado más aún un sistema que ya favorecía a los consolidados frente a los desempleados, y, por tanto, habrían contribuido poco a reducir la desigualdad. Según Marcel Jansen, profesor de economía laboral en la Universidad Autónoma de Madrid, habrían «derivado en el régimen laboral más restrictivo y rígido de Europa precisamente en el país con la segunda tasa de paro más alta y con el mayor índice de desempleo juvenil»[27]. Con esas medidas, en definitiva, se habría corrido un mayor riesgo de destruir puestos de trabajo, en vez de crearlos.

La propuesta de Díaz no fue apoyada por Calviño, líder del ala reformista en el Gobierno. La llegada de la ayuda europea había fortalecido la posición de esta última, y Sánchez la ascendió al puesto de vicepresidenta primera del Gobierno en la remodelación que hizo en julio de 2021. Los fondos comunitarios podrían cortarse si España aprobaba medidas manifiestamente destructoras de empleo. Al final, aunque Díaz se apuntó el tanto del acuerdo sellado entre sindicatos, patronal y Gobierno en diciembre de 2021 como una gran victoria política personal, e incluso Casado y el PP lo tacharon de «contrarreforma», en realidad, lejos de revocar la reforma de 2012, lo que hizo fue consolidarla. Su principal, y positiva, novedad consistió en frenar el abuso que se estaba haciendo de los contratos temporales, limitándolos en la mayoría de los casos a un máximo de noventa días anuales y desincentivando su uso al vincularlos con unas mayores cotizaciones a la Seguridad Social. También restableció la prórroga automática de los convenios colectivos hasta que se acordaran otros nuevos (algo que el propio Tribunal Supremo ya había ordenado reformar) y la preeminencia de los acuerdos sectoriales en lo tocante a la negociación salarial, pero no así en lo relativo a las demás condiciones laborales. Mantuvo elementos de «flexiseguridad» característicos de la reforma de 2012 y los consagró al incluirlos en el acuerdo social tripartito. Fue la ley más importante impulsada por el Gobierno de coalición. Y, sin embargo, salió aprobada en el Congreso por un solo voto de diferencia (emitido, además, por error por un diputado *popular)*, pues tanto el PP como los aliados nacionalistas del Gobierno se opusieron a ella.

Aunque el resultado fue mejor del que muchos temían, a los reformistas les habría gustado algo más. Buen número de expertos en mercado laboral opinaban que, para fomentar la contratación, España tenía que hacer los contratos indefinidos menos gravosos para las empresas y, al mismo tiempo, dotar a cada trabajador de un fondo individual del que pudiera cobrar cuando estuviera desempleado. Con arreglo a un sistema así, inspirado en el adoptado en su día en Austria, la empresa ingresaría una cantidad mensual en la cuenta individual del empleado, en vez de tener que desembolsar una fuerte indemnización en concepto de finiquito al despedirlo. Luego, el trabajador se llevaría consigo ese fondo (o «mochila») al cambiar de empresa. Es un sistema que busca proteger más al trabajador que a su puesto de trabajo, y que podría combinarse con otras medidas dirigidas a desincentivar los contratos temporales y a equiparar los derechos y los deberes asociados a los diferentes tipos de contratos. El propio Sánchez había pactado promover esta reforma en el abortado acuerdo de coalición que firmó con Ciudadanos en 2016, pero luego se desentendió de la medida.

Para que su lucha contra el desempleo fuese realmente en serio, el Gobierno necesitaba también reformar a fondo el servicio público de empleo y lo que los economistas llaman las «políticas activas de empleo», que son las medidas dirigidas a ayudar a los desempleados a encontrar trabajo. España gasta unos 6.500 millones de euros anuales en la suma de ambos capítulos. En comparación con el número de parados totales, eso representa una cifra menor que la de otros muchos países europeos. Y el dinero gastado rinde además muy pobres resultados. El Gobierno central paga, pero la responsabilidad de la gestión del servicio público de empleo recae en las comunidades autónomas. El servicio de empleo varía mucho en cuanto a su calidad según las zonas, pero, por lo general, está muy burocratizado y anda corto de personal. En 2016, había un funcionario del servicio por cada más de doscientos cincuenta desempleados usuarios del mismo, y buena parte del trabajo de esos asistentes especializados se centraba en las tareas administrativas[28]. El Gobierno de Rajoy introdujo reformas, como la elaboración de perfiles de parados de larga duración y la asignación de fondos a las comunidades autónomas en función de su eficacia —calculada según unos indicadores cuantitativos— en encontrarles trabajo a sus usuarios. Pero estas se desecharon cuando Sánchez llegó a la Moncloa y no fueron reintroducidas de nuevo —bajo presión de Bruselas— hasta 2021. Aun así, se requiere una reforma más radical todavía del servicio. En un informe de 2017, la AIReF (organismo de vigilancia fiscal

independiente) señaló que solo un 2 % de las personas que tienen trabajo declaran que lo consiguieron a través de una oficina pública de empleo. La propia AIReF pedía la integración de las prestaciones económicas por desempleo, las políticas activas de empleo y las políticas sociales en un único sistema que permita elaborar enseguida perfiles de las personas paradas para ver si necesitan formación o solamente una prestación económica[29].

A pesar del elevado desempleo, las empresas se quejaban de que les costaba encontrar mano de obra. España ocupó el último lugar en un estudio sobre la calidad de la educación y el nivel de cualificación de la población activa de las veintiuna economías desarrolladas de la OCDE[30]. El país tiene dos problemas muy concretos en relación con la cualificación de su fuerza de trabajo. «Los niveles de cualificación en España dibujan la forma de reloj de arena», me explicó Jansen. La proporción de titulados universitarios en su cima está en línea con la media del resto de Europa; y en el fondo se concentra un grueso importante de personas con muy baja o nula cualificación. En el centro solo hay un delgado nivel intermedio de técnicos con buena formación. Solo un 23 % de la población tiene educación terciaria no universitaria, frente al 43 % de media en la UE. Y entre los niveles del fondo, hay también un 13 % de exalumnos que abandonaron los estudios a los dieciséis años o antes sin haber obtenido cualificación alguna. Esta cifra ha mejorado, pues hacia el año 2000 se situaba más bien en torno al 30 %. Pero, aun así, continúa estando por encima de la media de la Unión Europea, que es del 10 %.

Durante el auge de la construcción, parte de esa elevada tasa de abandono escolar se debió a la atracción que en aquel momento ejercía el dinero fácil que los jóvenes sin cualificación podían ganar trabajando en la construcción. Tobias Buck, que fue corresponsal del *Financial Times* en España, recogía en su libro *After the Fall* (sobre la crisis post-2008) una conversación con David Pérez, un trabajador de una fábrica de marcos metálicos de ventanas en Cebolla, localidad del valle del Tajo, río arriba desde Talavera. Dejó los estudios a los dieciséis años y enseguida empezó a ganar hasta dos mil quinientos euros al mes (cuando no pocos profesores universitarios, por ejemplo, podían cobrar apenas mil trescientos). «Ganábamos tanto dinero. Los únicos que no tenían un BMW eran quienes no lo querían», comentaba Pérez, que estaba en el paro después de que la fábrica cerrara sus puertas en 2012[31]. Son muchas las personas que, como él, han sido arrojadas a la pila del desguace que es el paro de larga duración a una edad relativamente joven como la suya. Los centros educativos no hicieron lo suficiente en su momento para animarlas a seguir

estudiando.

El déficit en las aulas

En el cuarto final del siglo xx, la educación en España mejoró en ciertos sentidos y se hizo más universal, pero ese progreso se detuvo en buena medida en el siglo actual. Las listas de matriculados en las escuelas e institutos crecieron sensiblemente con la llegada de la inmigración, pero, al mismo tiempo, la austeridad implicó recortes en los presupuestos de la educación. El gasto público en el sistema escolar cayó desde los 53.000 millones de euros de 2010 hasta los 44.000 millones de 2019, pese a que, en este último año, había un 10 % más de alumnos matriculados. Pero el dinero no era ni mucho menos el único problema. La organización de la educación contrastaba con la de la sanidad, que, pese a sus limitaciones (puestas de manifiesto durante la pandemia), siempre se ha considerado eficiente y de calidad. Luis Garicano, principal experto económico de Ciudadanos, me recordaba que, mientras que los hospitales cuentan con gerentes profesionales y los médicos tienen contratos flexibles, los directores de los centros educativos apenas disponen de autonomía decisoria y las escuelas e institutos no están sometidos a evaluaciones adecuadas[32].

La enseñanza en los colegios y los institutos españoles ha sido tradicionalmente arcaica, muy basada en el aprendizaje memorístico. El plan de estudios tiene demasiadas asignaturas y un evidente sesgo academicista (en Secundaria se enseña filosofía, por ejemplo). A los alumnos que no iban bien se les obligaba a repetir curso, algo que muchos pedagogos criticaban por el efecto desmoralizador que causa en el estudiante: en 2018, un 29 % de los escolares de quince años de edad habían tenido que repetir al menos un curso de enseñanza a lo largo de su trayectoria académica, cuando la media en los países de la OCDE era ese año del 11,3 %. El alumnado español obtiene peores puntuaciones de las esperadas —en función del nivel de renta del país— en los exámenes internacionales de evaluación de sus competencias. En las pruebas PISA de rendimiento académico en matemáticas y en ciencias de 2018, realizadas entre alumnos de quince años, España quedó ligeramente por debajo de la media de los países de la OCDE[33]. En las pruebas PISA de 2022, casi todos los países participantes mostraron un deterioro en sus resultados debido a los cierres de colegios durante la pandemia. El desempeño de los alumnos españoles en lectura, matemática y ciencia empeoró, pero menos que muchos otros, quedando cerca del promedio de la Unión Europea y de la OCDE. Eso fue sin duda debido a los aciertos de los

gobiernos, tanto nacional como regionales, en implementar protocolos que permitieron mantener abiertos los colegios a partir de septiembre de 2020. Como siempre, hubo fuertes variaciones regionales: en las pruebas de 2022 los resultados de Castilla y León eran equivalentes a los de la media docena de países más exitosos. Los resultados en Cataluña y el País Vasco mostraron un deterioro preocupante en la última década y quedaron debajo del promedio nacional. Los críticos señalaron que las autoridades en esas autonomías habían puesto mucho más énfasis en su política lingüística que en la efectividad de la enseñanza[34].

La segregación social en el ámbito educativo va en aumento. La educación básica es gratuita y obligatoria por ley desde la Transición. Pero en torno a una cuarta parte del alumnado estudia en los llamados «centros concertados»: escuelas e institutos de propiedad y gestión privadas (muchos de ellos, de la Iglesia católica o de organizaciones conectadas con esta). Se supone que aplican los mismos criterios de ingreso que los centros públicos y que solo cobran por el uso de instalaciones adicionales (como bibliotecas o piscinas). Pero, en la práctica, esto último disuade a muchas familias pobres de llevar allí a sus hijos o hijas.

La nueva ley de educación elaborada por el Gobierno de Sánchez, la llamada LOMLOE (Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación, LOE, de 2006), intenta abordar algunos de estos problemas. La repetición de curso ya no es tan automática como antes. Implica la puesta en marcha de una reforma de los métodos de enseñanza para que fomentar las capacidades argumentativas y de razonamiento de los alumnos sea más importante que la memorización de contenidos. Pero también ha abolido la evaluación externa basada en los resultados publicados sobre cada centro educativo. Busca hasta cierto punto poner freno a la expansión de los centros concertados. Es la octava ley de educación que entra en vigor desde 1977. La política educativa ha sido una especie de interminable partido de tenis entre socialistas y *populares*. Cada nueva ley ha ido revocando aspectos de la inmediatamente precedente, y ninguna de ellas se ha acordado por consenso. El debate está polarizado, por un lado, entre el foco de los socialistas en la igualdad y la defensa que desde el PP se hace de la libre elección de los padres, pero también entre la defensa de la enseñanza de la religión que se hace desde la derecha y el interés de la izquierda por la «educación cívica», cuyos detractores ven como una vía para la entrada del adoctrinamiento político en las escuelas. España haría bien en tomar como ejemplo a Portugal, que produce mejores resultados educativos con menos

dinero: en el país vecino, se ha aumentado la edad de escolarización obligatoria hasta los dieciocho años, se ha reformado la formación del personal docente y se ha introducido un sistema de rigurosa evaluación de los centros educativos.

No son menores las deficiencias en las universidades españolas, que se caracterizan por una notoria endogamia: muchas plazas de profesorado terminan siendo ocupadas por antiguos alumnos de la propia institución en cuestión. Continúan siendo bastante fuertes, además, las reticencias a aceptar la llegada de académicos extranjeros. La universidad en España produce demasiados graduados en humanidades y un número insuficiente de científicos. Sus centros siempre se han resistido a las evaluaciones externas. La mayoría tienen escasa tradición investigadora, lo que los penaliza en los *rankings* internacionales. Entre 2009 y 2015, las universidades perdieron un 20 % de su financiación pública y sufrieron una congelación de sus plantillas. Aun así, la mayoría realizan una encomiable labor docente. En el Ranking Académico de las Universidades del Mundo de 2021, clasificación que se elabora en Shanghái, solo la Universidad de Barcelona figuraba entre las doscientas primeras del planeta. Sin embargo, treinta y ocho de las cuarenta y siete universidades públicas españolas, además de la Universidad de Navarra (una institución privada vinculada al Opus Dei y muy potente en medicina), aparecían situadas entre las mil primeras[35]. Las relativamente deslucidas universidades del país contrastan con unas destacadas escuelas privadas de Administración de Empresas, cuatro de las cuales figuraban entre las primeras veinticinco de Europa según el *ranking* del *Financial Times* para 2021.

Los parientes pobres del sistema educativo son la Formación Profesional (FP) y los cursos de formación para el empleo, que, hasta fecha reciente, habían sido habitual objeto de menosprecio. La responsabilidad de su funcionamiento está repartida entre el Ministerio de Educación y el de Trabajo. Algunos de los cursos de formación profesional reglada parecen ciertamente efectivos, pero no ofertan plazas suficientes. En 2018, visité un centro de FP de ciclo superior en Heliópolis, en Sevilla, y asistí a una clase de quince alumnos de un programa bienal de formación como jefes de camareros. Uniformados con pantalón negro, camisa blanca y corbata a franjas negras y blancas, practicaban de pie alrededor de una mesa donde se habían colocado diversas bebidas y licores. Lo normal sería que estos fueran estudiantes de menos de veinte años, pero las edades de los miembros de aquel grupo oscilaban entre los diecinueve y los cuarenta y dos. La mayoría de ellos estaban convencidos de que

conseguirían trabajo en algún establecimiento local. «Siempre hay más demanda [de estos titulados] que plazas ofertadas —me explicó Ildefonso Rodríguez, director del centro—. El problema está en que muchos no entran».

La «formación para el empleo», como se denomina la parte de la educación profesional de la que se encarga el Ministerio de Trabajo, funciona bien en el País Vasco y, más o menos bien, en Cataluña y Madrid, pero mal en el resto del país. En Andalucía, donde más se necesitan, este tipo de cursos formativos estuvieron clausurados durante cinco años por culpa de un escándalo de corrupción que estalló cuando el PSOE presidía el Gobierno autonómico. Los cursos suelen ser gestionados conjuntamente por los sindicatos y por las patronales correspondientes sin que haya una evaluación de su calidad. A instancias de Ciudadanos, el Gobierno de Rajoy introdujo un sistema de vales que permitía que las personas desempleadas pudiesen elegir proveedores de formación privada, pero muchos Gobiernos autonómicos bloquearon esa posibilidad en la práctica. Fátima Báñez, competente ministra de Trabajo de Rajoy, introdujo también sistemas de formación dual similares a los alemanes, en los que los alumnos pueden combinar el estudio de contenidos en el aula con la experiencia práctica en las empresas. Pero cuesta mucho implicar al grueso de las pymes en programas así. La ley de educación del Gobierno de Sánchez contempla la transferencia de partes de la «formación para el empleo» al Ministerio de Educación. El Gobierno también ha aprobado una Ley de la Formación Profesional con la que aspira a generalizar el modelo dual y a incorporar nuevas materias. Viene acompañada de la promesa de procurar doscientas mil nuevas plazas.

¿Cómo pagar las pensiones?

Los españoles viven vidas cada vez más largas y el sistema de pensiones del país está cada vez más tensionado. Hacia el final de su mandato, el Ejecutivo de Zapatero aprobó un incremento de la edad legal de jubilación de los sesenta y cinco a los sesenta y siete años, y aumentó también de los quince a los veinticinco años el periodo de cotización previa requerido para calcular el importe de cada pensión individual. Ambas medidas se han ido introduciendo progresivamente a lo largo de los años. Aun así, y presionado por la crisis financiera, el Gobierno de Rajoy impulsó en 2013 una reforma más radical de las pensiones por la que la actualización anual de su importe quedó limitada a un máximo del 0,25 %. También introdujo un «factor de sostenibilidad» por el que, cada cinco años, las pensiones se verían

ligeramente reducidas para tener en cuenta los incrementos de la esperanza de vida. Esto estaba previsto que entrase en vigor en 2019. Su razón de ser era el peligro que el aumento de la longevidad de la población comportaba para el principio básico del sistema público de pensiones español, que es un sistema «de reparto»: las pensiones presentes se pagan con las cotizaciones de los trabajadores presentes, cuyas pensiones se pagarán a su vez con las cotizaciones de los trabajadores futuros. El Fondo de Reserva del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la famosa «hucha de las pensiones», comenzó hace años a incurrir en déficits y agotó sus reservas. Dado que el gasto anual en pensiones aumenta en torno a unos 7.000 millones de euros cada año, en 2019 el déficit del sistema era ya de unos 18.400 millones.

A los pensionistas les fue relativamente bien durante la depresión, porque, mientras España experimentaba una deflación de precios, ellos fueron recibiendo su aumento anual del 0,25 %. Entre 2011 y 2014, los ingresos medios reales de las personas de más de sesenta y cinco años subieron un 5 %, justo cuando se desplomaban los de la población más joven. Los pensionistas comenzaron a desempeñar así una función clave de sustento de los miembros jóvenes de sus familias extensas. Sin embargo, cuando los precios volvieron a subir, ellos perdieron renta real. La reforma de Rajoy pasó a ser entonces el blanco de constantes y persistentes manifestaciones de protesta de pensionistas por toda España. Conscientes de que la gente mayor es hoy una cohorte de edad más numerosa que la gente joven, y que tiende a acudir más sistemáticamente a las urnas, los políticos entraron en pánico.

Las pensiones son la materia de una de las pocas mesas de negociaciones entre partidos que todavía sobreviven en la actualidad: el llamado Pacto de Toledo. Las principales formaciones políticas —incluido el PP— acordaron anular la reforma de Rajoy. La introducción del factor de sostenibilidad quedó en suspenso. Y el Gobierno de Sánchez redujo el déficit del INSS mediante un truco contable, pues transfirió las pagas por baja de paternidad o de maternidad a los presupuestos generales; aun así, el déficit de la «hucha de las pensiones» fue de casi 12.000 millones de euros en 2021. En junio de ese año, el presidente del Gobierno organizó una ceremonia en la Moncloa con los líderes sindicales y de la patronal para firmar un acuerdo por el que se reintroducía formalmente la indexación de las pensiones a la inflación y se eliminaba el factor de sostenibilidad, que se sustituía por un «mecanismo de equidad intergeneracional» que, en la práctica, repercutía a los empresarios un

aumento del 0,6 % en sus cotizaciones e introducía incentivos para animar a algunos trabajadores a retrasar su jubilación, algo con lo que las empresas no estaban conformes. Fue una especie de contrarreforma que coincidió en el tiempo con el fuerte repunte reciente de la inflación. Como consecuencia, el Gobierno tuvo que presupuestar para 2023 un incremento de las pensiones de más del 8 %, superior al de la mayoría de los demás países europeos, y muy por encima del nivel general de subida de los salarios[36].

Prescindir de la indexación, tal como hizo Rajoy, fue una medida que resultó ser políticamente insostenible. El problema radica en que los políticos no han querido enfrentarse a las realidades demográficas y actuariales. Con independencia de la edad legal de jubilación, lo cierto es que los españoles se retiran de la vida laboral activa a una edad media de sesenta y dos años; a partir de entonces, les quedan aún de media unas dos décadas más de vida. Cuentan con unas pensiones relativamente generosas que equivalen a un 96 % de la media de sus ingresos anteriores, muy por encima del promedio registrado en los países de la OCDE. Es cierto que las cotizaciones también son relativamente elevadas. Pero las pensiones ya están engullendo una proporción creciente del gasto público. El gasto total de España en pensiones —un 10,9 % del PIB en 2017 — está por encima de la media de la OCDE (un 8 %), aunque sin llegar al de otras grandes economías europeas occidentales. El problema es que estas cifras van camino de volverse sensiblemente peores porque el *baby boom* llegó más tarde a España —entre finales de los años cincuenta y principios de los setenta— que al resto de la Europa occidental.

Los cálculos demográficos indican que, en 2050, habrá setenta y ocho pensionistas por cada cien personas en edad de trabajar en España (en el conjunto de los países de la OCDE, la previsión es que haya cincuenta y tres)[37]. Los diez millones de pensionistas actuales se habrán incrementado para entonces hasta los quince millones. Reintroducir la indexación ha añadido a la factura de las pensiones una media de un 1 % adicional sobre el PIB por década, según calculaba Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. Y esto lo dijo antes de que se disparase la inflación. Según la OCDE, el mecanismo de equidad intergeneracional solo servirá para recaudar un 0,2 % adicional del PIB para el sistema de pensiones, pero el desembolso en este aumentará al mismo tiempo en un 1 % del PIB debido a la supresión del factor de sostenibilidad. Así pues, la reforma no bastará para hacer que el sistema sea sostenible. Los futuros Gobiernos sin duda tendrán que hacer más.

Es casi imposible mantener un debate racional sobre las

pensiones. En 2021 Escrivá, el ministro de Seguridad Social, propuso un incremento adicional de los años de cotización que se usan para calcular las de cada pensionista para que, en vez de ser los últimos veinticinco años trabajados (que se usan actualmente), fuesen los últimos treinta y cinco, lo que reduciría el importe de las nuevas pensiones en aproximadamente un 5 %. Pero todos se le echaron encima. El mismo día de la ceremonia antes mencionada en la Moncloa, Escrivá reiteró con claridad que la generación del *baby boom* tendrá que elegir entre cobrar pensiones más bajas o trabajar más años. De nuevo tuvo que desdecirse bajo un aluvión de críticas. Pero tenía razón.

Las opciones de política económica

La cuestión de las pensiones es ilustrativa de las difíciles decisiones sobre tributación y gasto a las que España, como otros muchos países, tiene que enfrentarse en general, sobre todo tras los efectos dejados por la pandemia. El Estado del bienestar español es algo pequeño para los niveles normales en la Europa occidental. El régimen franquista optó por centrar el gasto en las empresas estatales. Y aunque expandieron la educación, la sanidad y la protección social públicas, los Gobiernos democráticos dieron cierta prioridad relativa a la inversión en infraestructuras. El peso de las pensiones sobre el gasto público es una de las razones por las que este último es menos redistributivo que en otros países. El Estado del bienestar en España redistribuye principalmente de los que tienen a los que tienen. La pandemia puso de relieve los agujeros existentes. Antes incluso de la llegada del virus, un 12,4 % de los españoles tenía un nivel de ingresos inferior al 40 % de la mediana de renta individual en España (1.251 euros al mes) y su situación se clasificaba como de «pobreza severa», cuando ese porcentaje es del 6,9 % en el conjunto de la UE[38]. Cuando el Gobierno ordenó el confinamiento del país en la primavera de 2020, en los barrios del sur de Madrid (la zona más pobre de la ciudad) se formaron largas «colas del hambre» ante los locales de reparto gratuito de comida organizado por grupos adscritos a la Iglesia y por otras entidades sociales. Cáritas, organización benéfica católica, informó de un fuerte aumento de demanda de su ayuda, incluso entre grupos sociales que nunca antes habían solicitado sus servicios[39].

El Gobierno reaccionó introduciendo un nuevo ingreso mínimo vital a nivel nacional. Diseñado por Escrivá, se trata de una ayuda condicionada a la situación económica de los beneficiarios potenciales (no es, pues, universal como pretendía Podemos). Paga hasta mil quince euros a familias (y 461,50 euros a individuos) en situación de

«pobreza severa». Hasta entonces, ese tipo de ayuda social era competencia exclusiva de las comunidades autónomas y variaba ostensiblemente entre ellas (como tantas otras cosas). Así, en el rico País Vasco era bastante generosa, pero en la pobre Andalucía no. El propio Escrivá me comentó que «algo que estaba pensado para reducir la desigualdad tenía el efecto contrario»[40]. Para no desincentivar la búsqueda de trabajo, esta nueva paga se diseñó de tal modo que su importe decreciera solo gradualmente a medida que aumentaran los ingresos por salario o actividad económica. El ministro estimó el coste total del plan en unos tres mil millones de euros (un 0,24 % del PIB). Fue bastante bien recibido en general (solo Vox votó en contra en las Cortes), pero su éxito real ha sido limitado porque la Administración pública procesa las solicitudes con excesiva lentitud. Un año después de la aprobación del programa, doscientos setenta y seis mil hogares percibían el ingreso mínimo. Escrivá creía que había unos ochocientos cincuenta mil que cumplían las condiciones para percibirlo, pero, al parecer, muchos de ellos no lo solicitaron. En el verano de 2021, ciento noventa mil personas seguían dependiendo del Banco de Alimentos de Madrid. El Estado se enfrentaba también a una demanda creciente de gasto público dirigido a la gente joven y a las familias en general. El contrato social intergeneracional se había roto por culpa de la crisis: los pensionistas estaban protegidos, pero los españoles jóvenes lo estaban pasando bastante mal (véase el capítulo 8).

Además de todas estas demandas sociales, el Gobierno tendrá que abordar también el problema del déficit público, que, presionado por la pandemia, se disparó hasta el 11 % del PIB en 2020 para luego moderarse hasta el 3,9 % en 2022. Mientras los tipos de interés se mantuvieron bajos y las autoridades europeas se mostraron permisivas, el objetivo de reducir progresivamente esos niveles de déficit no se veía como algo particularmente difícil de cumplir. Pero la llegada de la inflación en 2021 significó el final de la era del dinero barato y la necesidad de acelerar el recorte de los niveles de déficit. De ahí que, al mismo tiempo que recalcaba que los estímulos no debían retirarse hasta que la recuperación no fuese ya completa, Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, llamase reiteradamente a lograr un acuerdo amplio y transversal (de todos los partidos) acerca de la ruta fiscal que debía seguir España. Aun así, no se aprecia señal alguna que apunte en esa dirección.

Había opciones políticas por hacerse sobre los equilibrios entre la recaudación y el gasto público. La suma de los ingresos por impuestos y por cotizaciones a la Seguridad Social equivalía a un 35 % del PIB en 2019. Era un porcentaje menor que los de Francia, Italia o

Alemania, pero bastante parecido a los de Portugal o el Reino Unido. Los tipos nominales del impuesto sobre la renta y del impuesto de sociedades son comparables con los del resto de la UE. Sin embargo, hay demasiadas exenciones y escapatorias legales. El tipo nominal del impuesto de sociedades era del 25 % en 2017, pero las principales empresas españolas pagaban un tipo fiscal efectivo medio del 17 %[41]. Los profesionales suelen encontrar vías para eludir el pago de impuestos. Muchos médicos continúan insistiendo en que sus pacientes particulares les paguen la visita en efectivo, por ejemplo. El tipo del IVA no reducido es del 21 %, pero este impuesto recauda menos en España que en la media del conjunto de Europa, principalmente porque el turismo y otras actividades importantes tributan a un tipo reducido del 10 %. Y los impuestos medioambientales y sobre productos nocivos para la salud (como el tabaco o el alcohol) son también más bajos en España que en la media de Europa[42].

No les falta razón a quienes piden que el Estado gaste más en cosas como guarderías y atención a la infancia, educación y capacitación profesional. La izquierda defiende que el Gobierno debería aumentar progresivamente la recaudación tributaria para llevarla hasta niveles similares a los de la media de la UE (que estaba en torno al 41 % del PIB en 2022). Y ciertamente hay algo de margen para subir impuestos, pero, por otro lado, los sondeos muestran que son cada vez más impopulares. Mucho del gasto público actual no está bien orientado. El país podría rentabilizar mucho más lo que ya gasta si lo evaluara y lo supervisara de forma más eficaz. De lo que se trata es de subir los impuestos sin que ello perjudique el crecimiento económico. Muchos de los cambios introducidos por el Gobierno de Sánchez en 2022 en fechas recientes han supuesto un incremento (moderado, eso sí) de los costes y de la carga regulativa para las empresas. A mediados de 2022, Sánchez dio un giro a la izquierda con el anuncio de un impuesto a los ingresos extraordinarios (que no beneficios) de las compañías energéticas y los grandes bancos. El Banco Central Europeo criticó ese gravamen a las entidades bancarias, pero el primer ministro español ignoró su advertencia. El comenzó a lanzar críticas a las grandes empresas españolas. Está por ver si todo esto tendrá algún impacto en las inversiones empresariales en general.

España ha aumentado su nivel de renta per cápita (en paridad de poder adquisitivo) en un 50 % en los últimos treinta años. Pero ha dejado de converger con los países miembros más ricos de la Unión Europea. En 2007, Zapatero se congratuló de que España hubiese alcanzado una renta per cápita equivalente al 105 % de la media de la

UE y que hubiese sobrepasado a la de Italia, que estaba en el 103 %. Esas cifras, sin embargo, serían corregidas *a posteriori*. España estaba en realidad en el 103 % de la media de la Unión Europea, mientras que el país transalpino estaba en el 107 %. Justo a continuación vendría la Gran Recesión y la fuerte huella que esta dejó en la economía. En 2019, la renta per cápita española se situaba en el 91 % de la media comunitaria, mientras que la italiana estaba en el 96 %[43]. Si los políticos no logran alcanzar acuerdos, España se arriesga a caer en el estancamiento económico. Sin embargo, si toman las decisiones correctas, el sueño español podrá reverdecer.

8

¿Una Escandinavia al sol?

En febrero de 1971, Richard Nixon envió a Madrid al general Vernon Walters —un militar reconvertido en diplomático y espía— para que le hiciera una visita a Franco y averiguara qué escenario podía abrirse en España a la muerte del Generalísimo. Walters le dijo al presidente estadounidense que ese era un tema tabú en los círculos españoles del poder. En el palacio de El Pardo, Walters —un tanto inquieto y con ánimo de halagar al anciano dictador— le comunicó a Franco que Nixon estaba interesado en conocer su opinión sobre la situación en el Mediterráneo occidental. El dictador, según contó Walters años después, le contestó: «Lo que le interesa realmente a su presidente es lo que acontecerá en España después de mi muerte, ¿no?». Y entonces le explicó que ya había creado algunas instituciones, que Juan Carlos asumiría el cargo de rey, y que «España irá lejos en el camino que deseen ustedes, los ingleses y los franceses: democracia, pornografía, droga y qué se yo. Habrá grandes locuras pero ninguna de ellas será fatal para España». Walters le preguntó entonces cómo podía estar tan seguro de eso. «Porque yo voy a dejar algo que no encontré al asumir el gobierno de este país hace cuarenta años», respondió Franco. Walters pensaba que se iba a referir a las fuerzas armadas, pero no: Franco hablaba de «la clase media española. Diga a su presidente que confíe en el buen sentido del pueblo español, no habrá otra guerra civil». Y, con la misma, estrechó la mano de Walters y puso fin a la entrevista[1].

Aquel fue un sorprendente toque de perspicacia. En España, la sociedad y las actitudes sociales han cambiado radicalmente en los últimos cuarenta y cinco años, y han sido unos cambios impulsados en buena medida por la expansión de esa clase media a la que aludió Franco, pero también por la llegada de la libertad y de la democracia. En 1975, el país era católico prácticamente en su totalidad y su población estaba formada casi al completo por españoles autóctonos. La Iglesia ejercía una gran influencia sobre la moral pública, como lo venía haciendo, en gran medida, desde los tiempos en que Isabel I de Castilla afirmara en la práctica la identidad entre ser español y ser católico ordenando que las numerosas poblaciones judía y musulmana del país se convirtieran al cristianismo so pena de expulsión. Las mujeres seguían ocupando una posición subordinada, y eran alentadas tanto por la Iglesia como por el Estado a traer al mundo el máximo número de hijos posible, y obligadas por ley a obedecer a sus maridos.

Un tercio de la población continuaba viviendo en zonas rurales y muchos habitantes de las ciudades habían inmigrado recientemente a ellas desde el campo.

Todo esto ha cambiado en el último medio siglo. En el plano demográfico, España ha realizado a una velocidad extraordinaria la transición que experimentan la mayoría de los países cuando se van haciendo más ricos: sus índices de natalidad descienden, sus esperanzas de vida aumentan y sus sociedades envejecen. Además, a raíz de la posterior llegada de un gran número de inmigrantes extranjeros, España es hoy un país multicultural. Otro de los cambios ha sido de índole geográfica. La población se concentra cada vez más en las áreas costeras y en la conurbación de Madrid. Grandes extensiones del interior forman parte de lo que hoy se conoce como la «España vacía», en la que abundan los pueblos fantasmas, muchas localidades agonizan y los servicios están en vías de desaparición. Al menos, así se percibe en la imaginación popular. Ahora que los españoles se han vuelto mayoritariamente urbanitas y que el cambio climático se deja sentir con mayor fuerza, también están modificando sus actitudes hacia la naturaleza.

Desde 1977, España ha ido legalizando sucesivamente los anticonceptivos, el divorcio, el aborto, el matrimonio homosexual y la eutanasia. Aunque la Iglesia se opuso a todos esos cambios, estos se llevaron a cabo con un amplio apoyo popular, del que siguen gozando incluso entre muchos votantes del PP. Aunque las mujeres continúan sufriendo cierta discriminación, España se ha convertido en no pocos sentidos en un país feminista. En su superficie, al menos, las actitudes sociales actuales son más análogas a las de Escandinavia que a las del resto del sur de Europa. Tal vez esto obedezca a cierta reacción contra el viejo empeño del franquismo en imponer normas de control de la vida privada. Tal vez sea también porque los españoles suelen estar bastante abiertos a nuevas ideas (más que los italianos, por ejemplo). Una de las consecuencias del aislamiento que sufrió el país bajo la dictadura fue el ardiente deseo que nació entonces entre gran parte de su población de unirse al resto de Europa, tanto en costumbres y leyes como en política y en economía. De todos modos, si se escarba un poco más a fondo, puede verse que las actitudes son más ambivalentes. Y no podemos olvidar que la familia extensa continúa siendo el pilar de la sociedad, lo que, por otro lado, contribuye en muy buena medida a la cohesión social.

¿Un país feminista?

Puede que el cambio más espectacular haya sido el de la posición

y los roles sociales de las mujeres españolas. Mientras Franco vivía, solo una cuarta parte de las mujeres adultas trabajaban fuera de casa. Hasta la entrada en vigor de una reforma legal en las postrimerías del régimen, las mujeres necesitaban el permiso de su marido o de su padre para aceptar un empleo, abrir una cuenta bancaria, poner en marcha un negocio, comprar o vender propiedades, o incluso desplazarse a un lugar alejado de su región de residencia. Solo los padres —no las madres— tenían autoridad legal sobre sus hijos e hijas. El adulterio en mujeres era un delito penado con prisión en todos los casos, mientras que, para los hombres, solo lo era si lo cometían en el hogar familiar o si alardeaban visiblemente de él[2]. Una ley de 1961 legalizó el acceso de las mujeres a las diversas profesiones, pero todavía tenían vedado ser juezas o servir en la marina mercante o en las fuerzas armadas.

En una conversación que mantuvimos para este libro, Elvira Lindo, escritora y feminista, me describió así algunos de los cambios en la vida de las mujeres de los que ella misma había sido testigo:

> Mi madre no tenía ningún dinero propio. Mi padre le daba cada semana el dinero para los gastos de la casa. Recuerdo los chillidos que daba de contenta cuando, al ir a lavar la ropa de mi padre, se encontraba un billete en algún bolsillo. Quería ser más independiente y tener más soberanía personal. Quería que sus hijas tuviesen una formación para que pudiesen tener dinero. En sus años finales, le enfadaba mucho no tener su propio dinero. Para nosotras, la cosa ha sido completamente distinta[3].

Con la llegada de la democracia, los cambios se aceleraron. Los anticonceptivos se legalizaron en 1977 y las relaciones homosexuales dejaron de constituir delito en 1979. El divorcio llegó a continuación, en 1981, y con él, la igualdad legal entre hombres y mujeres dentro del matrimonio. El Gobierno de Felipe González legalizó el aborto con ciertas restricciones en 1985. También se fueron transformando las actitudes sociales, aunque, al principio, no con tanta rapidez. El machismo siguió vigente, tal como reconocía Elvira Lindo:

> La cultura «progre» de los años ochenta era muy engañosa. Era muy izquierdista en apariencia, pero no le preocupaban los temas que le preocupan a la izquierda de ahora. El ecologismo tardó mucho en llegar aquí y el feminismo, también. Las mujeres debían hablar y opinar menos que los hombres, y sus palabras tenían menos peso que las de ellos. Yo fui a trabajar a la radio y me convertí en directora de un programa en el que tenía a hombres bajo mi mando. Ellos siempre estaban haciendo comentarios sexuales, y tú tenías que comerte todo eso tú solita y llevártelo a casa contigo.

Con el Gobierno de Zapatero, llegó una segunda oleada de cambios. La mitad de los miembros de su Consejo de Ministros eran mujeres, algo que, hasta entonces, solo había ocurrido en Suecia. Bajo su presidencia, España se convirtió en el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio homosexual. También se introdujo una nueva regulación del aborto (en forma de una ley de plazos, sin las anteriores restricciones) y se modificaron las leyes correspondientes para permitir los divorcios exprés, la investigación con células madre y el fomento de la igualdad de género en los consejos de administración de las empresas y en las candidaturas electorales de los partidos políticos. Una ley contra la violencia de género endureció las penas e incluyó medidas de protección a las víctimas. El PP y la Iglesia se opusieron a muchos de esos cambios, pero Rajoy no los revocó cuando accedió a la presidencia. De hecho, tanto Aznar como Rajoy nombraron a mujeres para encargarse de ministerios importantes.

Pedro Sánchez definió su Gobierno como feminista ya desde el primer momento. En su primer Ejecutivo de 2018, once de los diecisiete ministros eran mujeres. Según declaró el propio presidente, aquel Gobierno era «un fiel reflejo de la sociedad española»[4], comprometido con la igualdad social y de género, además de la modernización económica. En 2021, España se convirtió en el quinto país del mundo en legalizar la eutanasia. El PP (como Vox) volvió a votar en contra, pero la opinión pública se mostró ampliamente a favor de la medida.

Los cambios acumulados en la sociedad española y en las actitudes sociales desde el final de la dictadura han sido asombrosos, pero siguen sin ser completos. «El feminismo ha alcanzado a muchas capas de la sociedad —me comentaba Elvira Lindo—. Es un cambio que se ha producido desde abajo». Hoy son más las mujeres que los hombres que estudian en la universidad. Ellas son el 40 % de los investigadores científicos. En 1979, solo dieciocho de los trescientos cincuenta diputados del Congreso eran mujeres; en abril de 2019, ciento sesenta y seis fueron elegidas miembros de esa cámara, si bien la cifra descendió hasta las ciento cincuenta y cuatro tras la repetición electoral de noviembre de ese año. La brecha entre el salario medio de las mujeres y el de los hombres se está cerrando, según el INE. Un 43 % de las mujeres adultas trabajan fuera del hogar, cuando, en los hombres, ese porcentaje es del cincuenta y cuatro. Las mujeres componen solamente el 31% de los consejos de administración de las treinta y cinco principales empresas españolas que cotizan en Bolsa, pero ese porcentaje es del más del doble del que representaban en

2013. Actualmente, hay ya una mayoría de mujeres fiscales y también son mayoritarias las juezas en los tribunales de justicia de instancias inferiores, aunque no en el Tribunal Supremo[5]. Apenas una década atrás, en muchas de las numerosas fotos que publicaba la prensa española sobre encuentros y celebraciones de la élite empresarial, política y cultural, solo se veía a hombres. Hoy en esas fotografías es mucho más probable que aparezcan ya varias mujeres. No obstante, los roles domésticos no han cambiado tanto como los de fuera del hogar. Nueve de cada diez solicitudes de baja temporal por maternidad/ paternidad o para cuidar de familiares mayores, tanto antes de la pandemia como durante esta, las presentaron mujeres[6].

Puede decirse, pues, que España está en la vanguardia del progreso hacia la igualdad de género. En el Índice Global de Brecha de Género de 2019, elaborado por el Foro Económico Mundial, se situó en decimocuarto lugar, por delante de Francia, Reino Unido, Estados Unidos e Italia. En otro estudio, este de la Universidad de Georgetown y del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, fue clasificada en quinto puesto mundial en nivel de bienestar de las mujeres. En una encuesta de 2019, un 43 % de las personas consultadas (mujeres y hombres) se consideraban feministas, diez puntos porcentuales más que cinco años antes. Entre las mujeres de menos de veinticinco años, esa cifra subía hasta el 65 %[7]. En estos últimos años, las manifestaciones del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, han sido multitudinarias en todo el país.

Con la llegada del Gobierno de coalición en 2020, se hicieron visibles tensiones entre distintas generaciones de feministas. Sánchez retiró la cartera de Igualdad a su vicepresidenta Carmen Calvo y se la entregó a Podemos como parte del acuerdo de coalición. Pablo Iglesias se la confió entonces a Irene Montero, su compañera sentimental. Montero, de treinta y tres años entonces, presentó desde ese ministerio varios proyectos de ley sobre problemas que estaban en boga en aquellos momentos. Uno de esos proyectos, que se convirtió en ley en 2022, perseguía una definición clara del concepto de consentimiento sexual e introducía la figura delictiva del acoso sexual. En otro, se autorizaba la «autodeterminación de género» a partir de los catorce años de edad con consentimiento de los padres, o a partir de los dieciséis sin él. Entre feministas veteranas como la propia Calvo, se entendía que, si se permitía que el sexo de una persona se definiera solamente por elección propia, se pondría en peligro la legislación ya existente que combate la discriminación contra las mujeres. Ambos proyectos de ley chocaron con una resistencia pasiva en el seno del propio Gobierno, y siguieron encontrándola incluso después de que

Sánchez destituyera a Calvo en un intento de reducir las tensiones y rejuvenecer la parte socialista de su Ejecutivo.

Vox representaba una reacción de rechazo a toda esta transformación social de España. En algunos estudios, se ha comprobado que sus votantes se oponen firmemente no solo a la globalización, sino también a la inmigración y al feminismo. También tienden a tener un menor nivel educativo y una mayor religiosidad que la media[8]. Vox ha hecho campaña contra la educación sexual en los colegios e institutos y contra la legislación sobre violencia de género, que, según ese partido, discrimina a los hombres. Pretende derogar el liberalismo social en nombre de los valores tradicionales. Pero, pese a su empeño en retroceder en el tiempo, la gran mayoría de los españoles parece apoyar la igualdad y la diversidad sexuales en general. «Los cambios han sido profundos —me dijo Elvira Lindo—. Tal vez haya ahora un tipo de feminismo que no acepte eso, o que piense que no han sido lo bastante radicales, pero cualquier mujer de mi edad que compare su situación con la de su madre siente que ha habido un gran cambio». Cada vez que una mujer es asesinada por su pareja o expareja, se organizan concentraciones de protesta en la plaza mayor del pueblo o ciudad de la fallecida, encabezadas normalmente por las autoridades locales. En 2021, cuarenta y tres mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, la cifra más baja desde que empezaron a recogerse estos datos en 2003; se trata, además, de un número proporcionalmente menor que los que se registran en muchos otros países europeos. Sin embargo, la cifra subió en los dos años siguientes.

Hay datos que indican un aumento de los delitos de homofobia. Tal vez se deba a que en la actualidad los afectados se deciden más a denunciarlos que antes, sobre todo después de que el Gobierno de Sánchez creara una unidad del Ministerio del Interior especializada en luchar contra esos actos delictivos. También podría encuadrarse en una tendencia más amplia a nivel europeo, vinculada a las redes sociales, de aumento de los crímenes grupales —tanto de violación como de agresión homófoba— cometidos por jóvenes. Una de esas agresiones, la paliza mortal que recibió Samuel Luiz, un auxiliar de enfermería de veinticuatro años, en La Coruña en julio de 2021, provocó un estallido nacional de indignación. De todos modos, son casos que no representan la actitud general en el país. Según la encuesta del Eurobarómetro de 2019, el 86 % de las personas consultadas en España dijeron estar a favor del matrimonio homosexual. En otra consulta, esta de YouGov, un 91 % de los encuestados españoles dijeron que apoyarían a un hijo o a una hija si

este o esta les dijera que es homosexual, frente a un 85 % de los británicos, un 77 % de los suecos, un 75 % de los alemanes y un 57 % de los franceses. Las personas encuestadas en España también eran las que en mayor porcentaje decían ser homosexuales (un 10 %) o conocer a alguien que lo es[9]. En las elecciones autonómicas de 2021, Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid e identificada con el sector más derechista del PP) dedicó una mañana a hacer campaña por Chueca, el barrio gay de la capital. «A mí me da igual cómo cada uno configure su vida en su casa y en su cama», dijo, y añadió que el PP había cometido un error en su día oponiéndose al matrimonio homosexual[10]. Esta sociedad más tolerante, diversa e igualitaria es también más laica.

La huella católica en un país seglar

Pese a las restricciones por la pandemia y al tiempo lluvioso, en la vigilia de Viernes Santo de 2021 varios cientos de personas hacían cola para entrar en la basílica de Jesús de Medinaceli del Barrio de las Letras de Madrid a venerar la imagen de Cristo que allí se custodia y que data del siglo XVII. La mayoría de los fieles eran personas de más de cuarenta años, pero había también unas cuantas parejas jóvenes. El Cristo de Medinaceli es «muy importante para los madrileños —me contó Magdalena, una devota habitual—. Dicen que España ya no es un país católico, pero eso es mentira». ¿Lo es? Por lo menos, hay una paradoja. En los últimos cuarenta y cinco años de democracia, España se ha transformado en una sociedad laica a una velocidad asombrosa, mayor que en ninguna otra sociedad en Europa con la posible excepción de Irlanda. A la muerte de Franco, más de diecinueve de cada veinte españoles habían sido bautizados como católicos y un 60 % de ellos eran practicantes. Todavía en 2001, el 82 % de los españoles encuestados por el CIS seguían definiéndose como católicos; actualmente, solo lo hacen la mitad. Y solo una quinta parte van a misa con regularidad. En cuanto a los matrimonios, no solo han ido descendiendo año tras año durante la última década los que se celebran en España en general, sino que solo una quinta parte de estas bodas han tenido lugar en una iglesia. Actualmente, casi la mitad de los niños que nacen en el país son de madres no casadas.

El «nacionalcatolicismo» del régimen franquista se ha diluido muy rápidamente en una especie de laicidad oficial. En 1979 se firmaron cuatro concordatos, ligados a la nueva Constitución, para separar Iglesia de Estado. Sería, luego, al Gobierno de González al que le cabría su implementación; Aznar, contrariamente a las esperanzas de ciertos sectores de la Iglesia, no los modificó. Y el Gobierno de

Zapatero introdujo incluso una ley que prohíbe los símbolos religiosos en los espacios públicos. Aun así, la Iglesia católica conserva una considerable influencia. Tal vez eso no es sorprendente, dado lo entretejida que su presencia ha estado con el conjunto de la vida española durante siglos. Aunque ya no existe un partido católico, el catolicismo «es el sustento del que se nutre la cultura política española», según Pablo Hispán, diputado del PP[11]. Un reciente estudio académico ha puesto de relieve el ininterrumpido «entrelazamiento de las identidades religiosa y nacional en el discurso público y político»[12]. Casi todas las localidades españolas continúan celebrando sus procesiones religiosas, como las de la Semana Santa y alguna festividad anual dedicada al patrón o la patrona, con una misa oficial en la que el alcalde acompaña al sacerdote oficiante. Pese a la mencionada ley de Zapatero, sigue sin ser excepcional encontrarse crucifijos colgados en edificios públicos. La Iglesia ejerce una particular influencia en los terrenos de la ayuda social, la educación y la gestión del patrimonio cultural. Su organización benéfica, Cáritas, ayudó a dar de comer o prestar asistencia práctica a 1,4 millones de españoles pobres en 2020. En los centros educativos administrados por la Iglesia, estudian todavía una cuarta parte de los niños españoles, con especial presencia de los hijos de la élite. Y la Iglesia gestiona tres mil trescientos edificios históricos. Tal vez sea por todo ello que un tercio de los contribuyentes señalan la casilla de su declaración del impuesto sobre la renta para donar un 0,7 % del importe de este a la Iglesia, dinero que, si no, iría a parar al Estado. La cifra total ascendió a 301 millones de euros en 2019[13]. El número de donantes va en aumento.

Se trata de un equilibrio aparentemente estable, pero con el que no todo el mundo está satisfecho. «La Iglesia invade el espacio, la legislación, el presupuesto y la educación públicos», sostiene Juanjo Picó, de la organización Europa Laica. La educación es el tema más neurálgico. La religión se enseña como asignatura optativa en el currículo escolar, pero es cursada por aproximadamente la mitad de los alumnos de los centros públicos. Quienes hacen campaña por la laicidad del Estado argumentan que las escuelas no son el sitio de la religión, sino las iglesias, y quieren que esa asignatura se suprima de los planes de estudio. Se quejan también de que la Iglesia haya inmatriculado como suyas unas treinta y cinco mil propiedades inmobiliarias, en algunos casos sin escritura ni título legal que lo avale. En Francia y en Portugal, señalan esas voces críticas, los edificios eclesiásticos son propiedad del Estado. En España, «hay una *entente cordiale*» entre el Estado y la Iglesia, según Picó. «Tenemos que

avanzar hacia una separación real».

La propia Iglesia ha cambiado. Tras el Concilio Vaticano II, de 1962-1965, algunos sacerdotes españoles y una nueva generación de obispos que habían estudiado en el extranjero comenzaron a oponerse a la dictadura y a apoyar a la oposición, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, pero no solo allí. La Iglesia en su conjunto se avino a cambiar en tiempos del Gobierno de Felipe González, exmiembro del movimiento seglar Acción Católica y antiguo estudiante de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. La cosa cambió, sin embargo, con los Gobiernos de Zapatero. Este presidente socialista hizo frente a una generación de obispos conservadores nombrados en su día por el papa Juan Pablo II. La Iglesia quiso ver en Zapatero una vuelta al anticlericalismo.

Los enfrentamientos de esa época por el matrimonio homosexual y el aborto han remitido. Hoy impera una especie de paz incómoda. Varias cosas podrían desestabilizarla. Los partidarios de Vox no son todos necesariamente ultracatólicos, pero sí «suscriben la tradicional identidad católica de la España enfrentada al islam», según Julia Martínez-Ariño, socióloga de la religión[14]. La alta jerarquía de la Iglesia se ha cuidado mucho de no alentar a Vox. El cardenal Juan José Omella, elegido presidente de la Conferencia Episcopal en 2020, se reunió con todos los líderes de los principales partidos durante sus primeros dieciocho meses en el cargo, salvo con Santiago Abascal, máximo dirigente de Vox. El escándalo de los abusos pedófilos protagonizados por religiosos católicos ha tenido menos impacto en España que en otros muchos países, pero esto podría cambiar en breve. La propia Iglesia abrió una investigación cuando el diario *El País* entregó a un ayudante del papa Francisco un dosier con casos que se remontaban hasta la década de 1930 y que implicaban a seiscientos dos perpetradores y a mil doscientas treinta y siete víctimas[15]. Desde luego, en la Iglesia, hay quienes temen una reactivación del anticlericalismo. «Los ataques provienen de cierta élite política a la que le interesa atacar a la Iglesia porque la opinión de esta todavía tiene prestigio. No ven la Iglesia como una entidad religiosa, sino política», me contó José Francisco Serrano, periodista e historiador católico[16]. Pero, con Sánchez, los socialistas no han mostrado especial interés en buscar un enfrentamiento con el clero y parecen contentarse más bien con dejar que las tendencias sociales vayan surtiendo efecto.

La inmigración: salvación y desafío

Estos dos conjuntos de cambios —relacionados tanto con la posición de las mujeres en la sociedad como con la de la Iglesia—

explican en parte la veloz transición demográfica que ha llevado a España de registrar los elevados índices de natalidad y mortalidad que la caracterizaban en el pasado a situarse en otros muy bajos (solo discontinuados temporalmente por las muertes causadas por la pandemia). El *baby boom* que el país experimentó tras la guerra alcanzó su pico en 1975, cuando la tasa de fertilidad llegó a 2,917. En 2000, esta había caído ya a 1,2; luego, se recuperó un poco hasta llegar a 1,5 en 2010, pero, para 2019, ya había vuelto a caer hasta 1,2 de nuevo. Se trata de la tasa de fertilidad más baja de la Unión Europea, solo por detrás de la de Malta, y es una de las más reducidas del mundo. Está muy por debajo del nivel de 2,1 requerido para mantener constante la cifra de población de un país. En los años sesenta, las mujeres españolas se casaban antes y tenían más hijos que las de ningún otro país de Europa occidental a excepción de Portugal y Grecia. El hundimiento de la tasa de fertilidad se debió a la generalización del uso de los anticonceptivos y a que muchas mujeres rechazaron su anterior rol primario como encargadas de la crianza de los hijos.

El problema es que estas dinámicas se han visto exacerbadas por las sucesivas crisis económicas. La edad media a la que los jóvenes se independizan del hogar parental ha subido hasta los treinta años, tres más que la media de la UE. Nada menos que el 64 % de los jóvenes de entre veinticinco y veintinueve años viven aún con sus padres, una cifra que está muy por encima de la media comunitaria, que es del 42 %, y que solo está por debajo de las que se registran en Italia y en Grecia. La incapacidad de esta «generación Peter Pan» para emanciparse hace que, de media, las mujeres españolas no tengan ahora su primer hijo hasta los treinta y dos años de edad, según el INE. En la encuesta de *El País* a los jóvenes citada en el capítulo anterior, casi dos tercios decían que les gustaría tener dos hijos. España dedica relativamente poco dinero a guarderías y a atención a la infancia, y a otros incentivos a la natalidad. Podría hacer mucho más. Más bien, el déficit demográfico se está compensando con la llegada de inmigrantes.

Así, aun en pleno desplome de la tasa de natalidad, la población española experimentó un crecimiento explosivo y pasó de 40 millones de habitantes en 1999 a 47 millones en 2010. La población nacida en el extranjero pasó de ser de solo ciento sesenta y cinco mil personas a la muerte de Franco a ochocientas mil en 1990 y 5,7 millones (máximo histórico hasta el momento, un 12,1 % del total) en 201218. La depresión movió a centenares de miles de inmigrantes a regresar a sus países o a emigrar a otros. La posterior recuperación económica

trajo un nuevo incremento de la población inmigrada en España, que, en 2021, totalizaba 5,3 millones de personas (tras una ligera bajada durante la pandemia), según datos del INE.

Este último, junto con la liberación de las mujeres y el declive de la Iglesia, ha sido un tercer gran cambio histórico. La España de la Edad Moderna siempre había sido un país de emigración hasta hace bien poco. Millones de españoles salieron de él en busca de mejores oportunidades económicas: desde 1870 hasta la Guerra Civil, lo hicieron hacia América Latina sobre todo; posteriormente, se marcharon hacia la Europa occidental también[19]. Y al menos ciento setenta mil partieron hacia el exilio, en América Latina o Europa, tras la Guerra Civil.

La experiencia de la inmigración masiva llegó a España más tarde y más repentinamente que en los demás países europeos occidentales. En general, ha sido también un proceso libre de tensiones sociales graves. Uno de los motivos para eso era la memoria de la emigración y el exilio recientes. Otro es que la primera oleada de inmigrantes, la llegada en la década de 2000, encajó fácilmente. En aquellos momentos, la economía crecía y dos de los principales contingentes de recién llegados eran el de la América hispanohablante (en torno al 20 %) y el de Rumanía, país con el que se comparten ciertas similitudes lingüísticas y religiosas. Unos doscientos mil venezolanos han llegado luego, a partir de 2015, huyendo de la dictadura y el hundimiento económico de su país. En todo caso, en 2021 (como durante la mayor parte del presente siglo), la comunidad de inmigrantes más numerosa por su origen nacional era la marroquí (aproximadamente un 14 % del total). Las encuestas continúan mostrando una actitud bastante relajada de los españoles ante los inmigrantes, mucho más que la de la mayoría de los demás europeos. Pero no hay margen para ningún exceso de confianza.

Los años venideros pondrán a prueba la tolerancia y la integración por partida doble. La mayoría de recién llegados accederán al país por vía aérea, quedándose una vez caducado su visado de entrada. Pero cada vez más venían por mar desde África y procedentes de culturas muy diferentes. En los últimos tiempos, casi todas las semanas llegan varios centenares de africanos por esta vía hasta las islas Canarias, hacinados en pateras. Cientos fallecen en el intento. Tras un aumento previo de las llegadas a las Canarias en 2006, España firmó acuerdos con Marruecos, Mauritania y Senegal para que estos países aceptasen la devolución de sus migrantes a cambio de ayuda económica y de asistencia para la vigilancia del mar abierto. Pero las deportaciones se frenaron durante la pandemia y, de

todas formas, los Gobiernos de esas naciones emisoras de migrantes se muestran generalmente reticentes a colaborar.

Algunos de los recién llegados huyen de la violencia. La mayoría, sin embargo, son migrantes económicos, empujados a abandonar su país por los problemas de la sobrepesca y la pobreza. Aun así, desde 2021, y por primera vez, tres de las cinco primeras nacionalidades de los solicitantes de asilo en España eran africanas. La llegada masiva de inmigrantes desborda las instalaciones de acogida en Canarias. Tras semanas en alojamiento temporal en las islas, la mayoría acaban llegando a la península. De ahí, muchos africanos prosiguen luego camino hacia otros países europeos. Pero el resto son una presencia cada vez más visible en las ciudades españolas y se enfrentan a una acogida más incierta que la que tuvo la primera oleada de inmigrantes de veinte años atrás.

Con el declinar de la amenaza del independentismo catalán, Vox ha ido centrando cada vez más atención en su mensaje contra la inmigración no autorizada, y lo ha hecho sobre todo a través de las redes sociales. Para las elecciones autonómicas madrileñas de 2021, colgó carteles en los que comparaba el coste de cuidar de los menores inmigrantes no acompañados con el de las pensiones de los españoles mayores. Lo paradójico del caso es que Vox obtiene resultados electorales particularmente buenos en zonas del litoral mediterráneo donde los agricultores dependen de braceros marroquíes y subsaharianos para la recolección.

Bajando desde la calle Mayor en dirección sur, Lavapiés era a comienzos del siglo XX «el fin de Madrid y el fin del mundo», según la sonora descripción que Arturo Barea hizo del barrio en el que vivió con su madre, lavandera, y en el que fue al colegio. Allí se llegaba desde lo alto o desde lo bajo de la escala social, escribió:

> El que llegaba de arriba había bajado el último escalón que le quedaba antes de hundirse del todo. El que llegaba de abajo había subido el primer escalón para llegar a todo[20].

Tras un breve amago de gentrificación en los años ochenta y tras haber adquirido cierto protagonismo como centro de la cultura alternativa y la política izquierdista, el Lavapiés actual sería, sociológicamente hablando, muy reconocible para Barea. Es un crisol de inmigrantes recién llegados: magrebíes, latinoamericanos y, últimamente, africanos subsaharianos. Los primeros inmigrantes africanos llegaron a España en 1984 y vivían en un albergue de Lavapiés porque nadie quería alquilarles habitaciones por no tener

papeles. Comenzaron a dedicarse a la venta ambulante irregular como «manteros», según me contó Malick Gueye. Este senegalés, que llegó a España en 2005, era el portavoz del colectivo Manteros de Madrid. En 2021, inauguraron una tienda en Lavapiés donde venden camisetas, bolsos y sudaderas con capucha, todo ellos decorados con lemas antirracistas.

«No se es mantero porque quieres —reconocía Malick Gueye quejándose del hostigamiento al que los someten los agentes del orden —. Todos queremos una vida digna que nos permita prosperar y tener un empleo». El problema es que normalmente se tardan unos tres años en obtener un permiso de trabajo. «Vox no tiene el monopolio del racismo», pero los racistas se sienten «envalentonados» por las posturas de ese partido, me dijo. Ha habido un incremento de las agresiones racistas, aunque siguen siendo poco frecuentes. Pero, tal como me comentó Jesús Perea, secretario de Estado de Migraciones hasta junio de 2022, «hay un terreno de cultivo que favorece el crecimiento del odio en Europa y del que España no está exenta».

Uno de los primeros gestos de Sánchez al acceder a la presidencia del Gobierno en 2018 fue viajar a Valencia para recibir al Aquarius, un buque gestionado por una ONG que llevaba seiscientos treinta inmigrantes a bordo que había recogido en alta mar, antes de quedar abandonado a su suerte durante semanas frente a las costas de Italia sin que ningún puerto lo autorizara a desembarcar. Pero, a medida que el centro de gravedad de las rutas de transporte de migrantes se iba desplazando hacia el oeste, hacia el área geográfica de España, el Gobierno se fue volviendo más cauto. «Tenemos que hallar un equilibrio entre la seguridad y la solidaridad», me dijo Perea, quien, de todos modos, conservaba el optimismo: «La actitud general del día a día en España [hacia los inmigrantes] es mejor que en otros países». Ayuda que, hasta el momento, los inmigrantes hayan tendido a distribuirse por el país y a no concentrarse tanto en guetos. Aunque los datos de los sondeos de opinión muestran un panorama desigual, en general tienden a evidenciar que una mayoría de la sociedad considera que la inmigración es positiva para el país. Muchos españoles siguen mostrando una buena actitud de acogida. En septiembre de 2021, me encontré casualmente con una manifestación de unas trescientas personas frente a las puertas del Ministerio del Interior que reclamaban un cambio en la normativa que permita que los inmigrantes jóvenes reciban automáticamente permisos de trabajo cuando cumplan la mayoría de edad y salgan de los centros de acogida en los que estaban mientras eran menores. «No hay derecho a que a estos chavales los dejen deambulando por las calles durante tres

años hasta conseguir papeles», me dijo Emilia Lozano, antigua trabajadora de unos grandes almacenes ya jubilada que había organizado soluciones de alojamiento y formación para algunos de ellos. Al cabo de un par de meses, el Gobierno cambió las normas y los manifestantes vieron atendidas sus reclamaciones.

La segunda generación de inmigrantes criados en el seno de familias procedentes del Magreb empieza ahora a llegar a la mayoría de edad. Los atentados terroristas en Cataluña en agosto de 2017, en los que murieron quince personas, fueron cometidos por jóvenes de origen marroquí que habían crecido en Ripoll, al pie de los Pirineos. Todo parecía indicar que estaban perfectamente integrados. Hablaban catalán, tenían trabajo y jugaban en un equipo local de fútbol. Pero un predicador yihadista los reclutó para su causa. Por excepcional que fuera aquel caso, no deja de ser una advertencia. Es cierto que, en un estudio muy completo publicado en 2014, no se hallaron «indicios de rechazo cultural o identidades reactivas mayoritarias entre los inmigrantes o sus hijos»[21]. Pero, en investigaciones más recientes, sí se ha detectado que los hijos de inmigrantes presentan un riesgo más alto de abandono escolar. Todavía hay muy pocos casos personales de inmigrantes de éxito que hayan accedido a puestos destacados en las empresas o en la política y que puedan servir de modelo e inspiración a los más jóvenes. Basta con comparar la selección española de fútbol con la francesa, por ejemplo. Pero, con un poco de suerte, esto podría ser solo cuestión de tiempo.

El problema demográfico al que se enfrenta el país significa que tendrá que seguir dependiendo de la afluencia más o menos continuada de inmigrantes. Sin otros cambios en perspectiva, para que el Estado español pueda pagar la factura de las pensiones necesitará del orden de seis a siete millones de trabajadores adicionales cotizando en la economía nacional para no más tarde de 2040, según las previsiones (en 2021) de Escrivá, de cuyo ministerio son competencia tanto las pensiones como las migraciones. Algunos de los recién llegados están comenzando a instalarse en el despoblado interior del país, donde muchas pequeñas localidades y pueblos quieren inmigrantes que les permitan mantener abiertas sus escuelas, sus tiendas y sus bares.

La España vacía

Venían de la España de los pueblos medievales casi desiertos que son del color de las ásperas tierras que los rodean, la España de sierras solitarias, de robledales y olmedos, de mesetas interminables y pequeñas ciudades y villas en declive. En un lluvioso domingo de

marzo de 2019, unos cincuenta mil de ellos desfilaron por el madrileño paseo de la Castellana en manifestación para expresar lo que ellos mismos llamaban «la revuelta de la España vaciada». En sus carteles y pancartas se exhibía la poética sonoridad de los topónimos españoles entremezclada con demandas más prosaicas. En Villamayor del Río querían una farmacia; en Orihuela del Tremedal, un servicio de internet de mayor velocidad; en Aranda de Duero, mejores infraestructuras. Y si algunos proclamaban que «Almanza resiste», otros reivindicaban que «Fuente de Béjar existe», como también lo hacían los de Arévalo de la Sierra y los de El Royo. «Nos sentimos bastante abandonados; necesitamos médicos», me explicaba Paula Siles, una asistente social de Las Parras de Castellote (localidad de cincuenta y siete habitantes, casi treinta menos que en 2004, ubicada en los montes del Maestrazgo de Teruel).

La historia del último siglo largo en muchas partes del mundo ha estado marcada por la emigración del campo a las ciudades. En España, esto ocurrió más tarde y más súbitamente que en otros muchos países de Europa. Comenzó en la década de 1920 y luego cobró fuerza entre finales de los años cuarenta y finales de los sesenta, momento en el que millones de personas se hacinaron en los grandes focos industriales y de crecimiento económico que eran Barcelona, el País Vasco y Madrid. Aquel movimiento humano, suma de innumerables decisiones individuales, ha dejado tras de sí un país con un gran desequilibrio geográfico en lo tocante a la distribución de su población. Amplias zonas de la España rural, en un extenso arco al norte de Madrid que va desde la frontera portuguesa hasta las montañas del Maestrazgo, próximas ya al Mediterráneo, se encuentran entre las menos pobladas de Europa, con densidades solo comparables con las de Laponia o las Tierras Altas escocesas. Más del 90 % de la población del país se concentra en el 30 % de su territorio. Y unos 4,6 millones de personas viven dispersas en el 70 % restante, cuya densidad demográfica es de apenas catorce habitantes por kilómetro cuadrado. Esa es la España que desfila vertiginosa por nuestro lado cuando la cruzamos por autovía o a bordo de un tren de alta velocidad.

Es un proceso que se retroalimenta. A medida que cae la población, se cierran escuelas, ambulatorios, sucursales bancarias, tiendas y bares, disminuyen las líneas de transporte público y, como consecuencia, más personas se marchan en busca de mejores servicios. En 1900, la provincia de Teruel tenía doscientos cuarenta y seis mil habitantes; hoy apenas viven en ella ciento treinta y cuatro mil o nueve personas por kilómetro cuadrado. Según el INE, de los ocho mil

ciento treinta y un municipios que hay en España, cinco mil dos tenían menos de mil habitantes en 2019, y de estos, mil trescientos sesenta tenían incluso menos de cien (cuando, en 1996, eran ochocientos cincuenta y uno). Más de la mitad de estos municipios muy poco poblados están situados en una amplia extensión de tierras altas del interior noreste del país que comprende la totalidad (o la mayor parte) de las provincias de Cuenca, Guadalajara, Soria y Teruel. Quienes siguen viviendo en esos sitios son, sobre todo, personas mayores, especialmente varones. Julio Llamazares, escritor originario de León, llamó en una ocasión a la comunidad de Castilla y León «el geriátrico más grande del país»[22]. Todos los veranos, durante aproximadamente un mes, muchos de esos pueblos se llenan con los hijos y los nietos de sus todavía habitantes (o de otros ya desaparecidos). Muchos se compran segundas residencias allí, en «el pueblo», que sigue pesando mucho en el imaginario colectivo, pese a la poca conexión que guarda ya con la vida cotidiana de esos veraneantes. También están perdiendo población algunas villas de provincias. En los últimos treinta años, la población de la histórica ciudad de León ha caído de los ciento cuarenta y siete mil a los ciento veinticuatro mil habitantes.

La despoblación de buena parte del interior de España se ha convertido en un problema político, como aquella manifestación puso en evidencia. En 2016, Sergio del Molino, periodista y escritor zaragozano, publicó un libro sobre esta cuestión que tituló *La España vacía.* La expresión hizo fortuna. Los activistas enseguida la retocaron y la convirtieron en «la España vaciada» en referencia al «vaciamiento» de que, según el argumento de ellos, llevaba siendo objeto desde hacía décadas por la acción del capitalismo, del franquismo y de las políticas gubernamentales.

Esto es una descripción demasiado simplista de la situación. Ciertas zonas de la España rural e interior están prosperando y su población actual es mayor que en los años ochenta. Y empeñarse en frenar ese flujo migratorio sería tan inútil como batallar contra los molinos de La Mancha (hoy bastante vacía) como hacía Don Quijote: la principal causa del despoblamiento rural es la atracción que ejercen las ciudades grandes, que ofrecen oportunidades, servicios y una vida cultural que las ciudades pequeñas y los pueblos no pueden ofrecer. Como bien ha afirmado Luis Antonio Sáez, profesor de la Universidad de Zaragoza, «no hubo nunca una mano negra que decidió vaciar media España»[23]. El cultivo extensivo del cereal en los áridos terrenos castellanos nunca dio mucho de lo que vivir. Los tecnócratas de Franco intentaron establecer nuevos polos de desarrollo industrial, como las grandes fábricas automovilísticas de Valladolid y de Vigo

que, de otro modo, podrían haber ido a parar a Cataluña o al País Vasco. También inundaron valles agrícolas fértiles para construir embalses para centrales hidroeléctricas y, en cierto modo, sentaron un precedente para lo que actualmente hacen Iberdrola y Endesa cuando instalan inmensas extensiones de molinos de energía eólica en crestas y lomas de todo el territorio español. Pero ¿qué otra cosa podía hacer un país pobre en recursos energéticos convencionales?

Dicho esto, algunas decisiones políticas sí han tenido un efecto impulsor de la despoblación. León, único de los reinos históricos que no tiene una comunidad autónoma propia, fue uno de los grandes damnificados del reparto del pastel territorial durante la Transición. Fue agrupado con Castilla la Vieja al tiempo que —de manera bastante absurda— La Rioja y Santander (actual Cantabria) se convertían en comunidades uniprovinciales. León, según Llamazares, ha sido desde entonces una víctima de la centralización intrarregional, pues ha salido perdiendo frente a Valladolid, la capital de la Comunidad de Castilla y León. Otra decisión que ha tenido fuerte influencia ha sido el hecho de que la inversión en ferrocarriles se haya concentrado en la red de alta velocidad, lo que ha provocado una especie de *apartheid* ferroviario. Solo dos trenes diarios conectan Soria —capital de provincia— con Madrid, en un recorrido de doscientos treinta kilómetros y tres horas de duración. Teruel está peor servida aún: el único tren diario a la capital tarda cuatro horas y media en llegar. Algunas ciudades más pequeñas han perdido ya todas sus conexiones ferroviarias. Asimismo, la decisión del Gobierno de poner fin a la generación de electricidad mediante centrales térmicas de carbón ha conducido a la pérdida de miles de empleos en Asturias, León y Teruel. Y, en buena parte de España, son muchos los que opinan que Madrid se ha beneficiado desproporcionadamente de las políticas públicas decididas y aplicadas durante las últimas tres décadas.

La sensación de agravio es amplia y ha sido catalizada, además, por varios grupos de presión que se han ido formando durante el último cuarto de siglo. Uno de los más veteranos es Teruel Existe, que comenzó ya a finales de los años noventa sus protestas contra el abandono que padece la provincia. Dos décadas después, entró en la política electoral. «Nos dimos cuenta de que lo único que conseguíamos eran buenas palabras y palmaditas en la espalda. Si queríamos influir de verdad en la política teníamos que estar donde se toman las decisiones», dijo sobre esa decisión uno de los líderes del movimiento, Tomás Guitarte. En las elecciones de 2019, él mismo obtuvo uno de los tres escaños que se eligen por esa provincia en el

Congreso de los Diputados. El grupo también logró la elección de dos senadores. En el Congreso, Guitarte votó a favor de investir a Sánchez presidente del Gobierno de coalición. A cambio, arrancó de este un pacto «por la repoblación y el reequilibrio territorial» con promesas de inversiones en infraestructuras, traslados de organismos del Estado hacia nuevos emplazamientos en la España rural y la creación de un ministerio específico para supervisar ese proceso. «Conseguimos más en dos años que en veinte», reconoció satisfecho Guitarte[24].

Sin embargo, Teruel Existe perdió su escaño en la elección de 2023. El éxito electoral de Teruel Existe animó a otros a imitar su ejemplo. En las elecciones autonómicas celebradas en Castilla y León a principios de 2022, Soria Ya consiguió tres de los cinco escaños que estaban en juego en esa provincia. La organización que agrupa a nivel nacional al *lobby* de la «España Vaciada» se preparó para presentar candidatos en media docena de comunidades autónomas en las próximas elecciones generales, aunque no logró ninguno. Pedía que el Gobierno gastase un 1 % adicional del PIB (11.000 millones de euros más al año) en la ampliación de servicios en las zonas rurales, y que la despoblación se incluya en la Constitución como factor a tener en cuenta en la compleja fórmula que regula la financiación autonómica. La España Vaciada pone un énfasis especial en las infraestructuras, pese a que los datos apuntan a que la inversión en educación produce mayores retornos netos[25]. Pero el contraste con el movimiento de los «chalecos amarillos» en Francia es muy esclarecedor: en vez de bloquear rotondas y provocar destrozos en la Castellana —el equivalente madrileño de los Campos Elíseos parisinos—, la España Vaciada optó por utilizar el sistema político para expresar sus quejas. Y no le ha faltado razón: los dos partidos principales llevan tiempo tratando a la España interior como una especie de granja de votos donde aterrizan sus candidatos, procedentes del centro y, muchos de ellos, sin vínculos especiales que los conecten con las provincias por las que se terminan presentando.

En la España interior, «lo cierto es que ni el pasado era tan ideal ni el futuro es tan oscuro», ha escrito Ignacio Urquizu, sociólogo y antiguo diputado socialista que entre 2019 y 2023 fue alcalde de Alcañiz (Teruel), su localidad natal. Él está convencido de que el ritmo del despoblamiento podría reducirse a la mitad con las políticas locales correctas[26]. Algunas villas y pueblos han conseguido atraer a nuevos residentes, inmigrantes entre ellos. La España rural comprende áreas de gran dinamismo económico, como las comarcas vitivinícolas de las cuencas del Duero, el Ebro o el Sil. El turismo rural va en alza: Castilla y León ha perdido dos mil bares desde 2010, pero ha ganado

albergues rurales. Más que infraestructuras de transportes, dos son las cosas que se echan en falta en ocasiones: espíritu emprendedor y conexiones de internet de alta velocidad, que son clave para la vitalidad del interior. La pandemia fue un periodo durante el que una cifra significativa de profesionales urbanos se instaló en la España rural con el objetivo de teletrabajar desde allí o incluso de establecer su propio negocio. Casi la mitad de los domicilios rurales estaban conectados con la red de fibra óptica en 2019, cuando, en el conjunto de la UE, ese porcentaje ascendía solamente a 17,5. «En Candelaria, Carboneros, Aguilar de Campoo o Villaconejos hay más red de fibra que en cualquier capital europea», presumía José María Álvarez Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica27. Una reforma más amplia que diera más competencias y recursos a los alcaldes sería también de gran utilidad para la España interior.

En la literatura y el cine españoles, a los habitantes de los pueblos se les suele caracterizar de «paletos»: pueblerinos más cortos de entendederas que los sofisticados urbanitas. En una hilarante novela satírica titulada *Un hipster en la España vacía* (y en su secuela), Daniel Gascón, escritor nacido en Zaragoza, desmontaba ese estereotipo al contrastar el sentido común de las gentes de un pueblo ficticio de Teruel, y lo conectadas que estaban con el mundo moderno, con el pretencioso y condescendiente posmodernismo de la élite cultural urbana. La España interior merece ser tratada con más realismo y menos romanticismo.

La crisis ambiental

La mayor laguna de agua salada del Mediterráneo occidental, el mar Menor, en la región de Murcia, fue hasta los años sesenta del siglo xx un paraíso natural de aguas cristalinas, praderas sumergidas, caballitos de mar y peces y moluscos abundantes. Llegó entonces el turismo descontrolado y todo su litoral —incluida su restinga exterior — se llenó de hoteles y bloques de apartamentos. En la década de los años setenta, se completó uno de los mayores proyectos hidrológicos de la dictadura: un canal de trescientos kilómetros que conduce hasta un 60 % del agua de las fuentes del Tajo (en la España central) hacia la cuenca del río Segura (en Murcia). Esto permitió transformar unas sesenta mil hectáreas de secano en tierras de regadío y convertir el área limítrofe con el mar Menor en una gran huerta frutícola y de hortalizas en la que se cultivan lechugas, melones, brócolis y pimientos. La zona produce en torno al 20 % de las exportaciones hortícolas españolas y, según una estimación, genera unos cien mil puestos de trabajo agrícolas28.

En la actualidad, sin embargo, el mar Menor agoniza. En 2016, esta albufera se convirtió en una sopa verde tapada por algas. En 2019 y, de nuevo, en 2021, varias toneladas de peces muertos se acumularon en sus orillas. Era «el síntoma de una catástrofe medioambiental», según declaró Noelia Arroyo, alcaldesa *popular* de la vecina localidad de Cartagena, para quien aquello constituía «una emergencia nacional»[29]. Unas cincuenta mil personas se manifestaron en señal de protesta por las calles de su ciudad, en la que cobró fuerza una campaña local dirigida a tratar de salvar la albufera. El problema, según los científicos, es que el fertilizante que se filtra de las explotaciones hortícolas vecinas y que es muy rico en nutrientes llega a las aguas del mar Menor y estimula el crecimiento de algas que bloquean la luz solar y privan de oxígeno y, por tanto, de vida marina al agua. El Gobierno autonómico (del PP) ha tendido a posicionarse del lado de los agricultores, mientras que el nacional se dedicaba a mirar para otro lado. Esa dinámica cambió por fin en 2021. Teresa Ribera, la ministra de Medio Ambiente, se reunió con el presidente de Murcia, Fernando López Miras, y ambos acordaron medidas dirigidas a intentar salvar la laguna. El Gobierno autonómico accedió a restringir el uso de fertilizantes en las inmediaciones del mar Menor. Aun así, Ribera se quejaba de que el Ejecutivo murciano no hubiese actuado contra los agricultores que habían establecido cultivos de regadío en ocho mil hectáreas adicionales sin licencia. Tanto si las medidas se aplican efectivamente como si no, es posible que lleguen demasiado tarde: el acuífero subterráneo está ya contaminado con nitratos que terminan afluyendo a la albufera. Pero ahora, al menos, los políticos se sienten presionados por la opinión pública para que hagan algo. Y eso es una novedad en un país que, en ciertos aspectos, fue uno de los pioneros en la protección medioambiental, pero en el que, desde entonces, se ha echado en falta una conciencia ecologista moderna.

España tiene una gran diversidad medioambiental, pero sufre un fuerte estrés ecológico. Amplias zonas del país carecen de agua suficiente. «España es una inmensa zona de terreno estéril rodeada de una estrecha faja de tierra fértil», según un comentario atribuido a Ramón y Cajal[30]. La solución, según pensaron muchos, radicaba en la construcción de trasvases como el Tajo-Segura, y en la plantación de árboles para estabilizar las cabeceras de los ríos. Tanto el régimen de la Restauración como el de la Segunda República aprobaron planes hidrológicos para implantar regadíos a gran escala, y la República aprobó también un plan de reforestación. El franquismo dio continuidad a ambos con la construcción de grandes embalses para el

regadío y para la generación de electricidad, y con la reforestación de tres millones de hectáreas. Influido por el apego del movimiento romántico a los paisajes naturales agrestes y montañosos, y siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, el régimen de la Restauración creó dos parques nacionales en 1918, uno de ellos en Covadonga y los Picos de Europa asturianos, y en Ordesa, en el Pirineo aragonés, el otro. España se convertía así en el tercer país europeo en hacerlo, solo adelantada por Suecia y Suiza. Seguirían nuevos parques en los años cincuenta y sesenta, destinados a proteger los volcanes de las Canarias y el gran humedal de Doñana, en el delta del Guadalquivir.

Actualmente, más de una cuarta parte de la superficie terrestre de España está protegida, ya sea en forma de parques nacionales, reservas naturales autonómicas u otros lugares de interés especial. El interés original por la preservación del paisaje ha ido cediendo su lugar a una mayor preocupación por la biodiversidad y la ecología[31]. Hubo que esperar bastante más a las primeras iniciativas dirigidas a proteger el litoral. Se calcula que el 28 % de la costa española está ocupada por construcciones humanas. Hoy en día, los promotores inmobiliarios tienden a encontrar mucha mayor oposición a su actividad. Ahí está el emblemático caso del gigantesco hotel construido en pleno parque natural del cabo de Gata, en Almería, que deberá ser demolido por orden de la Justicia (aun cuando en 2023 esto todavía no ha acontecido).

Los modelos sugieren que el Mediterráneo occidental probablemente experimentará un mayor cambio en su clima que el resto de Europa. España sufre ya un serio problema de aridez; los expertos clasifican aproximadamente una quinta parte de su territorio como terreno desertificado[32]. Tanto los incendios forestales como las inundaciones son problemas frecuentes. El verano de 2022 fue el más caluroso desde que se tienen registros (1961), con temperaturas máximas que superaron los cuarenta grados durante varias semanas seguidas en buena parte del país en un episodio que se vivió como un anticipo de un futuro nada agradable. El Gobierno de Sánchez aprobó una ley sobre cambio climático que fomenta la energía verde. Pero la política oficial en esta cuestión continúa siendo incompleta y desigual. El propio Ejecutivo eliminó recientemente peajes en más de mil kilómetros de autopista al vencimiento de las concesiones. Pero, al mismo tiempo, ha ido aplazando la decisión sobre un peaje nacional para el conjunto de la red de autovías y autopistas del Estado ante la oposición de los transportistas, de Podemos y de los nacionalistas vascos y catalanes. Aunque la preocupación por el cambio climático no deja de crecer, sigue estando por detrás de la que se aprecia en

otros países europeos. Según una encuesta del Eurobarómetro de 2021, solo el 3 % de las personas consultadas en España consideraba el cambio climático un problema de la máxima importancia, frente al 13 % de promedio para el conjunto de Europa. Sorprende que en España no haya un partido verde significativo, si bien Más País —escisión de Podemos— aspira a serlo (véase el capítulo 9). Sí cuenta, sin embargo, con un partido animalista que ha estado cerca de conseguir representación en el Congreso y del que puede decirse que ha tenido cierta repercusión en las actitudes públicas sobre el tema.

De la tauromaquia al animalismo

Aquella calurosa y encapotada tarde de domingo de junio, solamente estaba vendida una quinta parte aproximada del aforo de la gran plaza de toros de Las Ventas de Madrid. Un vendedor de agua en el exterior del recinto me dijo que esa concurrencia de público era la normal para una corrida ordinaria, pasada ya la popular feria de San Isidro (en primavera), y toreada por matadores «del montón». «Es triste para quienes amamos el toreo y vivimos de él que no atraiga a más personas». El público estaba formado sobre todo por españoles de clase trabajadora y unos cuantos turistas asiáticos. La corrida comenzó con un toque de clarines y la entrada de dos hombres de mediana edad a lomos de caballos blancos; ambos jinetes iban ataviados con túnicas negras típicas del siglo XVI y una larga pluma roja en sus sombreros también negros. Tras ellos, los tres toreros y sus cuadrillas desfilaban a pie enfundados en sus ajustados uniformes de colores verde y rosa con abundantes bordados de oro y rutilantes lentejuelas, y con sus capas doradas y magenta al hombro. La banda tocó un pasodoble y, a continuación, otro toque de clarines anunció la salida del primer toro. Vivaracho y agresivo, chocó los cuernos contra la barrera de madera que protege a los banderilleros. Tras las escaramuzas preliminares, el matador se quedó quieto de pie, hinchado de hombros, frente al debilitado, desconcertado y jadeante animal. Luego hincó la espada en su ancha nuca. Este fue dando trompicones hasta que, al final, se dejó caer definitivamente.

Al segundo torero le faltó arte ante un toro que perdía abundante sangre carmín por el orificio que, previamente, el picador le había abierto en el lomo. Varias veces le insertó la espada y otras tantas se la sacó el enfurecido animal a sacudidas. El público silbaba y daba palmadas lentas para apurar al torero, al que se veía nervioso. Toda su faena se había convertido en un embarazoso ejercicio de crueldad sin aparente sentido. Finalmente, mató a la bestia (al séptimo intento) y se escabulló entre el silencio.

Su sucesor en el ruedo impuso su presencia de inmediato. Se contoneaba de puntillas en dirección a su toro y lo retaba repetidamente con verónicas, como si lo estuviera invitando a bailar, y conseguía así que este fuera al trapo y le pasara una y otra vez por su lado; los cuernos casi rozaban el arqueado cuerpo del matador. Hombre y bestia se movían como si estuvieran magnéticamente atraídos en una danza de la muerte: consciente el primero de que la más mínima falta de concentración podía ser fatal; cómplice el segundo con el espectáculo que anunciaba la inminencia de su propia muerte. El torero inició la suerte de matar y, al segundo intento, el toro se desplomó contra la barrera. En ese momento, el matador se dio la vuelta, pero, entonces, el animal se irguió tambaleándose: su fuerza vital se resistía a sucumbir y un murmullo recorrió el graderío. A continuación, sin embargo, el toro volvió a caer y la lluvia arreció. Fue una corrida media y bastante representativa, sin el glamur de los nombres famosos ni de los toros de las ganaderías de primera, una combinación de valor masculino, arte dramático, torpeza y carnicería cruel.

Hasta hace poco, la tauromaquia era poco menos que la definición misma de España a ojos de los extranjeros. A algunos de ellos, como Hemingway, los embelesaba; a otros, los horrorizaba. Lo que no se sabe tanto en otros países es que también los españoles llevan mucho tiempo divididos en torno a las corridas de toros. La tradición antitaurina es tan fuerte como la taurina. Emilia Pardo Bazán, la escritora decimonónica, llamaba «la demencia nacional» a la tradicionalmente conocida como «la fiesta nacional». Y esa es hoy la opinión mayoritaria. Según una encuesta de 2014, un 90 % de los consultados dijeron que nunca iban a las corridas. Según otra, de 2019, un 56 % decían estar en contra de la tauromaquia y solo un 25 % se declaraban a favor. Pero para sus devotos, es un arte, no un deporte, y por eso los diarios informan de ella en sus páginas de cultura.

En lo que llevamos de siglo, el toreo profesional ha experimentado un declive constante. En 2007, había festivales taurinos en novecientas dos localidades españolas. En 2019, esa cifra había caído hasta las trescientas setenta y siete. La pandemia asestó un duro golpe económico al sector y algunos ganaderos de toros de lidia parecían condenados a cerrar sus empresas. A nivel local, sin embargo, siguen siendo habituales diversos espectáculos de acoso de toros en festejos veraniegos de pueblos y ciudades pequeñas. Lo son incluso en Cataluña, donde el Parlament prohibió las corridas de toros en 2010, una decisión tomada por motivos más nacionalistas que

animalistas. Los toreros suelen recibir numerosos insultos en redes sociales y uno o dos de ellos han sufrido incluso agresiones físicas de activistas animalistas. Otros españoles, sin embargo, continúan teniéndoles veneración: una vez, mientras almorzaba en un bar de Sevilla, vi que entraba Julián López, *El Juli*, el más famoso de los toreros españoles actuales. Allí lo saludaron con verdadera devoción.

El Gobierno de Rajoy protegió la tauromaquia declarándola elemento integral del patrimonio cultural español. Pero entre los más comprometidos defensores de las corridas no hay solo votantes del PP y de Vox. El toreo «es cultura, es tradición, es participación, es conservación, es ecosistema, es economía y, por supuesto, es pasión», escribió Emiliano García-Page, presidente autonómico socialista de Castilla-La Mancha[33]. El líder oficioso del Tendido 7, el sector del graderío de Las Ventas donde se concentran los aficionados más entendidos y más críticos, es Faustino Herranz, conocido también como *El Rosco*. Dice haber asistido a todas las corridas de la feria de San Isidro desde hace más de cuarenta años. Herranz fue teniente de alcalde por Izquierda Unida de un municipio de la sierra de Guadarrama, y actualmente se declara votante de Podemos[34].

Aunque no es probable que la tauromaquia vaya a desaparecer por completo, sus días como actividad de masas sí parecen estar contados. Rosa Montero, novelista e hija de torero, escribió hace unos años que su padre le enseñó a amar a los animales, y que los toreros y los aficionados a los toros no son ni unos criminales ni unos psicópatas, sino que, según ella, «pertenecen a un mundo ya obsoleto» caracterizado por un perturbador nivel de violencia[35].

A medida que España se fue convirtiendo en un país urbano y que muchos de sus jóvenes comenzaron a criarse en ambientes prácticamente ajenos al mundo rural, las actitudes hacia los animales también cambiaron en otros sentidos. En 2021, el Gobierno nacional prohibió la caza del lobo al norte del río Duero, la única parte del país donde aún estaba permitida. La decisión recibió críticas de los Gobiernos autonómicos de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, y también de los ganaderos. Hay entre dos mil y dos mil quinientos ejemplares de lobo repartidos entre más de trescientas manadas en toda España, principalmente en esas áreas septentrionales, y los granjeros pierden periódicamente animales por las incursiones de estos depredadores. Pero han perdido también la batalla: «El lobo ha sido durante siglos una especie maldita […]: ha pasado de ser un símbolo de la crueldad […] a ser el símbolo de la conservación», explicaba el biólogo Juan Carlos Blanco en *El País*[36].

Los españoles ven ahora a los animales como mascotas o criaturas

de compañía, no como una amenaza ni como un deporte. También la caza va a la baja. El Ministerio de Agricultura emitió setecientas sesenta y nueve mil licencias en 2018, casi trescientas mil menos que en 2005. Al mismo tiempo, el número de animales de compañía —perros en su mayoría— aumentó en nada menos que un 40 % en los cinco años previos a 2018. Hay en el país más mascotas que personas menores de quince años, un síntoma quizá de la creciente soledad de la vida urbana española[37].

La vida española

España se ha convertido en un país de familias más pequeñas y de un mayor individualismo. En 2020, casi cinco millones de españoles vivían solos, lo que representa una cuarta parte de los hogares, según el INE. Aun así, la familia continúa siendo el pilar de la sociedad española, y uno de los secretos del éxito de esta. Los abuelos comparten las labores parentales, sobre todo las relacionadas con recoger a los niños de la escuela. Los fines de semana, a la hora de la comida, los restaurantes se llenan de grandes grupos familiares, muchos de ellos formados por miembros de tres generaciones distintas. La relativa falta de guarderías y jardines de infancia públicos ha hecho que las mujeres sigan desempeñando el papel cuidador principal en las familias. El resultado es «una sociedad ambivalente —según ha escrito Ángeles González-Fernández, historiadora de la Universidad de Sevilla—. Posmoderna, sí, pero a un tiempo tradicional, a la española»[38].

Es una sociedad en la que buena parte de la vida discurre en el exterior, en la calle. Es una dinámica propiciada por el clima, pero también porque mucha gente vive en pisos bastante reducidos. El bar ha sido tradicionalmente el centro de la vida española: ha funcionado como una especie de sala de estar para muchos habitantes del país. Y, en muchos sentidos, lo es todavía, aunque el número de estos establecimientos vaya en lento declive: en 2017, había 184.430, casi un 10 % menos que en 2010. En paralelo, sin embargo, el número de restaurantes crece cada año.

En total, un 65 % de los españoles vive en pisos (el porcentaje más alto de la eurozona tras Letonia) y un 45% en bloques grandes de más de diez viviendas. España registra índices muy elevados de propietarios, pero, aun así, la dificultad de acceso a la vivienda ha adquirido una importancia creciente desde la crisis de 2008-2013. Una de las corrientes que confluyeron en la formación de Podemos fue la de los grupos de activistas que se movilizaban contra los desahucios por impago de hipotecas. El auge de los alquileres turísticos de corta

duración en ciudades como Barcelona o Madrid ha sido un factor que ha impulsado una fuerte subida del alquiler residencial. Muchos de los pobres de las grandes urbes viven de alquiler en pisos compartidos, con seis o siete inquilinos en viviendas de sesenta o setenta metros cuadrados, con dormitorios del tamaño de cubículos. Todo esto ha puesto de relieve la falta de vivienda pública.

Pese a su fama de individualistas orgullosos y rebeldes, los españoles son buenos siguiendo las normas. Para sorpresa de muchos, la prohibición de fumar en bares y otros espacios públicos introducida en 2011 se respetó de manera bastante general desde el primer momento. El país también ha conseguido reducir sensiblemente la cifra anual de fallecidos en accidentes de tráfico, que ha pasado de cinco mil novecientos cuarenta en 1989 a mil cuatro en 2021. La introducción del carné de conducir por puntos en tiempos del ministro Rubalcaba (puntos cuya pérdida total comporta la retirada del permiso) fue un paso crucial en este sentido. Asimismo, durante la pandemia, los españoles fueron de los primeros en adoptar el uso de las mascarillas, y de los más aplicados en ello.

Los españoles son muy dados a manifestarse. Y, salvo durante la crisis (y, a veces, en Cataluña y, tiempo atrás, en el País Vasco), las manifestaciones son casi siempre pacíficas y ordenadas. Pero la sociedad civil organizada es relativamente débil. Los partidos políticos desempeñan muchas de aquellas funciones de las que, en otros países, se encargarían los laboratorios de ideas, las ONG o las asociaciones cívicas. Esto se debe, en parte, a que hay pocos incentivos fiscales a las donaciones benéficas, a diferencia de lo que ocurre con las destinadas a la Iglesia. Como me dijo Eduardo Serra, antiguo presidente del Real Patronato del Museo del Prado, «para tener una sociedad civil fuerte, se necesita dinero».

Como ocurre en Francia (pero no en Italia), algunos españoles se sienten atraídos por cierta versión del «sueño americano». Durante el periodo democrático, se han construido cada vez más urbanizaciones «a la americana», dependientes del coche, en las afueras de Madrid. Al mismo tiempo, sin embargo, muchos españoles jóvenes son urbanitas que se mueven en bicicleta o motocicleta. Estas dos visiones de la ciudad chocaron cuando el PP recuperó la alcaldía de Madrid en 2019 tras un periodo de dominio de la izquierda. El nuevo Gobierno municipal trató de derogar el plan que impedía la entrada a la mayoría de vehículos motorizados en el centro de la ciudad, pero tuvo que dar marcha atrás ante las protestas populares con las que chocó y también ante la oposición de los tribunales, y terminó reimplantándolo aunque con un nombre distinto.

La calidad de vida es alta por lo general. Los españoles están más sanos y mejor alimentados, y son más altos, que en el pasado: su estatura media se ha incrementado desde los 1,69 metros (en 1977) hasta los 1,73 (en 2017)[39]. Los varones nacidos en 1996 promediaban para esta última fecha 1,76 metros, catorce centímetros más que lo que promediaban los nacidos un siglo antes al llegar a adultos. Un bebé español nacido hoy puede esperar vivir ochenta y tres años, la esperanza de vida más alta de la OCDE después de la de Japón, país al que se prevé que España supere en este indicador en 2040, según un estudio de la Universidad de Washington (Estados Unidos)[40]. La dieta mediterránea es ya más un mito que una realidad. Pero los españoles consumen muchos alimentos frescos y se preocupan mucho por la procedencia y la calidad de los ingredientes de lo que comen. Otra ayuda a su buena salud es la presencia de una sanidad generalmente buena. Pero también contribuye la fortaleza de las redes familiares, que sin duda constituye un factor que explica el hecho de que la mayoría de los españoles (incluso los jóvenes) se reconozcan felices en las encuestas. En una realizada entre personas de dieciocho a treinta y cuatro años de edad para el diario *El País* que se publicó en julio de 2021, un 85 % de las personas consultadas se declararon «satisfechas» con su vida: saben que, a diferencia de sus padres o de sus abuelos, ellas han crecido en una sociedad libre y democrática, y la familia extensa les procura una red de apoyo. En muchos sentidos, la sociedad española se ha vuelto también más tolerante y relajada ante las diferencias. El problema es que esa actitud no se ha hecho extensiva al ámbito de la política.

9

«La casta» y sus imperfectos críticos

Gritaban «no nos representan» y «democracia real, ¡ya!». Al término de una manifestación, el 15 de mayo de 2011, miles de españoles —jóvenes y de clase media en su mayoría— instalaron un campamento improvisado al aire libre en la Puerta del Sol, en el corazón de Madrid. Lo llamaron «asamblea ciudadana». Querían denunciar la política de austeridad, el derecho con el que los políticos y los banqueros se creían a decidirlo todo, y la gran injusticia (según decían) de que un país hubiese decidido rescatar a la banca al tiempo que recortaba el gasto en escuelas y hospitales. Se quedaron allí durante semanas. Amplificadas por las redes sociales, las protestas se extendieron a todo el país. Los manifestantes pronto fueron conocidos como los *indignados*, y el 15 de mayo de 2011 (o 15M, siguiendo la costumbre española de abreviar las fechas importantes) terminaría siendo un verdadero punto de inflexión en la historia reciente en España. Los *indignados* gozaron inicialmente de un amplio apoyo popular; los sondeos mostraban que entre un 70 y un 80 % de la población estaba de acuerdo con ellos[1]. Según Carolina Bescansa, socióloga y participante en aquel movimiento, este «fue un gran estallido de destitución. Estábamos de acuerdo en qué no queríamos. No queríamos más recortes, no queríamos corrupción y no queríamos esa forma de hacer política, a espaldas de los ciudadanos»[2].

Apenas seis meses después del 15M, en un momento de máxima impopularidad del Gobierno de Zapatero, el PP ganó con mayoría absoluta las elecciones generales. A simple vista, fue como si políticamente no hubiese cambiado casi nada. La realidad, sin embargo, fue que los *indignados* contribuyeron a cristalizar un descontento latente; llegado el momento, su legado llevaría a una reconfiguración del mapa político. De hecho, de ese descontento surgirían dos nuevos partidos políticos de ámbito nacional: Podemos, a la izquierda, y Ciudadanos, en el centro-derecha. En las elecciones generales de 2015, entre los dos sumaron el 34 % del voto y fragmentaron el, hasta entonces, estable sistema político basado en la preponderancia del PSOE y del PP. Como resultado de ello, en los cuatro años siguientes seguirían tres nuevas elecciones generales; ninguna de ellas dio lugar a un Gobierno con mayoría absoluta.

Un pequeño grupo de jóvenes profesores y estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid —la propia Bescansa entre ellos

— vio en los *indignados* el potencial necesario para impulsar un cambio radical en España. Pablo Iglesias, que tenía treinta y dos años en 2011, había estudiado la extrema izquierda italiana y había participado en acciones de protesta del movimiento antiglobalización por toda Europa. Juan Carlos Monedero había trabajado para el Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Íñigo Errejón (veintisiete años) había estudiado la Bolivia del presidente izquierdista Evo Morales y también había trabajado en Venezuela. Los tres estaban influidos por la obra de Antonio Gramsci, el filósofo marxista italiano que desarrolló el concepto de hegemonía cultural, según el cual, para tener éxito la izquierda tendría que implantar sus ideas y valores en la sociedad en su conjunto y no fiarlo todo a la lucha económica de la clase obrera. Pero, mientras que Iglesias era en muchos sentidos un leninista, Errejón era más bien seguidor de Ernesto Laclau, un gramsciano argentino que defendía un populismo izquierdista como el del peronismo de su propio país. De la izquierda latinoamericana contemporánea —y del ejemplo de Chávez en particular—, este grupo de profesores activistas adoptó la importancia del liderazgo carismático y de la inserción, simulada o no, de ideas socialistas en un marco nacionalpopulista más amplio. Iglesias recalcaba también la importancia de la comunicación y, en particular, de la televisión. Los tres fundaron dos programas televisivos semanales, uno que se emitía por un pequeño canal local de Vallecas, en Madrid, y el otro, por HispanTV, un canal que se sospechaba que había sido puesto en marcha por el Gobierno iraní[3]. Iglesias no tardó en convertirse en un gurú mediático que debatía en muchas de las tertulias que proliferaban en aquellos momentos en las televisiones y radios convencionales españolas. Con su coleta característica, se hizo famoso a nivel nacional.

El grupo de la Complutense entendió la aparición de los *indignados* como un punto de ruptura, como la prueba de que España no estaba sufriendo simplemente una crisis política, económica y social, sino también una «crisis de régimen» que las englobaba a todas, y que estaba al borde de «una segunda transición», según el propio Iglesias[4]. Bescansa organizó sondeos que parecían indicar que el consenso político subyacente a la democracia española se había debilitado extraordinariamente porque la gente ya no la identificaba con bienestar. Y el grupo pensaba que esta debilidad abriría la puerta a la posibilidad de derogar el pacto de la Transición desde la izquierda a quienes supiesen conectar con el nuevo estado de ánimo de la población, como ya había ocurrido en varios países latinoamericanos. Al principio, Iglesias y Errejón actuaron como asesores de Izquierda

Unida, coalición electoral formada en 1986 en torno al Partido Comunista de España. Pero, en un acto celebrado en enero de 2014 en un teatro de Lavapiés, en Madrid, fundaron Podemos. Solo cuatro meses más tarde, y con el rostro de Iglesias impreso en sus papeletas electorales, el nuevo partido obtuvo 1,3 millones de votos en las elecciones al Parlamento Europeo (un 8 % del total en España). A finales de 2014, menos de un año después de su nacimiento, su candidatura tenía un 28 % de apoyo en los sondeos de opinión: la que más.

Podemos se proclamaba representante de una nueva forma de hacer política que rechazaba la división entre izquierda y derecha y asumía más bien otra que enfrentaba, según la terminología de Laclau, a «los de abajo» contra «los de arriba». Coqueteaba con la democracia directa organizándose en «círculos» de seguidores en vez de hacerlo mediante las estructuras típicas de los partidos convencionales. Logró colocar su mensaje más efectivo denunciando a «la casta»: una pequeña élite interesada de políticos, banqueros y empresarios a la que acusaban de explotar y oprimir al «pueblo», que estaba en la base. El término «la casta» se tomó prestado del movimiento populista italiano Cinco Estrellas[5]. Pero, aunque muchos votantes acogieron favorablemente de inicio a Podemos, al que veían como una justificada expresión de rabia por la situación y como un clamor de renovación, su proyecto político no dejaba de entrañar un rechazo de conjunto a la democracia liberal forjada durante la Transición. Era la izquierda dura presentada desde un enfoque blando, populista. Iglesias subrayó que lo que le interesaba era conquistar el poder del Estado (se entendía que, de manera permanente, como había hecho Chávez en Venezuela, y no solo ganando unas elecciones). «El cielo no se toma por consenso —dijo en el primer congreso de Podemos, en 2014—; se toma por asalto».

Iglesias expuso su crítica de la democracia española en un libro publicado en 2014[6]. En él afirmaba que querían «ajustar cuentas con la veneración de la Transición española por parte de buena parte de las fuerzas políticas españolas». Si por algo se había caracterizado la Transición, añadía, era por «su tutelaje permanente por parte de unas élites económicas y políticas encabezadas simbólicamente por la Corona». Para él, la monarquía era una «pieza crucial de la continuidad institucional franquista». El sistema estaba regido por y para «la casta»: «los ladrones que construyen dispositivos políticos para robar la democracia a la gente». La reforma constitucional de 2010 que priorizó el pago de la deuda soberana en las cuentas públicas fue «un golpe de Estado». Podemos era euroescéptico. Iglesias

advertía de que España iba camino de convertirse definitivamente en «una colonia de la Europa alemana» (una frase que bien podría haber sido de Nigel Farage, de los *brexiteros* británicos o de Viktor Orbán en Hungría). La corrupción era «una forma de gobierno» y una «característica consustancial a nuestro régimen político y a la casta política gobernante». Los corruptos y los poderosos gozaban de impunidad. «En nuestro país ha sido siempre excepcional ver a políticos o banqueros condenados en firme».

Podemos supuso, pues, un tercer rechazo del pacto de la Transición, después de los de ETA y la rama más extrema del nacionalismo vasco y el independentismo catalán. Aunque Iglesias aseguraba que los defectos que él denunciaba eran específicamente españoles, derivados del pecado original de la Transición, buena parte de su argumento coincidía con el *Zeitgeist* europeo de aquellos momentos en que el Brexit estaba cobrando impulso y los populistas de izquierda o de derecha adquirían fuerza en diversos países, desde Grecia hasta Italia, pasando por Polonia. La crítica de Iglesias contenía algunas falsedades y no pocas exageraciones. Pero también incluía la suficiente verdad como para que hallara eco en una minoría significativa de españoles. Podemos se convirtió enseguida en «la fuerza política de los perdedores de la crisis», tal como escribió Ignacio Urquizu, sociólogo y diputado socialista[7].

Otro frente de crítica que surgió en aquel momento fue Ciudadanos. Pero la suya era una crítica moderada, orientada a reformar (que no a derogar) el pacto de la Transición. Fundado por quince intelectuales y periodistas en Barcelona en 2005 como un partido de ámbito regional, Ciutadans —como se llamó inicialmente en catalán— era en su origen una formación de orientación liberal o socialdemócrata amplia. Los fundadores querían denunciar la deriva del Partido de los Socialistas de Cataluña (el PSC, con el que varios de ellos se identificaban hasta entonces) hacia el nacionalismo catalán, y estaban consternados por la coalición que el líder de los socialistas catalanes, Pasqual Maragall, había formado con Esquerra para hacerse con la presidencia del Gobierno autonómico. Ninguno de los fundadores quería ser el líder de la nueva organización. Albert Rivera, un joven abogado barcelonés que destacaba por su labia, se ofreció voluntario para ejercer ese papel y los demás aceptaron. Ciutadans comenzó su andadura electoral obteniendo tres escaños en el Parlamento catalán en 2006.

Una década después de su fundación, Rivera consideró que había llegado el momento de convertir Ciutadans en Ciudadanos, un partido nacional, para aprovechar el descrédito en el que estaba sumido el PP

y la buena imagen que su formación se había ganado en el resto de España por su decidida oposición a los independentistas en Cataluña. Su salto a la política nacional se produjo en las elecciones generales de 2015: en ellas obtuvo el 14 % de los votos y cuarenta diputados. Su oposición a los nacionalismos periféricos y su defensa de la unidad de España era un mensaje central del programa de Ciudadanos; eso hizo que sus oponentes lo tacharan de partido nacionalista español. También abogaba por el liberalismo económico, por la introducción de reformas modernizadoras en el Estado, el mercado laboral y el sistema educativo, y por la lucha contra la corrupción y contra las duplicaciones de gasto entre la Administración central y las autonómicas. A diferencia del PP, defendía libertades y derechos individuales como el matrimonio homosexual y el aborto. Rivera, que, con el tiempo, fue adquiriendo actitudes cada vez más histriónicas, se refirió incluso a la posibilidad de emular en España el éxito de Emmanuel Macron en Francia, donde había logrado desbancar a los partidos tradicionales tanto de la derecha como de la izquierda. «Tenemos que alejarnos del viejo eje izquierda-derecha —me dijo en 2018—. La gran batalla del siglo XXI es la que enfrenta al liberalismo y la sociedad abierta, de un lado, contra el populismo-nacionalismo y la sociedad cerrada, del otro». Al final, sin embargo, no llegó a llevar aquello a la práctica.

La partidocracia

La democracia española, como otras muchas, tiene ciertamente defectos estructurales que se han hecho más manifiestos a lo largo de la última década, aunque, tal como se explica en el resto de este capítulo, no necesariamente son los que Iglesias denuncia. El problema no es que España no sea democrática, como afirmaban los independentistas catalanes más radicales (y como afirmaba el propio Iglesias al principio). En *rankings* y estudios académicos de instituciones y gabinetes varios, el régimen español figura en la categoría de las democracias plenas, a la par de otras análogas en Europa occidental[8]. Pero, como todas las democracias, la de España presenta imperfecciones Estas no tienen tanto que ver con el pacto de la Transición como con la forma en que el sistema político ha evolucionado durante los pasados cuarenta años. Tres son los problemas que más sobresalen, y tienen que ver con el papel y el carácter de los partidos políticos, la Administración pública y la Justicia.

Con la experiencia de la Segunda República en mente, los arquitectos de la Transición quisieron anteponer la estabilidad política

a cualquier otro factor, incluida la rendición de cuentas democrática de los Gobiernos. Según fue evolucionando el sistema, este fue concentrando poder en manos de los partidos y, en particular, de sus líderes para dar lugar a lo que cada vez más se ha dado en llamar un régimen de *partidocracia* que está más al servicio de los políticos que de los ciudadanos. Para empezar, España tiene muchos más políticos de los que necesita, según señala Miriam González, abogada española que ha trabajado sobre todo en Bruselas y Londres. No existen cifras oficiales, pero se estima que hay entre trescientos mil y cuatrocientos mil. Eso significa que en España hay más políticos que en la Alemania federal, y que, en proporción a su población, tiene el doble que Francia o que Italia[9]. Este exceso se debe en parte a que, cuando se establecieron las autonomías, se decidió que cada una tendría una asamblea legislativa. También es debido a que esa descentralización regional no se acompañó de una racionalización paralela de la estructura del gobierno local. España es el único país de Europa con cuatro niveles de gobierno. En el más bajo de ellos se sitúan sus más de ocho mil municipios. Ni siquiera Brasil —que es un país con el cuádruple de población que España y donde la creación de nuevos municipios es toda una industria— necesita tantos: de momento, se las arregla con cinco mil quinientos setenta. Las diputaciones provinciales deberían haberse abolido desde el momento en que la Constitución previó la formación de las comunidades autónomas. Sin embargo, perduran en aquellas autonomías que comprenden más de una provincia. Son asambleas de hasta cincuenta y un miembros que timonean una institución encargada de proveer servicios complementarios a los municipios. Además, en todos los niveles administrativos y de gobierno, los políticos españoles tienden a contar con un mayor séquito de asesores y adláteres a sueldo del erario público que los de la mayoría de las otras democracias europeas.

En segundo lugar, los partidos políticos también han extendido sus tentáculos horizontalmente, es decir, hacia otras instituciones supuestamente independientes, como el funcionariado, la justicia o la universidad. La capacidad de influencia de los políticos sobre las Administraciones públicas ha sido un potenciador fundamental de la corrupción. Hasta un total de veinte mil cargos públicos —entre ellos, muchos altos cargos— son hoy «de libre designación» —un término que, curiosamente, no tiene ningún equivalente propio en inglés—, es decir, que son de nombramiento discrecional por parte de los políticos que actúan como superiores jerárquicos. Esa cifra supera con mucho la de cualquier otro país europeo occidental. Son el equivalente contemporáneo de los antiguos *pretendientes* del siglo XIX: ese enjambre

de aspirantes a funcionarios públicos que cifraban sus esperanzas laborales en los cambios de Gobierno.

Cuando Rajoy y el PP fueron desalojados del Ejecutivo nacional en 2018, unas seis mil personas perdieron automáticamente su trabajo, incluyendo cuatrocientos treinta y siete asesores presidenciales, según Miriam González[10]. Cuando los socialistas tuvieron que salir del Gobierno autonómico de Andalucía ese mismo año, seiscientas sesenta personas fueron despedidas al momento. Cuando Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno en 2018, colocó a personas leales al PSOE al frente de RTVE (la radiotelevisión pública del Estado), el CIS (el instituto estatal de investigaciones sociales, que se encarga de realizar encuestas de opinión) e incluso de Paradores (la cadena pública de hoteles instalados en edificios de interés histórico en su mayoría). Todas estas son instituciones que supuestamente representan el interés público general. El caso del CIS fue particularmente escandaloso, pues las encuestas de este instituto, tradicionalmente muy respetado por los académicos, pasaron a evidenciar un sesgo favorable a la izquierda.

El régimen democrático heredó de Franco una Administración pública arcaica y muy corta de recursos. Pero incluía, eso sí, un pequeño cuerpo de funcionarios profesionales de alto nivel, seleccionados a escala nacional, cuyos orígenes databan ya de antes de la Guerra Civil y cuya función consistía en controlar el poder arbitrario de los caciques sobre el gobierno local. Tal como recordaba el novelista Antonio Muñoz Molina, cuyo primer empleo fue en la pequeña oficina de cultura del Ayuntamiento de Granada, en cada municipio había miembros de este cuerpo nacional que ocupaban tres cruciales puestos: tenían la responsabilidad de certificar la legalidad de los actos del alcalde, aprobar el gasto y controlar los fondos. Eran funcionarios profesionales que no podían ser nombrados, despedidos ni apartados de sus puestos por el alcalde de turno[11]. Con la consolidación de la democracia, y coincidiendo con el momento en que España comenzó a hacerse más rica, esos funcionarios de carrera fueron arrinconados y reemplazados progresivamente por otros de libre designación. Estos cargos políticos de confianza tienen hoy muy pocos incentivos para frenar o moderar la acción de los políticos que controlan su continuidad en los puestos de los que viven. Y como sus nombramientos tienden a no ser muy transparentes y a no regirse por criterios de mérito, su calidad es bastante desigual, por no decir otra cosa.

Ahí está el caso de las instituciones universitarias. Las Universidades Carlos III y Rey Juan Carlos, ambas madrileñas y ambas

inauguradas en la década de 1990, se identificaron ya desde un principio con el PSOE y con el PP, respectivamente. La Rey Juan Carlos (URJC) se vio envuelta en un escándalo cuando se denunció que varios políticos del PP —Pablo Casado entre ellos— habían obtenido títulos de máster por su Instituto de Derecho Público pese a haber hecho muy pocas (o casi ninguna) de las tareas académicas requeridas por el programa. Casado admitió que le habían convalidado dieciocho de las veintidós asignaturas del máster, pero insistió en que no había cometido ninguna irregularidad. Por su parte, el caso de Cristina Cifuentes, la presidenta *popular* del Gobierno autonómico madrileño entre 2015 y 2018, fue particularmente revelador. Al acceder al cargo, prometió «tolerancia cero» con la corrupción y facilitó que se investigara judicialmente a su predecesor en el cargo por presuntos sobornos. Pero, siendo ya presidenta, fue acusada de haber falsificado documentos para obtener un título similar de ese mismo Instituto de Derecho Público de la URJC. Al final, quedó absuelta de esa acusación, pero una asesora del Gobierno autonómico y una profesora de la universidad fueron condenadas por la falsificación del acta de Cifuentes[12]. Esta se libró de la mencionada acusación en los tribunales, pero ya hacía tiempo que había dejado de ser presidenta a raíz del escándalo levantado por un vídeo —supuestamente filtrado por alguien del propio Gobierno madrileño o del PP— grabado años antes por una cámara de seguridad de un supermercado en el que se veía cómo la interrogaban por haber intentado sustraer sin pagar dos botes de crema antiedad[13]. Cifuentes se excusó diciendo que había sido un «error involuntario», pero dimitió del cargo. De todos modos, la revelación parecía haber tenido la intención claramente política de enviarle un mensaje sobre su intento de lanzar una campaña de tolerancia cero para combatir la corrupción[14].

Esto parecía ser un ejemplo de cómo algunos políticos traspasaban límites y abusaban de los poderes del Estado, incluidas las fuerzas del orden, para satisfacer sus intereses partidistas. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior en el primer Gobierno de Rajoy, fue a juicio por haber ordenado presuntamente a la Policía que espiara a Luis Bárcenas, extesorero corrupto del PP. Bárcenas tenía 22 millones de euros en una cuenta bancaria suiza, fruto aparentemente del cobro de comisiones ilícitas a compañías constructoras y otras empresas, y decía haber hecho pagos secretos «en B» a dirigentes del partido, incluido el propio Rajoy (que siempre lo ha negado). Bárcenas fue condenado por el Tribunal Supremo en 2018 a treinta y tres años de prisión por el cobro de sobornos, por enriquecimiento ilícito y por

blanqueo de capitales[15].

En España, como en todas partes, hay muchos políticos honrados y motivados por su vocación por el servicio público. Pero no todos son así. Según alegó Sánchez como uno de los motivos para presentar una moción de censura contra Rajoy en el Congreso, en total más de novecientos políticos del PP se enfrentaban a acusaciones de corrupción por aquel entonces (si bien no proporcionó detalles al respecto)[16]. La mayor parte de los casos afectan a los Gobiernos autonómicos o locales. Un expresidente autonómico madrileño se enfrenta a cargos por presuntas irregularidades en la concesión de contratos, varios de ellos relativos a una fiebre de adjudicaciones conectadas con la tradicionalmente sobria compañía encargada del suministro de agua corriente en Madrid[17]. Tres de los últimos cuatro presidentes *populares* de la Comunidad Valenciana se han enfrentado también a acusaciones judiciales relacionadas con la adjudicación de contratos públicos. Todos ellos han negado haber cometido ilegalidad alguna. Pero los casos de corrupción no son privativos del PP. Un expresidente socialista de Andalucía y cuatro de sus consejeros fueron sentenciados a penas de prisión por prevaricación y por malversación en el caso de los ERE, escándalo que estalló por el uso abusivo de un fondo de 680 millones de euros para trabajadores desempleados, del que se desviaron cuantiosas sumas para pagar a «clientes» políticos[18]. Algunos casos de corrupción han ido ligados al coste creciente de las campañas electorales. Los españoles son poco dados a hacerse miembros de un partido político o a donar fondos para esas formaciones, que tienen que depender así más de la financiación pública que en muchos otros países. Pero el propio sistema facilitaba ya de por sí la corrupción, y no solo porque existieran los mencionados cargos de libre designación. Hasta que se introdujo un endurecimiento en las condiciones legales de la contratación pública en 2017, la ley permitía ofertas inverosímilmente bajas, con sus correspondientemente elevados sobrecostes posteriores. Tampoco había ninguna norma que protegiera a los denunciantes internos: algunos de ellos veían castigada su honestidad con la pérdida de su trabajo y el acoso por parte de los denunciados[19].

La preocupación y la concienciación públicas a propósito de la corrupción se dispararon a raíz de la crisis financiera. Según una encuesta del Eurobarómetro de 2018, un 94 % de las personas consultadas en España opinaban que la corrupción estaba muy extendida en su país, frente al 71 % de media que opinaban eso mismo (respeto a sus países respectivos) en el conjunto de la UE. Sin embargo, solo un 5 % reconocían haber sufrido o presenciado un acto

de corrupción en los doce meses anteriores, un porcentaje que estaba en línea con el de la media europea. España no es Italia: la corrupción no es un problema sistémico como en el país transalpino, y tiende a ser castigada finalmente en los tribunales.

Liderazgos presidencialistas

El lema «No nos representan» encerraba una dimensión adicional. En el siglo actual, la clase política española se ha ido desconectando cada vez más de la población general hasta el punto de que hoy en día opera en una especie de burbuja autorreferencial que guarda poca relación con las preocupaciones de la ciudadanía. Al menos, esa es la percepción dominante en la opinión pública. El sistema electoral contribuye a esa desconexión. Las elecciones se celebran con un sistema de «listas cerradas» y los votantes eligen a un partido y no a un candidato concreto. Son los líderes de los partidos los que deciden en qué puesto de las listas van los diferentes candidatos y, por lo tanto, con qué probabilidades de salir elegidos se presentan a los comicios. Eso hace que no haya ninguna conexión concreta entre el representante y sus representados.

Aunque cobran unos salarios relativamente bajos, los políticos españoles disfrutan de otras protecciones y beneficios. En España, hay más de ellos con coche oficial y escolta de seguridad que en muchos países europeos. Muñoz Molina, que dirigió la delegación neoyorquina del Instituto Cervantes en los años noventa, recordaba los viajes promocionales que muchos presidentes autonómicos y alcaldes comenzaron a hacer a aquella ciudad a medida que España fue haciéndose más rica. Contrataban los servicios de caras agencias de relaciones públicas y reservaban costosos escenarios a los que llegaban con nutridos séquitos desde sus comunidades o sus municipios respectivos. Más que inversores o ciudadanos estadounidenses, la mayoría de los asistentes a sus actos pertenecían al reducido grupo de españoles residentes en la ciudad. «El ruido que hacían en Nueva York se escuchaba sobre todo en las localidades de origen», en su propia burbuja[20].

Miles de políticos gozan de un injustificable «aforamiento», es decir, del derecho a ser juzgados directamente por el Tribunal Supremo o por los Tribunales Superiores de Justicia de sus comunidades autónomas. Cuando negoció el malogrado acuerdo de gobierno con Ciudadanos, Sánchez prometió reformar la Constitución para abolir los aforamientos. Nada de eso ha ocurrido. Miriam González sostiene que son los políticos los que dan órdenes a los empresarios con sus obsesivas regulaciones económicas, y no al revés.

Dicho de otro modo, más que una reducida casta de los pocos oligarcas, la que manda en España es una casta de cientos de miles de políticos.

Hay pocos mecanismos de control y rendición de cuentas, aparte de las elecciones y, hasta cierto punto, de la labor de la prensa. Los periódicos, tanto los impresos como los digitales, son muy partidistas en España, como lo son, por ejemplo, en Gran Bretaña. Tras la crisis financiera, se han vuelto más dependientes todavía de la publicidad institucional de los Gobiernos de todos los niveles. Aunque algunos de ellos han llevado a cabo importantes investigaciones periodísticas, en general son algo dados a la autocensura. Nadie se atreve a tocar nunca a las grandes empresas privadas españolas, me contó un exministro, debido en parte a lo que estas gastan en publicidad y a su capacidad de patrocinio. En las radios y las televisiones, salvo muy contadas y honrosas excepciones, abundan las tertulias interminables en las que las opiniones ahogan el análisis de los hechos. Las comisiones parlamentarias son inefectivas y predecibles. Los ministros rara vez sienten la necesidad de dimitir cuando cometen errores. España no aprobó una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública hasta 2013, y su funcionamiento ha sido defectuoso. En 2021, la ONG AccessInfo Europe criticó lo que, según ella, era la falta de independencia del Consejo de Transparencia —el organismo encargado de gestionar las solicitudes de información pública— con respecto al Gobierno. Una de las pocas leyes prorrogadas desde los tiempos de Franco, la de secretos oficiales, data de 1969, aunque se enmendó en 1978. En ella no se fija ningún límite temporal para que los documentos confidenciales pasen a ser automáticamente accesibles para el público general. Los historiadores llevan tiempo reclamando reiteradamente una nueva ley. Aunque los sucesivos Gobiernos han lanzado muchas promesas sobre la cuestión, lo cierto es que ninguna se ha materializado todavía[21].

Para empeorar las cosas, los propios partidos han perdido democracia interna. Cuando Felipe González era presidente del Gobierno, solía tener que esforzarse por ganarse el favor de la ejecutiva del propio PSOE. Su vicepresidente, Alfonso Guerra, era su principal rival en el partido. En la actualidad, los líderes tienden a dominar sus partidos sin apenas oposición interna. Tanto Sánchez como Rajoy incorporaron cambios normativos que han hecho que sea más difícil que los comités ejecutivos de los partidos echen a sus máximos dirigentes. La adopción de primarias para elegir a los líderes de cada formación ha introducido un estilo presidencialista de liderazgo en lo que es un sistema parlamentario de gobierno. Los

dirigentes deben ahora sus cargos a los militantes de base más que a los cargos intermedios del partido, pese a que estos suelen estar en disposición de conocer mejor los intereses generales del electorado.

Cuando Sánchez recuperó el liderazgo del PSOE mediante unas primarias en 2018, purgó sin piedad a todas aquellas figuras del partido que se habían alineado con sus rivales internos. Casado mostró una similar inclemencia a la hora de confeccionar las listas electorales para las elecciones generales de 2019. Tampoco Rivera ni Iglesias toleraron disidencias. Para entonces, quedaban ya muy pocos librepensadores en la política nacional. Uno de ellos era Cayetana Álvarez de Toledo, una historiadora aristócrata conocida por expresarse sin pelos en la lengua con un mensaje que mezcla el libertarismo de derecha con una hostilidad hacia las diferencias regionales reminiscente de los *afrancesados* decimonónicos. Casado dio la sorpresa al nombrarla portavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso, un puesto que suele requerir de un especial tacto político. Solo tardó trece meses en ser relevada. Contra lo que suele ocurrir en estos casos, ella optó por seguir en política, como diputada de segunda fila. «En España no estamos acostumbrados al ejercicio de la libertad en los partidos —dijo en una entrevista—. Confundimos la discrepancia con la disidencia y la libertad con la indisciplina»[22]. Prácticamente las únicas voces críticas en el seno de los partidos tienden a ser las de los presidentes autonómicos (los «barones») que tienen sus propios seguidores políticos locales. Por lo demás, los partidos son entidades muy verticales.

El liderazgo de Sánchez se está caracterizando por un estilo particularmente presidencialista. Se trajo a la Moncloa a su gurú electoral, Iván Redondo, nombrándolo director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y dotándolo incluso de poder sobre la maquinaria oficial. Redondo había trabajado previamente para políticos del PP y no les caía bien a muchos socialistas, que nunca se fiaron del todo de él, pero se había mantenido al lado de Sánchez durante las agrias batallas por el liderazgo del partido de 2017 y 2018, y el nuevo jefe del Gobierno valoraba la lealtad por encima de cualquier otra cualidad. Redondo, sin embargo, cometió errores. Influyó mucho en la decisión de Sánchez de repetir elecciones en 2019. Y la desafortunada campaña electoral socialista que llevó al PSOE a caer hasta el tercer puesto en las elecciones autonómicas madrileñas de 2021 llevaba su inconfundible sello. En la remodelación ministerial que Sánchez hizo un par de meses después, destituyó a Redondo e incorporó al Gobierno a políticos socialistas que se habían opuesto a él en las primarias de 2018. Fue un gesto con el que

visiblemente buscaba unir más al partido.

Una Administración pública anquilosada

«Diagnóstico sintético de España: tenemos una sociedad del siglo XXI […], pero una economía del XX […] y una administración pública del XIX», escribió hace poco, a modo de resumen, Víctor Lapuente, politólogo español de la Universidad de Gotemburgo[23]. Como defecto añadido a la invasión política de sus niveles jerárquicos superiores, la Administración padece un problema de rigidez y de obsesión arcaica por los procedimientos antes que por los resultados. El número de funcionarios y empleados públicos en España no es particularmente grande, pero los Gobiernos autonómicos cuentan con numerosos apéndices (en forma de empresas o fundaciones públicas) cuyo fin principal no es otro que dar ocupación a quienes allí figuran en nómina. El número de empleados en los tres niveles de la Administración pública totaliza 3,3 millones, de los que casi la mitad trabajan en el nivel autonómico. El problema radica sobre todo en la mala calidad de esa Administración. Debido a la congelación de plazas de empleo público que siguió a la crisis financiera, la edad media de quienes trabajan actualmente en las Administraciones públicas es de cincuenta y ocho años; muchos de ellos están próximos a jubilarse[24]. Un elevado número trabajan con contratos temporales —una figura de la que han abusado especialmente las comunidades autónomas— y no han recibido mucha formación interna que les permita mantener sus competencias al día. El personal permanente se contrata mediante procesos de examen público (oposiciones) que tienden a priorizar la memorización por encima de la resolución de problemas; estos funcionarios no pueden ser luego trasladados a otros puestos si no dan su consentimiento. Además, a ojos de los usuarios de los servicios públicos, muchas veces es como si los empleados que allí trabajan fuesen los indefensos esclavos de unos sistemas informáticos disfuncionales. Tal como escribió unos meses atrás una científica de la computación refiriéndose a este tema, si Larra viviera hoy en día, en vez de «Vuelva usted mañana» titularía su artículo «Error 404»[25].

La pandemia puso muy de relieve estas limitaciones del sistema. Al principio, el Ministerio de Sanidad tuvo muchos problemas para adquirir material protector. Luego se supo que, tras décadas de descentralización, el ministerio había quedado reducido a poco más que un puñado de envejecidos burócratas sin experiencia alguna en compras. Y tanto el ministerio como los Gobiernos autonómicos tuvieron dificultades para conseguir un rastreo de contactos mínimamente efectivo; se ensayó una aplicación de móvil con ese fin,

pero se abandonó. La dificultad de estas instituciones para registrar información básica sobre lo que estaba ocurriendo quedó ilustrada por el elevado «exceso de mortalidad» observado durante los primeros meses de la pandemia (es decir, por la diferencia entre los fallecimientos atribuidos a la pandemia que se comunicaban, por un lado, y el mucho mayor incremento anómalo de la tasa de mortalidad tal como se recogía en los registros oficiales, por otro). Muchos otros Gobiernos europeos se enfrentaron a dificultades similares, y el personal sanitario español se entregó como nunca en su atención a los pacientes bajo unas circunstancias extraordinariamente duras. Además, tras un lento inicio atribuible a errores en la actuación de la Comisión Europea, la campaña de vacunaciones en España fue impresionante. Fue el primer país en inocular a un 70 % de su población. Pero la fe de los españoles en su sistema sanitario, del que tantas veces se había dicho que era uno de los mejores del mundo, quedó muy tocada, al menos, temporalmente.

También las dificultades que encontró la Administración de la Seguridad Social para poner en marcha el sistema de ingreso mínimo vital revelaron las limitaciones de otra envejecida y rígida rama del Estado. El letargo de la burocracia se pone en evidencia también en su legendaria lentitud para aprobar las solicitudes para adquirir la nacionalidad española. En 2015, el Congreso aprobó una ley que reconoce a los descendientes de los judíos sefardíes expulsados en 1492 el derecho a adquirir la nacionalidad del país. Pierre Assouline Zerbib, escritor francés nacido en Casablanca, la solicitó. Su solicitud tardó cinco años en procesarse. Luego descubrió que un fax (sí, ¡un fax!) con la aprobación de la emisión de su nuevo pasaporte había tardado un año en llegar desde el Ministerio de Justicia, en Madrid, hasta el consulado de España en París[26].

El problema de fondo, como Lapuente subrayaba en su artículo, es que los Gobiernos democráticos no han reformado la Administración pública para llevarla hasta el siglo XXI. Aparte de sus arcaicas políticas de contratación de personal, el sector carece de suficientes gerentes y directivos profesionales de alto nivel. Y tampoco hay procedimientos adecuados que permitan cooperar y compartir información entre el personal de diferentes organismos públicos[27]. El Gobierno prometió invertir miles de millones de euros de la Unión Europea en la mejora de la digitalización de la Administración pública, y también reformarla. Pero tal vez sea más fácil comprar ordenadores nuevos que cambiar las muy arraigadas prácticas de trabajo en el sector.

Otro problema relacionado con el funcionamiento del Estado

español es la poca evaluación que se hace de la eficacia de las políticas públicas, una crítica recurrente en los informes de la Comisión Europea. Tras mucha insistencia desde Bruselas, el Gobierno de Rajoy acordó en 2013 instituir la AIReF, una autoridad fiscal independiente al estilo de la Oficina Presupuestaria del Congreso estadounidense (CBO) y de la Oficina de Responsabilidad Prespuestaria británica. Fue precisamente la AIReF la que elaboró los primeros informes de evaluación del gasto público realizados en España, en los que afloró un abundante despilfarro. Más recientemente, en reiteradas cartas a la revista *The Lancet*, numerosos expertos en salud pública de España y de otros países pidieron una investigación pública exhaustiva de la gestión española de la pandemia que permitiera extraer lecciones de cara al futuro, un llamamiento al que el Gobierno hizo oídos sordos. Sánchez también ha impulsado la elaboración de un informe anual a cargo de académicos externos que evalúe el grado de cumplimiento de su programa de gobierno, pero los exámenes publicados hasta el momento han sido bastante formularios y superficiales.

La Justicia cuestionada

La imagen de la Justicia también ha quedado muy tocada por las sospechas de politización. La Constitución hace especial hincapié en la separación estricta de poderes. Al principio, doce de los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), encargado de dictar los nombramientos, ascensos y traslados de jueces y magistrados, y de supervisar el sistema de Justicia en general, eran elegidos por la propia Judicatura, y los ocho restantes, por el Congreso de los Diputados. Pero, en los años ochenta, el Gobierno socialista impulsó un cambio para que todos los miembros del Consejo fuesen elegidos por mayoría cualificada del Congreso (lo que obligaba a que hubiera siempre un previo acuerdo entre los dos principales partidos). El Ejecutivo justificó la reforma alegando que, en aquellos tiempos, la mayoría de los magistrados eran todavía jueces nombrados por Franco y tenían un fuerte sesgo conservador. Pero, con el tiempo, aquella modificación ha redundado en una politización del proceso. Cada comunidad autónoma tiene, a su vez, un Tribunal Superior de Justicia, cada una de cuyas salas (o de las secciones que se forman dentro de cada sala) está compuesta por tres magistrados elegidos por el CGPJ, aunque a uno de ellos lo selecciona entre una terna propuesta por el Parlamento autonómico correspondiente[28].

El PP dice estar a favor de introducir una nueva reforma que permita que sean los propios jueces y magistrados quienes elijan a los

miembros del CGPJ (que cumplen mandatos reglados de cinco años). Pero cuando Rajoy tuvo mayoría absoluta, no hizo nada por implementar ese cambio; simplemente, se limitó a negociar un acuerdo con Alfredo Pérez Rubalcaba, líder de los socialistas entre 2011 y 2014, para renovar a los miembros del Consejo. En 2018, el nuevo Gobierno socialista y el PP estuvieron a punto de cerrar un pacto para una nueva renovación del CGPJ, pero todo se vino abajo cuando se revelaron unos mensajes de WhatsApp de un senador *popular* en el que este alardeaba de que su partido seguiría controlando «por detrás» la Sala Segunda (la de lo Penal) del Tribunal Supremo29. Desde entonces, el PP lleva más de cinco años negándose a acordar la renovación de los miembros del Consejo. Esto desacredita bastante las constantes afirmaciones de los *populares* en las que se presentan a sí mismos como los principales defensores de la Constitución. Frustrado, el Gobierno anunció la introducción de una ley para que solo se necesitase una mayoría simple del Parlamento para aprobar los nuevos miembros del CGPJ. El anuncio mereció una fuerte reprimenda de la Comisión Europea, muy sensibilizada ya de por sí por la politización de los tribunales nacionales que están impulsando los Gobiernos de Hungría y Polonia, por lo que Sánchez abandonó la idea. La Comisión ha instado a España a garantizar que, al menos, la mitad de los miembros del CGPJ sean jueces elegidos por la propia Judicatura, siguiendo las recomendaciones marcadas por el Consejo de Europa.

Los jueces están autoorganizados —muy a la española— en cuatro asociaciones profesionales separadas, de las que una se inclina hacia la izquierda, otra lo hace hacia la derecha y dos se declaran apolíticas. Aun así, todas ellas tienden a coincidir en muchos puntos. En la práctica, la mayoría de jueces y fiscales son muy independientes, como lo demuestra el hecho de que no les haya temblado el pulso para firmar numerosas condenas por corrupción. En 2020, el propio poder judicial llevó a cabo una encuesta entre mil jueces y magistrados en la que el 99 % afirmaron sentirse completamente independientes para realizar su trabajo. Sin embargo, no es así como los ven muchos españoles. Según una encuesta del Eurobarómetro, un 58 % de las personas consultadas en España opinaban que la Justicia no era muy independiente, y solo un 20 % decían estar satisfechas con su funcionamiento. En las encuestas de ámbito nacional, es el servicio público que recibe sistemáticamente las peores evaluaciones. Quienes critican la Justicia en España señalan detalles como, por ejemplo, que el presidente del Tribunal Constitucional entre 2013 y 2017 había estado anteriormente afiliado al PP. O que el fiscal general del Estado

es nombrado por el Gobierno, que es también el que puede destituirlo. Hubo muchas críticas cuando Sánchez nombró a Dolores Delgado para ocupar ese puesto justo después de haber ejercido como ministra de Justicia. Por otra parte, la legislación española permite a terceros partidos añadirse a las acusaciones en las causas penales personándose como «acusación popular». En algunos casos, esto ha aumentado la presión para que la Fiscalía actúe en las causas por corrupción, pero también ha contribuido a dar cierta imagen general de politización, como, por ejemplo, cuando Vox actuó como acusación popular en el juicio contra los dirigentes independentistas catalanes (pese a que su intervención fue irrelevante desde el punto de vista jurídico)[30].

Más que la falta de independencia, el principal problema de la Justicia en España es su grave falta de personal. En un artículo colectivo publicado en *El País* en 2016, los presidentes de las cuatro asociaciones profesionales de la Judicatura recordaron que, en España, solo había 12,5 jueces por cada cien mil personas. Esa cifra está muy por debajo de la media de la Unión Europea, que es de 21,6, aunque es bastante similar a las de Francia e Italia. El problema es que los españoles son más dados a litigar que los ciudadanos de estos dos últimos países: en 2015, se registraron ciento ochenta y dos causas judiciales por cada cien mil habitantes, frente a las cien que hubo en Italia[31]. También existen en España demasiados partidos judiciales, lo que hace que funcionen hasta ocho programas digitales independientes dentro del sistema. La consecuencia es que la Justicia se mueve con lentitud, lo que suele ser motivo de frustración pública. Los casos de corrupción con políticos del PP implicados seguían aún dirimiéndose en los tribunales hasta más de una década después de los sucesos juzgados, por ejemplo.

En la Judicatura, tienden a predominar las posiciones conservadoras. No es algo que se pueda atribuir ya al legado del franquismo: ningún juez o magistrado en activo fue nombrado por las autoridades de la dictadura. En 1995, entró en vigor un nuevo código penal. Aunque el código civil data de 1889, ha sido reformado en varias ocasiones desde 1978. Lo cierto es que la Judicatura tiende a ser conservadora por naturaleza en la mayoría de países; después de todo, su labor primordial es aplicar el *statu quo* legal y defender el orden público. Aparte del caso de los líderes independentistas catalanes, ha habido tribunales españoles que han emitido sentencias bastante torpes que han suscitado fuertes controversias en dos ámbitos en particular: la libertad de expresión y la violencia sexual. Una reforma parcial del código penal incrementó en 2015 las penas por «discurso de odio» o enaltecimiento del terrorismo, y suprimió la

obligación de demostrar que se hubiera producido una amenaza específica contra un individuo para aplicar tales figuras delictivas. Este es un tema muy sensible en España, donde todavía cicatrizan las heridas dejadas por el terrorismo de ETA y los atentados yihadistas. La reforma era a todas luces iliberal. En los tres primeros años desde su entrada en vigor, más de una cincuentena de personas fueron condenadas en virtud de los nuevos preceptos. Fueron condenas impulsadas por una minoría de jueces ultraconservadores, más que el resultado de un ataque organizado contra la libertad de expresión. De hecho, otros casos judiciales parecidos terminaron en absolución.

En una de esas causas, el rapero Valtònyc fue condenado a cuarenta y dos meses de cárcel por haber hecho enaltecimiento del terrorismo en unos vídeos suyos en YouTube. Huyó a Bruselas para no entrar en prisión y, allí, un tribunal belga se negó a extraditarlo a España. En otro caso, el actor Willy Toledo fue absuelto de una acusación de blasfemia tras haber escrito una publicación en Facebook en la que se «cag[aba] en Dios y […] en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María» en señal de apoyo a tres mujeres acusadas a su vez por haber llevado en procesión una vagina gigante de plástico en vez de la Virgen María durante la Semana Santa de Sevilla (y que también terminaron siendo absueltas de similares cargos). Tal vez el caso más famoso de todos fue el que implicó el encarcelamiento durante nueve meses del rapero Pablo Hasél por haber incitado repetidamente a la violencia en diversos tuits y en vídeos de YouTube. Entre los mensajes allí difundidos, decía cosas como: «¡Merece que explote el coche de[l líder socialista vasco] Patxi López!» o «¡Que alguien clave un piolet en la cabeza a[l exministro socialista] José Bono!». A Hasél también lo multaron (sin pena de prisión añadida) por injurias a la monarquía. La sentencia fue minuciosa y selectiva, aunque no por ello menos discutible. Y dio pie a seis noches de disturbios violentos en Barcelona promovidos por una combinación de radicales anarquistas e independentistas.

Otro caso tristemente famoso fue el de la sentencia que la Audiencia Provincial de Navarra dictó por una violación grupal cometida durante los sanfermines de Pamplona. Los magistrados condenaron a los seis acusados (conocidos como «La Manada») por un delito de abuso sexual por el que les impusieron una condena de nueve años de cárcel, aunque los dejaron en libertad provisional mientras la sentencia estuviera recurrida. Aquello provocó un estallido de indignación popular generalizada. El Tribunal Supremo corrigió posteriormente el veredicto de la instancia inferior: endureció el delito del que se acusaba a los miembros de «La Manada» y les impuso una

pena de quince años que debían cumplir de inmediato. En parte a raíz de ese caso, el Gobierno impulsó finalmente un cambio, promovido por la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el derecho penal sobre los casos de violación y sobre la figura del consentimiento sexual, la controvertida ley conocida como «Solo sí es sí». Sin embargo, esto tuvo consecuencias perversas. Debido a errores en su redacción —de los cuales Montero fue advertida y escogió ignorar— los jueces fueron obligados a rebajar las penas a más de mil condenados por delitos sexuales y excarcelar a ciento quince en los primeros nueve meses de vigencia de la nueva ley. Sánchez, con el apoyo del PP pero la oposición de Podemos, finalmente enmendó la ley para corregir este error. Este episodio, y la petulante actitud de Montero, minó el apoyo público hacia Podemos[32].

En otros contextos, los tribunales españoles muestran con frecuencia un escrupuloso respeto por los derechos y las libertades individuales. Durante la pandemia, algunos tribunales superiores de Justicia invalidaron medidas restrictivas de tales derechos, como toques de queda o límites al movimiento de personas. En un dividido y muy controvertido fallo, el Tribunal Constitucional dictaminó que el Gobierno había actuado de forma inconstitucional al invocar un «estado de alarma» para decretar el confinamiento de nueve semanas que impuso al comienzo de la pandemia, en vez de declarar un «estado de excepción», más duro que el anterior. El dictamen no tuvo ningún efecto práctico inmediato, pero sí implica una necesaria revisión de la legislación sobre salud pública de cara a futuras epidemias.

Podemos no podía

Una década después de las concentraciones de los *indignados,* España es, en muchos sentidos, un país diferente del de entonces. El legado de aquel movimiento es palpable, pero dista mucho de ser claro y directo. Se ha actuado sobre algunas de las fuentes de su enfado, al menos en parte. Se ha reformado la ley para que los bancos ya no puedan dispensar a sus clientes hipotecarios un trato tan abusivo como el de antes. «Todavía hay corrupción, pero ya no hay impunidad», me comentó Bescansa en 2021[33]. Siete años después de la publicación del libro de Iglesias, casi todos los individuos que él denunciaba en sus páginas por corruptos e impunes están —o han estado— en prisión. Según el *Financial Times*, de los cuarenta y siete directivos bancarios sentenciados a penas de cárcel en todo el mundo en 2018 como consecuencia de la crisis, once lo fueron en España, el segundo mayor número de ellos después del de Islandia

(veinticinco)[34]. Entre ellos se contaban Miguel Blesa —expresidente del consejo de administración de Caja Madrid—, que se suicidó poco antes de la fecha que estaba prevista para su entrada en prisión, y Rodrigo Rato, exministro de Economía en los Gobiernos de Aznar y exdirector gerente del FMI, que sucedió a Blesa y que también estuvo al frente de Bankia cuando nació la nueva entidad (sucesora de Caja Madrid). Según un recuento publicado en prensa, en 2017 había noventa políticos o exaltos funcionarios en prisión en España[35]. Es posible que esto se debiera a un cambio de actitud de magistrados y fiscales, como Bescansa me dio a entender. Pero puede también que la Justicia en España proceda tan lenta como inexorable.

Ahora bien, el «no nos representan» seguía siendo en algunos aspectos una crítica sin respuesta. Muchos españoles continúan considerando que el sistema político no se ocupa de lo que a ellos les preocupa o interesa. En una encuesta del Eurobarómetro de finales de 2020, el 53 % de las personas consultadas en España dijeron estar insatisfechas con su democracia. Ese porcentaje, que es del 41 % para el promedio de la Unión Europea, está al nivel del descontento de países como Francia o Grecia. Y si bien la satisfacción con la democracia ha aumentado desde 2014, sigue estando muy por debajo de su nivel de 2008, el anterior a la crisis financiera. El Eurobarómetro detectó también que los españoles tenían mucha menos confianza en su sistema de gobierno (tanto nacional como autonómico), en su Parlamento y en sus partidos políticos que el europeo medio.

La renovación política ha seguido siendo una asignatura pendiente. Las mejores oportunidades de estos últimos años se desperdiciaron. Tanto Podemos como Ciudadanos terminaron exhibiendo muchos de los vicios de la «vieja política» de la que decían abominar. Diez años después de aquel 15 de mayo, tanto Rivera como Iglesias habían dejado sus puestos como máximos dirigentes de una y otra formación. Tras las elecciones de 2015, Pedro Sánchez, que se había convertido en el líder socialista el año anterior, trató inicialmente de alcanzar un acuerdo con Podemos para formar gobierno. Ambos partidos sumaban ciento cincuenta y nueve de los trescientos cincuenta escaños en el Congreso de los Diputados, y si terminaban recibiendo apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos, tenían una posibilidad real de gobernar. Pero dado que Podemos se estaba acercando mucho a superar en votos al PSOE, para Sánchez no dejaba de ser un peligroso rival antes que un aliado. E Iglesias, con los sesenta y nueve escaños de su formación, tentó demasiado a la suerte: quería para su partido los Ministerios de Defensa, Interior y Justicia,

el núcleo del poder duro del Estado. Esto solo sirvió para alarmar al resto de la escena política sobre sus potenciales intenciones[36]. Cuando esas negociaciones fracasaron, los socialistas (que habían cosechado noventa escaños) comenzaron a hablar con Ciudadanos (que tenía cuarenta). Ambas formaciones acordaron un programa amplio y coherente de reformas, entre las que se incluía la abolición de las diputaciones provinciales. Pero ni Podemos ni el PP quisieron apoyar aquella coalición potencial. Así que, tras la repetición de las elecciones en junio de 2016, en la que Podemos no aumentó en escaños y el PSOE (con cinco menos) y Ciudadanos (con ocho menos) perdieron terreno, Rajoy continuó gobernando en minoría dos años más.

Mejor oportunidad se presentó aún tras las elecciones de abril de 2019. Sus resultados brindaron a España una ocasión de oro para que se formase la coalición de gobierno reformista fuerte que el país necesitaba. Entre los socialistas (con ciento veintitrés escaños) y Ciudadanos (con cincuenta y siete) sumaban mayoría absoluta. Pero, para entonces, Rivera ya actuaba convencido de que podía llegar a sustituir al PP como principal partido del centro-derecha español, igual que AP (partido antecesor del PP) había hecho con la UCD de Suárez en los años ochenta. Además, jamás perdonó a Sánchez que se le hubiese adelantado presentando la moción de censura de ese año contra Rajoy. Al comienzo de la campaña electoral, rechazó de plano cualquier posible alianza con Sánchez. Tampoco este estaba demasiado por la labor de negociar con Ciudadanos: ambos líderes se detestaban[37]. Pero como líder de un partido que decía ser de alma centrista, la negativa de Rivera de buscar aliados a ambos lados del espectro político resultaba incomprensible y terminaría siendo letal. Los votantes le culparon —con razón— más que a ningún otro candidato por el hecho de que no se hubiera formado Gobierno tras las elecciones y por tener que acudir nuevamente a las urnas en noviembre de 2019 en las cuartas elecciones generales en cuatro años. Ciudadanos quedó prácticamente borrado del Congreso, reducido a diez escaños. Perdió el 60 % de los 4,2 millones de votos que había obtenido en abril. Rivera renunció entonces a todas sus funciones políticas. Su sustituta, Inés Arrimadas, la joven vencedora de las elecciones autonómicas catalanas de 2017, era menos petulante y más centrista, pero tuvo que jugar con unas cartas mucho peores que las de su predecesor.

El error de Rivera entregó en bandeja a Pablo Iglesias la oportunidad para que Podemos entrara en el Gobierno en coalición con Sánchez. Pero Podemos ya no era el proyecto amplio, colegiado e idealista de sus primeros tiempos. Iglesias había ido apartando a todos

aquellos que habían cuestionado su liderazgo o su línea política. Entre ellos, estaba Errejón, a quien Monedero, al más puro estilo estalinista, lo acusó de «construir un partido dentro del partido». Errejón quería un liderazgo colectivo, una mayor implicación de Podemos en la política parlamentaria y un llamamiento continuado a los españoles que tradicionalmente no apoyaban a la izquierda. Iglesias quería que el partido tuviera un líder todopoderoso (él mismo) y que Podemos tuviera un pie puesto en la lucha política callejera. Errejón perdió esa batalla en el segundo congreso del partido celebrado en el pabellón madrileño de Vistalegre a comienzos de 2017. Los delegados asistentes gritaban «¡unidad!, ¡unidad!», pero lo que hubo allí fue una escisión. «Estamos en riesgo de cometer algunos de los errores de la izquierda tradicional en España —advirtió Errejón en vísperas del congreso—. La cultura del enemigo interno se sabe cómo empieza pero no cómo acaba»38. Tras su degradación en el escalafón del partido en Vistalegre II, Errejón terminaría yéndose de Podemos para formar su propio partido regional en Madrid. Bescansa también abandonó. E Iglesias instaló a Irene Montero, su compañera sentimental, como su segunda al frente del partido en una maniobra que a muchos les pareció un caso paradigmático de patrimonialización del poder.

En vez de construir una organización nacional del partido, Podemos había optado por asociarse con movimientos izquierdistas locales por ejemplo en Andalucía, Cataluña, Galicia y Valencia. Esto le permitió crecer más rápidamente, pero también representaba un hándicap cuando esas otras formaciones optaban por separarse o perdían fuelle. Solo un pequeño número de los alcaldes y alcaldesas de Podemos elegidos en todo el país en 2015 fueron reelegidos cuatro años más tarde. Entre ellos estaba Ada Colau, activista antidesahucios que, cuatro años antes, había sido elegida alcaldesa de Barcelona. Decía abanderar un nuevo modelo de gestión urbana caracterizado por una reducción del uso del automóvil, el crecimiento de la vivienda pública, la prohibición de la apertura de nuevos hoteles en el centro de la ciudad y el control de los pisos turísticos ilegales. También instituyó un equipo mediador que, según ella, consiguió frenar unos diez mil desahucios. Sabía hablar y sabía poner el acento en aquellas medidas que más contento podían tener a su electorado. Pero sus críticos la acusaban de desatender ciertas funciones básicas de un ayuntamiento, como la seguridad y la limpieza. En 2021, buena parte del centro de Barcelona transmitía cierta sensación de dejadez y descuido. Ella perdió su puesto en las elecciones municipales de 2023.

Iglesias transformó Podemos en una copia de la Izquierda Unida con la que se alió en 2016 (contra la oposición de Errejón, entre

otros). Su apoyo electoral descendió, pero parecía haber hallado un suelo sólido de entre el 10 y el 12 % de los votantes. Sin embargo, la credibilidad de Iglesias quedó seriamente dañada cuando, en 2018, se supo que él y Montero se acababan de comprar un chalé de seiscientos mil euros con piscina en Galapagar, una localidad de un alto nivel de renta en las afueras de Madrid. A muchos les pareció que con aquel gesto se había integrado en la casta. La entrada en el Gobierno tampoco sirvió para reactivar el voto de Podemos. El partido se apuntó el mérito del incremento del salario mínimo y de la actitud progresista del Gobierno de coalición en temas sociales, aunque los socialistas reclamaron lo mismo. A excepción de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo, los ministros de Podemos no destacaron especialmente y se ocuparon de carteras bastante pequeñas, desgajadas de antiguos ministerios más grandes.

Era evidente que a Iglesias se le veía más en su salsa como agitador que como gestor. Los ministros de Podemos defendían a menudo en público su línea política propia, aunque esta se contradijera con la oficial del Gobierno en temas como la monarquía o la OTAN, instituciones a las que criticaban abiertamente. En el PSOE causó indignación la analogía que estableció Iglesias comparando a Puigdemont con los exiliados republicanos de la Guerra Civil. Este activismo retórico constante se debía, en parte, a la lógica preocupación de los *podemitas* por que su formación no perdiera su identidad ni su perfil público eclipsada como socio menor de la coalición. Pero contribuyó a generar una permanente sensación de inestabilidad en el seno mismo del Gobierno de Sánchez. Más que una coalición cohesionada como las que se estilan en el norte de Europa, muchas veces parecía una alianza etérea. Pronto se supo que, por el propio acuerdo de coalición, Sánchez no estaba autorizado a destituir a los ministros de Podemos. Pero Iglesias parecía personalmente incómodo con su situación; muchas veces, su sonrisa mudaba en un mohín de desagrado. Irene Montero y él se enfrentaban a diario a las ruidosas protestas de un reducido grupo de manifestantes de ultraderecha en las inmediaciones de su chalé, una forma de acoso que le habría granjeado más simpatías a la pareja si el propio Iglesias no la hubiese alentado en el pasado con protestas similares contra los banqueros o silenciando a gritos a oponentes políticos en actos de la Complutense.

En marzo de 2021, Inés Arrimadas, en un intento chapucero de demostrar que Ciudadanos era un partido bisagra de centro, urdió con La Moncloa un plan para derribar al Gobierno autonómico del PP en Murcia con el que formaba coalición. Lo que siguió fue un ejemplo de

teoría del caos, pues aquel movimiento tan aparentemente menor generó unas ondas que resonaron en toda la política española. Isabel Díaz Ayuso, la joven presidenta autonómica de Madrid y estrella emergente del ala conservadora del PP, puso fin de inmediato a su coalición con Ciudadanos en el Gobierno madrileño y convocó unas elecciones sorpresa. Iglesias anunció su dimisión como vicepresidente del Gobierno nacional para presentarse como candidato por Podemos a aquellos comicios autonómicos. Mostrando que carecía de un sentido de ironia, pidió a Más Madrid, el partido de Errejón, que respaldara su candidatura. Pero Más Madrid ya tenía a su propia candidata, Mónica García, médica anestesióloga del hospital público 12 de Octubre de la capital. Fue la propia García la que elegantemente bajó los humos a Iglesias cuando declaró: «Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos»[39]. Iglesias había presumido de feminismo e incluso había cambiado el nombre formal de su partido de «Unidos Podemos» a «Unidas Podemos». Pero pocos se dejaron engañar por aquel gesto de uno de los políticos españoles que más se había comportado como un macho dominante en su propia formación. «No podemos sumar […] más testosterona», añadió García dirigiendo una indisimulada indirecta a su rival. Errejón pudo vengarse así de lo acaecido en el congreso de Vistalegre II. Iglesias anunció solemnemente que aquellas elecciones madrileñas iban a ir de «democracia o fascismo». Pero el electorado se decantó por las invocaciones de Díaz Ayuso a la «libertad» de mantener los bares abiertos durante la pandemia y a la baja fiscalidad, y, en segundo lugar, por la promesa de García de aumentar el gasto en sanidad. El PP obtuvo una victoria aplastante (con un 45 % de los sufragios) y Más Madrid (con un 17 %) derrotó no solo a Podemos (en quinto lugar, con el 7 %), sino también a los socialistas. A nadie sorprendió que Iglesias anunciara entonces su retirada del primer frente de la política, aunque enseguida regresó como opinador televisivo. Su salida no puso solución a los problemas de Podemos. Yolanda Díaz, una comunista que, en no pocas ocasiones, parecía encajar mejor con la línea de los socialistas, se propuso crear un movimiento amplio de izquierda al que llamó Sumar. Ahí chocó con el aparato que había quedado al frente de Podemos tras la marcha de Iglesias. En cuanto a Ciudadanos, fue aniquilado como contendiente electoral en Madrid; quedaba así finiquitado y listo para su extinción o para su absorción por el PP.

La imperturbable resistencia de Pedro Sánchez

Los dos partidos mayoritarios tradicionales habían quedado mermados y maltrechos. La suma de sus votos respectivos se había desplomado desde el 84 % en 2008 hasta el 49 % en noviembre de 2019. Pero habían sobrevivido y, en el fondo, continuaban dirigiendo el sistema político. Ello delataba la fortaleza estructural de la partidocracia, ayudada por un régimen electoral que es el más tendente al mayoritarismo de entre todos los europeos que usan un sistema de representación proporcional. Su circunscripción electoral es la provincia y la ley otorga un mínimo de dos escaños a cada una de ellas. Esto significa que las provincias menos pobladas (sobre todo, en Castilla) están sobrerrepresentadas, lo que favorece al PP. En provincias en las que se disputan entre seis y nueve escaños, los beneficiados son los dos partidos principales. Y en el resto, el régimen electoral español arroja resultados bastante proporcionales. Se trata de un sistema que penaliza a aquellos partidos de ámbito nacional que obtienen menos del 15 % del voto total y un apoyo bastante repartido por todas las circunscripciones; ese era el caso (en especial) de Ciudadanos y también, en cierta medida, de Podemos.

Pero la supervivencia de los partidos tradicionales ha demostrado también la capacidad de estos para adaptarse. Uno de los legados del 15M en la política española ha sido un cierto culto a la juventud, aunque haya habido que pagar por ello el precio de la inexperiencia. Sánchez, que cumplió cincuenta y un años en febrero de 2023, era el mayor de los líderes de los partidos que compitieron en las elecciones generales de 2019. Dirigía un partido que estaba debilitado, pero que había superado una posible amenaza de *sorpasso* de Podemos y que podía presumir de haber escapado a la casi erradicación que habían sufrido sus homólogos socialistas de Grecia y Francia. Este éxito no era inevitable. Rubalcaba, predecesor de Sánchez al frente del PSOE, era en muchos sentidos un político más sustancioso. Pero este socialdemócrata tradicional poco pudo hacer ante el oprobio que cayó sobre los socialistas después del giro de ciento ochenta grados que tuvo que dar Zapatero para aceptar la política de austeridad, forzado a ello por las autoridades europeas y los mercados financieros. «Hemos perdido credibilidad entre parte de nuestro electorado, como les ha ocurrido a todos los partidos en el poder en Europa —me comentó Rubalcaba en 2012—. El reproche que nos hicieron era doble: por tomar medidas poco socialistas, que no gustaban, y porque ni siquiera funcionaban». Él aconsejaba paciencia y decía que sería «muy peligroso» desplazarse más hacia la izquierda.

Pero ese fue, a simple vista, al menos, el rumbo que tomó Sánchez. Para hacerse con el dominio de su partido, tuvo antes que

librar una cruenta batalla interna que casi termina por dividirlo por la mitad. Sánchez era un semidesconocido diputado por Madrid la primera vez que fue elegido secretario general del PSOE por muy estrecho margen en un congreso del partido en 2014, después de que Rubalcaba hubiese dimitido del cargo tras una derrota en unas elecciones europeas. Sánchez ganó básicamente porque Susana Díaz, la poderosa presidenta de Andalucía (tradicional granero de votos socialistas), decidió apoyarlo para que le guardase el sitio para cuando ella decidiera finalmente asumir las riendas del partido. Pero la idea de Sánchez era otra. Político acartonado y limitado en ciertos aspectos, atesora también virtudes como la audacia, la imperturbabilidad y una extraordinaria resiliencia. En las elecciones generales de 2015 y 2016, sufrió derrotas peores incluso que las de Rubalcaba, pero él las presentó como victorias porque Podemos no había rebasado a los socialistas. No convenció, sin embargo, a Susana Díaz ni a muchos de los barones del PSOE, que consideraron que había llegado la hora de sustituirlo.

A la petición de que los socialistas se abstuvieran en el Congreso para permitir que Rajoy gobernara en minoría, Sánchez había respondido con un contundente tuit: «No es no. ¿Qué parte del "no" no ha entendido?». Con España en piloto automático, sin Gobierno durante diez meses, Sánchez comunicó inicialmente a Rubalcaba y a otros dirigentes socialistas que, al final, el partido se abstendría. Pero, luego, cambió de parecer. Se dio cuenta de que el del «no es no» era un mensaje popular entre las bases del PSOE, que entendían que aquella era la vía para recuperar la dignidad del partido. «La sociedad se había podemizado y el PSOE se había podemizado», le confesó Óscar López, muy próximo a Sánchez en aquel entonces, a Antonio Caño, biógrafo de Rubalcaba[40]. Susana Díaz y los barones socialistas creían que el partido tenía la obligación de abstenerse por responsabilidad y por el bien de la democracia española. Entrevieron en aquella intransigencia de Sánchez una oportunidad para echarlo y la aprovecharon en una fratricida reunión de la ejecutiva del partido en octubre de 2016. Al final, Sánchez les demostró hasta qué punto habían errado el cálculo: el exsecretario general movilizó a las bases contra la directiva del partido y recuperó su puesto en unas primarias en mayo de 2017. Aquella experiencia lo marcó visiblemente.

Sánchez no es ningún ideólogo. Su ideario era el típico de un socialdemócrata europeo convencional. Pero como líder, sus posiciones políticas han venido más determinadas por sus circunstancias de lo que suele ser el caso. De ahí que no tuviera reparos en aproximarse a Podemos y en aceptar el apoyo de los

nacionalistas, una opción que Rubalcaba había bautizado como «Gobierno Frankenstein». Era el tipo de fórmula que, por ejemplo, los socialdemócratas alemanes, que habían aprendido muy de cerca que el comunismo era una prisión, descartaron ya desde un principio. Los críticos con Sánchez, tanto dentro como fuera del PSOE, lo acusan de no tener principios, de que su palabra no es de fiar y de que no es más que un estratega decidido a aferrarse al poder a cualquier precio. No faltan pruebas que confirmen esas acusaciones. Pero también se puede decir que supo interpretar mejor que esos críticos el estado de ánimo político imperante en España tras el 15M. Lo entrevisté en noviembre de 2018, cuando aún no había formado una coalición formal de gobierno con Podemos, pero él ya defendía acuerdos con este último partido: «Esto demuestra que nuestro sistema político es capaz de incluir a fuerzas que, en algún momento, tal vez se situaron en sus márgenes […], pero que están evolucionando». La clave, decía, era que «España está experimentando un cambio en su sistema político». Tres años después, podría haber presumido de haber domesticado a Podemos y de haber contribuido a convertirlo en un partido institucional (en parte, al menos). Aun así, su alianza con Podemos ha tenido costes. El Gobierno ha dedicado demasiado tiempo y energía política a consultar internamente decisiones que, en ocasiones, pareció olvidarse de consultar externamente.

Puede que la única verdadera línea roja democrática que Sánchez haya cruzado (hasta 2022 por lo menos) fuera la de permitir que se negociara con EH Bildu (véase el capítulo 6) el apoyo de esta formación en las votaciones sobre los presupuestos generales del Estado y sobre otras medidas impulsadas por el Gobierno. También antepuso el interés político a corto plazo a la defensa del Estado democrático con su torpe respuesta a la denuncia de que el Gobierno español había espiado entre 2017 y 2020 los teléfonos móviles de sesenta y cinco personas vinculadas con el independentismo catalán, una información publicada en la revista *New Yorker* en abril de 2022 tras una investigación de Citizen Lab, organización especializada en estudiar y denunciar casos de control ilegítimo de la información personal[41]. Citizen Lab afirmaba que, en sesenta y tres casos, había detectado el uso del *software* de vigilancia Pegasus, diseñado por una compañía israelí que solo se lo vende a Gobiernos. Los partidos nacionalistas catalanes y vascos, y también Podemos, expresaron su indignación ante la noticia. Esquerra amenazó con romper toda cooperación con el Gobierno central, lo que significaba que este podría tener muy difícil conseguir apoyos parlamentarios suficientes a partir de entonces. Sánchez reaccionó a la defensiva, aunque, con ello,

pareció dar credibilidad al informe de Citizen Lab. Envió a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, a reunirse con la Generalitat en Barcelona y prometió varias investigaciones[42]. Poco después, en un extraño giro de los acontecimientos, Bolaños anunció que los teléfonos de Sánchez y de los ministros de Defensa y del Interior también habían sido objeto de intromisiones «externas e ilícitas» en mayo y junio de 2021.

La jefa de los Servicios de Inteligencia, Paz Esteban, compareció a puerta cerrada ante una comisión del Congreso para informar a los diputados que su organización había vigilado los teléfonos de dieciocho (no de sesenta y cinco) dirigentes y activistas catalanes, incluido el del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cuando se produjeron en Cataluña las violentas protestas contra la sentencia condenatoria de los líderes independentistas en 2019. También se supo que, según Esteban, todo aquello se había hecho con las órdenes judiciales correspondientes y que no se había cometido ilegalidad alguna. Margarita Robles, la ministra de Defensa, dio entonces la cara y recordó que los Servicios de Inteligencia solo habían cumplido con su deber: «¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos?»[43]. Sin embargo, el Gobierno destituyó a Paz Esteban sin comunicar ninguna causa explícita para ello, y la convirtió así en cabeza de turco de todo aquel caso. El escándalo debilitó la posición de Robles, que, hasta entonces, era una de las ministras más populares del Gobierno. Un grupo de expertos del ámbito universitario español cuestionó la exactitud y la imparcialidad del informe de Citizen Lab por, entre otras cosas, el destacado protagonismo que un emprendedor del ámbito de las nuevas tecnologías que simpatizaba con la causa del independentismo catalán había tenido en su elaboración[44]. Citizen Lab siempre ha insistido en la independencia de su investigación[45].

La aparente imperturbabilidad de Sánchez tiene su reverso negativo en la percepción, bastante extendida entre la opinión pública, de que es un político falto de empatía. Durante los dos primeros meses de pandemia y confinamiento, compareció por televisión todos los fines de semana para dar comunicados y responder dudas y preguntas. Pero cuando la primera ola de la pandemia remitió y el PP se negó a apoyar una prórroga del estado de alarma, Sánchez pareció tirar la toalla y desentenderse de su responsabilidad traspasándosela toda a las comunidades autónomas. Se convirtió así en el presidente de las buenas noticias: aparecía para hablar de la ayuda europea y de las vacunaciones, pero no se le veía el pelo

cuando los picos de las sucesivas olas de la COVID-19 azotaban el país.

Aunque con retraso respecto al PSOE, el PP también padeció la misma falta de rumbo que tanto inquietaba a Rubalcaba. Los escándalos de corrupción dañaron su credibilidad. Tras la dimisión de Rajoy como líder del partido, este eligió para el puesto en unas primarias a Pablo Casado, quien tenía solo treinta y siete años en aquel momento. Casado era un orador consumado, pero un estratega inexperto. Bajo Aznar y Rajoy, su partido había actuado como una especie de espaciosa iglesia que había acogido y reunido a ultraliberales económicos, democristianos y nacionalistas católicos españoles. Pero esa coalición se fragmentó con el ascenso de Ciudadanos, primero, y de Vox, a continuación. Casado, como Sánchez, se enfrentaba al reto de conseguir que su partido siguiera siendo la fuerza preeminente en su mitad del espectro político, aunque en ocasiones tuviera que colaborar con un rival más radical (Vox, en su caso) en algunos Gobiernos autonómicos. Su respuesta a ese desafío consistió en ejercer una desaforada oposición a todo lo que hiciera el Gobierno, tanto si era sensato como si no, y en oscilar una y otra vez entre imitar a Vox y apelar al centro político. En el fondo, esa variabilidad reflejaba la influencia de las diferentes corrientes internas del PP. Los *populares* gobernaban en Andalucía (desde 2018), en Castilla y León y en Galicia con presidentes moderados (en los dos primeros casos, en coalición con Ciudadanos). En Madrid, Díaz Ayuso representaba el ala derechista del partido, y su atractivo político era muy alto en Castilla, aunque no necesariamente tanto en la España litoral.

Casado no se cansaba de decir que la corrupción de su partido era cosa ya del pasado. Como iniciativa dirigida a trazar una línea de separación simbólica con aquellos otros tiempos, anunció que el PP abandonaría su sede central de la calle Génova de Madrid, que, según las acusaciones publicadas en prensa, había sido reformada poco antes con dinero procedente de donaciones irregulares. Los *populares* lo tenían todo a favor para absorber los restos de Ciudadanos; Vox, por el contrario, representaba un mayor problema para ellos. Cuando Santiago Abascal, el líder de esta última formación, presentó una moción de censura contra Sánchez en octubre de 2020, Casado aprovechó el debate en el Congreso para lanzar un abrasador ataque contra el partido ultraderechista, que, según dijo, fracciona la derecha y, de ese modo, «ofrece a la izquierda una garantía de victoria perpetua». También acusó a Abascal de dividir a los españoles. «No queremos ser como ustedes —prosiguió—. Hasta aquí hemos llegado.

O Vox o España»[46]. Sin embargo, el PP no aplicaba esa misma política a nivel autonómico.

Un alto dirigente *popular* me argumentó que, para recuperar a su electorado perdido, el partido tendría que saber mostrarse como una alternativa de gobierno viable a Sánchez y a los socialistas. Pero Casado aportaba más ruido y confrontación que sentido de Estado. Nunca llegó a estar a la altura de su cargo. Y, a principios de 2022, su liderazgo implosionó. Para empezar, instó desacertadamente al presidente autonómico *popular* de Castilla y León a convocar unas elecciones anticipadas de las que Vox salió como el gran vencedor moral. Y, luego, su pugna latente con Díaz Ayuso —antigua protegida suya que, en apenas unos meses, pasó a convertirse en su gran rival— escaló súbitamente a una guerra civil abierta de la que solo uno de los dos podía salir ganador. Los líderes regionales del partido le dieron la espalda a Casado y forzaron su dimisión; demostraron así que, aunque desbancar a los líderes de las formaciones políticas no es tarea fácil en España, no es imposible. De los cuatro jóvenes líderes de sendos partidos nacionales que se habían enfrentado en las elecciones generales de 2019, solo Sánchez se mantenía aún en pie.

El PP celebró entonces un congreso extraordinario que eligió a Alberto Núñez Feijóo como presidente del partido por aclamación; Feijóo dimitió de su cargo de presidente autonómico de Galicia y se incorporó a las Cortes como senador. «Que nadie cuente conmigo para participar en este entretenimiento infantil en el que ha degenerado la política española», declaró[47]. Enseguida comenzó a marcar un perfil más maduro y moderado, y a centrar su crítica al Gobierno en la economía y en la defensa de «la singularidad política, cultural y lingüística de los territorios»[48]. Era quien mejores expectativas ofrecía de conjurar un *sorpasso* de Vox por la derecha. El apoyo a esta última formación había repuntado en los sondeos de opinión hasta el 18 % hacia finales de 2021. El partido aportó sus votos para la formación de Gobiernos del PP en Andalucía, Madrid y Murcia, y en el Ayuntamiento de Madrid, y también acuerdos para sustentarlos (aunque en el caso del consistorio madrileño, solo al principio). A cambio, no recibió más que concesiones simbólicas, como el recorte de unos seiscientos mil euros de la partida inicialmente prevista para ayuda a inmigrantes en Andalucía, o el bloqueo de una declaración contra la violencia de género en Madrid, por ejemplo[49]. En Castilla y León, sin embargo, insistió en entrar en el Gobierno autonómico. El problema de Vox era que sus líderes eran bastante mediocres en general y que al partido le estaba costando mucho construir una organización nacional, pues las escisiones y las divisiones se sucedían

en algunas provincias. La llegada de Feijóo como líder nacional del PP dio enseguida un fuerte impulso a su partido en las encuestas, al tiempo que hacía que cayera en ellas el apoyo a Vox. En junio de 2022, el PP obtuvo una victoria arrolladora (por mayoría absoluta) en las elecciones autonómicas andaluzas con un candidato moderado, Juanma Moreno Bonilla.

La política polarizada

Los legados más visibles del 15M han sido la polarización política y la «crispación» (es decir, el enfrentamiento permanente). La crispación comenzó ya en los años noventa con José María Aznar y se exacerbó durante los Gobiernos de Zapatero (véase el capítulo 1). Pero aun entonces, entre bambalinas seguía habiendo un diálogo interpartidista y, en grandes temas como la lucha antiterrorista, un espíritu de acuerdo. Rubalcaba —el último de los miembros de los Gobiernos de Felipe González que por entonces continuaba en la primera línea de la política— personificaba muy bien esa manera de hacer política. Cuando era el máximo dirigente del PSOE, mantuvo reuniones casi mensuales con Rajoy para hablar de la crisis en Cataluña, y gestionó conjuntamente con el presidente la abdicación del rey Juan Carlos I en 2014[50]. Pese a sus mutuas discrepancias políticas, mantenían una cordial relación personal.

Esos tiempos quedaron atrás. El lema de Sánchez de 2016, «no es no», marcó un nuevo tono. Sánchez colaboró con Rajoy por la cuestión catalana en 2017. Pero estuvo meses sin hablar con Casado después de que este accediera al liderazgo del PP. Ambos fueron incapaces de alcanzar acuerdos en temas sobre los que debería haber resultado sencillo —cuando no automático— firmar un pacto nacional. Uno y otro buscaron aprovecharse políticamente de la pandemia, por ejemplo. Este enfrentamiento sin cuartel alcanzó cotas de especial mezquindad cuando el Gobierno de Sánchez incorporó una diatriba anti-PP, más propia de un panfleto electoral, en el preámbulo del texto de una ley publicada en el *Boletín Oficial del Estado*[51]. También ha destacado entre sus consecuencias más negativas el bloqueo irresponsable que el PP ha hecho de la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. En Bruselas, eran varios los diplomáticos europeos que se mostraban sorprendidos por tan desleal oposición de los *populares*, la cual se extendía más allá del politiqueo normal en el Parlamento Europeo y se traducía incluso en presión política sobre la Comisión Europea para que no aceptara las políticas de su propio Gobierno nacional. En cualquier caso, la crispación no era una práctica privativa de los dos principales partidos: la

polarización del debate y la denigración del oponente formaban parte del repertorio cotidiano tanto de Podemos como de Vox.

La división izquierda-derecha es más pronunciada en España que en muchos otros países. Aunque los datos de los que se dispone al respecto son limitados, algunas encuestas muestran que en la sociedad española estaba creciendo un fenómeno que los politólogos denominan «polarización afectiva»: la tendencia de los votantes de un partido a desconfiar y renegar de las actitudes de los votantes de otro. Esto atañe especialmente a las cuestiones de la identidad y de la unidad nacional, y, en menor medida, a las de la fiscalidad y la inmigración[52]. El votante español medio se sitúa ligeramente en el centro-izquierda (más a la izquierda, de hecho, que en otros países europeos). Esto obedece a cierta reacción histórica contra la dictadura franquista, pero también evidencia una preferencia general por el Estado del bienestar. Se explica así que los socialistas hayan gobernado durante el doble de tiempo que el PP. También ayuda a entender por qué, hasta 2015, el PP recurrió más a la crispación que el PSOE cuando fue el principal partido de la oposición[53]. Cuando el poder cambiaba de manos no lo hacía tanto (por lo general) porque los votantes cambiaran de bando, sino porque los defraudados electores del partido gobernante hasta entonces optaban por abstenerse.

Podría parecer que la reciente conformación de un sistema multipartidista serviría para desterrar la crispación y fomentar la cooperación. Pero ha hecho justamente lo contrario. Donde antes había dos grandes partidos enfrentados ahora hay dos grandes bloques multipartidistas igualmente hostiles entre sí, lo que ha dado pie a una dinámica política centrífuga en la que los socialistas compiten y, al mismo tiempo, colaboran con Podemos, y el PP hace lo propio con Vox, por lo que tanto a uno como a otro lado se teme que cualquier postura de conciliación entre bloques tenga un coste electoral. También interviene un factor generacional. Muchos de los dirigentes actuales entraron en política a través de las juventudes de sus partidos, que tienden a ser más intransigentes en lo ideológico. El PP de Casado jamás perdonó a Sánchez que hubiera conquistado el poder mediante una moción de censura con los votos de los independentistas catalanes y vascos, y de Podemos, que para los populares era un partido antisistema. No cabe duda de que esa fue una maniobra que algunos de los predecesores de Sánchez en el PSOE no habrían realizado. Pero las circunstancias políticas han cambiado: Sánchez ha sido presidente del Gobierno en minoría desde que accedió a La Moncloa. Por su parte, los socialistas ven la dependencia que el PP

tiene de los votos de Vox en los Gobiernos autonómicos y, previsiblemente, en un hipotético Gobierno nacional futuro como algo no menos ilegítimo. La crispación ha hecho que hoy parezca que los políticos, más que hablar al país, se dediquen todo el rato a increparse unos a otros dentro de una especie de cámara de resonancia. Los líderes libran duelos parlamentarios en los que sus diputados actúan como estruendosa y obediente claque. Y aunque hay algún que otro momento ocasional de oratoria brillante, el espectáculo tiende a ser poco edificante. De hecho, los sondeos muestran que la mayoría de los españoles opinan que la confrontación ha ido demasiado lejos y que la calidad de sus líderes políticos se encuentra en franco declive.

Ha habido momentos en esta década transcurrida desde el 15M en los que la política española ha recordado a la situación descrita en su día por Gramsci a propósito del desmoronamiento del orden liberal en la Italia de entreguerras: «La crisis consiste precisamente en el hecho de que el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos». La pregunta es si la crisis de España, por utilizar el término gramsciano, se podrá resolver mediante una renovación parcial del viejo mundo. Hasta 2023 Sánchez había podido ofrecer, al menos, una cierta estabilidad a corto plazo mientras timoneaba España entre el vendaval de la pandemia y ponía en práctica algunas mejoras sociales para la mitad más pobre del país. Pero reconducir al país por una senda clara de crecimiento económico sostenible y de progreso requerirá de reformas y acuerdos de mayor alcance. Y atrapados como están en su burbuja, los políticos no parecen ser conscientes de los cambios que se están produciendo en el mundo exterior y que amenazan a España.

10

El narcisismo de las pequeñas diferencias

Entraron a centenares rodeando a nado la valla fronteriza o cruzando a pie la playa durante la bajamar bajo la mirada permisiva de los agentes de la guardia de fronteras marroquí que, normalmente, les habrían impedido el paso. Durante treinta y seis horas de mayo de 2021, unas ocho mil personas que querían emigrar a Europa se colaron en la ciudad española de Ceuta, un enclave de ochenta y cinco mil habitantes en la costa norteafricana del estrecho de Gibraltar. Unas mil quinientas eran menores no acompañados a los que no se podía deportar legalmente con tanta facilidad como a los adultos. Alarmado ante aquella repentina utilización de la migración como arma por parte de Marruecos, el Gobierno desplegó a tres mil soldados de los cuarteles ceutíes con vehículos blindados y envío a doscientos agentes policiales de refuerzo. Sánchez voló hasta la ciudad y prometió defender su «integridad territorial» mientras las autoridades trataban de lidiar con la complicada situación humanitaria resultante.

El rey Mohamed VI de Marruecos había abierto la frontera para mostrar su indignación por que España hubiera permitido la entrada —no comunicada a las autoridades marroquíes— de Brahim Gali, líder del Frente Polisario (organización que lucha por la independencia del Sáhara Occidental), para que recibiera tratamiento médico por el agravamiento de un cuadro de COVID-19. El Sáhara Occidental había sido colonia española hasta la muerte de Franco. Cuando España renunció a la soberanía sobre aquel territorio, el rey Hasán II, padre de Mohamed VI, se lo anexionó por la vía de los hechos movilizando a una fuerza de trescientos cincuenta mil civiles en una «Marcha Verde» de ocupación. El Polisario, que está patrocinado por Argelia, controla unos pocos campos de refugiados muy pobres y un 20 % del territorio del interior desértico. Por entonces España mantenía una postura común con la UE de no reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y apoyaba el llamamiento de la ONU a la celebración de un referéndum sobre su futuro. Se trata de un conflicto enconado desde hace décadas que no parece tener visos de solucionarse. Pero, poco antes de terminar su mandato como presidente, Donald Trump dio un giro a la política estadounidense sobre el tema y, sin consultarlo con sus aliados, reconoció la soberanía marroquí sobre aquel territorio a cambio de que Marruecos reconociera el Estado de Israel. Esto fortaleció la posición de Mohamed VI, quien comenzó a presionar para que Europa siguiera el

ejemplo de Washington.

El incidente de Ceuta puso de relieve tres cosas acerca de la política exterior española. La primera es que la pertenencia a la Unión Europea continúa siendo su pilar fundamental. Sánchez consiguió enseguida apoyos de alto nivel en Bruselas. «Las fronteras españolas son fronteras europeas», declaró la comisaria europea de Asuntos de Interior. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, dijo con toda la intención que la cuestión de la inmigración sería «crucial» en la futura relación de la UE con Marruecos. La Unión Europea es el mayor donante de ayuda exterior del país norteafricano y un importante socio comercial. El reino respondió quejoso que España estaba «europeizando un asunto bilateral», pero dio marcha atrás y cerró la frontera de nuevo.

Lo segundo que se puso de relieve es que los servicios de inteligencia de Marruecos habían hecho claramente un mejor trabajo que los españoles y habían descubierto rápidamente que Gali estaba ingresado en un hospital de Logroño. Las autoridades españolas admitieron que la oleada de inmigrantes en la frontera ceutí las había tomado por sorpresa. Enseguida comenzó la búsqueda de culpables —¿quién había tomado la decisión de dejar que Gali entrara en el país?—, que se saldó con la salida de Arancha González Laya del puesto de ministra de Exteriores.

La tercera y más importante lección que se pudo extraer de aquel incidente fue la importancia trascendental del Magreb para España, aunque se hable mucho menos de esta región como prioridad de la política exterior española que de Europa o de América Latina. España se enfrenta a un difícil equilibrio en el norte de África. Marruecos es un vecino tan fundamental como incómodo. Es una potencia en auge en esa región. Es también el noveno mercado para las exportaciones españolas. Pero, sobre todo, es el país de origen de setecientas cincuenta mil personas residentes en España y, pese a lo ocurrido, Madrid continúa considerándolo un socio crucial en el control de la inmigración irregular. Marruecos reclama para sí, además, la soberanía tanto de Ceuta como de Melilla. Por otro lado, Argelia, enemiga de Marruecos, llevaba años suministrando hasta la mitad del gas natural que importa España. Este detalle cobró especial relieve unos meses más tarde, cuando Argelia rompió relaciones diplomáticas con Marruecos y, acto seguido, decidió no prorrogar un acuerdo (que expiraba en breve) para bombear gas a su país vecino y a España a través de un gasoducto que atraviesa territorio marroquí. Ese gasoducto transportaba hasta ese momento casi la mitad de las exportaciones de gas de Argelia a España. Argel prometió entonces

ampliar la capacidad del otro gasoducto (submarino) que conecta directamente su territorio con la costa de Almería y que, hasta entonces, suministraba el resto del gas argelino importado por España. También anunció que compensaría lo que faltaba con envíos de gas natural licuado a bordo de buques metaneros. El problema era que esto incrementaba los costes justo en un momento en que los precios de la energía se estaban disparando. Y, además, Sánchez cambió de pronto la postura oficial de España sobre la cuestión del Sáhara Occidental: el Gobierno español elogió el plan marroquí para otorgar autonomía a ese territorio, aunque bajo la soberanía de Rabat. En un intento de calmar los ánimos de Argelia, que retiró de inmediato a su embajador en Madrid, el Gobierno deportó a territorio argelino a varios de los exiliados políticos de aquel país refugiados en suelo español. Pero Argelia redujo igualmente sus envíos de gas a España y bloqueó las importaciones de productos españoles. Todo esto ofreció una dura lección sobre *realpolitik* y sobre la relativa falta de peso de España en el mundo.

La democracia transformó el perfil internacional de España. Tres son las prioridades en política exterior que se han ido desarrollando en estos años: una entusiasta participación en la Comunidad Europea, una (no tan entusiasta) pertenencia a la OTAN y un reiterado intento de actuar como puente entre Europa, Estados Unidos y América Latina. Al principio, todo esto funcionó bastante bien. Felipe González fue un actor destacado en la Comunidad Europea al que tanto Helmut Kohl como François Mitterrand y Margaret Thatcher se tomaban en serio. Y González tuvo también influencia en América Latina como asesor para la democratización de la región y, en paralelo, como promotor de las primeras inversiones de las grandes empresas españolas en aquellos países. Por otra parte, puede que el posterior atlantismo de Aznar fracasara como tal, pero fue un intento de proyectar a España en la escena mundial. La pérdida de influencia real comenzó con Zapatero. Su decisión de retirar de repente (y sin previa consulta) las fuerzas españolas desplegadas en Irak fue muy popular en España, pero perjudicó la imagen que se había labrado el país en Washington como aliado fiable para Estados Unidos. La influencia prosiguió su declive bajo la presidencia de Rajoy, poco interesado por la política exterior. Cuando Sánchez llegó a La Moncloa, algunos comentaristas se entusiasmaron con la idea de que España volviera a ser por fin un actor importante en Europa de nuevo. Era el primer presidente del Gobierno desde la Transición que hablaba un inglés fluido. Es cierto que ha sido más activo que Rajoy, pero, en la práctica, España ha seguido aceptando reglas más que marcándolas en

la UE. En 2020, el Consejo Europeo aprobó una iniciativa francogermana de ayudas a la recuperación por los efectos de la pandemia financiadas con deuda mutualizada perpetua, en vez de con eurobonos comunes para todos los países como pedía España.

Ciertos factores estructurales han entrado en juego. La crisis económica obligó a practicar grandes recortes en la ayuda exterior. El hecho de que España haya necesitado ayuda europea dos veces en una década, los Gobiernos en minoría y el conflicto catalán han sido factores que han debilitado la posición española. Tampoco ha ayudado el hecho de que el servicio diplomático sea un cuerpo obsoleto, corporativista y politizado. José Manuel García-Margallo, que fue el primero de los ministros de Exteriores de Rajoy, dijo que lamentaba no haber modernizado una estructura que, según él, se correspondía más bien con la del mundo de cincuenta años antes. Arancha González Laya, que, antes de ser ministra, fue una alta funcionaria especializada en comercio internacional tanto en la ONU como en la Organización Mundial del Comercio, sí trató de agitar un poco las cosas en ese servicio: introdujo comités de nombramiento, por ejemplo. Pero no era diplomática ni miembro del PSOE, por lo que tuvo que enfrentarse a múltiples resistencias: «El sistema la expulsó como a un cuerpo extraño», me explicó un especialista académico.

También se ha debilitado la posición de España en América Latina. Felipe González inauguró unas cumbres anuales de líderes de esa región que adoptaron la denominación formal de Comunidad Iberoamericana de Naciones. Cuando varios de aquellos jefes de Estado o de Gobierno dejaron de asistir, las cumbres se volvieron bienales. Los organizadores ponían el acento en que, en una América Latina fracturada, aquel era el único foro que podía congregar a todos los países, pero, al decir esto, parecían conformarse con el mínimo común denominador. Pocos latinoamericanos se consideran «iberoamericanos». España tiende a dar a América Latina por descontada y a asumir que la entiende muy bien y que puede hablar en su nombre. Ni lo primero ni lo segundo son verdad. Para empeorar las cosas, la política exterior española en esa región se ha politizado en una doble vía. Por un lado, con Sánchez en la Moncloa, España ha mantenido dos líneas políticas contradictorias a propósito de América Latina: ha habido una política oficial —acorde con la postura de la UE y de Estados Unidos— de apoyo a la democracia y a las libertades, pero, en paralelo, ha habido otra impulsada por Podemos y, de manera menos comprensible, por Zapatero que ha buscado complicidad con la izquierda populista y autoritaria de la región. Las acciones de Zapatero como autoproclamado mediador en Venezuela

fueron muy controvertidas: consiguió la excarcelación de decenas de presos, pero el régimen no tardó en arrestar a otros. La oposición lo tachó de pelele de la dictadura de Nicolás Maduro. Tanta indecisión de España a la hora de posicionarse clara y firmemente a favor de la democracia liberal ha dañado su reputación en la región. Por otro lado, Venezuela se ha convertido en una especie de cuestión política interna en España, como también lo es Cuba desde hace tiempo. Muchos de los líderes del ala más intransigente de la oposición venezolana viven actualmente en Madrid, donde ejercen influencia sobre el PP y Vox.

España sí tiene activos internacionales. Madrid se ha convertido en un punto de encuentro cada vez más importante para los latinoamericanos, tanto en un sentido cultural como personal. La lengua española sigue siendo una poderosa herramienta de cultura. España tiene un poder blando que aún podría aprovechar mejor; según una encuesta anual del Real Instituto Elcano, un laboratorio de ideas madrileño, los extranjeros muestran regularmente una mejor opinión del país que los propios españoles. Y España también puede atribuirse algunos éxitos diplomáticos modestos. A pesar de incidentes como el de Ceuta, los programas españoles de cooperación con países africanos vinculados a la migración están bien diseñados. El enfoque aplicado por el Gobierno Sánchez a la situación de Gibraltar tras el Brexit ha sido maduro. García-Margallo había exigido en su día la cosoberanía sobre el Peñón como paso intermedio hacia la plena soberanía española. Esa era una propuesta muy corta de miras, además de inaceptable para los gibraltareños. Habría sentado un precedente que se habría terminado volviendo contra España en la cuestión de Ceuta y Melilla. La economía de Gibraltar depende de los diez mil trabajadores aproximados que cruzan la frontera desde España a diario. A su vez, esos empleos son importantes para el Campo de Gibraltar (en torno al Peñón), una de las comarcas más pobres de España. El equipo de Sánchez optó más bien por negociar un acuerdo pragmático con el Reino Unido por el que Gibraltar quede integrado en la zona Schengen de libre movimiento de personas sin control de pasaportes. Su frontera exterior —el puerto y el aeropuerto— estarían bajo la vigilancia de Frontex, el cuerpo de Policía fronteriza comunitaria, para no herir sensibilidades en Gibraltar con un despliegue de policías o guardiaciviles españoles. Ambas partes esperan que el acuerdo se convierta en tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido.

La pérdida de influencia de España en el mundo ha coincidido con una cada vez mayor integración internacional del país, que es

ahora una economía abierta que depende de las importaciones energéticas y cuyas grandes empresas obtienen buena parte de sus ingresos del exterior. Emilio Lamo de Espinosa, fundador del Real Instituto Elcano, ha escrito que «dependemos del exterior bastante más de lo que el exterior depende de nosotros. […] Esta es quizá la contradicción esencial y más importante de la actual coyuntura histórica de España: que siendo un país enormemente dependiente del exterior no tiene ni los recursos ni la capacidad suficientes para gestionar adecuadamente esa condición»[1]. La contradicción queda agudizada, además, por los problemas internos españoles. En un artículo conjunto y sin precedentes publicado en 2012, todos los ministros de Exteriores vivos de la democracia española dijeron estar «convencidos de que para ser influyentes fuera de nuestras fronteras debemos ser fuertes internamente» y proyectar «la imagen de país pujante, políticamente estable, jurídicamente seguro y abierto al mundo»[2]. Y el problema es que no solo no era así, sino que la opinión pública española no parecía ver problema alguno en ello.

El argumento para un federalismo formal

La madrileña estación de Atocha es una maravilla cotidiana. Con meticulosa puntualidad, una flota de elegantes trenes de alta velocidad (o AVE, como se los conoce en España) circulan como balas a hasta trescientos kilómetros por hora en dirección a una docena de destinos distintos en el sur y el este de España. Este espectáculo ha comenzado recientemente a verse también en la estación de Chamartín, en el norte de Madrid, desde donde los AVE parten hacia Galicia y el norte. Son muchas las críticas que se pueden formular a la apuesta que España ha hecho por el ferrocarril de alta velocidad: ha generado un sistema ferroviario de dos velocidades, la inversión en muchas de las nuevas líneas podría no estar amortizada hasta dentro de décadas, y son varios los datos que apuntan a que Madrid se ha beneficiado más del sistema que las capitales de provincia con las que estas líneas la conectan. Pero es indudable que los AVE, sumados a la extensa red de autovías y autopistas, han acortado los tiempos de viaje y han servido para unirlo físicamente por primera vez en la historia. Simbolizan mucho de lo que hay de positivo en la España moderna.

Resulta paradójico, sin embargo, que, a medida que España se ha vuelto un país más integrado internamente y más conectado con el mundo, los españoles estén más apegados que nunca a su «terruño». Este amor a lo local es un rasgo al que los observadores extranjeros se han referido desde hace tiempo. En su *Manual para viajeros por España,* cuya primera edición data de 1845, Richard Ford escribió: «España es

hoy en día, como ha sido siempre, un manojo de cuerpos pequeños atados unos a otros con cuerda de arena que, por carecer de unión, carece también de fuerza». También señaló que, «desde el periodo más primitivo hasta nuestros días, todos los observadores se han sentido impresionados por este *localismo* como ingrediente importante del carácter ibérico»[3]. Ese localismo perdura aún hoy y, si acaso, es más fuerte que cuarenta años atrás. Se expresa en forma de fervor por las tradiciones culturales, desde las fiestas mayores hasta la comida y el vino locales. Es una de las características que más atraen de España y que más cohesión social le aportan, y es posible que estas fuertes identidades locales hayan contribuido a que los cambios traídos por la globalización hayan sido más fáciles de soportar. Son rasgos que no se limitan a Cataluña y al País Vasco. En los últimos cuarenta años, bajo el paraguas del Estado de las autonomías y de la descentralización de competencias, lugares como Andalucía o, incluso, Madrid han adquirido unas identidades políticas regionales fuertes que, en el pasado, nunca habían tenido. Pero el localismo también puede debilitar el Estado-nación.

En los capítulos precedentes he explicado que sobre la España contemporánea no pesa ya el excepcionalismo atávico de antaño ni tampoco flota el fantasma de Franco. Pero, como todos los países, tiene sus especificidades, derivadas sobre todo de su historia y su geografía. Como hemos visto, uno de los legados de la relativa debilidad del Estado decimonónico en un país de múltiples obstáculos geográficos ha sido la pervivencia de unas identidades regionales que han evolucionado hasta convertirse en nacionalismos que rivalizan con el del Estado. Estas identidades fueron lo bastante fuertes para resistir, pero no para imponerse. No son algo que se pueda ignorar ni reprimir sin más, como Franco trató de hacer. Pero tampoco justifican desintegrar lo que, en general, sigue siendo un país exitoso.

Visto dentro del contexto de los últimos dos siglos, el pacto de la Transición fue un éxito histórico. Si algún espíritu lo guio, ese tuvo que ser el de Manuel Azaña y su ideal de una España liberal capaz de aceptar su diversidad: una patria de la ciudadanía y del Estado de derecho. Bajo esos espectrales auspicios, España se desunció por fin del yugo de siglos con el que el catolicismo nacional había sujetado tanto la vida política como la moral pública: el país se integró en la corriente mayoritaria de la Europa occidental y su sociedad se modernizó a una velocidad torrencial. Es un pacto que, más de cuarenta años después, precisa de reformas, sí, pero no de derogación, como Podemos, o el independentismo catalán o vasco, o Vox proponen.

El Estado autonómico, elemento central del acuerdo alcanzado durante la Transición y de la democracia española contemporánea, ha representado un audaz intento de conciliar la diversidad con la unidad, de respetar las lenguas, las culturas y las diferencias regionales sin dejar de afirmar una cultura nacional común que una a todos los españoles. Puede considerarse un éxito en términos generales. Ha contribuido a mejorar los servicios públicos acercándolos a la ciudadanía. Ha fomentado una rivalidad y una experimentación competitivas y saludables: en Castilla y León, por ejemplo, una región básicamente rural con una renta per cápita ligeramente inferior a la media nacional, se obtienen unos de los mejores resultados educativos de toda España. Las desigualdades regionales se han reducido (al principio, sobre todo). Andalucía continúa siendo una de las regiones más pobres de España, pero no lo es ni de lejos tanto como lo era. Su renta per cápita ha superado ya a la del Mezzogiorno italiano. Fernán Núñez cuenta hoy con un centro de salud y tiene también un hospital comarcal a mano, en Montilla, a quince kilómetros de distancia, ambos gestionados por la Administración autonómica. Algunos de estos resultados positivos se han debido, en parte, al ingreso de España en la Unión Europea y a los fondos estructurales y de cohesión comunitarios para las regiones más pobres. Pero lo cierto es que las encuestas tienden a mostrar que los españoles valoran más sus Gobiernos autonómicos respectivos que su Gobierno nacional.

El sistema tiene también sus defectos. Algunos son evidentes. Incluyen la innecesaria proliferación de leyes y normativas, y la derrochadora reproducción de ciertos elementos, como canales de televisión o museos de arte contemporáneo propios, que más cabría esperar en territorios cuasiindependientes que en regiones como las españolas. Hay, además, demasiadas autonomías. En muchas de ellas no existe suficiente competencia política y esto ha traído consigo el renacer de la figura del cacique. Y el sistema otorga muy pocas competencias a los alcaldes de las grandes ciudades. También presenta inconvenientes más insidiosos. El mayor de ellos es el carácter abierto del marco constitucional del Estado autonómico, que no establece una división de poderes clara entre el centro y las regiones. Esto ha propiciado un tira y afloja constante por la titularidad de las diferentes competencias, y ha hecho que el Tribunal Constitucional sufra una carga excesiva de trabajo y, a ojos de algunos, un fuerte descrédito en su papel de árbitro. Por la evolución misma del sistema político, esa apertura introducida en el origen ha derivado en una dinámica centrífuga. En veinte de los cuarenta años transcurridos

desde las elecciones generales de 1982, el partido en el Gobierno no ha tenido mayoría absoluta en el Congreso, y ha tenido que recurrir a los partidos nacionalistas vascos y catalanes para comprar sus votos parlamentarios con traspasos de competencias. Algunos de esos partidos ahora quieren destruir el Estado-nación español. Uniendo su suerte a la de los nacionalismos periféricos, la izquierda —tanto los socialistas como, sobre todo, Podemos— ha dado la espalda a su larga historia de compromiso con los derechos universales y con la preeminencia de la clase social sobre el sentimiento nacional. Para muchos de sus aliados nacionalistas, la «autonomía» constitucional solo es una etapa intermedia, no un destino final.

La potenciación del localismo por parte del Estado autonómico ha generado también cierta estrechez de miras, cierto provincianismo miope. Muchas veces, los Gobiernos autonómicos parecen empeñados en crear mundos propios separados. Cuando, en el verano de 2019, el Gobierno de la Comunidad de Madrid comenzó a contratar a profesores de música por vez primera desde los tiempos de la crisis financiera, fijó unas condiciones que imposibilitaban en la práctica que músicos de otras partes de España pudieran solicitar plaza. Véase también el caso de las lenguas. Los Gobiernos autonómicos de Valencia y Baleares promovían la variante local de catalán que allí se habla. En Asturias, hay quienes proponen otorgar estatus de idioma oficial al bable. En todos esos casos, hay razones de peso para querer proteger una cultura lingüística propia. Pero esa protección suele amparar a su vez políticas divisivas como la introducción de requisitos lingüísticos en las convocatorias de empleo público.

Muchas veces, puede más el impulso de subrayar lo que divide que de valorar lo que une; es lo que Sigmund Freud llamó «el narcisismo de las pequeñas diferencias». Es una tendencia que se observa más visiblemente en los nacionalistas vascos y catalanes, pero que podemos hacer extensiva al conjunto de la España actual. El país corre el riesgo de convertirse en «un reino de taifas», como solía advertir Felipe González refiriéndose al mosaico de pequeños «Estados» de señores de la guerra que surgió en la España musulmana tras la caída del califato Omeya en 10094. Esta tendencia a la fisiparidad ignora lo mucho que todos los españoles tienen en común como mujeres y hombres, padres e hijos, trabajadores, profesionales, consumidores, ecologistas, ciclistas, futboleros y baloncestistas, y aficionados a la tortilla, al tomate, a los calamares, al pescado o a un buen filete. Además, ese foco en lo local y lo regional ha tenido un coste para los intereses nacionales e internacionales de España.

En ciertos sectores de la derecha, hay quienes creen que la

respuesta es la recentralización, como propone Vox. Seguramente, no es casualidad que hoy en día, como en tiempos de la *España invertebrada* de Ortega y Gasset, muchos de los centralizadores más ruidosos sean precisamente periodistas e intelectuales vascos y catalanes. Pero su unitarismo choca contra la realidad tanto histórica como social. La derecha debería entender que ese federalismo que tan instintivamente rechaza es la respuesta a muchas de sus preocupaciones. Un federalismo formal implicaría una delimitación clara de las competencias y unas reglas bien definidas para la resolución de conflictos. También involucraría una reforma del Senado, una cámara sin apenas poder ni función que sirve fundamentalmente de espacio en el que aparcar a políticos de segunda fila, y que pasaría a ser así una cámara de representación de las regiones parecida al Bundesrat alemán. El federalismo podría traer consigo también cierto cambio en la filosofía de fondo sobre cómo gobernar España para que dejara de ser un país «radial», centralizado en Madrid, y pasara a ser un país en red, con otros centros de poder: una España en la que, por ejemplo, Barcelona pudiese sentirse más como Múnich que como Marsella, y en la que se repartieran sedes de organismos del Estado por diversas ciudades de su territorio, en vez de agruparlas todas en Madrid.

Esto no calmaría los ánimos de los independentistas más radicales, pero sí satisfaría a muchos catalanes actualmente desencantados con el sistema autonómico. En la Europa del siglo XXI, no debería ser tan difícil compatibilizar la diversidad regional con las identidades subnacionales y la unidad nacional. El problema es que, en cuanto la identidad nacional y el nacionalismo se convierten en los aspectos protagonistas de un sistema político, cuesta mucho darle la vuelta a la situación. Si la actual tendencia continúa, España se arriesga a sufrir una desintegración progresiva por falta de aglutinante. Va siendo hora de que se valore el todo además de (y no en vez de) las partes. El país necesita hallar formas de hacerse más atractivo para los aproximadamente tres millones de catalanes y vascos que dicen que quieren salir de él, aunque sin dañar los intereses de los 43 millones de españoles restantes.

EL FOSO INFRANQUEABLE ENTRE IZQUIERDA Y DERECHA

Durante generaciones, se ha creído que la respuesta residía en aquello que dijera Ortega y Gasset: «España es el problema; Europa, la solución». Este dicho es hoy un tópico, caducado como buena parte del pensamiento de Ortega, marcado como es por el pesimismo de la generación de intelectuales del 98. España se ha convertido en un

lugar mucho mejor desde entonces. La entrada en Europa proporcionó al país un proyecto nacional compartido durante la Transición. La Unión Europea ha ayudado mucho a España y de múltiples maneras. Ha sido, por supuesto, una fuente de ayuda al desarrollo, pues los fondos estructurales comunitarios han contribuido a pagar infraestructuras y mejoras en las zonas más pobres del país. No es de extrañar, pues, que los españoles estén entre los más entusiastas eurófilos de la UE, aun cuando parte de ese europeísmo pueda deberse a la propia desconfianza que sienten hacia los Gobiernos e instituciones de su propio país. O tal vez se explique mejor aún diciendo que la Comisión Europea ha funcionado como una especie de superyó —por expresarlo en términos freudianos— que ha frenado el populismo descontrolado y ha contenido el separatismo. La presión de Bruselas ha sido importante para forzar a los Gobiernos españoles a emprender reformas económicas tanto durante la crisis financiera como durante la pandemia.

El problema de la máxima de Ortega es que no nos dice nada sobre qué hacer cuando, una vez consumada la integración en Europa, continúe habiendo problemas en el propio país. Dicho de otro modo, Europa no es la solución a todas las dificultades de España. Ni siquiera el futuro de Europa está en absoluto garantizado en un mundo como el actual, que está cambiando a gran velocidad. Algunos españoles sostienen que, una vez alcanzadas la democracia, una apreciable prosperidad y la integración en Europa, España necesita un nuevo gran proyecto nacional. Ahí también se deja ver la influencia de Ortega. «Solo grandes, audaces empresas despiertan los profundos instintos vitales de las grandes masas humanas», escribió[5]. Como Ortega, muchos de sus compatriotas intelectuales tienden a estar obsesionados por lo que los españoles *son*, por el problema de la esencia, en vez de por lo que *hacen* y por la necesidad de que tengan una mejor calidad de gobierno a todos los niveles.

España no puede depender de Europa ni de ningún nebuloso proyecto nacional para tapar la discordia nacional. Según Ignacio Urquizu, «en el fondo, el espíritu del 15M sigue flotando en el ambiente»[6]. El principal problema actual del país es el hecho de que sus políticos no pueden alcanzar acuerdos siquiera mínimos entre bloques agriamente enfrentados. Esto hace que hasta la más nimia reforma constitucional resulte casi inconcebible, y no digamos ya un salto adelante que requiera múltiples compromisos, como la implantación de un federalismo formal. También hace que cueste siquiera imaginar que se puedan dar pasos serios hacia ese mejor sistema de gobierno que el país necesita. No es probable que se

produzcan mejoras duraderas en educación y formación, ni racionalizaciones necesarias del gasto público (que redirijan fondos de los pensionistas hacia la gente joven), sin pactos amplios entre partidos. Algunos opinadores han abogado por la formación de una gran coalición que acometa reformas, pero esa opción conllevaría el riesgo de un más que posible fortalecimiento de los extremos. Más útil (y viable) sería sellar unos cuantos acuerdos entre partidos a propósito de las principales reformas pendientes. Estos son los dilemas a los que parece probable que España tenga que enfrentarse en años venideros con un sistema en el que hay un restablecimiento parcial del bipartidismo, la presencia continuada de los nacionalistas vascos y catalanes, y la existencia de dos partidos disruptivos a uno y otro extremo del espectro, como son Podemos y Vox.

El narcisismo de las pequeñas diferencias que se expresa en los nacionalismos y los localismos internos de España tiene su reflejo en la crispación, en la necesidad de buscar y elevar a la categoría de fetiches los desacuerdos políticos incluso allí donde apenas los hay. El muro de separación entre izquierda y derecha se ha demostrado más difícil de escalar en España que en Francia (con el triunfo de Macron), en Alemania (con sus «grandes coaliciones») o en Italia (con la geometría variable de sus Gobiernos). Puede que los políticos españoles hayan empezado ya a aprender el arte de la formación de coaliciones a nivel nacional, pero, hasta el momento, su puesta en práctica no ha hecho más que ahondar el foso que separa a la izquierda de la derecha. Hay quienes argumentan que tal vez sea esta guerra de trincheras ideológica, más que las cuestiones de la memoria histórica, el legado verdaderamente más pernicioso dejado por la Guerra Civil. Pero lo cierto es que tiene mucho menos de vestigio del siglo pasado que de consecuencia del 15M, la crisis financiera y el movimiento de los *indignados*.

Más de una década después de que el descontento popular aflorara con la irrupción en escena de los *indignados,* los desafíos populistas al pacto constitucional español —personificados en Podemos, el independentismo catalán y Vox— parecen haber frenado su avance, al menos por el momento. El abandono de la violencia por parte de ETA parece definitivo. Todos estos elementos apuntan a la resiliencia de la democracia española. Pero sobrevivir no significa necesariamente prosperar. Las alianzas de conveniencia y cortoplacistas no proporcionan cimientos duraderos para el progreso del país. El espectro del «no es no» continúa planeando sobre la política española.

El coste del «bibloquismo»

Las derrotas electorales en Madrid en 2021 y Andalucía en 2022 llevaron a Sánchez a un cambio de estrategia y un aparente giro a la izquierda. Aprobó un impuesto adicional a los ingresos de las empresas eléctricas y la banca. Después de años en que había frenado iniciativas de Podemos, las facilitó: el Parlamento aprobó no solo la ley Solo sí es sí, sino también la ley Trans, que permitió la autoidentificación de genero a partir de los dieciséis años (y a partir de los doce con aprobación médica y parental) y que suscitó la oposición de muchas feministas del PSOE. En respuesta a una demanda de Esquerra, el Gobierno mandó cambiar el Código Penal para eliminar el delito de sedición y para rebajar las penas por malversación cuando los fondos fueron usados para causas políticas, cambio que difícilmente sería aplicable por los tribunales. Se aprobó también la ley de Memoria Democrática. Mucha de esta legislación estaba técnicamente mal redactada, pero el propósito parecía ser mantener unida la base de apoyo parlamentario del Gobierno. Era una indicación de que los asesores de Sánchez habían abrazado plenamente la teoría del «bibloquismo», originalmente propugnado por Pablo Iglesias, que la alianza del PSOE con la izquierda dura y los nacionalismos periféricos imposibilitaría por largo tiempo que el PP gobernara. La Moncloa trabajó para fortalecer la posición de Yolanda Díaz y su nuevo proyecto político, Sumar, visto como menos disruptivo que Podemos. Sánchez sabía que su permanencia en La Moncloa dependía del desempeño no solo del PSOE, sino del bloque izquierda-nacionalistas en su conjunto.

La debilidad electoral de Podemos fue responsable de la derrota del bloque en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. La respuesta de Sánchez fue un golpe táctico con la osadía que le caracteriza: convocó inmediatamente elecciones generales para el 23 de julio. Fue una maniobra hábil por varios motivos. Calló los incipientes cuestionamientos a su liderazgo dentro del PSOE. Obligó a las facciones peleonas de la izquierda dura a unirse en Sumar. Sobre todo, Sánchez calculó, correctamente, que el PP estaría enfrascado en negociaciones para formar gobiernos regionales que publicitarían su dependencia de Vox. Feijóo, por su parte, también cometió otros errores en la campaña: después de dejar a Sánchez mal parado en un debate a dos, decidió no asistir a otro a cuatro, dejando la representación de la derecha en manos de Abascal y Vox. Y centró su campaña en «derogar el sanchismo» en vez de ofrecer una visión alternativa positiva para el país.

Las elecciones consolidaron las tendencias recientes en la política española. Por un lado, marcó un paso adicional en la recuperación de

los dos partidos tradicionales: el voto combinado del PSOE y el PP subió a 65 %. Las fuerzas populistas perdieron terreno. Vox perdió seiscientos mil votos y diecinueve escaños, comparado con las elecciones de noviembre de 2019. Sumar ganó cuatro escaños menos de lo que Podemos logró en 2019. En Cataluña el Partido Socialista Catalán ganó el 34 % de los votos y los partidos independentistas perdieron un total de nueve escaños. De las fuerzas radicales solo EH Bildu avanzó. Pero, por otro lado, puso en evidencia la dinámica cada vez más infernal del bibloquismo. La expectativa general era que las elecciones darían a España un gobierno de derechas. El PP las ganó, pero por poco, con el 33 % del voto, mientras que el PSOE conseguía un 32 %. En su intento de investirse como presidente del Gobierno, Feijóo logró ciento setenta y dos votos, quedando a cuatro de lo necesario. Excepto Vox, sus únicos aliados eran un diputado de Canarias y otro de Navarra. Sánchez estuvo en una posición más débil que en 2019 cuando se convirtió en presidente con la abstención de Esquerra, lograda con la promesa de los indultos y los cambios en el Código Penal. Esta vez necesitaba los votos afirmativos de todos los partidos nacionalistas, incluyendo a Junts, y por lo tanto el consentimiento de Carles Puigdemont.

Desde Bruselas, el líder independentista puso como condiciones una amnistía a todos los que se enfrentaban a cargos legales o administrativos a raíz del *procés* y caminar hacia un referéndum pactado sobre la independencia. Hasta el 23 de julio tanto una amnistía como un referéndum eran vistos como inconstitucionales e inadmisibles políticamente por Sánchez y el PSOE. Pero, para mantenerse en La Moncloa, Sánchez decidió hacer «de la necesidad, virtud», como él lo describió, y aceptarlos. Ofreció una amnistía amplia y, en paralelo, un diálogo entre el PSOE y Junts con un verificador internacional, un diplomático de El Salvador. Fue suficiente para que Sánchez lograra la investidura con ciento setenta y nueve votos.

Seis años después de los eventos del otoño catalán de 2017, había buenos argumentos para evitar más encarcelamientos de políticos catalanes, con indultos, por ejemplo. Pero para muchos españoles una amnistía era un error. Borra no solo la condena, sino también el crimen, con la implicación de que el Estado se equivocó en intentar procesar las violaciones de la ley en que incurrió el independentismo. Un paso tan transcendental solo podía justificarse si era claramente en el interés público, si gozaba de amplio apoyo popular y si los beneficiados plegasen su lealtad a la Constitución. Todas esas condiciones se cumplieron en la amnistía de 1977, pero ninguna en

esta oportunidad. Sánchez nunca había hecho campaña en favor de la amnistía. En encuestas, entre el 60 % y el 70 % desaprobaron la medida, incluyendo una mayoría de votantes socialistas.

Sánchez argumentó que sus acuerdos traerían concordia a Cataluña y, sobre todo, que eran necesarios para «parar a la ultraderecha». El problema era que la supuesta reconciliación en Cataluña fue a costo de dividir España. Desde la izquierda, muchas voces sostienen que Vox es una amenaza mucho más seria para la democracia que Podemos. Eso es discutible, pero, desde luego, Vox es hostil a ciertos elementos de la democracia liberal, como los derechos de las minorías, y ha anunciado incluso que quiere prohibir los partidos nacionalistas periféricos pacíficos. Pero, según las conclusiones de un estudio, Vox es una formación de derecha radical, más que extrema: «Desde el plano discursivo, no ataca a la democracia»7. El desprecio inicial de Podemos por la independencia judicial unido a sus alianzas con dictaduras latinoamericanas también hicieron que muchos cuestionaran su compromiso con la democracia liberal. Pero, para acceder al poder, Pablo Iglesias tuvo que reconciliarse con la Constitución, y es muy posible que lo mismo ocurra con Vox. Lo que de verdad domeñó a Podemos fue el hecho de ser el socio minoritario de un Gobierno en minoría, con menos de un tercio de escaños que los socialistas. De todas maneras, Sánchez no trazó un cordón sanitario en torno a Podemos como sí lo hizo Olaf Scholz en torno a Die Linke, el partido de izquierda radical en Alemania. Aunque Vox era una fuerza intolerante, no era la única: era ilógico erguir un cordón sanitario contra el nacionalismo identitario español a la vez que abrazar sus versiones catalanas y vascas, y esto no tenía nada de «progresista». Si el objetivo de Sánchez solo era «parar a la ultraderecha», podría haber aceptado el desafío de que el PSOE se abstuviera para que el PP gobernara sin Vox.

Por cierto, hubo exageraciones contraproducentes en mucha de la retórica de la derecha contra Sánchez. No era el fin de la democracia o el Estado de derecho. Pero el Estado de derecho sí ha quedado dañado por el beneficio personal del presidente del Gobierno. De ser aprobado e implementado plenamente el proyecto de amnistía, haría que el mismo delito contra el orden público no se castigase si fuera cometido para apoyar la independencia de Cataluña, pero sí si fuera para cualquier otra causa política. Algunos comentaristas se preocuparon de que el Estado se quedaría sin defensas frente a cualquier repetición de los acontecimientos de 2017. Si bien no tenía la fuerza de ley, el acuerdo político que firmó el PSOE con Junts era un documento vergonzoso. Su sección de antecedentes históricos era propaganda

independentista. Admitía que se había practicado *lawfare*, o abuso de la ley para fines políticos, lo que era una deslegitimación del sistema legal español.

No cabe duda de que en muchas otras democracias europeas el *impasse* generado por el resultado electoral se habría solucionado con algún tipo de acuerdo entre los dos partidos principales. Las encuestas indicaron que eso es lo que quería un número sustancial y creciente de españoles. Pero no pasará mientras impere la lógica del «no es no» de Sánchez.

Otra de las incertidumbres a las que se enfrenta España tiene que ver con el futuro de la monarquía. Para buena parte de la derecha y del centro esta institución ha sido un baluarte crucial de la Constitución y también frente al extremismo. Pero las fechorías de Juan Carlos I han infligido un daño duradero a la reputación de la Corona, sobre todo, entre la gente joven. ¿Es una institución herida de muerte? Dependerá en gran medida de lo bien que Leonor, primogénita del rey Felipe VI, sepa actuar como representante de la monarquía. La segunda arma con la que cuenta la Corona para seguir en pie es la inercia, y esta podría ser decisiva para su supervivencia.

La sociedad española es resiliente y, en su inmensa mayoría, moderada. Por suerte, la polarización entre los políticos no suele verse reflejada en la vida cotidiana, aunque había evidencia anecdótica de que eso podría empezar a cambiar por la controversia sobre la amnistía. La vida es agradable para muchos españoles. Pero el país tal vez esté fiando demasiado a estas bondades de su clima y de sus gentes. En un cáustico artículo de opinión publicado en 2021, Antonio Caño, exdirector del diario *El País,* escribió que, «a falta de otros motivos, la farra y el sol se van convirtiendo en los únicos símbolos de identidad y en las únicas vías de escape de una realidad espantosa»[8]. Muchos calificarían esa visión de hiperbólica, mientras que otros defenderían que la fiesta y el sol pueden mucho. Pero a Caño no le faltaba razón.

Hace exactamente un siglo, la incapacidad de los políticos de la Restauración para llegar a acuerdos sobre reformas importantes abrió la puerta a la dictadura de Primo de Rivera. No hay razón para que la historia se repita, pero aquello debería servir de advertencia para la clase política española. El carácter nacional es un concepto dudoso y cuestionable, dada la diversidad humana que hay en el mundo. Pero la historia, la geografía y las costumbres conforman sin duda actitudes y conductas. Con razón o sin ella, los españoles son famosos por su orgullo, su empecinamiento y su poca disposición a ceder para alcanzar acuerdos (de hecho, la palabra inglesa *compromise* no tiene

un vocablo equivalente en español). Pero, sin duda, poseen numerosas cualidades positivas. En sus interacciones normales cotidianas, son siempre pacientes y de trato humano y amable. Son rasgos percibidos desde hace tiempo por los observadores extranjeros. César Vallejo, gran poeta vanguardista peruano, escribió a propósito de una visita a Madrid en la década de 1920 que «los valores permanentes de humanidad priman sobre el humo de la locomotora, sobre el plazo bancario, sobre la corneta del automóvil y sobre el ala convencional del aeroplano»9. En muchos sentidos, ese sigue siendo el caso hoy en día. Los españoles han demostrado una extraordinaria paciencia durante la última década. Pero, a menos que se atiendan sus demandas de cambio, podría llegar un momento en que toda esa paciencia termine por agotarse.

Agradecimientos

Me gustaría dar las gracias a las siguientes personas que me han ayudado de diversas formas durante mis años de trabajo sobre España: Jordi Alberich, Joaquín Almunia, José María de Areilza, Tobias Buck, Tom Burns Marañón, Andrea Calvé, Carles Casajuana, William Chislett, Wolfgang Dold, Rafael Doménech, Adrián García Aranyos, Luis Garicano, Daniel Gascón, Ramón González Férriz, Víctor Lapuente, Bernardino León, Sandra León, Elvira Lindo, Kiko Llaneras, Marc López, Fiona Maharg Bravo, Andreu Mas-Colell, David Matheson, Antonio Muñoz Molina, Rodrigo Orihuela, Ana Palacio, Joan Maria Piqué, Charles Powell, Luis Prados de la Escosura, Maite Rico, Manuel de la Rocha, Toni Roldán, Eduardo Serra, José Enrique Serrano, Pablo Simón y José Ignacio Torreblanca. Ninguna de ellas es responsable en modo alguno de los argumentos expuestos en el libro. Varias de ellas no soportarían compartir estancia con otras de las que figuran en la lista; el autor ha tenido el privilegio de escuchar una amplia diversidad de opiniones. Pido disculpas si, inadvertidamente, he omitido algún nombre.

Le estoy muy agradecido a sir John H. Elliott, tanto por unas conversaciones esclarecedoras sobre España durante los últimos quince años como por el entusiasmo con que acogió la idea de que escribiera este libro. Es una lástima que falleciera antes de que pudiera ver el resultado final, ya salido de imprenta. Muchas gracias también a dos lectores anónimos del texto seleccionados por la editorial de Yale University Press por sus perspicaces comentarios, y a uno de ellos en particular por subsanar ciertos errores sobre hechos y datos históricos. Gracias, igualmente, a Jordi Alberich, Daniel Gascón y Andy Reid por sus útiles sugerencias, y a Emily Upton por su información sobre la enseñanza de idiomas en Francia.

Quiero agradecer también a Joanna Godfrey, de la oficina londinense de Yale, por su impulso del libro y su concienzuda lectura del texto, y a Katie Urquhart y al resto del equipo de Yale por convertirlo en un producto tan bien acabado. *The Economist* es complaciente con aquellos miembros de su redacción que se proponen escribir un libro. Les estoy agradecido en particular a Zanny Minton-Beddoes, Robert Guest, Emma Hogan y Christopher Lockwood por haber hecho posible que pudiera tomarme varios meses de descanso de mis (por entonces) labores diarias para finalizar esta obra.

Hace muchas décadas que disfruto de un interés por España compartido con Charlie Forman, con quien hice un memorable viaje

por el País Vasco, Navarra y La Rioja en 1977. Ya en fecha más reciente, me he beneficiado también de participar de ese mismo interés con David Camier-Wright. Y, como siempre, mi mayor deuda es con mi familia. Tras su escepticismo inicial ante el proyecto, mi esposa, Emma Raffo, cuya opinión respeto por encima de cualquier otra, felizmente terminó convirtiéndose a la causa; de hecho, su detección de puntos débiles en el borrador inicial contribuyó a mejorarlo. Este libro está dedicado a mi hija, Roxani Wilberg, que nunca deja pasar la oportunidad de venir a España.

Bibliografía

Álvarez Junco, José, *Mater dolorosa: La idea de España en el siglo XIX,* Taurus, Barcelona, 2001.

— *Dioses útiles: Naciones y nacionalismo,* Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2016.

Álvaro, Francesc-Marc, *Ensayo general de una revuelta: Las claves del proceso catalán,* Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2019.

Amat, Jordi, *La conjura de los irresponsables,* Anagrama, Barcelona, 2017.

— *Largo proceso, amargo sueño: Cultura y política en la Cataluña contemporánea*, Tusquets, Barcelona, 2018.

Aparicio, Rosa, y Portes, Alejandro, *Crecer en España: La integración de los hijos de inmigrantes,* Obra Social «la Caixa», Barcelona, 2014.

Aramburu, Fernando, *Patria*, Tusquets, Barcelona, 2016.

Aróstegui, Julio, Canal, Jordi, y Calleja, Eduardo G., *El carlismo y las guerras carlistas,* La Esfera de los Libros, Madrid, 2011.

Barea, Arturo, *La forja de un rebelde I: La forja,* Debolsillo, Barcelona, 2010.

Barón, Javier, *Una pintura para una nación,* Museo del Prado, Madrid, 2019.

Barton, Simon, *A History of Spain,* Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2004.

Beevor, Anthony, *La guerra civil española,* Crítica, Barcelona, 2005.

Borkenau, Franz, *El reñidero español: Relato de un testigo de los conflictos sociales y políticos de la Guerra Civil española,* Planeta, Barcelona, 2010.

Brenan, Gerald, *El laberinto español: Antecedentes sociales y políticos de la Guerra Civil,* Ruedo Ibérico, París, 1962.

Buck, Tobias, *After the Fall: Crisis, Recovery and the Making of a New Spain,* Weidenfeld & Nicolson, Londres, 2019.

Burdiel, Isabel, *Isabel II: Una biografía,* Taurus, Barcelona, 2019.

Burns Marañón, Tom, *Hispanomanía, con un prólogo para franceses*, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2014.

Calvo-Gonzalez, Oscar, *Unexpected Prosperity: How Spain Escaped the Middle-Income Trap*, Oxford University Press, Oxford, 2021.

Canal, Jordi, *Historia mínima de Cataluña*, Turner/El Colegio de México, Ciudad de México, 2015.

— (ed.), *Historia contemporánea de España, vol. 2: 1931-2017*, Taurus, Barcelona, 2017.

— *Con permiso de Kafka: El proceso independentista en Cataluña,*

Península, Barcelona, 2018.
Caño, Antonio, *Rubalcaba: Un político de verdad,* Plaza & Janés, Barcelona, 2020.
Carr, Raymond, *España, 1808-1939,* Ariel, Barcelona, 1969.
— (ed.), *Historia de España,* Península, Barcelona, 2001.
Chaves Nogales, Manuel, *A sangre y fuego: Héroes, bestias y mártires de España*, Libros del Asteroide, Barcelona, 2011.
— *¿Qué pasa en Cataluña?,* Almuzara, Madrid, 2013.
Chislett, William, *España y Estados Unidos: En busca del redescubrimiento mutuo,* Ariel, Barcelona, 2005.
— *Forty Years of Democratic Spain*, Real Instituto Elcano, Madrid, 2018.
— *Microhistoria de España, contada por un británico,* Espasa, Barcelona, 2020.
— «Challenges and Opportunities for Spain in Times of COVID-19», Real Instituto Elcano Working Paper, abril de 2021.
Davis, Norman, *Reinos desaparecidos: La historia olvidada de Europa,* Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2017.
Davis, Wade, *Magdalena. Historias de Colombia*, Crítica, Barcelona, 2021.
Del Rey, Fernando, *Retaguardia roja: Violencia y revolución en la guerra civil española,* Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2019.
Elliott, John H., *Catalanes y escoceses: Unión y discordia,* Taurus, Barcelona, 2018.
Encarnación, Omar, *Democracy without Justice in Spain: The Politics of Forgetting,* University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 2014.
Ford, Richard, *Manual para viajeros por España y lectores en casa,* Turner, Madrid, 2008.
Fusi, Juan Pablo, *Historia mínima de España,* Turner, Madrid, 2012.
Fusi, Juan Pablo, y Pérez, José Antonio (eds.), *Euskadi, 1960-2011: Dictadura, transición y democracia,* Biblioteca Nueva, Madrid, 2017.
García, Lola, *El naufragio: La deconstrucción del sueño independentista*, Península, Barcelona, 2018.
Gascón, Daniel, *El golpe posmoderno,* Debate, Barcelona, 2018.
González Durántez, Miriam, *Devuélveme el poder: Por qué urge una reforma liberal en España,* Península, Barcelona, 2019.
González Férriz, Ramón, *La ruptura: El fracaso de una (re)generación*, Flash (libros electrónicos), Penguin, 2021.
Hobsbawm, Eric, «Inventing Traditions», en Eric Hobsbawm y Terence Ranger (eds.), «Introducción: La invención de la tradición», en *La invención de la tradición,* Crítica, Barcelona, 2002).

Hooper, John, *Los nuevos españoles,* Javier Vergara, Buenos Aires, 1996.
Hughes, Robert, *Barcelona*, Anagrama, Barcelona, 1992.
— *Goya*, Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores, Barcelona, 2004.
Iglesias, Pablo, *Disputar la democracia: Política para tiempos de crisis,* Akal, Madrid, 2014.
Jacobs, Michael, *Everything Is Happening: Journey into a Painting,* Granta, Londres, 2015.
Juliá, Santos, *Vida y tiempo de Manuel Azaña, 1880-1940,* Taurus, Madrid, 2008.
Kurlansky, Mark, *La historia vasca del mundo,* Ediciones del Bronce, Barcelona, 2000.
Lamo de Espinosa, Emilio, *Entre águilas y dragones. El declive de Occidente*, Espasa, Barcelona, 2021.
Lawrence, Mark, *Las guerras civiles españolas: Una historia comparada de la Primera Guerra Carlista y el conflicto de 1936-1939,* Alianza, Madrid, 2019.
Machado, Antonio, *Poesía*, Alianza, Madrid, 2017.
Madina, Eduardo, y Sémper, Borja, *Todos los futuros perdidos: Conversaciones sobre el final de ETA,* Plaza & Janés, Barcelona, 2021.
Minder, Raphael, *The Struggle for Catalonia: Rebel Politics in Spain*, Hurst, Londres, 2017.
— *¿Esto es España? Una década de corresponsalía,* Península, Barcelona, 2020.
Moradiellos, Enrique, *Historia mínima de la guerra civil española,* Turner/El Colegio de México, Ciudad de México, 2016.
— *Franco: Anatomía de un dictador,* Turner, Madrid, 2018.
Muñoz Molina, Antonio, *Todo lo que era sólido,* Seix Barral, Barcelona, 2013.
Nadeau, Jean-Benoît, y Barlow, Julie, *The Story of Spanish,* St. Martin's Press, Nueva York, 2013.
Núñez Seixas, Xosé M., *Guaridas del lobo: Memorias de la Europa autoritaria, 1945-2020*, Crítica, Barcelona, 2021.
OCDE, *Economic Surveys: Spain,* París, mayo de 2021.
Ortega y Gasset, José, *España invertebrada y otros ensayos,* Alianza, Madrid, 2014.
Politikon, *El muro invisible,* Debate, Barcelona, 2017.
Powell, Charles, *España en democracia, 1975-2000,* Plaza & Janés, Barcelona, 2001.
— «Revisiting Spain's Transition to Democracy», en Senén Florensa (ed.), *The Arab Transitions in a Changing World: Building*

Democracies in Light of International Experiences, IEMed, Barcelona, 2016.
Prados de la Escosura, Leandro, *Spanish Economic Growth, 1850-2015*, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2017.
Preston, Paul, *Franco: Caudillo de España,* Grijalbo, Barcelona, 1994.
— *Comrades: Portraits from the Spanish Civil War,* HarperCollins, Londres, 1999.
— *El holocausto español: Odio y exterminio en la Guerra Civil y después*, Debate, Barcelona, 2011.
— *Un pueblo traicionado: España de 1874 a nuestros días: Corrupción, incompetencia política y división social*, Debate, Barcelona, 2019.
Price, Roger, *Historia de Francia,* Cambridge University Press, Barcelona, 1998.
Rama, José, Zanotti, Lisa, Turnbull-Dugarte, Stuart J., y Santana, Andrés, *Vox: The Rise of the Spanish Populist Radical Right,* Routledge, Abingdon, 2021.
Ridao, José María, *República encantada: Tradición, tolerancia y liberalismo en España,* Tusquets, Barcelona, 2021.
Rieff, David, *Elogio del olvido: Las paradojas de la memoria histórica,* Debate, Barcelona, 2017.
Sen, Amartya, *Identidad y violencia: La ilusión del destino,* Katz, Buenos Aires, 2007.
Shubert, Adrian, *Espartero, el Pacificador,* Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2018.
Shubert, Adrian, y Álvarez Junco, José (eds.), *Nueva historia de la España contemporánea: 1808-2018,* Galaxia Gutenberg, 2018.
Torreblanca, José Ignacio, *Asaltar los cielos: Podemos o la política después de la crisis*, Debate, Barcelona, 2015.
Townson, Nigel (ed.), *¿Es España diferente? Una mirada comparativa (siglos XIX y XX)*, Taurus, Madrid, 2010.
Tusell, Javier, *Dictadura franquista y democracia, 1939-2004,* Crítica, Barcelona, 2005.
Ucelay-Da Cal, Enric, *Breve historia del separatismo catalán*, Ediciones B, Barcelona, 2018.
Urquizu, Ignacio, *La crisis de representación en España,* Catarata, Madrid, 2016.
— *Otra política es posible,* Debate, Barcelona, 2021.
Varela Ortega, José, *España. Un relato de grandeza y de odio*, Espasa, Barcelona, 2019.
Vincent, Mary, *Spain 1833–2002: People and State*, Oxford University Press, Oxford, 2007.
Weber, Eugen, *De campesinos a franceses: La modernización del mundo*

rural (1870-1914), Taurus, Barcelona, 2023.
Webster, Jason, *Violencia: A New History of Spain. Past, Present and the Future of the West*, Constable, Londres, 2019.
Woodworth, Paddy, *The Basque Country: A Cultural History*, Signal, Oxford, 2007.

Las Meninas, el gran cuadro de Diego Velázquez, «juega con nuestro sentido de la certidumbre sobre lo que vemos cuando miramos».

El referéndum sobre la Constitución en 1978 puso fin a cuatro décadas de dictadura.

El teniente coronel Tejero, al mando de un grupo de guardias civiles, irrumpió en el Congreso en un intento de golpe de Estado en 1981, cuyo fracaso aseguró la democracia.

Partidarios de la independencia de Cataluña llenaron las calles de Barcelona durante la manifestación de la Diada de 2012, que señaló el arranque del *procés* independentista.

Banderas catalanas y españolas en los balcones de Barcelona en 2017. La declaración de independencia que no fue reactivó un nacionalismo español hasta entonces durmiente.

El monasterio benedictino de Montserrat fue la cuna de un resurgir del nacionalismo catalán en los años cincuenta y sesenta del siglo XX.

El 3 de mayo en Madrid, de Francisco de Goya. Con el levantamiento popular contra las fuerzas de Napoleón, la gente común se convirtió en protagonista de la historia española.

Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, de Antonio Gisbert, es un emblema icónico de las luchas liberales del siglo XIX español. En 2021, por primera vez, El Prado lo colgó al lado de *Los fusilamientos,* de Goya.

Manuel Azaña, presidente del Gobierno, primero, y de la República, después, en los años treinta, llenaba plazas de toros y estadios de fútbol con sus multitudinarios mítines.

La Guerra Civil española entrañó tanto una batalla entre democracia y dictadura como un intento de revolución social encabezada por milicias anarquistas como esta de Barcelona.

El general Francisco Franco saludando a sus victoriosas tropas nacionales al término de la Guerra Civil.

Exhumación de una de las decenas de miles de víctimas de la Guerra Civil y de la represión de la posguerra que fueron arrojadas a fosas sin identificar.

El Museo Guggenheim de Frank Gehry en Bilbao se convirtió en un emblema mundialmente conocido de la renovación urbana de la antigua capital industrial del País Vasco.

El estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 sumió a España en una depresión económica y dejó decenas de miles de pisos vacíos como estos de Seseña (Toledo), cerca de Madrid.

La sociedad española se ha liberado del conservadurismo social y ha abrazado el feminismo con asombrosa rapidez.

Amplias extensiones de la España rural se han vaciado. En sus pueblos solo ha quedado la gente mayor.

Para muchos comentaristas de la actualidad, la política española, con su «crispación» (o ánimo de confrontarse por la confrontación misma), comenzaba a parecerse al *Duelo a garrotazos,* de Goya.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno desde 2018, es el gran superviviente de la política española.

En 2022, Alberto Núñez Feijóo, el experimentado presidente de Galicia, asumió el liderazgo nacional del conservador Partido Popular.

Pablo Iglesias, aquí junto a Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, trató de ser el gran factor perturbador de la política española, pero acabó dimitiendo de sus cargos oficiales en 2021.

Santiago Abascal sacó partido de los temores despertados por el independentismo catalán y la inmigración, y convirtió Vox en la versión española de la derecha radical europea nacionalpopulista.

El futuro de la monarquía recae sobre el rey Felipe, la reina Letizia y sus hijas.

Trenes de alta velocidad atraviesan a diario desde la madrileña estación de Atocha lo que era un país de distancias grandes.

Para bien o para mal, la fiesta y el sol se han convertido en símbolos del estilo de vida español.

Notas

1. Sobre *Las Meninas,* véase Michael Jacobs, *Everything Is Happening: Journey into a Painting,* Granta, Londres, 2015.
2. José Varela Ortega, *España: Un relato de grandeza y de odio*, Espasa, Barcelona, 2019, pág. 25.
3. Ricardo García Cárcel, «Los colores de los relatos», Culturas, *La Vanguardia*, 31/08/2019.
4. Jason Webster, *Violencia: A New History of Spain. Past, Present and the Future of the West*, Constable, Londres, 2019, introducción.
5. El «orientalismo», según Said, intelectual de origen palestino, es un sistema de representación que se vale de proyecciones imaginativas y de tropos condescendientes para negar el valor y la coherencia lógica de otras sociedades, consideradas inferiores.
6. Tom Burns Marañón, *Hispanomanía, con un prólogo para franceses,* Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2014, pág. 59.
7. Franz Borkenau, *El reñidero español: Relato de un testigo de los conflictos sociales y políticos de la guerra civil española,* Planeta, Barcelona, 2010.
8. Tom Burns Marañón, *Hispanomanía*…, ob. cit., pág. 106.
9. Wade Davis, *Magdalena. Historias de Colombia*, Crítica, Barcelona, 2021.
1. John H. Elliott, «La España de ayer y de hoy», borrador compartido con el autor.
2. Véase https://elpais.com/elpais/2018/12/05/opinion/1544031394_526596.html.
3. El número total de muertos ha sido objeto de cierta controversia y de bastante exageración. Enrique Moradiellos, historiador español especialista en el tema, ha facilitado en un libro escrito recientemente las siguientes cifras de víctimas de la Guerra Civil: de ciento cincuenta mil a doscientas mil personas muertas en acción militar (incluidos bombardeos), de las que un 60% pertenecían al bando republicano; ciento cincuenta y cinco mil fallecidas en la represión que tuvo lugar durante la guerra, de las que unas cien mil fueron asesinadas en la zona nacional. Además, España registró unas trescientas ochenta mil muertes por «sobremortalidad» entre 1936 y 1939 en comparación con los años precedentes, atribuibles al hambre y las enfermedades. Enrique Moradiellos, *Historia mínima de la guerra civil española,* Turner/El Colegio de México, Ciudad de México, 2016, pág. 275. La estimación de veinte mil personas ejecutadas durante la represión de posguerra es de Paul Preston, *El holocausto español: Odio y exterminio en la Guerra Civil y después,* Debate, Barcelona, 2011.
4. Juan Carlos es nieto de Alfonso XIII, el monarca Borbón que abdicó del trono y se exilió tras la proclamación de la República en 1931.
5. Charles Powell, *España en democracia, 1975-2000,* Plaza & Janés, Barcelona, 2001, págs. 209-216.
6. OCDE, *Economic Surveys: Spain,* París, mayo de 2021, pág. 37, www.oecd.org/economy/surveys/Spain-2021-OECD-economic-survey-overview.pdf.
7. Sobre la Transición, véanse Javier Tusell, *Dictadura franquista y democracia, 1939-2004*, Crítica, Barcelona, 2005; Charles Powell, *España en democracia, 1975-2000*, Plaza & Janés, Barcelona, 2001, y «Revisiting Spain's Transition to Democracy», en Senén Florensa (ed.), *The Arab Transitions in a Changing World: Building Democracies in Light of International Experiences,* IEMed, Barcelona, 2016.
8. William Chislett, *Microhistoria de España contada por un británico,* Espasa, Barcelona, 2020.
9. Ibíd., pág. 156.
10. William Chislett, *España y Estados Unidos: En busca del redescubrimiento mutuo*,

Ariel, Barcelona, 2005.
11. Véase Oscar Calvo-Gonzalez, *Unexpected Prosperity: How Spain Escaped the Middle-Income Trap,* Oxford University Press, Oxford, 2021.
12. Véase, por ejemplo, www.eldiario.es/politica/frob-cajas-crisis-bancosbankia-cclm-can-pppsoe-upn-iu-banco-de-valencia-banca-civica_1_5690328.html.
13. Véase www.reuters.com/article/us-spain-corruptionidUSL243227820061214.
14. Entrevista con el autor, noviembre de 2020.
15. Véase www.bbc.com/news/world-europe-39068843.
16. Véase www.economist.com/leaders/2015/12/16/feliz-navidad-espana.
17. Véase, «Spain, Annex to the EU Anti-Corruption Report», Bruselas, 2 de marzo de 2014.
18. Véase https://elpais.com/politica/2016/01/27/actualidad/1453925502_689607.html.
19. Véase www.poderjudicial.es/cgpj/es/PoderJudicial/Audiencia-Nacional/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-Nacional-condena-a-penas-de-hasta-51-anos-de-prision-a-29-de-los-37-acusados-en-el--caso-Gurtel-.
20. En octubre de 2020, el Tribunal Supremo revisó el caso y confirmó las sentencias individuales con muy ligeras variaciones. Dictaminó que el PP se había beneficiado de doscientos cuarenta y cinco mil euros de financiación ilegal para sus campañas electorales en dos municipios de los alrededores de Madrid. Pero también adujo que el partido en sí no se podía considerar institucionalmente corrupto porque no era parte implicada en la causa. Rajoy lo interpretó como una «reparación moral». Véase www.elmundo.es/espana/2020/10/15/5f87f14321efa0ed538b467a.html.
21. Véase www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20180601/443979431132/comida-rajoy-restaurante-madrid-mocion-de-censura.html.
22. Luis Bárcenas, el extesorero del PP, afirmó que Rajoy figuraba en una lista de pagos en negro que había hecho a dirigentes del partido, pero Rajoy lo negó y nunca hubo una corroboración independiente de lo declarado por Bárcenas.
23. Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TEC00115/default/table.
24. Véase https://elpais.com/ideas/2020-08-08/recuerda-que-eres-mortal.html.
25. Véase www.elmundo.es/espana/2020/07/11/5f0a07fbfdddffe9b38b46e0.html.
26. Véase www.elmundo.es/espana/2020/03/18/5e7261affc6c83774d8b4628.html.
27. El Tribunal Supremo terminó reduciendo la pena a cinco años y diez meses de prisión. Véase www.poderjudicial.es/cgpj/es/PoderJudicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-condena-a-Inaki-Urdangarin-a-5anos-y-10-meses-de-prision-por-malversacion--prevaricacion--fraude-dos-delitos-fiscales-y-trafico-de-influencias-en-el--caso-Noos-.
28. Véase www.bbc.com/news/world-europe.53415781.
29. Véase www.nytimes.com/2021/12/13/world/europe/switzerland-money-laundering-case-juancarlos.html.
30. Véase www.reuters.com/world/europe/spanish-prosecutor-drops-fraudcase-against-former-king-juan-carlos-2022-03-02.
31. Véase www.economist.com/europe/2020/07/23/spains-king-felipe-isdistancing-himself-from-his-father.
32. Véase www.elmundo.es/espana/2021/02/26/6038d5c8fdddffb7608b4647.html.
33. Véase https://letraslibres.com/revista/a-nice-young-fellow.
1. Enric Ucelay-Da Cal, *Breve historia del separatismo catalán*, Ediciones B, Barcelona, 2018, pág. 16.
2. Véase https://elpais.com/ccaa/2016/12/24/catalunya/1482594032_989718.html.

3. Véase https://elpais.com/politica/2017/09/02/actualidad/1504344743_239294.html.
4. Véase https://elpais.com/elpais/2017/09/07/videos/1504811404_564249.html.
5. En marzo de 2022, el Parlamento Europeo ordenó una investigación sobre la implicación rusa en el *procés* catalán. Poco antes se había sabido que Puigdemont se había reunido con emisarios rusos en octubre de 2017, aunque él insistió en que había declinado el ofrecimiento de ayuda que estos le habían trasladado.
6. Lola García, *El naufragio: La deconstrucción del sueño independentista*, Península, Barcelona, 2018, pág. 174.
7. Véase www.elmundo.es/internacional/2017/03/30/58dcff9b46163f6c328b4627.html.
8. Véase www.reuters.com/article/us-spain-politics-catalonia-eu-idUSKBN1CO31E.
9. Lola García, *El naufragio…*, ob. cit., págs. 215-216.
10. Véase https://elpais.com/espana/2020-07-30/los-129-dias-de-mediacion-baldia-entre-rajoy-y-puigdemont.html.
11. Véase www.casareal.es/sitios/listasaux/Documents/Mensaje20171003/20171003_Mensaje_de_Su_Majestad_el_Rey.pdf.
12. https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/210eba2f5a7faa75.
13. Véase www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-10-18/rosafoc-tactica-violentos-incendiar-barcelona-717_2288576.
14. Daniel Gascón, *El golpe posmoderno,* Debate, Barcelona, 2018.
15. https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/210eba2f5a7faa75.
16. Véase https://es.ara.cat/opinion/mirando-futuro-oriol-junqueras_129_4011400.html.
17. Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), *Baròmetre d'Opinió Política: 2a Onada 2022*, Generalitat de Catalunya, https://ceo.gencat.cat/ca/barometre/detall/index.html?id=8428.
1. Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), *Baròmetre d'Opinió Política: 3a Onada 2020*, Generalitat de Catalunya.
2. La frase en cuestión fue acuñada por Aureli Maria Escarré, antiguo abad del monasterio benedictino de Montserrat, que desempeñó un importante papel en la reconstrucción del nacionalismo catalán en plena dictadura franquista.
3. Lola García, *El naufragio. La deconstrucción del sueño independentista,* Península, Barcelona, pág. 147.
4. Francesc-Marc Álvaro, *Ensayo general de una revuelta: Las claves del proceso catalán*, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2019, pág. 43.
5. Véase www.theguardian.com/commentisfree/2017/nov/06/carles-puigdemont-catalonia-democracy-spain-catalans.
6. Véase https://glamboy69.wordpress.com/2018/05/21/els-alcaldes-franquistes-de-convergencia.
7. Francesc-Marc Álvaro, *Ensayo general de una revuelta…*, ob. cit., pág. 52.
8. Eric Hobsbawm, «Introducción: La invención de la tradición», en *La invención de la tradición,* Crítica, Barcelona, 2002, págs. 12 y 13.
9. Norman Davis, *Reinos desaparecidos: La historia olvidada de Europa,* Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2017, cap. 4.
10. Jordi Canal, *Historia mínima de Cataluña*, Turner/El Colegio de México, Ciudad de México, 2015, pág. 36.
11. El de «monarquía compuesta» fue un término popularizado por J. H. Elliott.
12. John H. Elliott, *Catalanes y escoceses: Unión y discordia*, Taurus, Barcelona, 2018, pág. 96.
13. Raymond Carr, *España, 1808-1939,* Ariel, Barcelona, 1969, pág. 44.

14. Robert Hughes, *Barcelona*, Anagrama, Barcelona, 1992, cap. 7.
15. Citado en Daniel Gascón, *El golpe posmoderno,* ob. cit., pág. 97.
16. Robert Hughes, *Barcelona*, ob. cit.
17. Raymond Carr, *España, 1808-1939,* ob. cit., pág. 519.
18. Ibíd., págs. 546-547.
19. Manuel Chaves Nogales, *¿Qué pasa en Cataluña?,* Almuzara, Madrid, 2013, pág. 99.
20. Véase www.economist.com/europe/2017/11/02/the-man-who-wasntthere.
21. Gerald Brenan, *El laberinto español: Antecedentes sociales y políticos de la Guerra Civil,* Ruedo Ibérico, París, 1962.
22. Artículo de Xavier Vidal Folch en https://elpais.com/elpais/2018/05/13/opinion/1526226067_873249.html.
23. Enric Ucelay-Da Cal, *Breve historia del separatismo catalán*, Ediciones B, Barcelona, 2018, págs. 146-151.
24. Todas las citas del párrafo son de Manuel Chaves Nogales, *¿Qué pasa en Cataluña?*, ob. cit.
25. Jordi Canal, *Historia mínima de Cataluña*, ob. cit., págs. 203-204.
26. Fue en una carta que dirigió al subsecretario de Gobernación, Rafael Méndez. La cita original en español está tomada de https://wiki.vilaweb.cat/index.php/Negrín_declara_preferir_a_Franco_que_al_nacionalisme_català.
27. Jordi Amat, *Largo proceso, amargo sueño: Cultura y política en la Cataluña contemporánea*, Tusquets, Barcelona, 2018, pág. 105.
28. Sobre la reconstrucción del catalanismo y el papel de Pujol, véase Jordi Amat, *Largo proceso, amargo sueño…,* ob. cit.
29. Banca Catalana quebró en 1982 entre acusaciones de mala gestión y fraude. La investigación penal que siguió terminó cuando se sobreseyeron los cargos que los fiscales inicialmente encargados del caso planteaban contra Pujol y los demás directivos del banco.
30. Jordi Amat, *Largo proceso, amargo sueño,* ob. cit., págs. 345-346.
31. Citado en Robert Hughes, *Barcelona*, ob. cit., págs. 39-40.
32. Jean-Benoît Nadeau y Julie Barlow, *The Story of Spanish,* St. Martin's Press, Nueva York, 2013, cap. 5.
33. Generalitat de Catalunya, Instituto Estadístico de Cataluña, «Usos lingüísticos de la población», 2019, www.idescat.cat/indicadors/?id=aec&n=15985&lang=es.
34. Véase www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-tc-recuerda-castellano-no-puede-dejar-ser-tambien-lengua-aprendizaje-ensenanza-cataluna-20191007194309.html.
35. Véase www.elmundo.es/espana/2020/10/29/5f9af79ffc6c83bb758b45d9.html.
36. Véase https://elpais.com/opinion/2021-12-16/inmersion-linguistica-todo-por-el-pueblo-pero-sin-el-pueblo.html.
37. Véase www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180907/451686440606/el-48-de-los-libros-vendidos-en-catalunya-son-en-catalan.html.
38. Véase https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_20.
39. Véase www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20181003/452162897167/barcelona-capital.html.
40. Entrevista con el autor, Barcelona, 2012.
41. Véase www.elmundo.es/cataluna/2021/04/25/60844ae0fdddffc6ae8b45ba.html.
42. Raphael Minder, *The Struggle for Catalonia: Rebel Politics in Spain,* Hurst, Londres, 2017, pág. 33.
43. Jordi Amat, *La conjura de los irresponsables,* Anagrama, Barcelona, 2017, pág. 17.

44. Este párrafo y el siguiente se basan en las ideas expuestas por Jordi Amat en *La conjura de los irresponsables*, ob. cit.
45. Jordi Canal, *Con permiso de Kafka: El proceso independentista en Cataluña*, Península, Barcelona, 2018, pág. 142.
46. Daniel Gascón, *El golpe posmoderno*, ob. cit., págs. 57-58.
47. Citado en Francesc-Marc Álvaro, *Ensayo general de una revuelta…,* ob. cit., págs. 127 y 141.
48. Jordi Amat, *La conjura de los irresponsables,* ob. cit., pág. 54.
49. Véase https://confilegal.com/20210616-la-audiencia-nacional-abre-juicio-oral-a-jordi-pujol-y-sus-siete-hijos-e-impone-una-fianza-de-75-millones-al-primogenito.
50. Véanse https://elpais.com/politica/2019/08/15/actualidad/1565879983_942585.html y https://elpais.com/espana/2020-07-16/de-la-mata-proponejuzgar-a-jordi-pujol-su-mujer-y-sus-hijos-por-enriquecerse-mediante-la-corrupcion.html.
51. «La Audiencia de Barcelona ordena el ingreso en prisión de Oriol Pujol», Poder Judicial de España, Archivo de Notas de Prensa, 9 de enero de 2019.
52. Lola García, *El naufragio…,* ob. cit., págs. 136-137.
53. La cita en castellano (la original era en catalán) está tomada de https://elpais.com/ccaa/2018/05/11/catalunya/1526032585_362561.html.
54. Véase www.economist.com/europe/2017/01/07/in-their-search-forindependence-catalans-can-resemble-brexiteers.
55. Frances-Marc Álvaro, *Ensayo general de una revuelta…,* ob. cit., cap. 8.
56. Véase www.elmundo.es/cataluna/2018/04/17/5ad4e148e5fdea22598b4603.html.
57. Citado en José Álvarez Junco, *Dioses útiles: Naciones y nacionalismo,* Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2016, pág. 227.
58. Daniel Gascón, *El golpe posmoderno,* ob. cit., cap. 8.
59. Véase www.elperiodico.com/es/politica/20180514/quim-torra-articulos-contra-espanoles-6817795.
60. Véase https://elpais.com/espana/elecciones-catalanas/2021-02-07/breviario-indepe.html.
61. Amartya Sen, *Identidad y violencia: La ilusión del destino*, Katz, Buenos Aires, 2007, pág. 11.
62. Véase https://www.elperiodico.com/es/politica/20180514/quim-torraarticulos-contra-espanoles-6817795.
63. José Álvarez Junco, *Dioses útiles: Naciones y nacionalismo,* Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2016, págs. 51-52.
1. «A orillas del Duero», en *Campos de Castilla* (1912). Véase Antonio Machado, *Poesía*, Alianza, Madrid, 2017, pág. 55.
2. Richard Ford, *Manual para viajeros por España y lectores en casa,* Turner, Madrid, 2008, vol. 1, pág. 6. El libro de Ford se publicó por vez primera en 1845.
3. Juan Pablo Fusi, *Historia mínima de España,* Turner, Madrid, 2012, cap. 4; Richard Herr, «Flujo y reflujo, 1700-1833», en Raymond Carr (ed.), *Historia de España,* Península, Barcelona, 2001.
4. Sobre Goya, véase Robert Hughes, *Goya*, Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores, Barcelona, 2004.
5. José Álvarez Junco, *Mater dolorosa: La idea de España en el siglo XIX,* Taurus, Barcelona, 2001, pág. 73.
6. Ibíd., pág. 137.
7. Raymond Carr, *España, 1808-1939,* Ariel, Barcelona, 1969, pág. 49.
8. Véase Nigel Townson (ed.), *¿Es España diferente? Una mirada comparativa (siglos*

XIX y XX), Taurus, Madrid, 2010.
9. Citado en José Álvarez Junco, *Mater dolorosa,* ob. cit., pág. 533.
10. Adrian Shubert, *Espartero, el Pacificador,* Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2018, pág. 25.
11. Epígrafe que aparece en el frontispicio de Adrian Shubert, ob. cit.
12. Gregorio Alonso, «El fin del Antiguo Régimen: 1808-1833», en A. Shubert y J. Álvarez Junco (eds.), *Nueva historia de la España contemporánea: 18082018,* Galaxia Gutenberg, 2018.
13. Según José Álvarez Junco, *Dioses útiles…,* ob. cit., pág. 163, entre 1820 y 1936 hubo casi un centenar de pronunciamientos.
14. En el prólogo de Javier Barón, *Una pintura para una nación,* Museo del Prado, Madrid, 2019.
15. Sobre los paralelismos entre ambas guerras, véase Mark Lawrence, *Las guerras civiles españolas: Una historia comparada de la Primera Guerra Carlista y el conflicto de 1936-1939,* Alianza, Madrid, 2019.
16. Juan Pablo Fusi, *Historia mínima de España,* ob. cit., pág. 191.
17. Julio Aróstegui, «El carlismo y las guerras civiles», en J. Aróstegui, Jordi Canal y Eduardo G. Calleja, *El carlismo y las guerras carlistas,* La Esfera de los Libros, Madrid, 2011.
18. Véase Adrian Shubert, *Espartero, el Pacificador,* ob. cit.
19. Mark Lawrence, *Las guerras civiles españolas…,* ob. cit., págs. 32 y 66.
20. Citado en Adrian Shubert, *Espartero, el Pacificador*, ob. cit., pág. 154.
21. Ibíd.
22. Roger Price, *Historia de Francia*, Cambridge University Press, Madrid, 1998, pág. 178.
23. Véanse Julio Aróstegui *et al., El carlismo y las guerras carlistas,* La Esfera de los Libros, Madrid, 2011, y María Cruz Romeo Mateo, «Las guerras civiles del siglo XIX: ¿Una ruta excepcional hacia la modernización?», en Nigel Townson (ed.), *¿Es España diferente?…,* ob. cit.
24. Si bien no deja de ser cierto que Franco gobernó como si fuera un monarca absolutista.
25. Mark Lawrence, «Juan Álvarez Mendizábal», en Adrian Shubert y José Álvarez Junco (eds.), *Nueva historia de la España contemporánea: 18082018*, Galaxia Gutenberg, 2018.
26. Sobre el desarrollo del Estado, véase Diego Palacios Cerezales, «El Estado», en Adrian Shubert y José Álvarez Junco (eds.), *Nueva historia de la España contemporánea*, ob. cit.
27. El lema del Gobierno de Bravo Murillo posiblemente es el origen de la célebre divisa atribuida a Porfirio Díaz, dictador mexicano de 1884 a 1911, «Poca política y mucha administración».
28. Isabel Burdiel, «Introducción», en *Isabel II: Una biografía,* Taurus, Barcelona, 2019.
29. María Sierra, «El tiempo del liberalismo: 1833-1874», en Adrian Shubert y José Álvarez Junco (eds.), *Nueva historia de la España contemporánea*, ob. cit.
30. Raymond Carr, *España, 1808-1939*, ob. cit., págs. 476-477.
31. Nigel Townson, «Introducción», en Nigel Townson (ed.), *¿Es España diferente?*, ob. cit.
32. Leandro Prados de la Escosura, *Spanish Economic Growth, 1850-2015,* Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2017, pág. 41.
33. Diego Palacios Cerezales, «El Estado», en Adrian Shubert y José Álvarez Junco (eds.), *Nueva historia de la España contemporánea,* ob. cit., pág. 314.

34. Este párrafo y el siguiente se basan sobre todo en Eugen Weber, *De campesinos a franceses: La modernización del mundo rural (1870-1914),* Taurus, Barcelona, 2023, pág. 15.
35. Ibíd., pág. 14.
36. Citado en ibíd., pág. 139.
37. Ibíd., pág. 440.
38. Véase www.ft.com/content/102f4bb2-d351-11e7-8c9a-d9c0a5c8d5c9.
39. Véase https://elpais.com/cultura/2020-10-09/fallece-el-historiadorjoseph-perez-premio-principe-de-asturias-de-ciencias-sociales-de-2014.html.
40. Véase https://elpais.com/internacional/2021-04-08/francia-aprueba-una-ley-para-proteger-las-lenguas-regionales-y-facilitar-su-ensenanza.html.
41. Véase https://elpais.com/internacional/2021-05-21/el-constitucional-frances-veta-parcialmente-la-ley-que-permitia-la-inmersion-linguistica-en-francia.html?rel=lom.
42. El resto de este párrafo se basa en Diego Palacios Cerezales, «El Estado», en Adrian Shubert y José Álvarez Junco (eds.), *Nueva historia de la España contemporánea*, ob. cit.
43. José Álvarez Junco, *Mater dolorosa,* ob. cit., pág. 541.
44. Ibíd., pág. 547.
45. Arturo Barea, *La forja de un rebelde I: La forja,* Debolsillo, Barcelona, 2010.
46. España conservó el norte de Marruecos, el Sáhara Occidental y unas pocas colonias de escasa extensión en el continente africano.
47. Mary Vincent, *Spain 1833–2002: People and State*, Oxford University Press, Oxford, 2007, págs. 87-91.
48. Véase una crítica particularmente demoledora de los argumentos de Ortega en José María Ridao, *República encantada: Tradición, tolerancia y liberalismo en España*, Tusquets, Barcelona, 2021, págs. 193-219.
49. José Ortega y Gasset, *España invertebrada y otros ensayos,* Alianza, Madrid, 2014, pág. 62.
50. Ibíd., pág. 76.
51. José Álvarez Junco, *Mater dolorosa…,* ob. cit., pág. 603.
52. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 1932, págs. 5855-5877.
53. Xosé M. Núñez Seixas, «Nación y nacionalismos en España, siglos XIX y XX», en Adrian Shubert y José Álvarez Junco (eds.), *Nueva historia de la España contemporánea: 18082018,* ob. cit.
54. Citado en Eugen Weber, *De campesinos a franceses*..., ob. cit., pág. 140.
55. Xosé M. Núñez Seixas, «Nación y nacionalismos en España, siglos XIX y XX», en Adrian Shubert y José Álvarez Junco (eds.), *Nueva historia de la España contemporánea: 18082018,* ob. cit., pág. 267.
1. Véase https://elpais.com/politica/2018/06/19/actualidad/1529397533_593099.html.
2. Véase https://elpais.com/politica/2018/08/24/actualidad/1535104789_556975.html.
3. Véase https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/intervenciones/Paginas/2019/prsp07102019.aspx.
4. Los comentarios de Silva y de Sánchez-Albornoz están tomados de una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros.
5. Véase Xosé M. Núñez Seixas, *Guaridas del lobo: Memorias de la Europa autoritaria, 1945-2020*, Crítica, Barcelona, 2021.
6. Enrique Moradiellos, «Introducción», en *Franco: Anatomía de un dictador*, Turner,

Madrid, 2018.
7. Véase una buena y sucinta explicación de la ley y de su contexto en William Chislett, *Microhistoria de España contada por un británico,* Espasa, Barcelona, 2020, págs. 240-244.
8. Véase https://elpais.com/espana/2022-01-09/las-huellas-del-horror-franquista-10000-esqueletos-recuperados-en-20-anos.html.
9. Véase https://elpais.com/espana/2020-09-02/la-juez-declara-al-estado-propietario-legitimo-del-pazo-de-meiras.html.
10. Véase Omar Encarnación, *Democracy without Justice in Spain: The Politics of Forgetting*, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 2014.
11. Véase https://elpais.com/opinion/2021-10-31/datos-necesarios-para-la-memoria-historica.html.
12. Enrique Moradiellos, *Historia mínima de la guerra civil española,* Turner/El Colegio de México, Ciudad de México, 2016, cap. 2, pág. 42.
13. Paul Preston, *Comrades: Portraits from the Spanish Civil War,* HarperCollins, Londres, 1999, pág. 195.
14. Santos Juliá, *Vida y tiempo de Manuel Azaña, 1880-1940,* Taurus, Madrid, 2008.
15. Citado en Raymond Carr, *España, 1808-1939*, Ariel, Barcelona, 1969, pág. 582.
16. Mark Lawrence, *Las guerras civiles españolas: Una historia comparada de la Primera Guerra Carlista y el conflicto de 1936-1939*. Alianza, Madrid, 2019, pág. 28.
17. Enrique Moradiellos, *Historia mínima…*, ob. cit., págs. 63-64.
18. Ibíd., pág. 63.
19. Anthony Beevor, *La guerra civil española,* Crítica, Barcelona, 2005, caps. 6 y 7.
20. Enrique Moradiellos, *Historia mínima…*, ob. cit., pág. 21.
21. Paul Preston, *Un pueblo traicionado: España de 1874 a nuestros días. Corrupción, incompetencia política y división social*, Debate, Barcelona, 2019, cap. 10.
22. Manuel Chaves Nogales, «Prólogo del autor», en *A sangre y fuego: Héroes, bestias y mártires de España,* Libros del Asteroide, Barcelona, 2011.
23. Citado en Santos Juliá, *Vida y tiempo de Manuel Azaña…*, ob. cit., pág. 400.
24. Véase, por ejemplo, Fernando del Rey, *Retaguardia roja: Violencia y revolución en la guerra civil española,* Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2019.
25. Enrique Moradiellos, *Historia mínima…*, ob. cit., págs. 275-276.
26. Santos Juliá, *Vida y tiempo de Manuel Azaña…*, ob. cit., pág. 392.
27. Véase https://elpais.com/elpais/2017/12/22/opinion/1513954465_461537.html.
28. Paul Preston, *El holocausto español: Odio y exterminio en la Guerra Civil y después*, Debate, Barcelona, 2011, pág. 648.
29. Véanse Paul Preston, *Franco: Caudillo de España,* Grijalbo, Barcelona, 1994, y Enrique Moradiellos, *Franco: Anatomía de un dictador…*, ob. cit.
30. Como puede verse en *Mientras dure la guerra,* película de 2019 dirigida por Alejandro Amenábar.
31. Paul Preston, *Un pueblo traicionado: España de 1874 a nuestros días: Corrupción, incompetencia política y división social*, Debate, Barcelona, 2019.
32. Varios miles de republicanos que habían huido a Francia terminaron siendo enviados al campo de concentración de Mauthausen, en Austria, tras la invasión germana del país galo. Otros se unieron a la Resistencia francesa y formaron parte de las primeras tropas que entraron en París en la liberación de 1944.
33. Enrique Moradiellos, *Franco…*, ob. cit., pág. 42.
34. Paul Preston, *Un pueblo traicionado…*, ob. cit., pág. 349.
35. Véase https://es.wikipedia.org/wiki/Paz,_piedad_y_perdón.
36. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), *Memorias de la Guerra Civil y el*

franquismo, abril de 2008, pregunta 12.
37. Javier Cercas, «Un pacto sobre el pasado», *El País Semanal,* 9 de abril de 2017.
38. Por citar un ejemplo trivial, yo mismo no puedo estar del todo seguro de que las instantáneas extraídas de mi memoria a las que me he referido en el prólogo del libro sean verdaderamente precisas desde el punto de vista de los hechos.
39. Citado en David Rieff, *Elogio del olvido: Las paradojas de la memoria histórica,* Debate, Barcelona, 2017.
40. CIS, *Memorias de la Guerra Civil…,* ob. cit., pregunta 21.
41. Véase https://elpais.com/cultura/2017/02/09/babelia/1486671469_920588.html.
42. Véase https://elpais.com/opinion/2020-10-12/ni-heroes-ni-villanos.html.
43. Véase https://elpais.com/politica/2018/08/29/actualidad/1535509189_798030.html.
44. «Truth Commissions: The Agony of Silence», *The Economist,* 15 de mayo de 2021.
45. Entrevista con el autor, noviembre de 2018.
46. Véase https://elpais.com/diario/2002/11/21/espana/1037833222_850215.html.
47. David Rieff, *Elogio del olvido...,* ob. cit.
48. Ibíd.
49. Véase https://www.mpr.gob.es/prencom/notas/Paginas/2021/280521calvo-sevilla.aspx.
50. Véase www.lavanguardia.com/politica/20201204/49864525002/jemad-miguel-angel-villarroya-expresiones-militares-confunden-opinion-publica.html.
51. Véase https://elpais.com/internacional/2021-04-29/francia-promete-sanciones-para-los-militares-que-alertaron-del-desmoronamiento-del-pais.html.
52. Véase https://elpais.com/internacional/2021-06-27/la-doble-vida-defranco-a-y-el-extremismo-en-el-ejercito-aleman.html.
53. Véase https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2021/11/17/who-votes-forthe-populist-radical-right-in-portugal-and-spain.
54. Véase https://elpais.com/espana/2020-11-18/los-presupuestos-protagonizan-la-sesion-de-control-al-gobierno-en-el-congreso.html.
1. Finalmente cerró el 31 de agosto de 2023.
2. Eduardo Madina y Borja Sémper, *Todos los futuros perdidos: Conversaciones sobre el final de ETA,* Plaza & Janés, Barcelona, 2021, pág. 26.
3. Véase http://politica.elpais.com/politica/2017/04/10/actualidad/1491779940_303824.html.
4. Este párrafo se basa en José Álvarez Junco, *Dioses útiles…,* ob. cit., págs. 234-252; la cita es de la pág. 251.
5. Citado en Paddy Woodworth, *The Basque Country: A Cultural History,* Signal, Oxford, 2007, pág. 13.
6. André Flores-Bello *et al.*, «Genetic Origins, Singularity and Heterogeneity of Basques», *Current Biology*, 31, 10, 2021, págs. 2167-2177.
7. José Álvarez Junco, *Dioses útiles: Naciones y nacionalismo*, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2016, págs. 239-240.
8. Paddy Woodworth, *The Basque Country: A Cultural History,* Signal, Oxford, 2007, pág. 27.
9. Véase John Hooper, *Los nuevos españoles*, Javier Vergara, Buenos Aires, 1996, cap. 17.
10. Mark Kurlansky, *La historia vasca del mundo,* Ediciones del Bronce, Barcelona, 2000, cap. 9.
11. Entrevista con el autor, Bilbao, mayo de 2018.

12. John Hooper, *Los nuevos españoles*, ob. cit., pág. 386.
13. Entrevista con el autor, Bilbao, mayo de 2018.
14. Paddy Woodworth, *The Basque Country…,* ob. cit., págs. 175-176.
15. Véase https://elpais.com/opinion/2021-06-04/el-legado-de-la-heridadel-terrorismo-en-espana.html.
16. Véase www.elmundo.es/opinion/2021/06/12/60c390a121efa0656d8b465d.html.
17. Véase https://politica.elpais.com/politica/2018/04/28/actualidad/1524940722_226849.html.
18. Véase https://politica.elpais.com/politica/2018/02/21/actualidad/1519238990_863473.html.
19. Juan Pablo Fusi y José Antonio Pérez (eds.), *Euskadi, 1960-2011: Dictadura, transición y democracia*, Biblioteca Nueva, Madrid, 2017, págs. 30 y 284.
20. Mark Kurlansky, *La historia vasca del mundo,* ob. cit.
21. Eduardo Madina y Borja Sémper, *Todos los futuros perdidos*, ob. cit.
22. Fernando Aramburu, *Patria*, Tusquets, Barcelona, 2016.
23. Tobias Buck, *After the Fall: Crisis, Recovery and the Making of a New Spain*, Weidenfeld & Nicolson, Londres, 2019, cap. 7.
24. Véase https://elpais.com/diario/1998/09/28/espana/906933601_850215.html.
25. Antonio Caño, *Rubalcaba: Un político de verdad*, Plaza & Janés, Barcelona, 2020, pág. 214.
26. Véase la cifra en Paddy Woodworth, *The Basque Country…,* ob. cit., pág. 115.
27. Entrevista con el autor, mayo de 2018.
28. Entrevista del autor a Iván Jiménez, director gerente de Bizkaia Talent, en mayo de 2018.
29. Sesión informativa con corresponsales extranjeros, junio de 2020.
30. Euskobarómetro, 2019, www.ehu.eus/es/web/euskobarometro.
31. Véase https://elpais.com/elpais/2018/04/25/opinion/1524669888_905336.html.
32. Véase https://elpais.com/espana/2021-10-18/arnaldo-otegi-realiza-unadeclaracion-solemne-con-motivo-de-la-decimo-aniversario-del-fin-deeta.html.
33. Véase https://elpais.com/espana/2021-10-25/eh-bildu-ensancha-el-tableropolitico-vasco.html.
34. José Álvarez Junco, *Dioses útiles…,* ob. cit., págs. 252-270.
35. Entrevista con el autor, octubre de 2020.
36. Véase https://elpais.com/elpais/2020/07/01/eps/1593617739_343431.html.
1. Véase, por ejemplo, https://elpais.com/economia/2021-02-14/santana-10anos-de-un-motor-gripado-en-linares.html.
2. Entrevista con el autor, mayo de 2018.
3. William Chislett, «Challenges and Opportunities for Spain in Times of COVID-19», Real Instituto Elcano Working Paper, abril de 2021.
4. Véase www.huffingtonpost.es/entry/quien-es-ana-iris-simon-pedro-sanchez-discurso_es_60ab516be4b0d56a83eba511.html.
5. Manuel García-Santana *et al.,* «Growing like Spain: 1995-2007», *International Economic Review,* 61, 1, 2020, págs. 383-416.
6. Michael Reid, «The Strain in Spain: A Special Report», *The Economist*, 28 de julio de 2018.
7. Politikon, *El muro invisible,* Debate, Barcelona, 2017, cap. 4.
8. Véase https://elpais.com/economia/2021-07-12/pedro-sanchez-presenta-el-plan-estrategico-para-impulsar-el-coche-electrico-con-los-fondos-europeos.html.
9. Véase www.expansion.com/empresas/

distribucion/2020/01/29/5e309dec468aebd76f8b462f.html.
10. Miguel Almunia *et al.*, «Venting Out: Exports during a Domestic Slump», National Bureau of Economic Research Working Paper 25372, diciembre de 2018.
11. Peter Eppinger *et al.,* «The Great Trade Collapse and the Spanish Export Miracle», *The World Economy,* 41, 2, febrero de 2018.
12. Véase www.astimobilerobotics.com/blog/abb-to-acquire-asti-to-drivenext-generation-of-flexible-automation.
13. Véase www.economist.com/europe/2018/08/18/can-other-cities-imitatebilbaos-cultural-tourism-success.
14. Véase https://elpais.com/economia/2020-11-08/la-banca-cierra-en-12anos-el-50-de-oficinas-y-echa-al-40-de-empleados.html.
15. Véase www.elmundo.es/opinion/2020/02/10/5e40084efc6c83be6b8b458b.html.
16. Klaus Schwab *et al., Global Competitiveness Report 2019,* Foro Económico Mundial, Ginebra, 2019.
17. Véase www.elmundo.es/economia/actualidad-economica/2021/05/09/6093b16cfc6c83f8668b4602.html.
18. Véase https://elpais.com/economia/2018/10/15/actualidad/1539605638_505418.html.
19. Véase Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TEC00115/default/table.
20. Véase https://elpais.com/economia/2020-08-01/el-verano-mas-negrodel-turismo.html.
21. Entrevista con el autor, julio de 2021.
22. OCDE, *Economic Surveys: Spain,* París, mayo de 2021.
23. Véase www.psoe.es/media-content/2019/12/30122019-Coalición-progresista.pdf.
24. *OCDE Economic Surveys: Spain,* OCDE, París, 2017, pág. 63.
25. Véase https://elpais.com/espana/2021-07-04/yolanda-diaz-el-gobiernono-puede-parecer-mas-cerca-de-la-elite-que-de-la-gente.html.
26. Según José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, www.elmundo.es/opinion/2020/05/30/5ed11211fc6c83e3588b4584.html.
27. Entrevista con el autor, julio de 2021.
28. *OCDE Economic Surveys: Spain,* OCDE, París, 2017, pág. 78.
29. Véase https://elpais.com/economia/2019/04/17/actualidad/1555529390_753721.html.
30. Ángel de la Fuente y Rafael Doménech, «Cross-country Data on Skills and the Quality of Schooling: A Selective Survey», BBVA Research Working Paper, noviembre de 2021.
31. Tobias Buck, *After the Fall: Crisis, Recovery and the Making of a New Spain*, Weidenfeld & Nicolson, Londres, 2019, págs. 91-92.
32. Entrevista con el autor, mayo de 2018.
33. Véase https://elpais.com/educacion/2021-02-07/el-curso-de-la-pandemia-elevo-los-aprobados-a-maximos-historicos.html. En las pruebas PISA de 2018 hubo un problema técnico con el examen de lectura en España cuyos resultados no eran homologables con otros países o pruebas anteriores.
34. Véase https://www.oecd.org/pisa/ y https://elpais.com/educacion/2023-12-05/informe-pisa-por-comunidades-autonomas-cataluna-se-hundecastilla-y-leon-sobresale-y-madrid-se-recupera.html#?rel=mas_sumario
35. Véase www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021.
36. Véase www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/

paginas/2022/101022-escriva-pensiones.aspx.
37. OCDE, *Economic Surveys: Spain,* París, mayo de 2021, y OCDE, *Pensions at a Glance: How Does Spain Compare?,* noviembre de 2021.
38. Véase https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_di03_custom_8716089/default/table?lang=en.
39. Kiko Lorenzo y Raúl Flores, Cáritas Madrid, conferencia con corresponsales extranjeros, mayo de 2020.
40. Entrevista con el autor, junio de 2020.
41. W. Chislett, «Challenges and Opportunities...», ob. cit., pág. 16.
42. Comisión Europea, *Informe sobre España 2019*.
43. Véase https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_10/default/table?lang=en.
1. Walters dio esta versión de aquel encuentro en una entrevista publicada en el periódico español *ABC* el 15 de agosto de 2000.
2. John Hooper, *Los nuevos españoles,* Javier Vergara, Buenos Aires, 1996.
3. Entrevista con el autor, diciembre de 2021.
4. Véase https://www.publico.es/politica/ministros-nuevo-gobierno-sanchez.html.
5. Datos del Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad.
6. Véase https://elpais.com/sociedad/2021-08-25/conciliacion-la-asignatura-pendiente-lastrada-por-la-pandemia.html.
7. Véase https://elpais.com/sociedad/2019/03/03/actualidad/1551638433_568255.html.
8. Heyne y Manucci, Europblog, LSE, noviembre de 2021.
9. Véase https://yougov.co.uk/topics/international/articles-reports/2021/08/31/international-survey-how-supportive-would-britons-.
10. Véase www.elmundo.es/elecciones/elecciones-madrid/2021/04/13/6075d78121efa0e2778b4628.html.
11. Entrevista con el autor, Madrid, abril de 2021.
12. Mar Griera, Julia Martínez-Ariño y Anna Clot-Garrell, «Banal Catholicism, Morality Policies and the Politics of Belonging in Spain», *Religions*, 12, 2021.
13. Véanse las cifras en «La Iglesia católica en España», Conferencia Episcopal Española, mayo de 2021.
14. Entrevista con el autor, abril de 2021.
15. Véase https://elpais.com/sociedad/2021-12-19/la-iglesia-espanola-afrontauna-gran-investigacion-de-la-pederastia-con-251-nuevos-casos-aportadospor-el-pais.html.
16. Entrevista con el autor, abril de 2021.
17. La tasa de fertilidad es el número medio de hijos nacidos por mujer en edad fértil.
18. William Chislett, *Forty Years of Democratic Spain*, Real Instituto Elcano, Madrid, 2018.
19. Aitana Guia, «Migraciones», en Adrian Shubert y José Álvarez Junco (eds.), *Nueva historia de la España contemporánea: 18082018*, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2018, cap. 17.
20. Arturo Barea, *La forja de un rebelde I: La forja,* Debolsillo, Barcelona, 2010, pág. 138.
21. Rosa Aparicio y Alejandro Portes, *Crecer en España: La integración de los hijos de inmigrantes,* Obra Social «la Caixa», Barcelona, 2014.
22. Véase https://elpais.com/elpais/2020/01/03/opinion/1578068213_476762.html.
23. Véase https://www.elmundo.es/opinion/2021/04/10/606b4dc0fdddffc7998b4645.html.

24. Véase https://elpais.com/espana/2021-11-21/el-15-m-rural-desafia-alpsoe-y-al-pp.html.
25. Ángel de la Fuente y Xavier Vives, «Infrastructure and Education as Instruments of Regional Policy: Evidence from Spain», *Economic Policy*, 10, 20, abril de 1995.
26. Ignacio Urquizu, *Otra política es posible,* Debate, Barcelona, 2021, cap. 5, y entrevista con el autor, marzo de 2019.
27. Véase https://www.elmundo.es/economia/2020/06/23/5eef92f3fdddff02588b4579.html.
28. Véase https://elpais.com/elpais/2020/02/14/eps/1581678745_698258.html.
29. Véase https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-08-21/seis-diasde-desastre-ecologico-en-el-mar-menor-con-miles-de-peces-muertos.html.
30. Citado en Adrian Shubert y José Álvarez Junco (eds.), *Nueva historia de la España contemporánea*…, ob. cit.
31. Ibíd.
32. Véase www.ft.com/content/0d38e8d3-3f20-4818-8751-740d05f8ac13?shareType=nongift.
33. Véase www.elmundo.es/opinion/columnistas/2022/01/07/61d6c971fdddff3e3d8b4575.html.
34. Véase https://elpais.com/ccaa/2019/05/20/madrid/1558363176_904628.html.
35. *El País Semanal,* 30 de octubre de 2016.
36. Véase https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-05-28/el-lobo-de-bestia-feroz-a-simbolo-de-la-naturaleza-salvaje.html.
37. Véase https://elpais.com/politica/2019/05/16/actualidad/1558033959_289970.html.
38. Ángeles González-Fernández, «Población y sociedad: 1960-2010», en Jordi Canal (ed.), *Historia contemporánea de España, vol. 2: 1931-2017,* Taurus, Barcelona, 2017. La cita aparece en la pág. 425.
39. Véase https://elpais.com/politica/2017/06/12/actualidad/1497288605_348268.html.
40. Véase https://elpais.com/sociedad/2018/10/16/actualidad/1539678495_813483.html.
1. José Ignacio Torreblanca, *Asaltar los cielos: Podemos o la política después de la crisis*, Debate, Barcelona, 2015, pág. 121.
2. Entrevista con el autor, mayo de 2021.
3. Este párrafo y el siguiente se basan en Torreblanca, *Asaltar los cielos…,* ob. cit. Véase también «Pablo Iglesias habla sobre su relación con Irán», YouTube, 2 de noviembre de 2015, www.youtube.com/watch?v=jjeVbE3dL4Q.
4. Pablo Iglesias, *Disputar la democracia: Política para tiempos de crisis,* Akal, Madrid, 2014.
5. El Movimiento Cinco Estrellas copió a su vez la expresión de un libro publicado en 2007 por dos periodistas del país transalpino, Sergio Rizzo y Gian Antonio Stella. Ya en su día el escritor español Miguel de Unamuno, de la Generación del 98, había criticado «la casta histórica».
6. Pablo Iglesias, *Disputar la democracia...,* ob. cit.
7. Ignacio Urquizu, *La crisis de representación en España*, Catarata, Madrid, 2016, pág. 100.
8. Véanse, por ejemplo, los informes sobre el estado de la democracia en el mundo que elaboran el Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo o la Economist Intelligence Unit.
9. Miriam González Durántez, *Devuélveme el poder: Por qué urge una reforma liberal en España,* Península, Barcelona, 2019, cap. 1.

10. Ibíd., pág. 29.
11. Antonio Muñoz Molina, *Todo lo que era sólido,* Seix Barral, Barcelona, 2013, págs. 46-49.
12. Véase www.elconfidencial.com/espana/2021-02-15/cifuentes-caso-master-audiencia-madrid_2951416.
13. Véase https://elpais.com/politica/2018/04/25/actualidad/1524643078_623889.html.
14. «Spain: A Question of Degrees», *The Economist,* 22 de septiembre de 2018. El Instituto de Derecho Público de la URJC fue clausurado tras aquellos escándalos, y su director, Enrique Álvarez Conde, fue acusado de falsedad documental y malversación, aunque falleció antes de ir a juicio.
15. Véase https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/PoderJudicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-penasde-hasta-51-anos-de-prision-para-los-procesados-en-el--caso-Gurtel-.
16. «Discurso de Pedro Sánchez en el debate de la Moción de Censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy», Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2018, pág. 6.
17. Véase www.rtve.es/noticias/20210806/juicio-ignacio-gonzalez-adjudicaciones-campo-golf-canal-isabel-ii/2153481.shtml.
18. Véase www.poderjudicial.es/cgpj/es/PoderJudicial/Sala-de-Prensa/Archivo-de-notas-de-prensa/La-Audiencia-Provincial-de-Sevilla-notifica-la-sentencia-del-caso-de-los-ERE.
19. Raphael Minder, *¿Esto es España? Una década de corresponsalía*, Península, Barcelona, 2020, págs. 317-324.
20. Antonio Muñoz Molina, *Todo lo que era sólido,* ob. cit., págs. 109-119.
21. Véase https://elpais.com/espana/2021-04-05/el-gobierno-inicia-la-reforma-de-la-ley-franquista-de-secretos-oficiales.html.
22. Véase https://elpais.com/espana/2020-08-15/urge-un-gobierno-deconcentracion-moral-y-constitucional-en-espana.html?rel=mas.
23. Véase https://elpais.com/opinion/2021-08-17/las-reformas-son-para-el-verano.html.
24. Véase www.lavanguardia.com/politica/20201101/4977267538/funcionarios-empleo-publico-burocracia-pandemia.html.
25. Véase https://elpais.com/opinion/2021-06-04/larra-en-el-ciberespacio.html.
26. Véase https://elpais.com/opinion/2021-04-11/mi-espana.html.
27. Véase https://elpais.com/opinion/2020-11-23/administracion-digital-secuestrada.html.
28. John Hooper, *Los nuevos españoles,* ob. cit., pág. 221.
29. Véase https://elpais.com/politica/2018/11/20/actualidad/1542742122_009936.html.
30. Véase, por ejemplo, www.publico.es/politica/juicio-independencia-rigor-vox-proces-acusar-organizacion-criminal-no-cuadre-relato-juez-instructor.html.
31. Véase https://elpais.com/politica/2016/12/02/actualidad/1480701452_072845.html.
32. Véase https://www.rtve.es/noticias/20230609/cgpj-cifra-1127-rebajaspena-115-excarcelaciones-ley-del-solo-si-si/2449049.shtml#:~:text=Los%20tribunales%20han%20acordado%201.127,hasta%20el%201%20de%20junio.
33. Entrevista con el autor, mayo de 2021.
34. Véase https://ig.ft.com/jailed-bankers.
35. Véase www.publico.es/politica/90-politicos-funcionarios-prision-espana-delitos-corrupcion.html.

36. Véase https://elpais.com/política/2016/01/22/actualidad/1453461680_098827.html.
37. Ramón González Férriz, *La ruptura: El fracaso de una (re)generación*, Flash (libros electrónicos), Penguin, 2021.
38. Véase www.eldiario.es/politica/ideologico-podemos-preocupado-mostrarse-partidos_128_3591344.html.
39. Véase https://elpais.com/espana/2021-03-16/mas-madrid-desbarata-elintento-de-iglesias-de-liderar-el-asalto-de-madrid.html.
40. Antonio Caño, *Rubalcaba: Un político de verdad,* Plaza & Janés, Barcelona, 2020, pág. 293 y cap. 9.
41. Véase www.newyorker.com/magazine/2022/04/25/how-democracies-spy-on-their-citizens.
42. Véase www.mpr.gob.es/prencom/notas/Paginas/2022/240422-reunion-generalitat-catalunya.aspx.
43. Véase www.elperiodico.com/es/politica/20220427/catalangate-robles-espionaje-cni-independentismo-13574015.
44. Véase https://paginadelforodeprofesores.wordpress.com/carta-a-citizenlab-sobre-catalangate.
45. Véase https://elpais.com/espana/2022-05-15/ronald-deibert-fundador-de-citizenlab-los-gobiernos-usan-pegasus-porque-tienen-apetito-deespiar.html.
46. Véase www.pp.es/actualidad-noticia/casado-abascal-no-su-mocion-esno-sanchez-sus-socios-visibles-que-esta-sombra-que.
47. Véase https://elpais.com/espana/2022-04-03/el-nombramiento-de-feijoollevaaires-de-cambio-de-ciclo-en-la-tensa-relacion-entre-pp-y-psoe.html.
48. Véase https://elpais.com/espana/2022-05-06/feijoo-reivindica-en-barcelona-la-identidad-territorial-frente-a-mentalidades-centralistas.html#?rel=mas.
49. José Rama, Lisa Zanotti, Stuart J. Turnbull-Dugarte y Andrés Santana, *Vox: The Rise of the Spanish Populist Radical Right,* Routledge, Abingdon, 2021, pág. 144.
50. Antonio Caño, *Rubalcaba…*, ob. cit., caps. 7 y 8.
51. La ley revocaba una restricción previa del derecho a formar piquetes informativos durante las huelgas. Véase www.elmundo.es/espana/2021/04/23/60828fd7fdddff88778b458e.html.
52. Véase https://dobetter.esade.edu/es/polarizacion-espana.
53. Ignacio Urquizu, *Otra política es posible,* Debate, Barcelona, 2021, cap. 1.
1. Emilio Lamo de Espinosa, *Entre águilas y dragones: El declive de Occidente*, Espasa, Barcelona, 2021, pág. 330.
2. Ibíd.
3. Richard Ford, *Manual para viajeros por España y lectores en casa,* Turner, Madrid, 2008, págs. 6 y 7. La cursiva es la del original.
4. Simon Barton, *A History of Spain,* Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2004, pág. 45. «Taifa» significa «partido» o «facción» en árabe.
5. José Ortega y Gasset, *España invertebrada y otros ensayos,* Alianza, Madrid, 2014, pág. 154.
6. Ignacio Urquizu, *Otra política es posible,* Debate, Barcelona, 2021, cap. 4.
7. José Rama *et al., Vox: The Rise of the Spanish Populist Radical Right,* Routledge, Abingdon, 2021, pág. 143.
8. Véase https://elpais.com/opinion/2021-03-15/un-proyecto-fallido.html. Poco después, *El País* dejó de publicar artículos de Caño.
9. José Esteban, *Viajeros hispanoamericanos en Madrid*, Sílex, Madrid, 2004, pág. 146.

España

Michael Reid

La lectura abre horizontes, iguala oportunidades y construye una sociedad mejor. La propiedad intelectual es clave en la creación de contenidos culturales porque sostiene el ecosistema de quienes escriben y de nuestras librerías. Al comprar este libro estarás contribuyendo a mantener dicho ecosistema vivo y en crecimiento.

En Grupo Planeta agradecemos que nos ayudes a apoyar así la autonomía creativa de autoras y autores para que puedan continuar desempeñando su labor. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Diseño de la cubierta, Planeta Arte & Diseño
© Michael Reid, 2023
© De la traducción, Albino Santos Mosquera, 2024

Título original: *Spain. The Trials And Triumphs of a Modern European Country*
Publicado originalmente por Yale University Press
Imágenes de interior: © Album; © EFE; © EFE/Album; © David Ramos/Getty Images; © Gonzalo Fuentes/Reuters/Contacto; © X-drew/Istock; © Pictorial Press Ltd./Alamy; © Carlos Gil Andreu/Getty Images; © Pedre/Istock/Getty Images; © Andrea Comas/Reuters/Contacto; © Fernando Sánchez/Europa Press; © Education Images/Universal Images Group/Getty Images; © A. Pérez Meca/Europa Press; © Carlos Luján/Europa Press; © David Zorrakino/Europa Press; © Juan de Dios Ortiz/Europa Press; © Jaime Reina/AFP/Getty Images; © VitalyEdush/Istock; © Xurxo Lobato/Getty Images.
Iconografía: DAU, Grupo Planeta
© Editorial Planeta, S. A., 2024
Espasa es un sello editorial de Editorial Planeta, S. A.
Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona www.editorialplaneta.es
www.planetadelibros.com

Primera edición en libro electrónico (epub): febrero de 2024

ISBN: 978-84-670-7291-4 (epub)
Conversión a libro electrónico: Acatia www.acatia.es

¡Encuentra aquí tu próxima lectura!

¡Síguenos en redes sociales!